

Carlos Ramírez Romero
Editor

**Principales
cuestiones acerca del
Código Orgánico
General de Procesos
en preguntas
y respuestas**

Serie Derecho Vigente

**Principales cuestiones acerca
del Código Orgánico
General de Procesos
en preguntas y respuestas**

Carlos Ramírez Romero
Editor

**Principales cuestiones acerca
del Código Orgánico
General de Procesos
en preguntas y respuestas**



CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA

*Verdad, Seguridad y Paz
Illumanta, Kamaymanta, Kasikmanta*

Quito - diciembre de 2015

Corte Nacional de Justicia

*Principales cuestiones acerca del Código Orgánico General de Procesos en preguntas y respuestas. Primera edición, diciembre 2015. Quito: Corte Nacional de Justicia, 2015
396p.: 16,5cm x 21cm*

Derecho de autor: 047709

ISBN: 978-9942-22-023-3

1. Principales cuestiones acerca del Código Orgánico General de Procesos en preguntas y respuestas. Ecuador. Corte Nacional de Justicia. Título. I. Serie. Derecho Vigente

Catalogación en la fuente: Biblioteca Corte Nacional de Justicia

Corte Nacional de Justicia

Dr. Carlos Ramírez Romero

Presidente de la Corte Nacional de Justicia

Comité editorial

Carlos Ramírez Romero
Juan Montaña Pinto
Vicente Robalino Villafuerte
José Luis Terán Suárez
Pablo Tinajero Delgado
Wilson Andino Reinoso
Asdrúbal Granizo Gavidia
María Rosa Merchán Larrea

Coordinador editorial

Juan Montaña Pinto

Revisión de Estilo

Juan Montaña Pinto
Claudia Guerrero Aguirre

Autores

Carlos Ramírez Romero
Juan Montaña Pinto
Raúl Mariño Hernández
Vinicio Cueva Ortega
Manuel Chamba Chamba
Jovanna Garzón Almeida

Diseño de portada y diagramación

Javier Leiva Espinoza

Impresión

Santiago Aráuz Ríos

Gaceta Judicial
Primera edición, diciembre 2015
Quito, Ecuador

Índice

Introducción	11
Los principios orientadores del Código Orgánico General de Procesos: una introducción necesaria	
Primera parte	33
Conceptos fundamentales	
Segunda parte	41
De la jurisdicción y la competencia	
Tercera parte	49
Acerca del proceso	
Capítulo I	51
Sujetos Procesales	
Capítulo II	58
El tiempo en el proceso: los términos	
Capítulo III	60
De cómo se pronuncia el juzgador: las providencias judiciales	
Capítulo IV	61
De la violación al proceso y sus efectos	
Capítulo V	62
Del desenvolvimiento del proceso y de la actividad procesal	
Sección I	62
Diligencias previas	
Sección II	66
La demanda	
Sección III	70
Publicidad y comunicación de los procedimientos	

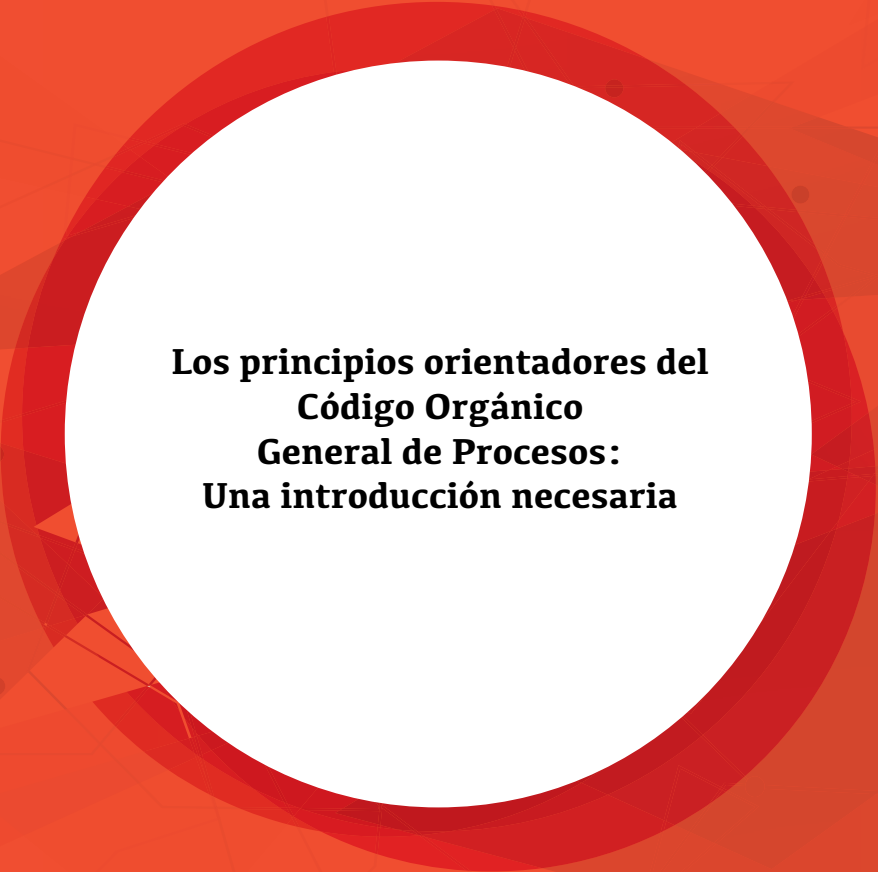
Sección IV	74
La defensa de demandado	
Contestación, excepciones y reconvencción	
Sección V	79
De la oralidad y de la administración de justicia en audiencia	
Sección VI	87
De las pruebas	
Sección VII	111
De la sentencia	
Sección VIII	115
Otras formas de terminación del proceso	
Cuarta parte	125
El derecho a recurrir y la impugnación	
Quinta parte	139
De la ejecución	
Sexta parte	165
De los procedimientos;	
Capítulo I	167
Del procedimiento ordinario	
Capítulo II	169
Del procedimiento sumario	
Capítulo III	172
Del procedimiento monitorio	
Capítulo IV	175
Del procedimiento ejecutivo	
Capítulo V	177
De los procedimientos voluntarios	

Capítulo VI	184
Procedimientos Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario	
Sección I	184
Del procedimiento contencioso administrativo	
Sección II	187
Del procedimiento contencioso tributario	
Anexo	197
Registro Oficial Suplemento 506 de 22 mayo 2015	
Libro I. Normas generales	201
Título I. Disposiciones Preliminares	201
Título II. Competencia	202
Capítulo I. Normas comunes	202
Capítulo II. Acumulación	206
Capítulo III. Excusa y recusación	208
Título III. Sujetos del Proceso	209
Capítulo I. Reglas Generales	209
Capítulo II. Representación de la naturaleza	214
Capítulo III. Procuración judicial	215
Capítulo IV. Tercerías	217
Capítulo V. Litis consorcio	218
Libro II. Actividad Procesal	219
Título I. Disposiciones Preliminares	219
Capítulo I. Citación	219
Capítulo II. Notificación	223
Capítulo III. Comunicaciones de los órganos jurisdiccionales	224
Capítulo IV. Término	225
Capítulo V. Audiencia	227
Capítulo VI. Providencias judiciales	231
Capítulo VII. Sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero	236

Capítulo VIII. Nulidades	239
Capítulo IX. Nulidad de sentencia	240
Capítulo X. Expedientes y registros	241
Título II. Diligencias preparatorias	243
Título III. Providencias preventivas	245
Título IV. Apremios	
Libro III. Disposiciones comunes a todos los procesos	250
Título I. Actos de proposición	250
Capítulo I. Demanda	250
Capítulo II. Contestación y reconvencción	255
Título II. Prueba	258
Capítulo I. Reglas generales	258
Capítulo II. Prueba testimonial	263
Sección I. Reglas generales	263
Sección II. Declaración de parte y declaración de testigos	268
Capítulo III. Prueba documental	269
Sección I. Reglas generales	269
Sección II. Documentos públicos	270
Sección III. Documentos privados	272
Capítulo IV. Prueba pericial	277
Sección I. Perito	277
Sección II. Informe pericial	279
Capítulo V. Inspección judicial	281
Título III. Formas extraordinarias de conclusión del proceso	282
Capítulo I. Conciliación y transacción	282
Capítulo II. Retiro de la demanda	283
Capítulo III. Desistimiento	283
Capítulo IV. Allanamiento	284
Capítulo V. Abandono	285
Título IV. Impugnación	287
Capítulo I. Reglas generales	287
Capítulo II. Aclaración, ampliación, revocatoria y reforma	287
Capítulo III. Recurso de apelación	288

Capítulo IV. Recurso de casación	289
Capítulo V. Costas	297
Libro IV. Procesos	299
Título I. Procesos de conocimiento	299
Capítulo I. Procedimiento ordinario	299
Sección I. Reglas generales	299
Sección II. Audiencia preliminar	300
Sección III. Audiencia de juicio	304
Capítulo II. Procedimientos contencioso tributario y contencioso administrativo	305
Sección I. Disposiciones comunes	305
Sección II. Procedimiento contencioso tributario	313
Sección III. Procedimiento contencioso administrativo	317
Capítulo III. Procedimiento sumario	319
Capítulo IV. Procedimientos voluntarios	323
Sección I. Reglas generales	323
Sección II. Pago por consignación	323
Sección III. Rendición de cuentas	324
Sección IV. Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento	324
Sección V. Inventario	325
Título II. Procedimientos ejecutivos	327
Capítulo I. Procedimiento ejecutivo	327
Capítulo II. Procedimiento monitorio	331
Libro V. Ejecución	334
Título I. Ejecución	334
Capítulo I. Reglas generales	334
Capítulo II. Ejecución de obligaciones de dar, hacer o no hacer	335
Capítulo III. Remate de los bienes embargados y liquidación del crédito	350
Título I. Procedimiento concursal	356
Capítulo I. Reglas generales	356
Capítulo II. Procedimiento	358

Disposiciones generales	367
Disposiciones transitorias	368
Disposiciones reformatorias	368
Disposiciones derogatorias	392
Disposiciones finales	395



**Los principios orientadores del
Código Orgánico
General de Procesos:
Una introducción necesaria**

Los principios orientadores del Código Orgánico General de Procesos: Una introducción necesaria

Carlos Ramírez Romero

Presidente de la Corte Nacional de Justicia

*“La redacción de un Código
no es una obra académica,
sino una obra política.
No tiene por finalidad
consagrar principios de cátedra
sino solucionar los problemas
que la realidad social, económica,
cultural y ética presenta al Legislador.”*

Eduardo Couture¹

1. Algunas consideraciones sobre los orígenes del COGEP

El pasado 22 de mayo de 2015 fue publicado en el Registro Oficial el Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano,² mismo que por disposición de la Asamblea Nacional entrará en vigencia el 23 de mayo de 2016 para dar tiempo a un necesario proceso de socialización del texto; por lo que es urgente e indispensable comenzar a analizar, discutir y comprender apropiadamente su estructura, funcionamiento, y sus principales innovaciones en relación a la legislación anterior.³

1 Couture, Eduardo J., Proyecto de Código de Procedimiento Civil, Montevideo, Impresora Uruguaya, 1945, Exposición de motivos, p. 31.

2 Ver Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015.

3 Este código deroga íntegramente el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Casación, la Ley de

Este ambicioso cuerpo legal, es la materialización de un viejo anhelo de autoridades, juezas y jueces, abogadas y abogados y operadores de justicia que siempre luchamos por superar el caduco y desesperantemente lento, formal, oscuro y burocrático modelo procesal escriturario que habíamos heredado del código de enjuiciamiento civil español de 1855⁴ el cual, con férrea terquedad, rigió en el país siglo y medio, sin apenas cambios en cuanto se refiere a la hegemonía del paradigma escritural.⁵

La entrada en vigencia de este importante Código es el producto final de un largo proceso de trabajo y reflexión colectiva no solo de las personas que, atendiendo a una iniciativa conjunta de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, participaron directamente en la comisión preparatoria⁶; sino también es el resultado del esfuerzo de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y algunas disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial, del Código Orgánico Tributario, del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, del Código Civil, de la ley de arbitraje y mediación y de la Ley de Propiedad Intelectual entre otras.

- 4 El a su vez era heredero de una ideología jurídica exasperantemente formal y escrituraria que nació en España en el siglo XIII con la expedición de las 7 partidas de Alfonso X el sabio.
- 5 Como se sabe en 1869, por iniciativa de Gabriel García Moreno, se expide en Ecuador el primer código de enjuiciamientos en materia civil copiado del código de enjuiciamiento civil español y por lo tanto absolutamente tributario de toda la tradición escrituraria española. Este código fue reemplazado 10 años después de la muerte de García Moreno por un segundo código de enjuiciamiento civil que a pesar de pretender desterrar el modelo garciano de justicia mantuvo incólume el modelo escriturario de justicia. En 1890 se expide la primera ley del poder judicial y en 1938 se expide el penúltimo código de procedimiento civil, el cual duro vigente sin ninguna modificación hasta el año 2005 cuando se expidió el actual código de procedimiento civil en aplicación del artículo 194 de la Constitución de 1998 que introdujo el sistema oral en la sustanciación de los procesos.
- 6 La comisión designada por la presidencia de la Corte Nacional y el pleno del consejo de la judicatura estaba conformada por la Dra. María Rosa Merchán, jueza de la Corte Nacional de Justicia; El Dr. Pablo Tinajero; la Dra. María de los Ángeles Montalvo, Jueza de la Corte Provincial de Pichincha; el Dr. Armando Bermeo, delegado del presidente del Consejo de la Judicatura Dr. Gustavo Jalk; el Dr. Francisco Iturralde, Conjuetz de la Corte Nacional de Justicia; los Dres. Darwin Aguilar y Raúl Mariño, Juez Civil; Asesores de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia; los Dres. Fabián Jaramillo y Rafael Brigante Abogados en libre ejercicio y académico, y el Dr. Néstor Arbito Vocal del Consejo de la Judicatura y Coordinador General de la Comisión;

muchos y muy connotados juristas ecuatorianos⁷ y extranjeros⁸ que a lo largo de muchos años de debate llegaron a la conclusión de la necesidad de introducir en nuestra legislación procesal el sistema oral como un elemento de garantía del acceso a la justicia para todos los ecuatorianos.

El trabajo de la comisión y luego del pleno de la Corte Nacional de Justicia, que se desarrolló ininterrumpidamente entre marzo y diciembre de 2013, se estructuró a partir de algunas ideas y conceptos fundamentales: la adecuación del sistema procesal ecuatoriano a los mandatos imperativos de la Constitución de Montecristi; la necesidad de superar el caduco modelo procesal escriturario que históricamente había regido en el país; la adopción del sistema oral como elemento sustancial de todos los procedimientos no penales; la implementación de un modelo de administración de justicia en audiencias; el fortalecimiento de los principios de inmediación y concentración; así como en el esfuerzo de unificar todas las materias incluyendo las contencioso administrativas y las contencioso tributarias, excepto la constitucional y la penal,⁹ que ya tienen sus estatuto legal propio adecuado a los mandatos de la Constitución de Montecristi. Posteriormente, una vez presentado y aprobado el trabajo de la comisión en el pleno de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura, el proyecto fue sometido a debate parlamentario en la comisión de justicia y estructura del estado de la Asamblea Nacional,

7 Entre las contribuciones importantes sobre la oralidad en el Ecuador merece la pena recordar el proyecto de código de procedimiento civil preparado por el Instituto de Derecho Procesal hace algunos años y que fue uno de los documentos que sirvió de referencia para la discusión del anteproyecto de COGEP en la comisión preparatoria; al igual que el documento de projusticia en su versión de 2009

8 Entre las experiencias internacionales que recogen este anhelo de incorporar la filosofía de la oralidad a los procesos no penales y que seguramente fueron revisadas y discutidas por la comisión redactora del anteproyecto del COGEP podemos resaltar la reforma alemana del procedimiento civil o modelo Stuttgart, las Bases uniformes para la legislación procesal civil de los países latinoamericanos, aprobadas por el instituto iberoamericano de derecho procesal en Bogotá en 1970, el código de procedimiento civil brasileño de 1973, el código de procedimiento civil colombiano de 1989 y el código general de procesos colombiano de 2012.

9 Ver: Exposición de Motivos Código Orgánico Integral Penal, Suplemento del Registro Oficial No. 506 del 22 de mayo de 2015.

presidida por el Dr. Mauro Andino Reinoso y en el Pleno de esta función del Estado, debates en los cuales se introdujeron sugerencias y algunas modificaciones sustanciales en aras de conseguir una mayor celeridad en los procedimientos establecidos en el Código.

En ese sentido, quien estudie y use el COGEP, encontrará en él a un conjunto normativo moderno, acorde con los avances de la ciencia procesal contemporánea; pero profundamente vinculado a nuestros problemas y nuestras urgencias, en la medida en que es un producto original redactado en su integridad por juristas ecuatorianos que sufrieron en carne propia y conocen los enormes problemas y limitaciones del modelo escriturario que en buena hora estamos a punto de abandonar.

2. Los principios fundamentales del Código Orgánico General de Procesos

El artículo 2 del COGEP establece los principios que orientan el desarrollo del proceso judicial y de los procedimientos en el Ecuador. Específicamente manda que en todas las actividades procesales que se realicen en el Ecuador además de los principios constitucionales y aquellos recogidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y en el Código Orgánico de la Función Judicial, se aplicaran los principios de oralidad en su versión por audiencias, la dirección del proceso por el juez, el principio dispositivo, y el principio de inmediación.¹⁰

En esta sección daremos algunas orientaciones teóricas y prácticas sobre cada uno de ellos, a más de examinar con cierto cuidado la transformación de la actividad probatoria en los procedimientos no penales ecuatorianos.

¹⁰ Ver: Artículos 2 al 8 del COGEP.

2.1. El nuevo sistema de justicia en audiencias

Como ya se ha dicho, en Ecuador, desde los tiempos de la independencia y hasta hace muy poco, ha prevalecido el sistema escriturario heredado del derecho español. Este sistema generó en la mayoría de los casos una brecha muy profunda de la administración de justicia respecto de las necesidades de la gente debido a la exasperante lentitud y el burocratismo del proceso escrito, y a causa del alejamiento del juez de las necesidades de las partes. Frente a ello, recogiendo las múltiples experiencias sobre acceso a la justicia que se han desarrollado en Latinoamérica desde los años 80 del siglo pasado, se planteó la adopción del principio contrario, esto es que la mayoría de las actividades de los sujetos procesales se realicen oralmente.

Sin embargo, esta regla ideal resulta imposible de aplicar a la realidad porque prácticamente no existe ningún sistema jurídico que, cumpliendo con los requerimientos del debido proceso, pueda realizarse de manera exclusivamente oral. En ese sentido, cuando el COGEP se refiere a la oralidad no está aludiendo a un ideal platónico sino que está describiendo un sistema mixto que tiende a la oralidad, el cual mediante el uso de audiencias promueve la relación directa entre el juez y las partes.

La principal innovación estructural del sistema de justicia en audiencias frente a su antecesor escriturario tiene que ver con un cambio sustantivo en el entendimiento del proceso mismo, el cual ha dejado de ser un simple monólogo y una sucesión de actos procesales individuales de las partes, por la reunión de las partes y el juez en las audiencias para discutir las pretensiones y alegaciones de las partes.¹¹

11 Gelsi Birart Adolfo, *Código tipo y reforma del proceso en América Latina*, En: "Codice tipo di procedura civile per l'América Latina", CEDAM, Padova, 1990, pp. 41.

Este modelo mixto comprende varias fases o momentos procesales: una primera fase denominada de proposición que abarca la demanda y la contestación, incluyendo eventualmente la reconvenición que mantiene su carácter escrito; seguida de una segunda fase cuyo objeto es fijar, y definir los elementos esenciales de la Litis, así como proponer;¹² y de una tercera fase de decisión que por regla general debe ser oral.

Además, este sistema de administración de justicia en audiencias tiene enormes ventajas frente al paradigma escriturario del pasado; la más notable de las cuales es que permite y promueve una relación estrecha (inmediación) entre el juez y el proceso y entre éste y las partes que genera una sensación de seguridad y paz social jamás conseguida por el modelo de justicia escrita. Otro de los argumentos que nos permite defender de manera entusiasta la incorporación de la oralidad en el proceso ecuatoriano es su probada eficacia y eficiencia para resolver de forma generalmente rápida muchos asuntos como ocurre en los procesos penales, laborales, de familia, de niñez etc. e incluso para la mayoría de los procesos civiles. La idea de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura al promover su extensión a ámbitos donde tradicionalmente no opera la oralidad, como el derecho administrativo y el tributario, se sustenta en la idea de que si se toman algunas decisiones de política judicial, la especialidad del derecho administrativo¹³ no implicaría necesariamente la existencia de trámites y procedimientos especiales.

Otro de los méritos importantes del modelo desarrollado en el COGEP, que ciertamente refleja un alto nivel de audacia teórica, es la

12 En el diseño del COGEP esta fase se desarrolla dentro del procedimiento ordinario en la audiencia preliminar y en los procedimientos que tienen una sola audiencia como el monitorio, sumario o el ejecutivo en dicha audiencia única.

13 Como se conoce la especialidad del derecho administrativo se basa en la idea de que estamos en presencia de un derecho estatutario propio de un sujeto particular: la administración pública que tiene complejidades especiales.

extensión de los principios sustantivos del sistema oral a la segunda instancia y a la Casación,¹⁴ que tradicionalmente no se rigen por este principio. Ciertamente es que la oralidad está prioritariamente diseñada y se ajusta perfectamente para procesos de única instancia donde el juez participa directamente en todas las fases del proceso pero especialmente con la práctica de las pruebas; sin embargo, la justicia en audiencias y la audiencia misma no es incompatible con la alegación y valoración eficiente del derecho objetivo, objetivo que perfectamente cumplen las audiencias en instancias de apelación y casación, como bien lo dispuso el legislador ecuatoriano.

2.2. La inmediación en el COGEP

Doctrinariamente la inmediación es un principio del derecho procesal directamente relacionado y vinculado con la oralidad según el cual existe una relación directa entre los litigantes y el juez.¹⁵ Hasta 1998, cuando comenzó en el Ecuador el desembarco progresivo de la oralidad¹⁶ este conocimiento personal y directo del juez a las partes y al proceso era muy marginal, pues los jueces no realizaban directamente las audiencias ni practicaban las pruebas, actividad que era encargada en la mayoría de los casos a los auxiliares judiciales.

En ese sentido una de las principales columnas de la transformación de la justicia que se promueve a través del COGEP es justamente

14 Muchos de los escépticos de la oralidad consideran que el sistema oral es incompatible con el principio de la doble instancia y con herramientas de impugnación como la casación debido a que la oralidad está estrechamente vinculada a la práctica y valoración de pruebas, cuestión que en la segunda instancia ciertamente es bastante restringida y que por definición está totalmente proscrita en la Casación.

15 Cabanellas Guillermo, *Diccionario de Ciencias Jurídicas*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2012, pp.489

16 Ya en el artículo 194 de la Constitución de 1998 se establecía como política judicial constitucionalizada la idea de que todos los procesos y procedimientos judiciales se desarrollaran oralmente. Este principio fue ratificado por el constituyente de Montecristi que en los artículos 75, 76.7 literal H, y 168.6 de la CRE.

garantizar la presencia y la vecindad permanente del juez en el trámite de los procedimientos y especialmente en la práctica de pruebas. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del COGEP, en concordancia con el 75 de la Constitución, la inmediación en el nuevo modelo procesal no penal ecuatoriano se materializa en la obligación que tiene la o el juzgador de estar presente en todos los actos procesales particularmente en la celebración de las audiencias y practicar las pruebas que son nulas en el caso de que no exista la presencia del juez y de las partes procesales.

2.3. La dirección del proceso por el juez

Una de las cuestiones más importantes del derecho procesal es la definición del rol de cada una de las partes y particularmente del juez dentro del proceso. Retomando la imagen clásica popularizada por el maestro Alcalá Zamora el juez puede ser dentro del proceso tres cosas diferentes: espectador, director o dictador. El juez espectador es propio del principio dispositivo en el que se asigna a las partes y no al juez la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar al proceso y a sus componentes, mientras que el juez dictador sería el propio del modelo inquisitivo puro donde el juez es quien tiene poderes omnímodos de impulsión del proceso. Finalmente el juez director es aquel propio del modelo mixto, donde las partes comparten la responsabilidad de impulsar el proceso con el juez, de tal suerte que las partes actúan al inicio del proceso a través de la demanda y la contestación, solo que ahora tienen un papel más activo en la fase probatoria al establecerse en el COGEP la posibilidad de anunciar la prueba; mientras que el juez tiene muy amplias facultades y cumple un papel muy activo en la dirección y desarrollo de las audiencias y en la iniciativa para resolver.

En lo que atañe a la iniciación del proceso, el nuevo código procesal ecuatoriano mantiene el principio clásico del derecho privado según

el cual es indispensable la iniciativa del actor para que pueda iniciarse el proceso; regla que igualmente se aplica al demandado, en el sentido que solo pueden analizarse las excepciones que éste oponga y que sólo puede haber contrademanda si la promueve el demandado transformado en actor, y por lo tanto son las partes las protagonistas de esta fase del proceso.

En la siguiente etapa que es la de la traba de la Litis y la integración del contradictorio, la situación cambia siendo el juez el protagonista principal, pues, éste tiene amplias facultades para impulsar el proceso. En ese sentido el COGEP rompe con la visión tradicional típica del principio dispositivo según la cual la impulsión del proceso corresponde a las partes, incorporando el principio de impulsión oficiosa del proceso que se expresa en la regla según la cual el proceso comienza por iniciativa de parte pero se desarrolla por impulso oficial;¹⁷ regla que tiene su correlato y se complementa con la regla de la perentoriedad de los términos.

En cuanto a la fijación del objeto del proceso si bien en el COGEP se mantiene inalterado el principio de que el objeto del proceso lo definen las partes¹⁸ y que el juez debe decidir congruentemente con ese objeto, también es verdad que este principio aparentemente intocado en realidad ha sido morigerado en el COGEP toda vez que el juez es también el protagonista en la fijación del proceso pues de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 294 del COGEP la dirección de las audiencias corresponde exclusivamente al juez, quien en el caso de la audiencia preliminar propia del procedimiento ordinario debe resolver, sin que las partes puedan oponerse, sobre la validez del proceso,

17 Ver: Artículo 5 COGEP

18 Obviamente con la excepción de los procesos laborales donde el principio de congruencia se ve alterado por la posibilidad de dictar sentencias ultra petita.

la determinación del objeto de la controversia el proceso, con el fin de convalidarlo o sanearlo.

Otro punto importante en el que se materializa el papel activo del juez en la dirección del proceso es en el relativo a las facultades del juez y las partes en la proposición y práctica de pruebas. En esta materia encontramos en el COGEP algunas importantes novedades en la dirección de fortalecer su papel, puesto que si bien se institucionaliza el anuncio de la prueba, por otro lado se da al juez posibilidades para decretar probanza, aunque a diferencia del modelo anterior donde se podía decretar pruebas en cualquier momento ahora esta posibilidad está limitada a momentos procesales especiales; en este caso la audiencia preliminar, que según los artículos 168 y 294 del COGEP es la oportunidad para que el juez ordene pruebas de oficio, rechace o inadmita medios de prueba propuestos por las partes, y ordene la realización y práctica de pruebas fuera de la audiencia.

Ahora bien, a pesar de la claridad del artículo 294 literal b) del sobre la posibilidad del juzgador de ordenar pruebas de oficio, esperamos que los jueces se empoderen de esta facultad, puesto que aunque en la actualidad existe y está contemplada esta posibilidad, hasta ahora los jueces la han ejercido solo marginalmente en nuestro país.

En cuanto a la apreciación de la prueba el juez luego del ejercicio de verificar la relevancia, pertinencia y la admisibilidad de los medios de prueba, tiene una amplia libertad de valoración probatoria sobre la base de la conservación del principio de libre valoración racional de la prueba y la sana crítica, que permite al juzgador realizar una valoración amplia pero responsable dentro de criterios objetivos y científicos.

Finalmente, los poderes del juez en la sentencia siguen en general el principio dispositivo de acuerdo al cual el juez debe fallar en

concordancia y dentro de los estrictos límites de lo pedido por las partes, principio que está recogido en el COGEP en el artículo 91, en concordancia con el inciso 2 del artículo 19 y los artículos 23 y 27 del COFJ.

En definitiva, a pesar de que una lectura poco cuidadosa de los artículos 3 y 5 del COGEP podrían dar a primera vista la impresión de que existe una cierta contradicción entre los principios dispositivo y la dirección del proceso por el juzgador ya que el primero introduce y fortalece la acción de las partes en el proceso, mientras el segundo reconoce amplias facultades al juez para fijar las reglas del proceso y garantizar su cumplimiento; en realidad lo que existe es un fortalecimiento paralelo de ambos principios y una apuesta por su complementariedad, dado que el principio dispositivo se aplica fundamentalmente a la parte inicial del proceso y al principio de congruencia entre pretensiones y sentencia, mientras que el principio dispositivo modificado se hace evidente en todas las fases procesales y especialmente en la fijación del litigio y en la admisión y práctica de pruebas.

2.4. La celeridad procesal

Otro de los principios sustantivos del COGEP, desarrollado por mandato de la Constitución de Montecristi es el principio de celeridad; que como su nombre indica busca la aceleración de los procesos a partir de la idea de que una justicia lenta no es justicia. Este principio se materializa en la concentración de diligencias y actos procesales en determinados momentos específicos.

Esta celeridad se manifiesta en muchos aspectos de la nueva regulación procesal pero fundamentalmente en la instauración, por primera vez en la historia jurídica ecuatoriana de la audiencia preliminar, también se expresa en la reducción de términos y en la simplificación de trámites y procedimientos en el establecimiento del principio de preclusión.

2.5. La Concentración de actos y trámites

Uno de los objetivos de política judicial incorporados en el COGEP en cumplimiento del principio de celeridad procesal que manda la Constitución es la concentración de actos y trámites. El cumplimiento de este objetivo supone la reunión del mayor número de actos procesales en una sola actuación o etapa procesal con el propósito de acortar al máximo el desarrollo del litigio. Ya decía Couture que *“en el proceso, el tiempo es sinónimo de justicia, y agregaba que quien dispone de él tiene en la mano las cartas del triunfo, mientras que quien no puede esperar debe saberse de antemano derrotado.”* Justamente para tratar de equilibrar en algo las cargas que impone el tiempo el nuevo código de procesos ecuatoriano insiste en la necesidad de aplicar la concentración dentro del proceso.

Concretamente en nuestro flamante Código este principio se materializa a través de la definición clara de las tres fases del proceso y particularmente con la introducción en nuestro país de la audiencia preliminar. Ésta, aparte de ser instrumento esencial de la institucionalización de la oralidad en el procedimiento ecuatoriano, pretende la unificación de múltiples actos procesales en un solo momento. Es así que a partir del 23 de mayo de 2016 el juez, a través de una única audiencia, deberá promover varios actos procesales simultáneos: la verificación del cumplimiento de los presupuestos procesales; el planteamiento y resolución de excepciones previas; la conciliación entre las partes; el saneamiento del proceso frente a posibles nulidades; el anuncio y calificación de las pruebas que se van a llevar a cabo posteriormente; y, de ser el caso, la ordenación del desarrollo posterior del proceso. Todas estas cuestiones tienen un punto en común y es que son previas e independientes a la cuestión principal.

En cuanto a la conciliación, el COGEP tiene como uno de sus prioridades la búsqueda de una solución amistosa al conflicto planteado, para lo cual se le otorgan al juez amplias facultades para buscar y promover

fórmulas de arreglo entre las partes con la idea de terminar el proceso inmediatamente. En ese sentido el código es tan insistente en la cuestión que incluso fracasado el intento conciliatorio ante el juez, existe la posibilidad de que este suspenda el trámite de la audiencia y derive el proceso a un centro de mediación, entre los que está el que funciona en el propio Consejo de la Judicatura para intentar nuevamente un acuerdo entre las partes.¹⁹ Si se llega a un acuerdo el juez deberá emitir sentencia, y si el acuerdo es parcial o no se llega a ningún acuerdo, así constará en un auto y el proceso deberá continuar respecto de lo no conciliado.²⁰

Respecto del saneamiento del proceso, esta es una atribución que el COGEP da a los jueces inspirada en el despacho saneador originaria del derecho portugués y brasileño. Esta fase de la audiencia tiene como objeto sanear en profundidad el procedimiento, regularizarlo expurgándolo de eventuales yerros y vicios, de tal manera que en esta única ocasión el juzgador se puede pronunciar sobre las nulidades y verificar las condiciones de validez de la acción.

En relación con las pruebas, la audiencia preliminar es la etapa procesal en la que las partes deberán ratificar las pruebas anunciadas en la demanda y la contestación y proponer definitivamente las pruebas que quieren hacer valer en el proceso, así como objetarlas. Es también la oportunidad para que el juez se pronuncie sobre la conducencia, pertinencia y necesidad de las pruebas planteadas por las partes, admitiéndolas o rechazándolas y ordene la realización de pruebas de oficio.

Como se puede vislumbrar la audiencia preliminar es la etapa procesal mas importante del nuevo proceso no penal ecuatoriano y constituye el principal aporte del COGEP para garantizar la celeridad procesal y el acceso a la justicia en nuestro país.

¹⁹ Ver: artículo 294 numeral 6 COGEP

²⁰ Ver. Artículo 233 COGEP

2.6. Simplificación de trámites

Entre los trámites que se reducen y se simplifican está, la notificación electrónica, la morigeración del esfuerzo probatorio y la transformación de la carga de la prueba en determinados procesos como los contencioso administrativos, tributarios y de familia. Así mismo, pretende ayudar mucho a la celeridad procesal y a la lealtad procesal, mecanismos tales como el anuncio de prueba y su incorporación en la demanda y en la contestación.

2.7. Fortalecimiento y extensión del principio de preclusión y caducidad

En cuanto al fortalecimiento del principio de preclusión, tenemos que la regla de la preclusión es un mecanismo muy útil para lograr el saneamiento del proceso, de tal suerte que precluida la etapa procesal que corresponda, los actos que no se hayan solicitado en tiempo, no se pueden realizar en el futuro.

Pero sin duda una de las manifestaciones más claras de la regla de preclusión del COGEP es la ampliación enorme del ámbito de la caducidad o perención de la instancia en materia contencioso administrativa, que incluso puede ser declarada de oficio por el juez y excluye la posibilidad de conocer de fondo el asunto.²¹

2.8. La unificación de procedimientos

Otro más de los aportes significativos del COGEP a la realización material del valor de la justicia en nuestro país, tal como dispone el artículo 169 de la Constitución, es el enorme esfuerzo que hicieron la comisión

21 Ver: Resolución Corte Nacional de Justicia No. 13 de 2015.

preparatoria y el legislador ordinario por disminuir y, en lo posible, unificar los trámites y procedimientos.

Es así como el COGEP propicia la supresión de trámites y la eliminación de incidentes; así como faculta al juez para resolver los que subsistan en la misma etapa procesal. En materia de procedimientos de los cerca de 80 procesos y procedimientos hoy vigentes se reducen a 5 generales. El ordinario, el sumario, el ejecutivo, el voluntario y el monitorio.

De acuerdo con el nuevo código el ordinario se aplica a todos los procesos de conocimiento que busquen la constitución o declaración de un derecho y también se aplica a todas aquellas pretensiones que no tengan otro procedimiento de tramitación. Se tramitan también mediante procedimiento ordinario las acciones contencioso administrativas subjetivas y objetivas y las contencioso tributarias de impugnación, así como la acción tributaria directa.²² En cuanto al procedimiento sumario este se aplica según el artículo 332 del COGEP en materia civil a las acciones posesorias y a las controversias relacionadas con la determinación de honorarios profesionales; en materia de familia y niñez a los juicios de alimentos, al divorcio contencioso, a las declaratorias de incapacidad y a los juicios de interdicción; en materia laboral a los juicios por despido intempestivo de mujeres embarazadas y a los de violación del fuero sindical y en materia administrativa a los juicios de expropiación.

3. Nuestro libro

Como se ha podido vislumbrar en el breve recorrido por los principios rectores del nuevo código orgánico general de procesos ecuatoriano,

²² Ver: artículo 321 del COGEP

las reformas promovidas por el legislador a los procedimientos judiciales no penales y no constitucionales son revolucionarios y complejos. En esa medida, requerirán²³ del transcurso del tiempo para determinar el grado de éxito o fracaso de la iniciativa de propiciar esta reforma que hemos tenido desde la Corte Nacional y desde el Consejo de la Judicatura. Igualmente se requerirá de un ejercicio crítico que desarrolle y de sustento dogmático a las ejecutorias del COGEP; para lo cual resulta muy importante el debate académico desarrollado desde y por las universidades.

Pero mientras ello ocurre, de manera emergente y desde los ámbitos judiciales, prevalidos de la experiencia que da el ejercicio de la judicatura, también hay que aportar en el plano de nuestras posibilidades al esclarecimiento de cuestiones prácticas que en pocos meses van a copar la atención de jueces y operadores jurídicos. Ese es precisamente el objetivo final de la publicación de este libro que usted tiene en sus manos: quisimos elaborar un primer documento, necesariamente breve que introduzca a nuestros lectores en algunas de los principales debates y más acuciantes problemas procesales a los que se vio abocado el legislador. En ese sentido el texto necesariamente tendrá una función introductoria y pedagógica respecto de un sistema normativo nuevo y muy complejo que implica de hecho un cambio de paradigma y una revolución cultural.

Por ello el lector no debe buscar ni encontrará en el libro planteamientos teóricos; tampoco hallará un código comentado o unos comentarios dogmáticos a las instituciones procesales no penales ecuatorianas, que siendo un empeño necesario y urgente rebasa los alcances de este primer esfuerzo de clarificación de las instituciones del COGEP. Se trata en todo caso de un documento que intenta valerse del método

²³ Igual que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica que al igual que el Ecuador han generalizado la oralidad en los procesos no penales tales como Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay.

mayéutico para dar luz y presentar algunas de las principales cuestiones a las que se van a enfrentar los estudiantes de derecho, los abogados litigantes y ciertamente los jueces de instancia en esta la primera y difícil etapa de implementación del código.

En cuanto a la estructura de la obra, como se ha dicho más arriba, se analizan las cuestiones procesales a través del método de las preguntas y respuestas, tratando de indicar de manera sencilla pero completa las principales cuestiones técnicas involucradas en la cuestión tratada; intentando evitar la reproducción textual del código porque justamente no se trata de publicar el código completo, ya que no quisimos hacer un código comentado se ha evitado la ordenación artículo por artículo y se ha evitado igualmente la ordenación en capítulos siguiendo el orden del legislador.

En ese sentido, metodológicamente, se ha preferido presentar las preguntas y respuestas ordenadas de acuerdo a la lógica interna del proceso tal cual ha sido elaborada y probada por la doctrina procesal y las legislaciones más avanzadas. En ese contexto dedicamos las dos primeras partes o apartados del libro a los conceptos fundamentales de lo que antiguamente se llamaba la introducción al estudio del proceso y el derecho procesal general, estudiando la jurisdicción y la competencia.

Inmediatamente llegamos a la segunda parte donde examinamos las principales cuestiones acerca del proceso no penal ecuatoriano comenzando por los sujetos procesales, el juez y las partes, siguiendo por el estudio del fascinante mundo del tiempo en el proceso que se materializa en el examen de todos los problemas relacionados con los términos, la perención y la caducidad de los actos procesales. En un tercer apartado se analizan los distintos mecanismos de pronunciamiento del juez dentro de los procesos y la violación de los procedimientos y sus efectos.

Finalmente llegamos al eje central del libro: que se relaciona con aquello que los procesalistas han denominado la actividad procesal. En este extenso apartado del libro examinamos a través de preguntas y respuestas la definición y el alcance jurídico de las diligencias previas, estudiamos la demanda y sus requisitos y la publicidad que se da en el COGEP al derecho de acción. Estudiamos en un segundo momento, también in extenso, los diferentes y complejos mecanismos de defensa del demandado, particularmente centrados en el examen del trámite de las excepciones previas y de mérito del proceso. Inmediatamente después hacemos un examen crítico del principio de oralidad y de la justicia en audiencias que es la principal innovación del código orgánico integral de procesos respecto de su antecedente.

En un siguiente apartado analizamos con profundidad el tema de la prueba en el proceso no penal ecuatoriano partiendo de sus líneas más generales como el problema de la consecución de la verdad de los hechos en el proceso como finalidad de todo el procedimiento, pasando por cuestiones muy complejas como el del procedimiento de selección de las pruebas válidas, las relevancia de los medios de prueba y su admisibilidad. Se hace también un estudio pormenorizado sobre los tipos de prueba posibles en el proceso por audiencias que se está comenzando a implementar en el Ecuador, con especial énfasis en el tratamiento del testimonio y del peritaje.

Se hace también un examen de la sentencia como forma normal de terminación de los procesos, lo cual implica estudiar no solo las facultades que tiene el juzgador a la hora de llegar a una decisión, sino también temas como la valoración de la prueba para decidir. Se examinan también algunas cuestiones importantes relativas a las formas alternativas de terminación del proceso, con especial interés en la conciliación y sus problemas.

En un siguiente capítulo del libro se examina el derecho de impugnación y la posibilidad de recurrir que tienen las partes en el proceso, analizando con profundidad cuestiones problemáticas de la oralidad frente a la obligación de garantizar la apelación. También se analizan en este apartado los problemas de la casación y se examina con cuidado las cuestiones relativas a la ejecución de la sentencia una vez ejecutoriada y en firme.

La última parte del libro se dedica a responder preguntas concretas sobre los diferentes procedimientos que contempla el código, con especial atención a las reglas del procedimiento ordinario y los procesos o procedimientos especiales en razón de la materia que incorpora el COGEP, entre los cuales merece la pena resaltar las dificultades de unificación de los procedimientos contencioso administrativo y contencioso tributario, dado que si bien el legislador con acierto consiguió unificarlos al procedimiento civil y a los procedimientos del derecho social, sin embargo dadas las especiales características del derecho administrativo, tienen notables diferencias en el trámite de los procesos.

Por supuesto en esta obra faltan muchas cosas y lo que hemos dicho no es una verdad incontrovertible, por lo que simplemente queremos con estas breves anotaciones propiciar el dialogo, la crítica y el debate sobre un tema apasionante como es el del proceso no penal.

Sobre la utilidad del libro, el lector tiene la palabra.

The background is a vibrant red color with a complex geometric pattern of overlapping triangles and lines. In the center, there is a large white circle with a thick red border. Inside this circle, the text is centered.

Primera Parte
Conceptos Fundamentales

Primera Parte

Conceptos Fundamentales

1. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Código Orgánico General de Procesos?

Conforme con el artículo 167 de la Constitución de la República, el COGEP regula la actividad procesal en todas las materias de competencia de la justicia ordinaria, con excepción de la penal que se regula según las normas del COIP. De acuerdo con el texto literal del artículo 1, en todos los procesos y procedimientos regulados por el COGEP se respetará estrictamente el debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución, que se manifiesta como un conjunto de garantías que se materializan como derecho subjetivo de las personas y límite al ejercicio del poder.

En la aplicación del COGEP, la o el juzgador deberá garantizar el debido proceso constitucional, lo cual implica atender estrictamente el principio de legalidad no penal, la pertinencia y conducencia de la prueba, el derecho a la defensa, la motivación, la contradicción y el derecho a recurrir.

Conc. Art. 1 COGEP y Art. 76 de la CRE

2. ¿Cuáles son los principios rectores que regulan la aplicación del COGEP?

Según dispone el artículo 2, los procedimientos no penales en el Ecuador se rigen por los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y por aquellos previstos dentro del COFJ y el COGEP.

En relación con estos últimos, están regulados en los artículos 3 al 8, de los cuales los más importantes son: El principio de dirección del proceso; el principio de oralidad; el principio dispositivo; el principio de inmediatez.

De acuerdo con el artículo 3, en el modelo procesal ecuatoriano el juez tiene la facultad, y la obligación, de dirigir el proceso, evitar dilaciones y controlar las actividades de las partes. Esa dirección del proceso otorga a la o el juzgador una serie de facultades tales como: rechazar la demanda cuando carezca de requisitos formales; dar a la pretensión el trámite que corresponda; ordenar las pruebas y diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos; disponer la presencia de peritos, testigos y de las partes para requerirles explicaciones que estime necesarias; rechazar la intervención de partes o terceros cuando la petición carezca de fundamento constitucional o legal; para disciplinar la actuación de procuradores y abogados; y, aplicar sanciones que corresponda, entre otras.

Por su parte, el artículo 5, dispone que corresponde a las partes la iniciativa y el impulso del proceso conforme al principio dispositivo.

Esta contradicción es, en realidad solo aparente, y, la resuelve el legislador de la siguiente manera: La regla general de todo el código es la aplicación del principio dispositivo en cuanto a la iniciativa en el procedimiento y por lo tanto corresponde las partes dar comienzo al mismo, disponer de sus derechos, y darlo por terminado en cualquier momento antes de la sentencia; lo cual no significa que la o el juzgador sea un convidado de piedra o tenga un papel pasivo. Aparte de tener amplias facultades en materia de prueba oficiosa, a él le corresponde la dirección y ordenación del proceso una vez éste se ha iniciado; así mismo, tiene un papel central en el desarrollo de las audiencias que serán dirigidas por éste garantizando así el principio de administración de justicia en audiencia.

El otro gran principio rector del COGEP, es el de oralidad. Según este principio para garantizar la inmediación, en general los actos procesales, se realizan de viva voz ante el juez o tribunal, para evitar la excesiva duración y la formalidad.

El derecho procesal ecuatoriano, siguiendo la tendencia internacional, desde la expedición del Código de Procedimiento Penal del año 2000 ha asumido progresivamente la idea de que en todas las instancias, fases y diligencias procesales se utilice el sistema oral.

En el caso del COGEP, este código ha asumido el sistema oral de una forma mixta, lo que quiere decir que aunque la mayoría de las actuaciones procesales se hacen oralmente existen actos procesales como la demanda y la contestación o la reconvenición que el propio código manda se desarrollen por escrito.

En definitiva, lo que en realidad alude el COGEP cuando menciona el principio de oralidad, es al sistema de justicia en audiencias; que implica que en materia procesal no penal las diligencias y los procedimientos deben surtirse en audiencia y las actuaciones dentro de éstas deben hacerse de manera oral.

Adicionalmente, en materia laboral el COGEP, recoge el principio tradicional del derecho social del alcance ultra petita de las sentencias laborales. Lo cual quiere decir que en esta materia es especialmente importante el principio de iura novit curia y por lo tanto, la o el juzgador puede fallar más allá y por fuera de lo pedido en garantía de los derechos de las partes y especialmente del trabajador.

Conc. Arts. 2 a 8 COGEP; 75, CRE

3. ¿Quién ejerce la dirección del proceso?

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 inciso 1, la o el juzgador, tienen la competencia de dirigir el proceso, lo cual significa que aparte de garantizar la lealtad procesal, debe controlar las actividades de las partes y evitar dilaciones y abusos del derecho; igualmente podrá solicitar aclaraciones, encausar el debate y realizar de oficio todas las acciones necesarias para garantizar el debido proceso.

Conc. Art. 3, inciso 1 del COGEP

4. ¿En qué consiste el principio de inmediación según el COGEP?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, el principio de inmediación se materializa en la obligación que tiene la o el juzgador de estar presente en todos los actos procesales. Especialmente el juzgador tiene la obligación de celebrar audiencias y practicar las pruebas directamente en presencia de las partes.

Conc. Art. 6 COGEP

5. ¿Cuáles son las solemnidades sustanciales comunes a todos los procedimientos?

Según el artículo 107 del COGEP, todos los juicios no penales en el Ecuador deben cumplir con ciertas solemnidades sustanciales, estas son:

1. La existencia de jurisdicción;
2. La definición de la competencia de la o del juzgador en el proceso que se ventila;
3. La prueba de la legitimidad de personería;

4. La citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente;
5. La notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias;
6. La notificación a las partes con la sentencia; y,
7. La conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe.

El incumplimiento de estas solemnidades genera la nulidad del acto procesal omitido.

Conc. Art. 107 COGEP

The background is a vibrant red color with a complex geometric pattern of overlapping triangles and lines. In the center, there is a large white circle with a thick red border. Inside this circle, the text is centered and reads:

Segunda parte
De la jurisdicción
y la competencia

Segunda parte

De la jurisdicción y la competencia

6. ¿Qué es la jurisdicción y cuáles son las jurisdicciones en el ordenamiento jurídico ecuatoriano?

Doctrinariamente la jurisdicción es el poder de administrar justicia, esto es, adjudicar el derecho. En el caso ecuatoriano el artículo 150 del COFJ la define como la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado; potestad que la Constitución la atribuye a las juezas y jueces.

Conforme la Constitución es una facultad que emana del pueblo; y el constituyente de Montecristi la ha distribuido entre varios órganos y funciones del Estado. En el caso ecuatoriano esta prerrogativa es distribuida en cuatro ámbitos:

1. El ámbito constitucional regulado en los artículos 429 y 436 de la CRE y la LOGJCC;
2. El ámbito electoral regulado en el artículo 221 de la CRE y el Código de la Democracia;
3. El ámbito ordinario regulado en el artículo 167 y siguientes de la CRE, COFJ; COGEP; y, el COIP; y,
4. El ámbito de la justicia indígena regulado en el artículo 57 y 171 de la CRE; y el 335 COFJ.

Conc. Arts. 167 y 168 CRE

7. ¿Qué es la competencia y cuáles son los factores que la determinan?

Si bien el Estado tiene el monopolio de la jurisdicción; sin embargo, la distribuye en diferentes tribunales y jueces a lo largo del territorio. Esta distribución es lo que se denomina técnicamente competencia.

En el caso ecuatoriano la competencia se distribuye atendiendo a los siguientes factores:

1. Factor territorial;
2. Factor personal o subjetivo;
3. La materia; y,
4. Los grados.

Conc. Arts. 156 COFJ; 9 a 15 COGEP

8. ¿Hasta cuándo la o el juzgador mantiene la competencia dentro de un juicio?

Por regla general, la competencia de la o el juzgador va hasta la notificación de la sentencia o hasta cuando se resuelvan los recursos horizontales de aclaración y ampliación.

Excepcionalmente, de conformidad con el inciso final del artículo 99 del COGEP, se mantiene la competencia respecto de lo que fue materia de la sentencia hasta la finalización de la fase de ejecución, cuando deba corregir errores de escritura, de cálculo o puramente numéricos.

Conc. Arts. 99 y 100

9. ¿Cuál es el juez competente cuando se demanda a una persona jurídica que tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas en distintos lugares del territorio nacional?

Comunmente las reglas de la competencia establecían que en caso de que el litigio versara sobre la eficacia de un contrato el juez competente era el del lugar donde se celebró el contrato o el del lugar del domicilio principal de la persona jurídica. Hoy en día, el COGEP, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, ha extendido la competencia a donde la persona jurídica tenga una agencia, sucursal u oficina, esto a elección del actor.

Conc. Art. 9, inciso 4 del COGEP.

10. ¿En el proceso contencioso tributario y contencioso administrativo, cómo se establece la competencia?

De acuerdo con el factor territorial el juez competente para conocer de un caso es generalmente el del domicilio del demandado. Excepcionalmente, de conformidad con el artículo 299 del COGEP, esta regla se invierte cuando el demandado sea el Estado o cualquiera de las instituciones de sector público; pues en este caso, siguiendo el principio de inmediación, el juez competente será aquel del lugar del domicilio del actor si éste es un particular y del domicilio del demandado si el que demanda es la administración.

Conc. Art. 299 COGEP

11. ¿Por qué es competente para conocer de la demanda principal la o el juzgador que conoce la diligencia preparatoria?

De acuerdo con lo estipulado en el inciso final del artículo 120 del COGEP, es competente la o el juzgador que realiza la diligencia

preparatoria para conocer de la demanda principal, porque el legislador en el artículo 120 del COGEP ha establecido una “especie” de competencia por prevención en cabeza de la o el juzgador que realiza dicha diligencia.

Conc. Arts. 120 numeral final COGEP; 160 numeral 1 COFJ

12. ¿Quién tiene la facultad para dirimir los conflictos de competencia?

Según el artículo 15 del COGEP, las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales de Justicia, son las competentes para dirimir los conflictos que surjan entre las o los juzgadores.

Conc. Arts. 10, 11, 15 COGEP

13. ¿Hasta qué momento procesal cabe la acumulación de procesos?

Atendiendo a lo que dispuso el legislativo en el COGEP, la acumulación de procesos se puede ordenar de oficio o a petición de parte, en cualquier momento, hasta en la audiencia preliminar en los juicios ordinarios y en la fase de saneamiento en los demás procesos. Esta regla obedece a que de acuerdo con los artículos 153 y 294 numeral 1 del COGEP, en esta fase es la oportunidad para resolver las excepciones previas, luego de lo cual el juzgador únicamente debe atender las cuestiones de fondo objeto de la controversia.

Conc. Arts. 16, 153, 294 numeral 1, 333 numeral 4 COGEP.

14. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que la acumulación sea autorizada?

De conformidad con el artículo 18 del COGEP, para que proceda la acumulación de procesos se requiere:

1. Que la o el juzgador que pretende acumular los distintos procesos sea competente para conocerlos todos;
2. Que todos los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento o que las partes acepten someterse a la misma vía procesal; y,
3. Que los procesos que se pretende acumular no estén en diversas instancias.

Conc. Art. 18 COGEP

15. ¿Quién de los juzgadores es el competente para conocer los procesos acumulados?

Conforme con las reglas del artículo 20 numeral 2 del COGEP, el juzgador competente para sustanciar los procesos acumulados será aquel que haya conocido a prevención la causa.

Conc. Art. 20, numeral 2 COGEP

16. ¿En el caso de recusación, desde qué momento se suspende la competencia de la o el juzgador?

De conformidad con el artículo 25 del COGEP, por regla general, la recusación suspende la competencia de la o el juzgador una vez que le es comunicado; salvo que la recusación se fundamente en el retardo

injustificado, en cuyo caso se suspende la competencia desde cuando es aceptada.

Conc. Art. 25 COGEP

17. ¿En el caso de recusación, en qué momento se suspende la competencia de la o el juzgador?

De conformidad con el artículo 25 del COGEP, por regla general, la recusación suspende la competencia de la o el juzgador una vez que le es comunicado; salvo que la recusación se fundamente en el retardo injustificado, en cuyo caso se suspende la competencia desde cuando es aceptada.

Conc. Art. 25 COGEP

18. ¿Qué jueces tienen competencia para el reconocimiento y homologación de sentencias, laudos arbitrales y actos de mediación con efecto de sentencia expedidos en el extranjero?

De acuerdo con el artículo 102, inciso 1 del COGEP, son competentes para homologar sentencias y laudos arbitrales, así como los actos de mediación extranjeros, las juezas y jueces de la sala especializada de la Corte Provincial del domicilio de la o del requerido.

Conc. Art. 102, inciso 1 COGEP

19. ¿Qué recurso procede frente a la resolución que dirima el conflicto de competencia?

Conforme con el artículo 14 inciso 7 del COGEP, no cabe ningún recurso frente la resolución que dirima el conflicto de competencia.

Conc. Art. 14, inciso 7 COGEP



Tercera parte
Acerca del proceso

Tercera parte

Acerca del proceso

Capítulo I

Sujetos procesales

20. ¿Quiénes pueden ser partes procesales?

De acuerdo con los principios generales establecidos en el COGEP, son partes procesales el demandante y el demandado; que pueden ser personas naturales, personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos y también la naturaleza debidamente representada.

Conc. Art. 30 COGEP

21. ¿Las y los adolescentes pueden ejercer directamente acciones judiciales?

Según el artículo 21 del Código Civil y los artículos 2 y 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes son considerados menores y por lo tanto incapaces de ejercicio. Esta regla ha ido flexibilizándose a partir del desarrollo del derecho laboral y de la niñez y adolescencia; en virtud de aquello, los menores adolescentes tienen excepcionalmente derecho de acción para garantizar el ejercicio y la protección de sus derechos y garantías.

Conc. Arts. 31, inciso 2 COGEP; 21 CC; 2, 4 CNA.

22. ¿Contra quién se dirige la demanda, si los herederos no han aceptado la herencia?

Generalmente el causante de la herencia es representado por sus herederos, cuando éstos han aceptado la herencia; o por el curador de la herencia yacente, cuando todos o alguno de los herederos la han rechazado.

Conc. Art. 34 COGEP

23. ¿Quién puede representar a la naturaleza?

Una de las innovaciones más importantes de la Constitución ecuatoriana de 2008, es la consideración de la naturaleza como sujeto de derechos. En desarrollo de este principio, el COGEP establece que la naturaleza podrá ser representada por el Defensor del Pueblo o por cualquier persona natural o jurídica que actúen en defensa de sus intereses.

Conc. Art. 38, incisos 1 y 2 COGEP

24. ¿Por qué no se puede demandar a la naturaleza?

De acuerdo con el ordenamiento constitucional ecuatoriano la naturaleza es sujeto de derechos. Uno de esos derechos es el derecho de acción lo que significa que se puede demandar a nombre de la naturaleza la efectividad de alguna pretensión. Eso no quiere decir que la naturaleza pueda ser demandada o reconvenida porque no es sujeto de obligaciones, ni tiene voluntad. Tiene capacidad de goce pero no de ejercicio.

Conc. Arts. 38, inciso 2 COGEP; 71 CRE

25. ¿Por qué no se puede demandar conjuntamente los daños a la naturaleza y los daños ambientales?

En virtud de lo determinado en el artículo 71 y 72 de la Constitución la naturaleza tiene tres derechos:

1. El derecho a que se respete íntegramente su existencia;
2. El mantenimiento y regeneración de sus ecosistemas; y,
3. El derecho que tiene la naturaleza a la restauración de los daños que se le causen.

Estos tres derechos son independientes al derecho que tienen las personas y los colectivos a la indemnización de perjuicios por los daños causados al ambiente definidos en el artículo 72 de la Constitución.

Por esta razón, las acciones derivadas de los daños a la naturaleza y los perjuicios producidos al patrimonio de las personas o colectivos por efecto de los daños ambientales se deberán demandar por vía separada.

Conc. Arts. 38, inciso 3 COGEP; 71, 72 CRE.

26. ¿A quiénes se denomina procuradores judiciales?

Conforme con lo establecido en el artículo 41 del COGEP, procuradores judiciales son las o los mandatarios que tienen poder para comparecer al proceso por la o el actor o la o el demandado.

Conc. Art. 41 COGEP

27. ¿Qué es la procuración judicial y cuáles son sus tipos?

La procuración judicial es un tipo de mandato especial en el que el mandante (actor o demandado) otorga al mandatario (procurador judicial) la facultad de comparecer en el proceso en su nombre y representación, en el COGEP existen dos clases de procuración judicial:

- a) Formal; e,
- b) Informal

La procuración formal se hace por escrito mediante oficio en caso de las entidades públicas o a través de poder ante notario o cónsul en el que se establece claramente el ámbito y los límites de la procuración.

Por su parte la procuración informal es aquella que se otorga verbalmente en la audiencia y se da únicamente para la realización de ese acto procesal.

Conc. Art. 42, numeral 3 COGEP.

28. ¿En qué casos el procurador judicial requiere cláusula especial para actuar dentro del proceso?

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del COGEP, la procuración judicial es un tipo especial de contrato de mandato que faculta a una persona denominada procurador para actuar por otra dentro de un proceso judicial. Por regla general el procurador judicial solamente puede hacer aquello establecido en el poder y debe atenerse estrictamente a los términos de este; sin embargo requiere cláusula especial para realizar los siguientes actos procesales:

1. Sustituir la procuración a favor de otro profesional;
2. Allanarse a la demanda;
3. Transigir;
4. Desistir de la acción o del recurso;
5. Aprobar convenios;
6. Absolver posiciones; y,
7. Deferir al juramento decisorio y recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio.

Conc. Art. 43 COGEP

29. ¿En qué consiste la figura de procurador común y en qué se diferencia de procurador judicial?

En el caso de que una o las dos partes en un litigio sean pluripersonales, y siempre que sus derechos o excepciones no sean diversos o contrapuestos el COGEP mantiene la figura que existía en el Código de Procedimiento Civil del llamado procurador común, que es aquella que siendo parte, representa a las otras para recibir notificaciones.

A diferencia del procurador judicial, que es un profesional del derecho, el procurador común puede ser cualquier persona porque es una parte procesal.

Conc. Art. 37, inciso 2 COGEP.

30. ¿En qué casos se puede revocar la procuración común en un proceso?

Según lo establece el artículo 37, inciso 3 del COGEP la procuración se puede revocar en dos casos:

- a) Por acuerdo de todos quienes la designaron; y,
- b) Por disposición de la o el juzgador a petición de una de la partes cuando haya una causa justificada.

Conc. Art. 37, inciso 3 COGEP.

31. ¿Cuántas clases de tercería establece el COGEP?

De acuerdo con la doctrina, los terceros pueden intervenir en el proceso si son directamente interesados o afectados por el resultado de un juicio. De acuerdo con el artículo 47 del COGEP, en el ordenamiento procesal ecuatoriano existen dos clases de tercería, los terceros excluyentes de dominio y los terceros coadyuvantes.

Conc. Art. 47 COGEP

32. ¿Cuándo una tercería es excluyente de dominio?

De acuerdo con el artículo 47 numeral 1 del COGEP, las tercerías excluyentes de dominio son aquellas en las que la o el tercero pretende que se le reconozca como titular del derecho de dominio.

Conc. Art. 47 numeral 1 COGEP

33. ¿Cuándo una tercería es coadyuvante?

De conformidad con el artículo 47 numeral 2 del COGEP, las tercerías coadyuvantes son aquellas en las que la o el tercero tiene una pretensión que concuerda con cualquiera de las partes del proceso y que pudiera resultar afectada por la sentencia.

Conc. Art. 47 numeral 2 COGEP

34. ¿En qué momento procesal se pueden presentar los terceros al proceso?

Según el artículo 48 del COGEP, la oportunidad para intervenir como tercero en un proceso varía dependiendo de qué procedimiento se trate:

- a) En los procedimientos ordinarios, el COGEP varía el criterio tradicional según el cual las tercerías debían presentarse en el plazo de la presentación de las excepciones lo cual significaría que tendría que presentarse hasta antes de audiencia preliminar. Por razones inexplicables el legislador amplió este plazo de tal suerte que a partir de la vigencia del COGEP se puede presentar terceros al proceso ordinario hasta diez días antes de verificarse la audiencia de juicio;
- b) En el caso de los procedimientos sumarios, la tercería se puede presentar hasta dentro del término de cinco días anteriores a la fecha de realización de la respectiva audiencia; y,
- c) Finalmente en el caso de los procedimientos de ejecución, la tercería se puede presentar desde la convocatoria de la audiencia de ejecución hasta su realización material.

Conc. Art. 48 COGEP

35. ¿En qué consiste el fenómeno de litisconsorcio y cuándo procede?

De acuerdo con Guillermo Cabanellas¹, litisconsorcio es la situación o relación procesal surgida entre distintas personas por efecto de una acción judicial de suerte tal que terminan siendo actoras o demandantes en una misma causa siendo solidarios en sus intereses y debiendo colaborar en la defensa, esto es, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia que se expida con respecto a una podría afectar a la otra.

Conc. Art. 51 COGEP

Capítulo II

El tiempo en el proceso: los términos

36. ¿Qué se entiende por término?

Conforme con el artículo 33 del Código Civil, se denomina plazo al tiempo dentro del cual o después del cual se ha de ejecutar una acción, cumplir una obligación, o hacer nacer o extinguir un derecho. Sin embargo el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano diferencia las nociones de plazo y término, determinando que este último es el tiempo determinado por la o el juzgador o por la ley que tiene como característica especial que se cuenta únicamente en días hábiles, mientras que el plazo decurre de forma continua.

Conc. Art. 73 COGEP

1 Cabanellas Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2012, pp.489

37. ¿Desde cuándo comienza a contarse el término y cuando vence?

En virtud de lo estipulado en el artículo 77 del COGEP el término comienza a decurrir del día hábil siguiente a aquel en que se hizo la última citación o notificación.

Conc. Art. 73 - 77 COGEP

38. ¿Las partes podrán reducir, suspender o ampliar términos judiciales de común acuerdo?

De acuerdo al artículo 76 inciso 2, las partes podrán reducir, suspender o ampliar los términos judiciales, que son aquellos que la o el juzgador fija cuando el legislador no los ha establecido. Por el contrario, de acuerdo al artículo 75, los términos legales (aquellos que el legislador los establece) son irrenunciables e improrrogables.

Conc. Arts. 75 y 76 inciso 2 COGEP

39. ¿Dentro de que término deberán notificarse las providencias judiciales?

Conforme lo establece el artículo 65 inciso segundo del COGEP, las providencias judiciales deberán notificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su pronunciamiento.

Conc. Art. 65, inciso 2 COGEP

Capítulo III

De cómo se pronuncia el juzgador: Las providencias judiciales

40. ¿Qué es una providencia, cuantas clases de providencia contempla el COGEP y cuáles son sus efectos?

Según la doctrina, una providencia es una decisión de una autoridad judicial competente. El artículo 88 del COGEP determina que la o el juzgador se pronuncie a través de dos tipos de providencias sentencias y autos.

Las sentencias son las decisiones definitivas de la o el juzgador sobre el asunto que se dirime en el proceso; los autos son las providencias que o bien resuelven cuestiones procesales no materia de sentencia o bien permiten dar trámite a la causa.

En la legislación ecuatoriana, se reconoce dos tipos de autos:

1. El auto interlocutorio que es la providencia que resuelve cuestiones procesales que afectan los derechos de las partes o la validez del procedimiento y que no se resuelven en sentencia; y,
2. El auto de sustanciación es la providencia que permite darle impulso al proceso.

En cuanto a los efectos, por regla general los autos interlocutorios tienen el efecto de cosa juzgada formal respecto del incidente al que pusieron fin, mientras que los autos de sustanciación permiten continuar con el trámite de la causa. Sin embargo, cuando el auto interlocutorio no ponga fin al proceso podrá ser modificado en la sentencia.

Conc. Art. 88 y 99 del COGEP

41. ¿Sobre quién recae el efecto vinculante de las sentencias y autos?

De acuerdo con el artículo 97 del COGEP, las sentencias y los autos vinculan a las partes y a los terceros que litigaron en el proceso sobre el que recayó el fallo.

Conc. Art. 97 COGEP

Capítulo IV De la violación al procedimiento y sus efectos

42. ¿Qué es la nulidad?

La nulidad es el vicio de que adolece un acto jurídico, como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez o haber sido realizado omitiendo ciertas formalidades o requisitos indispensables.

La nulidad es una característica propia del acto y por lo tanto, en principio éste sería nulo sin necesidad de declaración judicial. Sin embargo, en el derecho ecuatoriano no existe la figura de la inexistencia diferenciada de la nulidad por lo que en la práctica la o el juzgador es quien declara y le da efectos a esa nulidad aunque esta existe previo a la declaración del juez.

En esto, la nulidad se diferencia con la anulabilidad pues los actos anulables se reputan válidos mientras no sean anulados en tanto la nulidad opera ipso jure.

Conc. Art. 107 COGEP

43. ¿Cuál es el efecto de la nulidad de un acto procesal?

Conforme con el artículo 109 del COGEP, la declaratoria de nulidad por la o el juzgador competente genera el retorno del proceso al momento procesal anterior a la ejecución del acto declarado nulo.

Conc. Art. 109 COGEP

44. ¿La nulidad por omisión de solemnidad sustancial podrá declararse en cualquier estado del proceso, aun cuando la omisión haya sido discutida en audiencia preliminar o fase de saneamiento?

Por regla general las nulidades se tienen que sanear en el momento de la audiencia preliminar. Excepcionalmente, si la nulidad se produce con posterioridad a esta primera audiencia, se puede declarar en cualquier momento hasta antes de la sentencia.

Art. 110 numeral 1, inciso final.

Capítulo V

Del desenvolvimiento del proceso y de la actividad procesal

Sección I

Diligencias previas

45. ¿Qué actuaciones se pueden realizar a través de diligencia preparatoria?

De acuerdo con el artículo 120 del COGEP, se puede realizar como diligencia preparatoria ante un juez competente cualquier prueba que tenga el carácter de urgente o que pueda perderse.

Conc. Art. 120 COGEP

46. ¿Cuándo la declaración de personas se puede realizar como diligencia preparatoria?

Según lo dispone el artículo 122 numeral 7 del COGEP, las declaraciones urgentes de las personas que bien sea por su avanzada edad o por estar gravemente enfermas se tema que puedan llegar a fallecer. También se puede realizar como diligencia preparatoria la declaración de las personas que están próximos a ausentarse del país en forma permanente o por un largo periodo.

Conc. Art. 122, numeral 7 COGEP

47. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las providencias preventivas?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 124 inciso 2 del COGEP, la providencia preventiva es una decisión que la o el juzgador puede adoptar dentro o fuera del proceso, cuya finalidad es garantizar la ejecución de la sentencia de fondo. El juzgador competente será siempre el de primera instancia de la materia objeto de la controversia principal.

Conc. Art. 124, inciso 2 COGEP

48. ¿En qué casos puede la o el juzgador dictar providencias preventivas en el auto de calificación de la demanda?

Conforme con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 351 del COGEP, en los procesos ejecutivos la o el juzgador puede ordenar providencias preventivas sobre los bienes del deudor cuando el ejecutante

acompañe a la demanda los certificados que acrediten la propiedad de estos bienes.

Conc. Art. 351 inciso 2 COGEP

49. ¿Qué requisitos debe contener la solicitud de providencias preventivas?

De conformidad con el artículo 127 del COGEP, la solicitud de las providencias preventivas debe reunir los mismos requisitos de la demanda.

Conc. Art. 127, 142 COGEP

50. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el deudor para interrumpir una providencia preventiva?

De acuerdo con el artículo 128 del COGEP, el deudor podrá interrumpir una providencia preventiva a través de una caución suficiente.

Caución suficiente es la garantía económica que a libre juicio de la o el juzgador, permiten avalar el cumplimiento estricto y completo de la pretensión debatida.

Conc. Art. 128 COGEP

51. ¿En qué circunstancias el acreedor puede solicitar al juzgador el arraigo del deudor como providencia preventiva?

El acreedor puede solicitar al juzgador, el arraigo del deudor cuando tenga la sospecha de que éste tiene la intención de ausentarse del país para eludir el cumplimiento de la obligación.

En este caso el acreedor deberá justificar:

- a) La existencia actual del crédito u obligación;
- b) Que la o el deudor es extranjero, y;
- c) La inexistencia de bienes raíces suficientes en el país.

Si los deudores son ecuatorianos la garantía se realiza a través de la prohibición de salida del país.

Conc. Art. 131 COGEP

52. ¿En qué caso y en qué término caducan las providencias preventivas?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 133 del COGEP, si no se presenta la demanda, las providencias preventivas caducan de pleno derecho pasados quince días hábiles luego de que hayan sido ordenadas por la o el juzgador o de aquel día en que se hizo exigible la obligación.

En caso de que las providencias preventivas caduquen el solicitante deberá pagar los daños y perjuicios ocasionados.

Conc. Art. 133 COGEP

53. ¿Qué es un apremio?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134 del COGEP. El apremio es una medida de cumplimiento o ejecución de una decisión judicial que no debe confundirse con una sanción.

Conc. Art. 134 COGEP

54. ¿Cuáles son los tipos de apremio que existen en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para garantizar el pago de los alimentos?

En atención a lo estipulado en el artículo 134 del COGEP, existen dos tipos de apremio:

El apremio real, cuando la medida de ejecución recae sobre los bienes o el patrimonio del obligado; y, el apremio personal, que se aplica excepcionalmente y recae sobre la propia persona.

En el caso del pago de alimentos de conformidad con el artículo 5 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, el apremio personal concierne únicamente a los obligados principales y el apremio real a los obligados subsidiarios.

Conc. Arts. 134 COGEP, 66 numeral 29 CRE y 5 LRCNA.

55. ¿En qué momento cesan los apremios?

De acuerdo con el artículo 138 del COGEP, los apremios terminan en el momento que la o el obligado rinda garantía real o personal estimada suficiente por la o el juzgador.

Conc. Art. 138 COGEP

Sección II La demanda

56. ¿Cómo inicia el proceso?

De conformidad con el artículo 141 del COGEP, todo proceso comienza con la presentación de la demanda, pudiendo precederle diligencias preparatorias.

Conc. Art. 141 COGEP

57. ¿Qué documentos deben acompañarse a la demanda de expropiación?

Según dispone el artículo 143 numeral 6 del COGEP, además de los requisitos generales de toda demanda, en las demandas de expropiación deberá acompañarse los siguientes documentos:

1. La declaratoria de utilidad pública;
2. El certificado de propiedad y gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad; y,
3. El certificado del catastro en el que conste el avalúo del predio.

Conc. Art. 143 numeral 6 COGEP

58. ¿Sobre qué asuntos la o el juzgador debe disponer la inscripción de la demanda?

Conforme con el artículo 146 inciso 5 del COGEP, la o el juzgador debe ordenar la inscripción de las demandas que versen sobre dominio o posesión de inmuebles o de muebles sujetos a registro, así como también de las demandas que versen sobre demarcación y linderos, servidumbres, expropiación, división de bienes comunes y acciones reales inmobiliarias.

Conc. Art. 146, inciso 5 COGEP

59. ¿Cuándo el juzgador puede inadmitir la demanda?

De acuerdo con el artículo 147 del COGEP, la o el juzgador inadmitirá la demanda cuando considere que es: incompetente; o cuando la demanda contenga una indebida acumulación de pretensiones.

Conc. Art. 147 COGEP

60. ¿Hasta qué momento se puede reformar la demanda?

Por regla general, la demanda podrá reformarse hasta antes de que venza el termino de contestación. Por excepción, este plazo se amplía hasta antes de la realización de la audiencia preliminar cuando sobreviene un hecho nuevo. En todo caso en los procedimientos sumario y monitorio no procede la reforma de la demanda por disposición expresa del legislador.

Conc. Art. 148 y 333 inciso 1, 359 inciso 2 COGEP

61. ¿En qué consiste un hecho nuevo que permite la reforma de la demanda?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 148 del COGEP, el hecho nuevo es aquel que no habiendo ocurrido antes de la presentación de la demanda o la contestación, sucede y tiene influencia o relación directa sobre el derecho o la pretensión invocada por las partes en el proceso.

Conc. Art. 148 COGEP

62. ¿Cómo se fija la cuantía en el caso de demandas múltiples en materia laboral?

De conformidad con el artículo 150 inciso 3 del COGEP, la cuantía se fijará de acuerdo al monto de la mayor reclamación individual.

Conc. Art. 150, inciso 3 COGEP

63. ¿Cuáles son los efectos de la calificación de la demanda?

De conformidad con el artículo 149 del COGEP, una vez calificada la demanda, por la o el juzgador éste seguirá siendo competente aunque posteriormente se modifiquen las circunstancias que determinaron esta competencia inicial. Así mismo, por efecto de la calificación de la demanda las partes mantendrán su legitimación aunque en el futuro cambien los hechos en que estas se fundan.

Conc. Art. 149 COGEP

64. ¿Sobre qué debe pronunciarse la parte demandada en su escrito de contestación?

De acuerdo con el segundo inciso del artículo 151 del COGEP, la parte demandada deberá obligatoriamente pronunciarse sobre:

1. Cada una de las pretensiones de la parte actora;
2. Sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda;
3. Sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado; y,
4. La indicación categórica de lo que se admite y se niega.

Conc. Art. 151, inciso 2 COGEP

65. ¿En qué caso se puede pedir embargo de bienes raíces al momento de calificar la demanda?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 351, inciso 4 del COGEP, el acreedor/a podrá pedir a la o el juzgador el embargo de los bienes raíces del deudor cuando se trate de crédito hipotecario.

Conc. Art. 351 inciso 4 COGEP

66. ¿En qué materias no se exige caución para presentar demanda de recusación?

Según el artículo 27 del COGEP, una vez presentada la demanda el demandante debe pagar una caución que fijará la o el juzgador de entre uno a tres salarios básicos unificados. Excepcionalmente no se requiere hacer este pago cuando las demandas versan sobre materias de niñez y adolescencia y laboral o cuando el demandante es una persona jurídica pública.

Conc. Art. 27, inciso 2 COGEP

Sección III
Publicidad y comunicación de los procedimientos

67. ¿A qué se denomina citación en el derecho ecuatoriano?

Doctrinariamente se define como notificación, el acto de dar a conocer a los interesados la resolución de un trámite de o de un asunto judicial, en el caso ecuatoriano el ordenamiento jurídico distingue entre notificación y citación. La primera se refiere a la comunicación

de cualquier acto procesal o providencia judicial a cualquier persona interesada; mientras que la citación, es la comunicación que se hace del contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas.

Conc. Arts. 53, inciso 1, 65 inciso 1 COGEP

68. ¿Cuáles son las formas de citación que contempla el COGEP?

En el ordenamiento procesal ecuatoriano existen tres formas de citación. La citación personal, aquella realizada mediante boletas, o la efectuada través de los medios de comunicación previa orden de la o el juzgador.

De acuerdo con el artículo 54 del COGEP, la citación personal es la entrega personal al demandado o a su representante legal de la demanda o de cualquier documento necesario para que este ejerza sus derechos en igualdad de condiciones.

Por su parte la citación por boletas se produce ante la imposibilidad de realizar la citación personal al demandado caso en el cual el artículo 55 del COGEP, establece que la citación se realizara mediante la entrega de tres boletas en tres días distintos en el domicilio o residencia de la persona o de su familia.

Finalmente la citación por medio de comunicación, se realiza en el caso de que se desconozca la residencia o el domicilio del demandado, o cuando sea imposible determinar su identidad. En este caso la citación se realizará mediante la publicación de un extracto de la demanda en un periódico de amplia circulación del lugar en tres días diferentes. Si no existe periódico en la localidad, la publicación se hará en un

periódico provincial y si éste tampoco existe, en un periódico de amplia circulación nacional.

Conc. Arts. 53, inciso 1, 54, 55, 56 COGEP

69. ¿En qué lugar deberá citarse al representante legal de una persona jurídica?

De acuerdo con el artículo 55 del COGEP, la citación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo.

Conc. Art. 55, inciso 2 COGEP

70. ¿Cómo se cita a las o los ecuatorianos en el exterior, cuyo domicilio se conoce?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 del COGEP, la citación a los demandados que vivan en el exterior y cuyo domicilio se conoce se realiza mediante exhorto a las autoridades consulares.

Conc. Art. 57 COGEP

71. ¿Cuáles son los efectos de la citación?

De conformidad con el artículo 64 del COGEP, la citación tiene los siguientes efectos:

1. Requerir a la o el citado para que comparezca ante la o el juzgador para deducir excepciones;

2. Constituir a la o el demandado como poseedor de mala fe e impedir que haga suyos los frutos de la cosa que se le demanda, según lo dispuesto en el la ley;
3. Constituir a la o el deudor en mora, según lo previsto en la ley; y,
4. Interrumpir la prescripción.

Conc. Art. 64 COGEP

72. ¿Qué diligencias puede deprecar y/o comisionar la o el juzgador?

En principio la o el juzgador puede deprecar y/o comisionar todas las diligencias que no se realicen en la audiencia y que no se relacionen con la práctica de pruebas. Un ejemplo de estas son las notificación y la citación.

Conc. Arts. 72 COGEP; 75 y 168 numeral 6, CRE; y 19 COFJ.

73. ¿Quién puede solicitar copias de las actuaciones y diligencias procesales del expediente?

Por regla general las actuaciones judiciales son de carácter público y en tal virtud cualquier persona puede acceder a ellas y solicitar copias, salvo aquellas que la ley declara como reservadas.

En la legislación ecuatoriana tienen este carácter los documentos declarados como reservados por el Consejo Nacional de Seguridad y aquellos que leyes especiales los declaren así tales como, Código de la Niñez y Adolescencia artículo 317 y Código Orgánico Integral Penal artículo 562 inciso 2, y Código Orgánico de la Función Judicial artículo 13.

En todo caso, el principio de publicidad no alcanza a la grabación de la audiencia; pues en este caso el legislador ha dispuesto que solo las partes tengan acceso a la misma.

Conc. Arts. 118, COGEP; 317 CAN; 562 COIP; 13 COFJ

Sección IV

La defensa de demandado: Contestación, excepciones y reconvencción

74. ¿Qué es la contestación a la demanda?

Es el acto procesal por medio del cual el demandado responde a las pretensiones formuladas por el actor en su demanda. De conformidad con lo establecido en los artículos 142 y 151 del COGEP, la contestación de la demanda debe cumplir los mismos requisitos formales predicables de la demanda.

Conc. Arts. 142 y 151 COGEP

75. ¿Cuál es el efecto de la falta de contestación de la demanda?

De acuerdo con el artículo 157 del COGEP, la falta de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de la demanda o sobre las afirmaciones o negación del actor serán apreciados por la o el juzgador como negativa de los hechos alegados en la demanda. Salvo que la ley le atribuya otro efecto.

Conc. Art. 157 COGEP

76. ¿Cuál es la finalidad de las excepciones previas?

Según lo dispone el artículo 151 inciso tercero del COGEP, las excepciones previas tienen como finalidad evitar que la o el juzgador se pronuncie de fondo cuando existen aspectos formales que de no ser subsanados pueden limitar o impedir su pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Conc. Art. 151 COGEP

77. ¿De las excepciones previas, cuáles son subsanables y cuáles son no subsanables?

Conforme el artículo 153 del COGEP, hay dos tipos de excepciones previas: no subsanables o de pleno derecho y excepciones subsanables.

Dentro de las excepciones de pleno derecho encontramos la falta de legitimación en la causa, la cosa juzgada, la transacción, la litispendencia, la prescripción y la caducidad.

Como excepciones subsanables encontramos la incapacidad de la parte actora o de su representante; el error en la forma de proponer la demanda; la inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones; y la existencia de convenio, compromiso arbitral o acta de mediación.

Conc. Art. 153 COGEP

78. ¿Hasta qué momento la o el demandado puede reformar las excepciones?

De conformidad con la parte final del artículo 151 inciso 3 del COGEP, la o el demandado podrá reformar las excepciones hasta antes de la audiencia preliminar.

Conc. Art. 151, inciso 3 COGEP

79. ¿Si la o el juzgador acepta una excepción previa insubsanable, qué sucede con la demanda?

De acuerdo con el artículo 295 numeral 1 del COGEP, la aceptación por parte de la o el juzgador de una excepción previa insubsanable acarrea la no prosperidad de la demanda y por ende debe ordenar su archivo.

Conc. Art. 295, numeral 1 COGEP

80. ¿Cuál es el efecto jurídico de la aceptación de una excepción relativa a un defecto de forma en la proposición de la demanda?

Según lo dispone el artículo 295 numeral 2 del COGEP, en el caso en que prospere una excepción previa por defectos de forma el actor debe subsanar el defecto en el término máximo de seis días. De no hacerlo se tendrá como no presentada la demanda.

Conc. Art. 295, numeral 2 COGEP

81. ¿Qué ocurre si la o el juzgador acepta las excepciones de falta de capacidad, falta de personería o incompleta conformación del litisconsorcio?

Conforme lo dispuesto por el artículo 295 numeral 3 del COGEP, cuando la o el juzgador acepte las excepciones de falta de capacidad, falta de personería adjetiva e indebida conformación del litisconsorcio en el auto que así lo declare se concederá al actor el término de diez días para subsanar estos defectos.

Conc. Art. 295, numeral 3 COGEP

82. ¿Se puede hablar de prejudicialidad en materia civil?

En virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 214 del COGEP, no existe prejudicialidad no penal.

Conc. Art. 214, inciso 2 COGEP

83. ¿Cuántos días tiene el demandado para presentar demanda de reconvencción?

De conformidad con el artículo 291 del COGEP, el demandado que quiera ejercer su derecho a presentar demanda de reconvencción podrá hacerlo dentro del término para contestar la demanda, esto es, treinta días hábiles.

Conc. Art. 291 COGEP

84. ¿Cuáles son las excepciones en que se debe fundar la oposición en el procedimiento ejecutivo?

Según lo estipulado en el artículo 353 del COGEP, la o el deudor solo puede oponerse a la ejecución alegando una de las siguientes excepciones:

1. Inexistencia del título ejecutivo;
2. Nulidad formal o falsedad del título;
3. Extinción total o parcial de la obligación;
4. Existencia de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado, en la que el deudor sea el denunciante y el acreedor el presunto responsable de delito; y,
5. Las excepciones previas previstas en el artículo 153 del COGEP.

Conc. Arts. 153 y 353 COGEP

85. ¿En qué término debe la o el demandado pagar la obligación o formular oposición fundamentada (excepciones) o reconvenir?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 355 del COGEP, en todo aquello que no esté establecido en el capítulo primero del título segundo del libro cuarto del COGEP, que se refiere al procedimiento ejecutivo, la o el juzgador deberá aplicar las disposiciones del procedimiento sumario.

En el caso particular de término para contestar la demanda el capítulo sobre el proceso ejecutivo no trae ninguna disposición al respecto, por lo que en aplicación a la regla explicada en el párrafo anterior

debe aplicarse la disposición relativa a la contestación a la demanda del procedimiento sumario.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en los artículos 333 numeral 3 y 355 del COGEP, el término para contestar la demanda es de quince días hábiles contados desde la última citación.

Conc. Arts. 333 numeral 3 y 355 COGEP

Sección V

De la oralidad y de la administración de justicia en audiencia

86. ¿Cómo es el proceso por audiencias, cuántas audiencias y en qué tipo de procedimientos?

De conformidad con el artículo 4 del COGEP, por regla general, la sustanciación de los procesos no penales en el Ecuador, se realizará de forma oral a través de audiencias.

En el procedimiento ordinario, están previstas dos audiencias una preliminar y la otra de juicio. En los procedimientos sumarios, monitorio, voluntario y ejecutivo está prevista una sola audiencia dividida en dos fases.

La audiencia preliminar, es aquella en la que la o el juzgador dentro de un procedimiento ordinario, fija los límites del litigio y traba la Litis. En ella se define el objeto del proceso. Esta audiencia está dividida en dos fases, una primera fase llamada de saneamiento y una segunda que podríamos denominar de resolución.

Por su parte la audiencia de juicio es aquella en la que, dentro de un proceso ordinario, las partes presentan las pruebas realizan sus alegaciones y en la que la o el juzgador toma las decisiones definitivas sobre

la pretensión. Esta se realizará a más tardar en el término de treinta días hábiles siguientes a la terminación de la audiencia preliminar.

Conc. Art. 292 y 297, 333 COGEP

87. ¿En qué término debe la o el juzgador convocar a la audiencia preliminar?

De conformidad con el artículo 292 del COGEP, la o el juzgador competente para conocer el proceso ordinario deberá obligatoriamente convocar la audiencia en un término que oscila entre los tres y veinte días siguientes a aquel en que venció el término de contestación de la demanda.

Conc. Art. 292 COGEP

88. ¿Por qué no se puede delegar la realización de una audiencia?

El COGEP se estructura sobre la idea de la aplicación estricta de los principios de inmediación y oralidad que exigen necesariamente la presencia de la o el juzgador en todo el proceso, y particularmente en la audiencia que es el centro de todo el desarrollo del juicio y por tanto se requiere una relación entre partes y la o el juzgador. El incumplimiento de esta obligación genera nulidad insubsanable.

Conc. Art. 6, inciso 3 COGEP

89. ¿Cómo deben comparecer las partes a la audiencia preliminar?

Según lo dispone el artículo 293 del COGEP, y en aplicación al principio de inmediación las partes deben concurrir personalmente a la audiencia preliminar prevista en la sección segunda del libro cuarto del

COGEP, salvo que se haya designado procurador judicial o procurador común con cláusula especial o autorización para transigir; o bien la o el juzgador haya autorizado su comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología.

Cuando se trata de instituciones públicas, la comparecencia personal a la audiencia preliminar de la que trata el artículo 293 se refiere al representante legal o su delegado.

Conc. Art. 293 COGEP

90. ¿Puede la o el juzgador autorizar que las partes intervengan personalmente en la audiencia?

Generalmente las partes deberán acudir a la audiencia acompañado por la o el defensor, quien hablará en su nombre. Excepcionalmente en virtud de lo dispuesto en el artículo 79 inciso 4 del COGEP, el juzgador podrá autorizar a las partes a intervenir directamente. En estos casos el abogado defensor, que debe estar presente, garantizará que en la intervención no se vulnere el derecho de su patrocinado.

Conc. Art. 79, inciso 4 COGEP

91. ¿Cuáles son los efectos de la ausencia justificada de la o el juzgador en una audiencia ya iniciada?

De acuerdo con el artículo 81 inciso 1 del COGEP la ausencia injustificada de la o el juzgador a una audiencia ya iniciada dará lugar a la nulidad no subsanable de la diligencia. Habrá ausencia justificada en los siguientes casos: absoluta necesidad, debiendo reiniciarse dentro del término de dos días; cuando exista caso fortuito y fuerza mayor, la audiencia se reiniciará dentro de los diez días siguientes. En caso de

incumplimiento de los términos señalados la audiencia previamente iniciada se dejará sin efecto.

Conc. Arts. 81, inciso 1 y 82 COGEP.

92. ¿Sobre qué temas debe resolver la o el juzgador en la audiencia preliminar?

De acuerdo con el artículo 294 del COGEP, en la audiencia preliminar la o el juzgador debe resolver sobre varias cuestiones:

1. Sobre las excepciones previas propuestas por las partes;
2. Sobre la validez del proceso y la determinación del objeto de la controversia;
3. Sobre los reclamos de terceros; y,
4. Sobre la competencia y cuestiones de procedimiento que afecten la validez del proceso, con el fin de convalidarlo o sanearlo.

Igualmente la o el juzgador deberá promover en la audiencia preliminar la conciliación entre las partes la cual de ser total será aprobada en la misma audiencia mediante sentencia que causará ejecutoria. Si la conciliación es parcial la o el juzgador la aprobará mediante auto interlocutorio, en el cual ordenará continuar el proceso sobre la materia no conciliada.

Salvo que las partes manifiesten a la o el juzgador la falta de voluntad absoluta de conciliar, éste debe agotar todos los medios para llegar a un acuerdo entre las partes, para lo cual podrá derivar el expediente al Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura a efectos de intentar nuevamente el arreglo.

En el caso de que las partes lleguen a un acuerdo total, el expediente se devolverá a la o el juzgador, incluyendo el acta de mediación, para que éste la incorpore al proceso y lo de por concluido. Si las partes no logran llegar a un acuerdo o el acuerdo es parcial, el expediente igualmente volverá a la o el juzgador para que continúe con la audiencia.

En la parte final de la audiencia la o el juzgador resolverá motivadamente y en forma verbal sobre todas las cuestiones planteadas en la audiencia y, señalará la fecha de la audiencia de juicio.

Conc. Art. 294 COGEP

93. ¿Concluida la primera parte de la audiencia preliminar y si no hay vicios de procedimiento, cual es el procedimiento a seguir?

Conforme dispone el artículo 294 numeral siete del COGEP, las partes tienen la obligación de anunciar todas las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio así como formular solicitudes, objeciones y planteamientos relevantes o respecto a la oferta de prueba de la contraparte.

Conc. Art. 294 numeral 7 COGEP

94. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad de la prueba?

Además de necesaria, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad.

De acuerdo con el principio de necesidad la o el juzgador no puede decidir en un proceso sobre la base de su propia experiencia sino que debe decidir conforme a los hechos probados, esta vinculación entre

los medios de prueba y la decisión es conocida doctrinariamente como principio de necesidad de la prueba.

La conducencia o idoneidad legal de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso.

A su vez la pertinencia de la prueba se refiere a que la prueba tenga una relación de causa efecto con el hecho investigado.

Finalmente las pruebas deben ser útiles. La utilidad de la prueba hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de controversia que aún no se encuentra demostrada con otra.

Conc. Arts. 160 inciso 1, 161 COGEP

95. ¿En qué caso podrá haber acuerdos probatorios entre las partes?

Según lo establece el artículo 294 numeral 7 literal f) del COGEP, cuando sea innecesario probar el hecho. Los acuerdos probatorios también podrán referirse a la comparecencia de los peritos.

Conc. Art. 294 numeral 7, literal f) COGEP

96. ¿Qué efecto tienen las manifestaciones de dirección o las proposiciones de arreglo que la o el juzgador plantee a las partes durante la fase de conciliación de la audiencia preliminar?

De acuerdo con el artículo 294 literal 8 inciso segundo del COGEP, las manifestaciones de dirección y las fórmulas de arreglo propuestas por la o el juzgador no serán consideradas como adelantamiento de

juicio o prejuzgamiento; no pudiendo, por tanto, ser sancionados por estos actos.

Conc. Art. 294 numeral 8 COGEP

97. ¿Qué recursos caben frente a las resoluciones tomadas por la o el juzgador en la audiencia preliminar?

De conformidad con las reglas generales relacionadas con los recursos, frente a las decisiones tomadas por la o el juzgador en la audiencia preliminar caben los recursos de apelación y de hecho; la admisión o inadmisión de estos recursos será decidida por el juzgador en la misma audiencia.

Conc. Art. 296 numeral 2 COGEP

98. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de juicio?

De conformidad con el artículo 297 del COGEP, la audiencia de juicio tendrá los siguientes pasos:

1. Instalación de la audiencia dónde la o el juzgador dará lectura del acta resumen de la audiencia preliminar;
2. Alegatos, donde la o el juzgador dará la palabra a las partes y a terceros en caso de haberlos;
3. Práctica de pruebas en la que las partes presentarán de manera breve y sumaria sus pruebas;
4. Alegatos finales donde las partes esgrimirán sus conclusiones; y,
5. Resolución en la que la o el juzgador oralmente tomará la decisión, pudiendo suspender la audiencia hasta por un término de diez días para mejor resolver.

Conc. Arts. 93, 297 COGEP

99. ¿En qué momento debe practicarse la prueba?

De acuerdo con las reglas generales establecidas en el COGEP, en aplicación al principio de oralidad, las pruebas por regla general deben practicarse en la audiencia de juicio de forma oral.

Conc. Art. 159, inciso final COGEP

100. ¿Qué pruebas deben practicarse en la audiencia de juicio?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 297 numeral 3 del COGEP por regla general, la o el juzgador ordenará únicamente la práctica de las pruebas admitidas en la audiencia preliminar las cuales deberán realizarse en el orden que hayan sido solicitadas.

Excepcionalmente podrá practicar pruebas de oficio necesarias para mejor resolución.

Conc. Art. 297, numeral 3 COGEP

101. ¿Qué medidas debe tomar la o el juzgador, en caso de suspenderse la audiencia de juicio por falta de comparecencia de un declarante?

De acuerdo con el artículo 177 numeral 2 del COGEP, en caso de ausencia justificada del declarante o del testigo la parte interesada le solicitará a la o el juzgador la suspensión de la audiencia por tratarse una prueba trascendental.

La o el juzgador valorará la justificación presentada y aceptará o negará la petición de la parte interesada. De aceptar la petición, la

o el juzgador deberá señalar día y hora para continuar la audiencia y dispondrá mediante apremio la nueva comparecencia de la o del declarante fallido.

Conc. Art. 177, numeral 2 COGEP

102. ¿Cuál es el procedimiento de toma de decisión en la audiencia?

Según el principio de justicia en audiencia, las decisiones en los juicios de materias no penales se tomarán generalmente al concluir la audiencia, en la que la o el juzgador se pronunciará sobre los siguientes aspectos:

- a) Sobre el fondo del asunto;
- b) Sobre la determinación de la cosa cantidad o hecho que se acepta o niega; y,
- c) En caso de que proceda sobre el monto de las indemnizaciones, intereses y costas.

Conc. Arts. 93, 94 y 284 COGEP

Sección VI De las pruebas

103. ¿Cuál es la finalidad de la prueba?

Doctrinariamente se ha entendido que la prueba tiene por objeto llevar a la o el juzgador al convencimiento de los hechos o circunstancias controvertidos. Así lo ratifica el artículo 158 del COGEP. Para ello las partes podrán utilizar cualquier tipo de prueba que no violente el debido proceso, ni la ley.

Conc. Art. 158 COGEP

104. ¿En qué momento debe practicarse la prueba?

De acuerdo con las reglas generales establecidas en el COGEP, en aplicación al principio de oralidad, las pruebas por regla general deben practicarse en la audiencia de juicio de forma oral.

Conc. Arts 159, inciso final COGEP

105. ¿Qué pruebas son improcedentes?

Conforme lo dispone el artículo 160 del COGEP, la o el juzgador declarará la improcedencia de la prueba cuando se haya obtenido con violación a la Constitución o de la ley.

Conc. Art. 160 inciso 3 COGEP

106. ¿En qué momento, y por qué se puede rechazar la prueba?

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 160 del COGEP, en la audiencia preliminar de oficio o a petición de parte, la o el juzgador puede rechazar la prueba impertinente inútil o inconducente

Conc. Art. 160 inciso 2 COGEP

107. ¿Qué prueba carece de eficacia probatoria?

Por mandato del artículo 160 inciso 4 del COGEP, la prueba obtenida por medio de simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno, así como la prueba actuada sin que la otra parte tenga la oportunidad de contradecirla carece de toda eficacia probatoria.

Conc. Art. 160, inciso 4 COGEP

108. ¿Cuáles son los efectos de la admisión de la apelación de la práctica de la prueba?

Conforme con la parte final del inciso final del artículo 160 del COGEP, el auto mediante el cual la o el juzgador inadmita una prueba podrá apelarse en el efecto diferido en caso de admitirse la apelación la o el juzgador de instancia superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella varíe de forma sustancial el resultado del proceso.

Conc. Art. 160, inciso final COGEP

109. ¿Qué hechos no requieren ser probados?

De acuerdo con el artículo 163 del COGEP, no necesitan ser probados:

1. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvencción o los que se determinen en la audiencia preliminar;
2. Los hechos imposibles;
3. Los hechos notorios o públicamente evidentes; y,
4. Los hechos que la ley presume de derecho.

Conc. Art. 163 COGEP

110. ¿Cómo debe valorar la prueba la o el juzgador?

Por regla general, cuando ha sido sometida a contradicción en el juicio, la prueba debe ser valorada o apreciada en su conjunto, sirviéndose de las reglas de la sana crítica. De esta manera la o el juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución, la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión.

Conc. Art. 164, inciso 2 y 3 COGEP

111. ¿Cuál es el procedimiento para que la o el actor puede anunciar nueva prueba?

De conformidad con el artículo 151 inciso 4 del COGEP, se le confiere a la o el juzgador el término de tres días, para que realice la notificación de la calificación de la contestación a la demanda. Vencido este término el actor tiene diez días para anunciar prueba nueva que debe estar relacionada con los hechos propuestos en la contestación. En materia de niñez y adolescencia estos términos se reducen a un tercio del plazo general.

Conc. Art. 151, inciso 4 y 5 COGEP

112. ¿En qué consiste el anuncio de prueba?

Una de las principales innovaciones que implica la introducción del principio de oralidad dentro del COGEP, es la obligación que tiene las partes de anunciar las pruebas que pretenden hacer valer en el proceso.

El anuncio de prueba es la constancia que aparece en la demanda o en la contestación de los medios de prueba que se ofrecen para acreditar los hechos.

El anuncio de prueba se acompaña con la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuáles declararán y la especificación de los objetos sobre los que versaran las diligencias, tales como inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica.

Conc. Art. 142, numeral 7 COGEP

113. ¿En qué consiste el derecho de contradicción de la prueba?

De acuerdo con el artículo 165 del COGEP, las partes tienen derecho a conocer oportunamente las pruebas que se vayan a practicar; a oponerse de manera fundamentada a ellas y contradecirlas.

El derecho a contradecir las pruebas presentadas por la otra parte implica que existen mecanismos idóneos para discutir y controvertir, en igualdad de condiciones, las pruebas presentadas por la otra parte y debatir los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en su contra.

Conc. Art. 165 COGEP

114. ¿La o el juzgador puede ordenar de oficio la práctica de prueba para mejor resolver, en cualquier materia?

De conformidad con el artículo 130 numeral 10 del COFJ es facultad esencial de la o el juzgador ordenar la práctica de cualquier prueba para el esclarecimiento de la verdad dentro del proceso.

Conc. Art. 168 COGEP, 130 numeral 10 COFJ

115. ¿Cuándo la parte demandada no está obligada a presentar pruebas?

De acuerdo con el artículo 169 del COGEP, por regla general incumbe a la parte actora probar los hechos y las afirmaciones que contenga la demanda así como aquellas que ha negado el demandado en la contestación. Igualmente por regla general el demandado deberá probar todo aquello que afirma en la contestación.

Excepcionalmente el demandado no está obligado a presentar pruebas si su contestación ha sido pura y simplemente negativa de todo lo afirmado por el actor.

Conc. Art. 169 COGEP

116. ¿Cuáles actuaciones son objetables?

De acuerdo con el artículo 170 del COGEP, las partes podrán objetar las actuaciones contrarias al debido proceso o lealtad procesal, así como cualquier prueba impertinente, inútil o inconducente.

Conc. Art. 170 y 176 COGEP

117. ¿Cuál es el procedimiento para el traslado de una prueba a otro proceso?

Para trasladar válidamente una prueba de una proceso a otro es indispensable que en el proceso original ésta se haya practicado a pedido de la parte contra quien se la quiere hacer valer. O que ésta haya ejercido oportunamente su derecho a la contradicción.

Conc. Art. 171 COGEP

118. ¿Cuándo se puede practicar prueba en la audiencia de segunda instancia?

Por regla general solo se puede practicar prueba en la audiencia de juicio correspondiente a la primera instancia. Excepcionalmente el artículo 258 del COGEP, permite practicar nueva prueba en segunda instancia cuando se trate de acreditar hechos nuevos o cuando se trata

de una prueba que versa sobre los mismos hechos, esta solo haya sido posible obtenerla con posterioridad a la sentencia.

Conc. Art. 258, inciso 2 y 3 COGEP

119. ¿Qué es presunción judicial y cuándo la o el juzgador puede decidir exclusivamente sobre la base de una presunción judicial?

La doctrina considera que la presunción judicial es aquella que se constituye en plena prueba. Esto sucede cuando, a juicio de la o el juzgador, el hecho presumido sea lo suficientemente preciso para formar por si solo el convencimiento de la o el juzgador.

Conc. Art. 172 COGEP

120. ¿En qué consiste el anuncio de prueba?

Una de las principales innovaciones que implica la introducción del principio de oralidad dentro del COGEP, es la obligación que tiene las partes de anunciar las pruebas que pretenden hacer valer en el proceso.

El anuncio de prueba es la constancia que aparece en la demanda de los medios de prueba que ofrece el actor para acreditar los hechos.

El anuncio de prueba se acompaña con la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuáles declararán y la especificación de los objetos sobre los que versaran las diligencias, tales como inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica.

Conc. Art. 142, numeral 7 COGEP

121. ¿Cuál es el procedimiento para que la o el actor puede anunciar nueva prueba?

De conformidad con el artículo 151 inciso 4 del COGEP, se le confiere a la o el juzgador el término de tres días, para que realice la notificación de la calificación de la contestación a la demanda. Vencido este término el actor tiene diez días para anunciar prueba nueva que debe estar relacionada con los hechos propuestos en la contestación. En materia de niñez y adolescencia estos términos se reducen a un tercio del plazo general.

Conc. Art. 151, inciso 4 y 5 COGEP

122. ¿A quién corresponde probar la capacidad económica de la o el obligado al pago de alimentos?

Según el artículo 169 del COGEP la obligación de probar sobre la capacidad económica recae en el demandante, lo cual constituye en una excepción a la regla general, según la cual “quien afirma prueba”.

Esta excepción fue concebida por el legislador para garantizar los derechos de los niños y adolescentes y de ciertas personas objeto de especial protección, específicamente el COGEP invirtió la carga de la prueba con el propósito de que los solicitantes de alimentos no tengan la necesidad de probar la capacidad económica del obligado.

Sin embargo, paradójicamente, la regla del legislador en lugar de mejorar la situación del demandante corre el riesgo de ponerlo en indefensión, al dejar exclusivamente en manos del obligado probar su capacidad económica, lo que va en contra del sentido común.

En todo caso a pesar de la claridad del tenor literal de la norma es recomendable que los demandantes tomen la iniciativa probatoria sobre

la capacidad económica del obligado, porque esto garantiza que no haya fraude a la ley.

Conc. Art. 169, inciso 4 COGEP y Art. innumerado 15 LRCONA

123. ¿Cuál es el procedimiento de práctica de las pruebas cuando una de las partes es una persona jurídica?

En principio a la persona jurídica le son aplicables las reglas previstas para las personas naturales, lo cual significa que todos los medios de prueba son procedentes. Sin embargo, en el caso de la declaración de parte, ésta se practicará mediante la citación al representante legal quien actuará en su nombre y representación.

Cuando el representante legal no haya participado en los hechos controvertidos en el proceso, dejará constancia de tal circunstancia en la audiencia preliminar.

Ahora bien, si se tratare de uno de los casos que habla del artículo 177 del numeral 9 COGEP, la regla general establecida para las personas jurídicas varía debiendo los titulares de éstas, emitir informe con juramento.

Conc. Art. 177, numeral 4 y 9 COGEP

124. ¿Qué debe hacerse en caso de no tener acceso a las pruebas documentales y periciales?

De acuerdo con el artículo 152 inciso 3 del COGEP, si el actor no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales necesarias para el éxito de su pretensión deberá describir su contenido, indicando con

precisión el lugar en que se encuentran y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.

Conc. Art. 152, inciso 3 COGEP

125. ¿Qué es el testimonio y como se practica la prueba testimonial en los procedimientos no penales?

De acuerdo con el artículo 174 del COGEP, el testimonio es la declaración que rinde una de las partes o un tercero respecto de cualquiera de los puntos de la controversia.

La prueba testimonial se practica en la audiencia de juicio, ya sea de forma directa o a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología, con excepción de las declaraciones anticipadas. Y de acuerdo con el COGEP se lleva a cabo mediante interrogatorio de quien la propone y contrainterrogatorio de la contraparte.

Conc. Art. 174 COGEP

126. ¿Quién, de acuerdo con el COGEP, es testigo?

De conformidad con el artículo 189 del COGEP, testigo es toda persona que ha percibido a través de sus sentidos directa y personalmente hechos relacionados con la controversia.

Conc. Art. 189 COGEP

127. ¿Cuándo se puede recibir la declaración anticipada?

Según lo establecido en el artículo 181 del COGEP, los casos en los que procede la declaración anticipada son los siguientes:

1. Cuando se trate de obtener la declaración de una persona gravemente enferma;
2. Cuando se trate de personas físicamente imposibilitadas;
3. De las personas que van a salir del país; y,
4. Y de todas las demás que se demuestre que no pueden comparecer a la audiencia de juicio. En todo caso, las circunstancias que podrían demostrar esta imposibilidad de comparecer se reducen al caso fortuito y la fuerza mayor.

En estos casos, la o el juzgador debe cuidar que la declaración anticipada se realice en audiencia especial y que en esta audiencia especial se garantice del derecho de contradicción.

Conc. Art. 181 COGEP

128. ¿En qué circunstancias el declarante puede negarse a responder?

De acuerdo con el artículo 175 inciso 2 del COGEP, la o el declarante puede negarse a responder cualquier pregunta en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de preguntas que puedan acarrearle responsabilidad penal personal, a su cónyuge o conviviente en unión de hecho o a sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto las que se refieran a cuestiones de estado civil o de familia; o,
2. Cuando la pregunta viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de su estado u oficio, empleo, profesión, arte o por disposición expresa de la ley.

Conc. Art. 175, inciso 2 COGEP

129. ¿Dentro de la práctica de la prueba testimonial qué preguntas se pueden objetar?

De conformidad con el artículo 176 del COGEP, en la práctica de un testimonio las partes podrán objetar de forma motivada aquellas preguntas de la otra parte que:

1. Acarreen responsabilidad penal a la o el declarante;
2. Sean capciosas o sugestivas;
3. Se formulen como preguntas compuestas;
4. Sean vagas o confusas;
5. Sean impertinentes; y,
6. Estén formuladas de forma hipotética por opiniones o conclusiones.

Pregunta capciosa o sugestiva es aquella que con artificio o engaño sugiere la respuesta a fin de favorecer los propósitos de quien la formula; la pregunta compuesta es aquella que se formula involucrando varios hechos sobre los cuales el testigo debe declarar, y donde la respuesta no aclara sobre cuál de ellos se pronuncia; pregunta vaga o confusa es aquella que no precisa suficientemente, o no contiene la información que requiere el testigo para contestar. Por ello es incomprendible, distrae o confunde al testigo; pregunta impertinente es aquella que no tiene relación con el objeto del proceso; pregunta hipotética es aquella que crea una hipótesis que el testigo debe confirmar o rechazar distrayéndolo de lo que realmente percibió o recuerda.

Por su parte de acuerdo con el inciso segundo del artículo 176 del COGEP, se podrán objetarse las respuestas de las o los declarantes cuando excedan el alcance de la preguntas sean impertinentes o se contesten de forma manifiestamente parcializada.

Conc. Art. 176 COGEP

130. ¿En la prueba testimonial, en qué casos puede formularse preguntas sugestivas?

De acuerdo con el artículo 176 del COGEP, en el ordenamiento procesal ecuatoriano, están prohibidas las preguntas sugestivas, por regla general. Sin embargo, excepcionalmente del artículo 177 numeral 7 de dicho código permite realizar preguntas sugestivas en los siguientes casos:

- a) cuando se trate de introductorios que no afecten a los hechos controvertidos;
- b) cuando se trate de recapitular información ya aportada por la o el declarante;
- c) cuando la o el juzgador haya calificado al testigo como hostil; y,
- d) en el contrainterrogatorio cuando se practique la declaración de una parte a pedido de la otra.

Conc. Art. 177, numeral 7 COGEP

131. ¿En la práctica de la prueba testimonial qué preguntas puede rechazar la o el juzgador?

De acuerdo con el artículo 177 numeral 8 del COGEP, la o el juzgador tiene la obligación de negar de oficio las preguntas inconstitucionales, impertinentes, capciosas, oscuras, compuestas y aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al declarante.

Conc. Art. 177 numeral 8 COGEP

132. ¿Cómo declaran los incapaces?

Por regla general en el derecho continental europeo había establecido que los incapaces no son sujeto de derecho de acción, por lo tanto, no tienen capacidad legal para comparecer en juicio ni pueden ser demandados; tanto que según el artículo 1463 del Código Civil sus actos no generan ni aun obligaciones naturales.

Tanto el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, como el Código Orgánico Integral Penal, establecen excepciones puntuales a esta regla general y en tal virtud, en aplicación del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, estos, siendo incapaces pueden en su beneficio, prestar declaración y ésta será eficaz, solo que en este caso conforme lo dispuesto en el artículo 177 numeral 5 del COGEP, la declaración de los niños, niñas y adolescentes se rendirá sin juramento.

Ahora bien, el Código Orgánico General de Procesos en esta misma disposición parece altera el sentido tradicional de la relación entre la incapacidad y la declaración, al permitir que todos lo incapaces absolutos mayores de edad pueden rendir declaración con la presencia de su representante legal, lo cual va en contra de la teoría general de la representación.

Conc. Arts. 1462, 1463 CC; 177 numeral 5 COGEP

133. ¿Quién puede pedir el juramento decisorio?

De conformidad con lo establecido en el artículo 184 del COGEP, cualquiera de las partes puede deferir a la declaración de la otra y pedir expresamente que la o el juzgador decida la causa sobre la base de ella, cuando la declaración caiga sobre un hecho personal y referido a la o el declarante.

Conc. Art. 184 COGEP

134. ¿Qué es el juramento deferido?

Doctrinariamente se entiende que el juramento es la declaración solemne que una persona hace sobre la veracidad de lo que dice y que compromete su honor.

Por su parte juramento deferido es aquel en que para resolver un conflicto sobre la verdad de un hecho, una parte acepta dar valor al juramento solemne que hace la otra parte.

Este tipo de juramento está reconocido en la legislación procesal ecuatoriana en el artículo 184 del COGEP.

Conc. Art. 184 COGEP

135. ¿Qué se puede probar a través del juramento deferido?

De acuerdo con el artículo 185 del COGEP, el juzgador puede resolver valiéndose de un juramento deferido del deudor en las controversias sobre devolución de préstamo; o cuando se alegue usura a falta de pruebas para justificar la tasa de interés y el monto efectivo del capital prestado.

En materia laboral, a falta de otra prueba podrá la o el juzgador resolver sobre la base de un juramento deferido de la o del trabajador, cuando se trate de probar el tiempo de servicio y la remuneración percibida. En el caso de las o los adolescentes, también se podrá probar por este medio la existencia de la relación laboral.

Conc. Art. 185 incisos 1 y 3 COGEP

136. ¿En qué consiste la declaración de parte o confesión judicial?

De acuerdo con la doctrina, la declaración de parte es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes.

Conc. Art. 187 COGEP

137. ¿En qué consiste la prueba documental?

Tradicionalmente se entiende que un documento es un escrito en el que constan hechos o declaraciones y que sirve de prueba de ello.

Por su parte de acuerdo con el artículo 193 del COGEP, prueba documental es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho.

Conc. Art. 193 COGEP

138. ¿Cómo pueden presentarse los documentos para que tengan validez en un proceso?

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del COGEP, los documentos públicos o privados se presentarán en originales o en copias.

Se considerarán copias las reproducciones del original, realizadas por cualquier sistema debidamente certificadas.

Conc. Arts. 194 COGEP, 121 CPC

139. ¿Bajo qué circunstancias pueden presentarse documentos defectuosos?

Por regla general todo documento debe ser veraz, idóneo. Además debe estar materialmente intacto para poder servir de prueba dentro de un proceso. Excepcionalmente el artículo 197 del COGEP, faculta a las partes a presentar como prueba válida, documentos defectuosos que según esta disposición son aquellos que se encuentren parcialmente destruidos, siempre y cuando contengan, de manera clara, una representación o declaración del hecho o derecho alegado por quien los presentase.

Conc. Art. 197 COGEP

140. ¿En qué momento debe resolverse sobre la falsedad y nulidad de documentos?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 del COGEP, la aseveración de la falsedad material o ideológica de un documento debe hacerse, dentro de la contestación o de la contrademanda.

La falsedad se tramita como incidente y debe resolverse en la audiencia de juicio o en la fase de juicio de la sentencia única.

Conc. Art. 198 COGEP

141. ¿En qué consisten los documentos digitales?

De conformidad con el artículo 202 del COGEP, los documentos digitales son aquellos producidos electrónicamente con sus respectivos anexos, y serán considerados originales para todos los efectos legales.

Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria que el original.

Conc. Art. 202, incisos 1 y 2 COGEP

142. ¿Qué efectos probatorios tienen las reproducciones digitales de documentos públicos o privados que sean agregados al expediente?

Según dispone el artículo 115 del COGEP, las copias digitales de las piezas procesales que obren en el expediente tienen la misma fuerza probatoria que los documentos originales.

Conc. Art. 115, inciso 2 COGEP.

143. ¿Cuál es el valor probatorio de los documentos firmados en blanco o con espacios sin llenar?

Por regla general los documentos deben estar completos; así por ejemplo los títulos ejecutivos contienen una obligación clara, expresa y exigible. Sin embargo el COGEP establece una excepción a esta regla para el caso de los documentos que hayan sido firmados en blanco o con espacios sin llenar, dando validez a documentos que pueden ser considerados incompletos bajo la condición de que se reconozca la firma y rubrica del suscribiente.

Ahora bien este reconocimiento de un documento firmado en blanco no debe afectar a terceros de buena fe.

Conc. Art. 203, inciso 3 COGEP

144. ¿De qué forma se procesa la prueba de gran volumen?

De acuerdo con el artículo 204 del COGEP, el contenido de documentos de gran volumen, grabaciones de larga duración o fotografías que tengan gran formato, serán agregadas de manera completa, adicionando esquemas, resúmenes o cómputos o cualquier otro medio que los explique de forma didáctica y que reproduzca fielmente los elementos esenciales de su contenido.

Conc. Art. 204, inciso 1 COGEP

145. ¿Qué alcance probatorio tiene el instrumento público?

Según lo dispuesto en el artículo 208 del COGEP, el instrumento público hace fe, aun contra de terceros, de su otorgamiento, fecha y declaraciones que en ellos haga la o el servidor público que los autoriza, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho las o los interesados. En esta parte no hace fe sino en contra de los declarantes.

Las obligaciones y descargos contenidos en el instrumento hacen prueba con respecto a las o los otorgantes y de las personas a quienes se transfiere dichas obligaciones y descargos, a título universal o singular.

Conc. Art. 208 COGEP

146. ¿Cuándo un documento es privado?

De acuerdo con el artículo 216 del COGEP, se considera que un documento es privado cuando ha sido realizado por personas particulares,

sin la intervención de funcionario público alguno, o con éstos, en asuntos que no son de su competencia.

Conc. Art. 216 COGEP

147. ¿Qué efectos tiene el documento privado que ha sido objeto de reconocimiento de firma, certificación o protocolización?

En el Código de Procedimiento Civil los documentos privados que reconocen una obligación o su efectivo cumplimiento, tenía los mismos efectos de un instrumento público.

En el sistema del COGEP el efecto cambia pues una vez que se haya reconocido la firma o declarado su autenticidad se presumirá cierto el contenido.

En caso de que se quiera discutir la veracidad del contenido, dada la presunción establecida por el COGEP en el artículo 203 inciso final se invierte la carga de la prueba.

Conc. Arts. 203, 218 COGEP; 194 CPC

148. ¿Quién es el perito?

Perito es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar a la o el juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia.

Conc. Art. 221, inciso 1 GOGEP

149. ¿Cuál es la finalidad de la prueba pericial?

Conforme con lo dispuesto en el artículo 227 del COGEP, la prueba pericial tiene como propósito que personas expertas en alguna materia que se ventila en el proceso, debidamente acreditados por el Consejo de la Judicatura puedan comprobar las afirmaciones y los hechos materia del proceso.

Conc. Art. 227 COGEP

150. ¿Quiénes están autorizados para emitir informes periciales?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 221, inciso 2 del COGEP; están autorizados para realizar y emitir informes periciales aquellas personas inscritas en el registro que para tal efecto lleva el Consejo de la Judicatura, quienes estarán facultados para realizar peritajes e intervenir y declara en el proceso sobre el contenido de estos informes.

Conc. Art. 221, inciso 2 COGEP

151. ¿Cuáles son los efectos prácticos de un peritaje realizado por una persona jurídica?

El inciso primero del artículo 221 del COGEP determina que perito puede ser cualquier persona natural o jurídica, que en razón de sus conocimientos este en capacidad de informar al juzgador sobre un hecho materia de la controversia, sin embargo en la parte final del inciso segundo de ese mismo artículo se determina que cuando el perito sea una persona jurídica la declaración en el proceso debe hacerla el especialista acreditado que realizó la pericia.

Conc. Art. 221 COGEP

152. ¿Qué debe hacer la o el juzgador en caso de inexistencia de expertos acreditados?

De acuerdo con el artículo 221 inciso 2 del COGEP, en el evento en que en las listas del Consejo de la Judicatura no existan expertos acreditados en una materia específica que se esté ventilando dentro del proceso, la o el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que pida a una institución pública, universidad o colegio profesional, el envío de una terna de profesionales que pueden acreditarse como peritos en ese proceso particular.

Conc. Art. 221, inciso 2 COGEP

153. ¿Cuál es el efecto de inasistencia injustificada del perito a la audiencia de juicio?

De conformidad con lo establecido en el artículo 222 inciso 3 del COGEP, en el evento de inasistencia injustificada del perito a la audiencia de juicio su informe no tendrá eficacia probatoria y perderá su acreditación en el Consejo de la Judicatura.

Conc. Art. 222, inciso 3 COGEP

154. ¿Cuál es el procedimiento de la objeción del informe del perito por error esencial?

Doctrinariamente se entiende por error esencial aquel que produce la nulidad del acto porque versa sobre su naturaleza, sobre la persona o sobre cualidades esenciales del objeto.

De acuerdo con el artículo 222 inciso 6 del COGEP, cuando a juicio de una parte existe un error esencial en el informe de un perito, este

error únicamente podrá alegarse y probarse en la audiencia de juicio. En ningún caso habrá lugar a un incidente o a un procedimiento especial de objeción del informe por error esencial.

Conc. Art. 222, inciso 6 COGEP

155. ¿En qué caso procede el debate entre peritos?

De acuerdo con el artículo 222 del inciso 7 COGEP, cuando dentro de la audiencia de juicio existan dos informes periciales y los peritos han rendido su informe, y las partes han hecho el interrogatorio y el contra-interrogatorio correspondientes, se podrá realizar un debate entre los peritos de parte, si a juicio del juzgador existe divergencia sustancial en algún punto de los dos informes.

En ese caso la o el juzgador permitirá la realización de un debate y finalizado este se abrirá nuevamente a interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes los cuales solo podrán referirse a aquellas conclusiones divergentes entre los informes.

Conc. Art. 222, inciso 7 COGEP

156. ¿En qué caso puede la o el juzgador ordenar un tercer peritaje para mejor resolver?

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 168 del COGEP, se puede ordenar un tercer peritaje cuando luego del debate frente a dos informes periciales contradictorios o divergentes persisten las dudas de la o el juzgador sobre sus conclusiones.

Conc. Art. 226, inciso 2 y 168 COGEP

157. ¿Cuáles son las condiciones materiales en las que el perito debe actuar para que el peritaje sea válido?

De acuerdo con lo establecido en el artículo del COGEP, para que el informe pericial pueda ser tomado en cuenta por la o el juzgador a la hora de decidir y no obstante que el COGEP en su filosofía ha introducido la idea del perito de parte más que del perito auxiliar de la justicia en todo caso la labor del perito debe reflejar objetividad e imparcialidad.

Conc. Art. 223 COGEP

158. ¿Qué preguntas y pruebas pueden dirigirse al perito en la audiencia de juicio?

Según lo dispuesto en el artículo 223 inciso 2 del COGEP, durante la audiencia de juicio podrán dirigirse a la o al perito, preguntas y presentar pruebas no anunciadas oportunamente orientadas a demostrar su parcialidad y no idoneidad, o bien dirigidas a desvirtuar el rigor técnico o científico de sus conclusiones así como cualquier otra destinada a solventar o impugnar su credibilidad.

Conc. Art. 223, inciso 2 COGEP

159. ¿En qué forma deben exponerse las conclusiones del informe pericial?

De conformidad con el del artículo 224 inciso final del COGEP, las conclusiones de los informes periciales y la exposición de los peritos en la audiencia de juicio deben ser claras y precisas.

Conc. Art. 224 inciso final COGEP

160. ¿Cuándo la o el juzgador puede ordenar una inspección judicial de oficio?

De conformidad con el artículo 229 del COGEP, por regla general las partes podrán solicitar que la o el juzgador examine directamente lugares cosas o documentos para lo cual deberá expresar o señalar los motivos por lo que es necesario la intervención directa de la o el juzgador.

De conformidad con el artículo 228 del COGEP, excepcionalmente la o el juzgador puede hacerlo de oficio cuando lo considere conveniente o necesario.

Conc. Arts. 168 CRE; 229, 228, 168 COGEP

161. ¿En qué caso, al realizar una inspección judicial, puede disponerse un peritaje?

De acuerdo a la parte final del inciso 2 del artículo 229 del COGEP, la o el juzgador, al momento de realizar una inspección judicial puede excepcionalmente nombrar un perito, cuando su percepción sensorial no sea suficiente para obtener una conclusión precisa en relación con el objeto de la diligencia.

Conc. Arts. 228, 229, inciso 2 COGEP

Sección VII De la sentencia

162. ¿Qué es la sentencia y cuáles son sus requisitos formales?

El diccionario de la Real Academia dispone que la sentencia es toda declaración del juicio y resolución del juez. En lenguaje jurídico doctri-

nariamente se ha entendido que la sentencia es el modo normal de extinción del proceso o el acto procesal, emanado de los órganos que tienen jurisdicción y competencia encaminado a decidir una causa o punto sometido a su conocimiento.

La característica fundamental de la sentencia, es que una vez proferida, notificada y en firme adquiere el valor de cosa juzgada siempre que no exista recurso ulterior o que haya sido dictada en definitiva instancia, lo que significa que la declaración que contiene se transforma en inmovible.

En tal virtud el COGEP en los artículos 89 y 90 establece cuales son los requisitos materiales y formales de la sentencia, en cuanto al requisito material el artículo 89 determina que toda sentencia o resolución judicial debe estar motivada so pena de nulidad. La motivación implica la justificación racional de la decisión en base a las normas y principios jurídicos en los que se funda y su aplicación pertinente a los hechos del litigio, lo cual comprende expresar los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la valoración de las pruebas y a la aplicación del derecho.

Adicionalmente el artículo 92 del COGEP, dispone que las sentencias deben ser claras precisas y congruentes con los puntos materia del litigio y deberán resolver todas las pretensiones.

En cuanto a los requisitos formales, el artículo 90 establece que la sentencia debe contener por lo menos:

1. La mención de la o el juzgador que la profiere;
2. La fecha y el lugar de su emisión;
3. La identificación de las partes;

4. La enunciación de los hechos relevantes de caso;
5. Las consideraciones jurídicas y la justificación de la decisión;
6. La decisión adoptada; y,
7. La firma de responsabilidad de la o el juzgador

Conc. Arts. 88 a 95 COGEP

163. ¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento de los requisitos de la sentencia?

De conformidad con el artículo 89 del COGEP, el no cumplimiento de los requisitos de fondo genera la inexistencia-nulidad absoluta de la sentencia (aunque esto requiere una declaración del juez superior), mientras que, el no cumplimiento de los requisitos de forma genera la anulabilidad de la misma.

Conc. Arts. 89, 90 y 95 COGEP

164. ¿Ante quién debe interponerse la demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada?

La demanda se planteará ante la o el juzgador de primera instancia competente de la materia objeto de la demanda inicial. En ningún caso puede conocer el mismo juzgador que dictó la sentencia.

Conc. Art. 112 COGEP

165. ¿Cuándo se puede alterar el principio de cosa juzgada?

La alteración de los efectos de cosa juzgada de una sentencia solo se pueden producir una vez el superior del juez que proferió la sentencia

declare la nulidad de la sentencia. Esto es posible debido a la distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material.

Doctrinariamente la cosa juzgada formal es sinónimo de preclusión lo cual quiere decir que las partes no pueden atacar o impugnar las decisiones del juzgador y que ésta sentencia tiene consecuencias en relación con el proceso que ha sido emitida.

Por el contrario la cosa juzgada material se refiere a la inatacabilidad de los efectos de la sentencia en un segundo juicio, en tanto que esta sentencia ha resuelto cuestiones sustanciales.

En definitiva, el efecto de cosa juzgada se puede variar cuando se trate de cosa juzgada formal, no así cuando se trate de cosa juzgada material.

Conc. Art. 95 COGEP

166. ¿Cuáles son los requisitos formales de la sentencia de expropiación?

Según lo dispone al artículo 96 del COGEP, además de los requisitos generales de toda sentencia, las sentencias de expropiación deberán contener:

1. La fijación de los linderos del bien expropiado y su precio;
2. La determinación de la parte del precio que debe entregarse al acreedor si es que existe algún gravamen sobre el bien;
3. La determinación de la indemnización que debe pagar al arrendatario por concepto de arrendamiento;

4. La cancelación del embargo; y,
5. La procedencia o no de indemnizaciones e interese y costas.

Conc. Arts. 90, 95 y 96 COGEP

167. ¿Cuál es el límite de la facultad de la o el juzgador para corregir las omisiones o errores de derecho de las partes?

En virtud del artículo 426 de la Constitución y 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, la o el juzgador tiene la obligación de aplicar el derecho aun cuando las partes no lo invoquen o lo hayan invocado erróneamente. En aplicación de este principio, la o el juzgador no podrá fundar su decisión en diferentes hechos o conceder diferentes pretensiones.

Conc. Arts. 91 COGEP, 426 CRE y 140 COFJ.

Sección VIII

Otras formas de terminación del proceso

168. ¿Cuáles son las formas extraordinarias de conclusión del proceso?

De conformidad con los artículos 223 a 249 del COGEP, aparte de la sentencia que es la providencia mediante la cual ordinariamente termina cualquier proceso judicial, el legislador ecuatoriano ha incorporado las siguientes formas extraordinarias de terminación del proceso: La conciliación; la transacción; el retiro de la demanda; el desistimiento; el allanamiento y el abandono.

La conciliación o mediación es un mecanismo alternativo y pacífico de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda del juez o de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador o mediador.

Por su parte, la transacción es un contrato a través del cual las partes deciden terminar un proceso o evitar que un conflicto se convierta en un litigio futuro. Como todo contrato para celebrar la transacción se requiere ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, en este caso las partes deben ser capaces de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Cabe aclarar que en la legislación ecuatoriana, hay materias que son intransigibles entre ellas se destaca el estado civil de las personas.

El desistimiento a su vez, es una forma de terminación anormal de un proceso por el que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que la basaba, es decir, que tiene la posibilidad de poder plantear la misma litis posteriormente.

Mientras tanto el allanamiento sería otra forma extraordinaria de terminación del proceso en virtud de la cual el demandado reconoce total o parcialmente las pretensiones del actor. El allanamiento es total cuando admite todas las pretensiones del demandante, y parcial, cuando reconoce sólo una parte de las pretensiones del actor.

El abandono es un mecanismo procesal que permite extinguir la litis en el estado en que se encuentre. Este mecanismo opera de oficio o a petición de parte por inactividad de las partes y de la o el juzgador dentro de los plazos establecidos en la ley y su efecto es que pone fin al proceso sin afectar la pretensión.

Finalmente el COGEP incorpora una nueva forma de terminación extraordinaria del proceso, el retiro de la demanda que consiste en la

facultad que tiene el actor de retirar el escrito de la demanda antes de que esta haya sido comunicada al demandado, de acuerdo con el artículo 236 del COGEP presentada esta solicitud la o el juzgador ordenará su archivo.

Arts. 233, 235, 236, 237, 241 y 245 COGEP

169. ¿Hasta qué momento se puede conciliar?

De conformidad con lo establecido en el artículo 233 inciso 1 del COGEP, las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso, incluso en la etapa de cumplimiento de la sentencia.

Conc. Art. 233 inciso 1 COGEP

170. ¿Cuándo procede la conciliación?

De acuerdo con el artículo 233 del COGEP, la conciliación procede en cualquier estado del proceso, inclusive en la fase de ejecución.

Conc. Art. 233 COGEP

171. ¿Qué principios rigen la conciliación?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 233 inciso final del COGEP, la conciliación para ser válida debe ser voluntaria, confidencial y flexible; el mediador o conciliador a su vez debe garantizar la neutralidad, imparcialidad y equidad de la solución propuesta y a su vez debe certificar la legalidad y honestidad del acuerdo conciliatorio.

Conc. Art. 233, inciso final COGEP

172. ¿Qué efecto produce el retiro de la demanda?

De conformidad con la parte final del artículo 236 del COGEP, el retiro de la demanda vuelve las cosas al estado en que tenían antes de haberlo propuesto, pudiendo la parte actora ejercer una nueva acción en cualquier momento posterior sin que se pueda presentar la excepción de cosa juzgada.

Conc. Art. 236, parte final COGEP

173. ¿Hasta qué momento se puede retirar la demanda?

Según el COGEP, el actor puede retirar la demanda antes de que se haya realizado la citación a la o el demandado, pudiendo volver a presentarla en cualquier momento porque no se trata de un desistimiento.

Conc. Arts. 53-64, 236, 237-240 COGEP

174. ¿Hasta qué momento procesal procede el desistimiento?

De acuerdo con el artículo 237 del COGEP, la o el actor puede desistir de su pretensión en cualquier momento hasta antes de que la o el juzgador profiera la sentencia de primera instancia.

Conc. Art. 237 COGEP

175. ¿Cuál es el efecto del desistimiento de la pretensión?

En virtud de lo dispuesto en la parte final del artículo 237 del COGEP, el actor que desiste de su pretensión no podrá presentar nuevamente su demanda.

Conc. Art. 237 COGEP

176. ¿Hasta qué momento se puede desistir de un recurso?

Acorde con lo establecido en el artículo 238 del COGEP, el desistimiento del recurso se puede proponer desde el momento en que se propuso, mientras no se haya pronunciado sentencia definitiva por parte de la o el juzgador.

Conc. Art. 238 COGEP

177. ¿Qué diferencia existe en el efecto del desistimiento de la demanda y del recurso?

El desistimiento de la demanda puede proponerse hasta antes de dictarse sentencia de primera instancia (Art. 237), lo que impide la interposición de una nueva demanda; por el contrario, el desistimiento del recurso o instancia produce la ejecutoria de la sentencia impugnada, salvo el caso de impugnación de la otra parte.

Conc. Art. 238 COGEP

178. ¿Cómo procede el allanamiento en caso de varias o varios demandados?

De acuerdo con artículo 241 el inciso 2 del COGEP, en la eventualidad que se produzca un allanamiento múltiple, esto es, por parte de varios demandados este tendrá los siguientes efectos:

Si se trata del allanamiento sobre una obligación común divisible, esta no afectará a las otras partes y el proceso continuará respecto de quienes no se allanaron. Por su parte, si la obligación es indivisible, el allanamiento tiene que provenir de todos los demandados.

Conc. Art. 241, inciso 2 COGEP

179. ¿Cuándo no podrá aceptarse el allanamiento?

Según lo establece el artículo 242 del COGEP, el allanamiento será ineficaz y por lo tanto la o el juzgador no lo podrá avalar en los siguientes casos:

Cuando el demandado sea incapaz; cuando el allanamiento verse sobre un derecho indisponible; cuando los hechos admitidos no puedan probarse por medio de declaración de parte y cuando la sentencia deba producir efecto de cosa juzgada, respecto de terceros esto es inter pares e inter comunis.

Conc. Art. 242, parte final COGEP

180. ¿Qué requisito se requiere para la validez del allanamiento de las instituciones del Estado?

De conformidad con el artículo 243 del COGEP, para que el allanamiento de una persona jurídica pública sea válido, requiere la autorización expresa del Procurador General del Estado.

Conc. Art. 243 COGEP

181. ¿Cómo debe aprobarse el allanamiento?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 244 del COGEP, la prueba del allanamiento dentro del proceso, se hace con la copia certificada de la sentencia ejecutoriada.

Conc. Art. 244 COGEP

182. ¿En qué circunstancias procede el abandono?

De conformidad con lo establecido en el artículo 245 del COGEP, la o el juzgador declarará el abandono del proceso en cualquier instancia y en casación cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan dejado de impulsar el proceso y cesado de realizar actos procesales por un término de ochenta días.

Conc. Art. 245 COGEP

183. ¿Por qué motivo se puede impugnar la declaración de abandono?

De acuerdo con el inciso final del artículo 248 del COGEP, la declaración del abandono solo se puede impugnar cuando haya un error de cómputo.

La impugnación del abandono comprende tanto recursos horizontales como verticales.

Conc. Art. 245, 246, 248, inciso 2, 250 COGEP

184. ¿Cómo se hace el cómputo para declarar el abandono?

De acuerdo con el artículo 246 del COGEP, el término para declarar el abandono del proceso contará desde el día siguiente de la notificación de la última providencia dictada o si es el caso, desde el día siguiente al de la última actuación procesal.

Conc. Art. 246 COGEP

185. ¿A quién puede imponerse el pago de costas procesales?

De acuerdo con el artículo 284 del COGEP, la o el juzgador puede imponer el pago de costas procesales en los siguientes casos:

1. Cuando la parte ejerce su derecho de acción de forma abusiva, maliciosa o temeraria; y,
2. Cuando el litigante viole el principio de lealtad procesal.

Conc. Art. 284 COGEP

186. ¿En qué momento procesal puede ordenar la o el juzgador el pago de costas?

De conformidad con la parte final de inciso primero del artículo 284 del COGEP, de ser procedente, la o el juzgador deberá debe determinar el pago de las costas al momento de dictar la sentencia o auto interlocutorio que ponga fin al proceso.

Conc. Art. 284 COGEP

187. ¿Podrá ser condenado en costas el Estado?

De acuerdo con el inciso final del artículo 284 del COGEP, el Estado no podrá ser condenado en costas, pero en su lugar podrá ser condenado a pagarlas quien ejerza su defensa.

Conc. Art. 284, inciso 2 COGEP

188. ¿Cómo debe calcularse las costas relativas a los gastos del Estado?

De acuerdo con la regla establecida en el artículo 284 el condenado en costas deberá pagarlas tanto a la contraparte como al Estado.

En este último caso, el artículo 285 del COGEP determina que la fijación del monto relativo a las costas procesales que correspondan al Estado será fijado mediante resolución general y abstracta por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y deberán contemplar entre otros gastos la cuantificación de los honorarios del defensor o defensora de la contraparte el pago de los peritos y el valor de las publicaciones y copias que debieron ordenarse.

Conc. Art. 285 COGEP

The image features a vibrant red background with a complex geometric pattern of overlapping triangles and lines. In the center, a large white circle is framed by a thick red border. Inside this circle, the text is centered and reads:

Cuarta parte
El derecho a recurrir
y la impugnación

Cuarta parte

El derecho a recurrir y la impugnación

189. ¿Pueden deducirse recursos subsidiarios?

De conformidad con el artículo 252 del COGEP, en el ordenamiento procesal ecuatoriano, por regla general, está prohibido interponer recursos horizontales y verticales de manera subsidiaria o sucesiva. Esta regla solo tiene una excepción y es el caso de los recursos de aclaración y ampliación.

Conc. Art. 252 COGEP

190. ¿En qué casos se puede apelar?

Como bien dice Enrique Véscovi, la naturaleza humana tiende a rechazar lo que va en contra a sus intereses, atendiendo a esa condición humana, tanto el derecho comparado como los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporan el derecho a recurrir como un elemento fundamental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.

El ordenamiento constitucional ecuatoriano incorpora el derecho a recurrir, cuya manifestación más importante es el principio de la doble instancia, también conocido en materia penal como doble conforme, que se materializa en el recurso de apelación. Históricamente, el legislador había establecido una regla general según la cual, desde la época del Código de Enjuiciamiento Civiles de 1869 hasta el Código de Procedimiento Civil de 2005, existía la posibilidad de apelar cualquier

sentencia o auto definitivo y cualquier otra decisión judicial que no estuviera prohibida expresamente.

En el COGEP esta regla ha cambiado de tal suerte que, de conformidad con el artículo 256 del COGEP los recursos proceden contra autos interlocutorios dictados en primera instancia y contra los que la ley conceda este recurso. El legislador ha invertido la regla de tal suerte que, donde antes había denegación expresa, hoy hay concesión expresa.

Otra regla general en relación con el recurso es que antes era de carácter formal y escrito, mientras que hoy en día el COGEP ha incorporado el principio de oralidad también en materia del recurso de apelación, por lo tanto se interpondrá en la audiencia correspondiente sin perjuicio de que la fundamentación siga siendo escrita el artículo 257 del COGEP.

De acuerdo con este principio de autorización expresa del legislador solo procede el recurso de apelación en los siguientes casos:

1. La decisión que ordena la práctica de una diligencia preparatoria es apelable con efecto diferido. También es apelable la decisión que niega la práctica de una diligencia preparatoria, en este caso con efecto suspensivo. Art. 121 incisos 3 y 4 COGEP;
2. Las providencias preventivas son apelables en efecto “no suspensivo” (lo que en la doctrina generalmente se conoce como efecto devolutivo). Art. 132 COGEP. Ver. p. 528 Devis Echandía, *Nociones Generales de Derecho Procesal Civil* (Madrid, 1966). ;
3. El auto que inadmite la demanda es apelable en el efecto suspensivo. Conc. Art. 147 y 259 COGEP;
4. La decisión de no admitir la prueba es apelable en el efecto diferido. Art. 160 inciso final COGEP;

5. El auto que declara el abandono es apelable en efecto suspensivo. Art. 248 inciso final COGEP;
6. La resolución que condene en costas, es apelable con el efecto suspensivo. Art. 264 y 288 incisos 1 y 2 COGEP;
7. En el caso de las y los jueces estos pueden apelar la decisión que los condene en costas o que les establece multas en el efecto suspensivo. Art. 288 COGEP;
8. El auto que rechace las excepciones previas, es apelable con efecto diferido d. Art. 296 inciso 1 COGEP;
9. El auto que acoge las excepciones previas o pone fin al proceso, es apelable con efecto suspensivo. Art. 296 inciso 2 COGEP;
10. Todas las decisiones tomadas en el procedimiento sumario serán apelables en el efecto suspensivo; a excepción de aquellas tomadas en los procesos de alimentos, tenencia, visitas y patria potestad en materia de familia y despojo violento y posesorio en materia civil que son apelables en efecto no suspensivo (generalmente conocido como devolutivo). Art. 333 numeral 6 COGEP. Extrañamente el COGEP niega la posibilidad de apelación de la sentencia dictada en las controversias entre el abogado y su cliente (juicio por honorarios);
11. En los asuntos de jurisdicción voluntaria; la providencia que inadmite la solicitud de admisión (auto de inadmisión) y la resolución que la niega (decisión final) son apelables en efecto suspensivo. Conc. art. 337;
12. La sentencia dictada en el procedimiento ejecutivo será apelable en el efecto no suspensivo generalmente conocido como devolutivo. Art. 354 inciso 3 COGEP;
13. La sentencia dictada en el procedimiento monitorio es apelable en el efecto suspensivo. Artículo 359 parte final COGEP;

14. El auto de calificación de posturas y el de adjudicación que se dan dentro del remate de bienes, son apelables en efecto suspensivo Art. 402 y 413 COGEP;
15. El auto que declara el concurso de acreedores o la quiebra será apelable en el efecto no suspensivo (conocido como devolutivo). Art. 424 inciso final;
16. El auto que decide sobre la oposición de los acreedores en el concurso voluntario será apelable en el efecto no suspensivo bien conocido como devolutivo. Art. 425 COGEP;
17. El auto que resuelve sobre la oposición al acuerdo concordatario, será apelable en el efecto no suspensivo bien conocido como devolutivo. Art. 427 COGEP;
18. El acreedor ausente o aquel que se haya abstenido de votar podrá apelar la decisión de la junta de acreedores en que se aprueba el concordato, esto en el efecto no suspensivo conocido como devolutivo. Art. 428 COGEP; y,
19. La resolución sobre la prelación de créditos en el concurso de acreedores, será apelable en el efecto no suspensivo, es decir devolutivo. Art. 437 COGEP.

Volviendo a la regla del Código de Procedimiento Civil, el legislador olvidándose de su regla sobre la procedencia expresa del recurso de apelación, ha establecido dos casos de improcedencia expresa del recurso de apelación se trata de:

1. La decisión que ordena la acumulación de procesos. Art. 20 COGEP; y,
2. En el proceso ejecutivo, no será apelable la sentencia dictada por el juzgador en los casos en que el deudor no haya contestado la demanda ni haya formulado excepciones o haya formulado excepciones prohibidas. Art. 352 COGEP, conc. 153 y 453.

191. ¿La resolución que declara la acumulación de procesos es apelable?

Según dispone el artículo 20 del COGEP, la resolución que declara la acumulación de procesos no es apelable por las siguientes razones:

- a) Porque no causa lo que en la doctrina se denomina gravamen irreparable en definitiva;
- b) Porque de concederse se iría contra de la función saneadora que tiene la audiencia preliminar; y,
- c) Porque no pone fin al proceso.

Conc. Art. 20 COGEP.

192. ¿Contra qué tipo de sentencias cabe la consulta obligatoria?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 256 inciso 2 del COGEP, aunque las partes no recurran, procede una consulta obligatoria ante el superior cuando se trate de sentencias o autos interlocutorios emitidos por los Jueces de lo Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario en primera instancia.

Conc. Art. 256, inciso 2 COGEP

193. ¿Cómo se resuelve el recurso de apelación?

De acuerdo con el artículo 260 del COGEP, una vez recibido el expediente, por regla general el tribunal provincial convocará a audiencia en el término de quince días, excepcionalmente este término se reduce a diez días cuando se trate de asuntos de niñez y adolescencia.

Conc. Art. 260 COGEP

194. ¿En qué casos se puede condenar en costas a la o el juzgador?

De acuerdo con el artículo 287 del COGEP, existe un solo caso en que se puede condenar en costas a la o el juzgador; esto es, cuando debiendo declarar la nulidad no la declare. En este caso la o el juzgador deberá pagar las costas ocasionadas desde que pronunció el auto o sentencia en que debió declarar la nulidad del proceso.

En este caso, la o el juzgador puede interponer el recurso de apelación ante el superior. Como la condena en costas solamente la puede dictar un juez de segunda instancia, el competente para conocer la apelación será la Corte Nacional de Justicia.

Conc. Art. 287, 288 inciso 2 COGEP

195. ¿Cuál es la oportunidad procesal para solicitar la nulidad de un auto o sentencia por falta de motivación?

La declaratoria de la nulidad por falta de motivación solo podrá ser alegada al momento de fundamentar el recurso de apelación o como causal del recurso de casación.

Conc. Arts. 89 y 268 numeral 2 COGEP.

196. ¿En qué consiste el recurso con efecto suspensivo?

Un recurso concedido con efecto suspensivo implica que una vez concedido el recurso se interrumpe la sustanciación del proceso hasta que la o el juzgador resuelva sobre la impugnación propuesta por el apelante.

Conc. Art. 261 numeral 2 COGEP

197. ¿Contra qué decisiones procede el recurso de casación?

De acuerdo con el artículo 266 del COGEP, el recurso de casación procederá contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia, así como por los Tribunales Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario.

Conc. Art. 266 COGEP

198. ¿Bajo qué circunstancias procede el recurso de casación en la fase de ejecución?

Según lo establece el artículo 266 inciso 2 del COGEP, el recurso de casación procede también frente a los autos definitivos expedidos en la fase de ejecución; siempre y cuando estas providencias resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el proceso ni decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.

Conc. Art. 266, inciso 2 COGEP

199. ¿Cuál es el término para interponer el recurso de casación?

De acuerdo con el artículo 266 inciso final del COGEP, el recurrente en casación tendrá el termino de diez días, contados desde la ejecutoria del auto o sentencia recurrida en casación o del auto que niegue o acepte su aclaración o ampliación.

Conc. Art. 266, inciso final COGEP

200. ¿El tribunal de la Corte Provincial del que provenga la sentencia o auto recurrido debe calificar todos los requisitos del recurso de casación?

De conformidad con el artículo 269 del COGEP, el recurso de casación se presenta ante la Sala de la Corte Provincial de Justicia en el que se haya originado la sentencia o auto recurrido, por esta razón dicha sala no califica la procedencia del recurso sino que se limita a establecer si esta ha sido presentado en el término previsto en el artículo 266 del COGEP.

Conc. Art. 269, inciso 2 COGEP

201. ¿En qué efectos se concede el recurso casación?

Según con lo establecido en el artículo 269 inciso 3 del COGEP, el recurso de casación se concede en el efecto devolutivo. En tal virtud, presentado el recurso el tribunal provincial de origen de la sentencia o auto recurrido dispondrá la ejecución de la sentencia, lo que incluye la adopción de las medidas necesarias para alcanzar la reparación integral e inmediata de los derechos lesionados.

Conc. Art. 269, inciso 3 COGEP

202. ¿En qué casos puede suspenderse la ejecución de la sentencia por interposición del recurso de casación?

De acuerdo con el artículo 271 del COGEP, excepcionalmente el recurrente podrá solicitar al momento de la interposición del recurso de casación, la suspensión de la sentencia o auto recurrido; para lo cual deberá rendir caución suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que eventualmente se puedan causar a la otra parte derivados de la no ejecución inmediata de la sentencia.

En este caso será el tribunal provincial el que establecerá el monto de la caución.

Conc. Art. 271 COGEP

203. ¿Dentro de qué tiempo debe convocarse la audiencia para resolver el recurso de casación?

Según lo dispone el artículo 272 del COGEP, la o el juzgador de casación deberá convocar una audiencia en el plazo máximo de treinta días contados desde la fecha de recepción del expediente.

Conc. Art. 272 COGEP

204. ¿Cuáles son los efectos si se ha ejecutado parcial o totalmente el fallo casado?

Conforme con lo estipulado en el artículo 273 numeral 5 del COGEP, si se casa la sentencia y el procedimiento de ejecución no ha terminado la o el juzgador de casación ordenará en la sentencia dejar sin efecto el procedimiento de ejecución.

En el caso de que la sentencia de instancia haya sido totalmente ejecutada al momento de casarse la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 del COGEP, el juez de casación en la misma sentencia ordenará la o el juzgador de primera instancia dejar sin efecto aquello que se pueda volver al estado anterior a la ejecución y de ser esto imposible deberá disponer la liquidación de los daños y perjuicios causados; debiendo dejar a salvo los derechos de terceros de buena fe.

Conc. Art. 273 numeral 5 y 276 COGEP

205. ¿Quién puede interponer recurso de casación?

De acuerdo con la redacción del artículo 277 del COGEP, el recurso de casación solo podrá interponerse por quien recibió un perjuicio de la sentencia o auto que va ser objeto del recurso de casación.

Conc. Art. 277 COGEP

206. ¿Quién y bajo qué circunstancias no podrá interponer el recurso de casación?

Según el artículo 277 del COGEP, no podrá interponer el recurso de casación quien haya dejado de apelar la sentencia o auto expedido en primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte cuando la resolución de la o del superior haya sido totalmente confirmatoria de aquella.

Es importante resaltar que de acuerdo con el inciso final del artículo 277 del COGEP, no es posible la adhesión a un recurso de casación presentado por la otra parte y por lo tanto quien quiera cazar una sentencia o auto debe hacerlo mediante recurso separado.

Conc. Art. 277 apartado final COGEP

207. ¿Cuándo se puede suspender la ejecución de la decisión en contra de la cual se ha interpuesto recurso de casación?

De conformidad con lo que establece el artículo 271 del COGEP, por regla general para poder solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia sobre la que se ha interpuesto recurso de casación, se requiere rendir caución. Sin embargo, según el artículo 274 esta regla no se aplica cuando sea el Estado el que interponga el recurso de casación y

solicita la suspensión de la ejecución; o cuando se trate a las decisiones que versen sobre el estado civil de las personas.

Conc. Arts. 271, 274, 289, 332 incisos 4 y 7, 334 numeral 3 COGEP

208. ¿Pueden interponerse los recursos de casación y de hecho respecto de una sentencia que resuelve la homologación de una resolución expedida en el extranjero?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 266 del COGEP, solo cabe recurso de casación respecto de los juicios de conocimiento. El recurso de hecho por su parte no procede cuando la ley niega expresamente la posibilidad del recurso de casación.

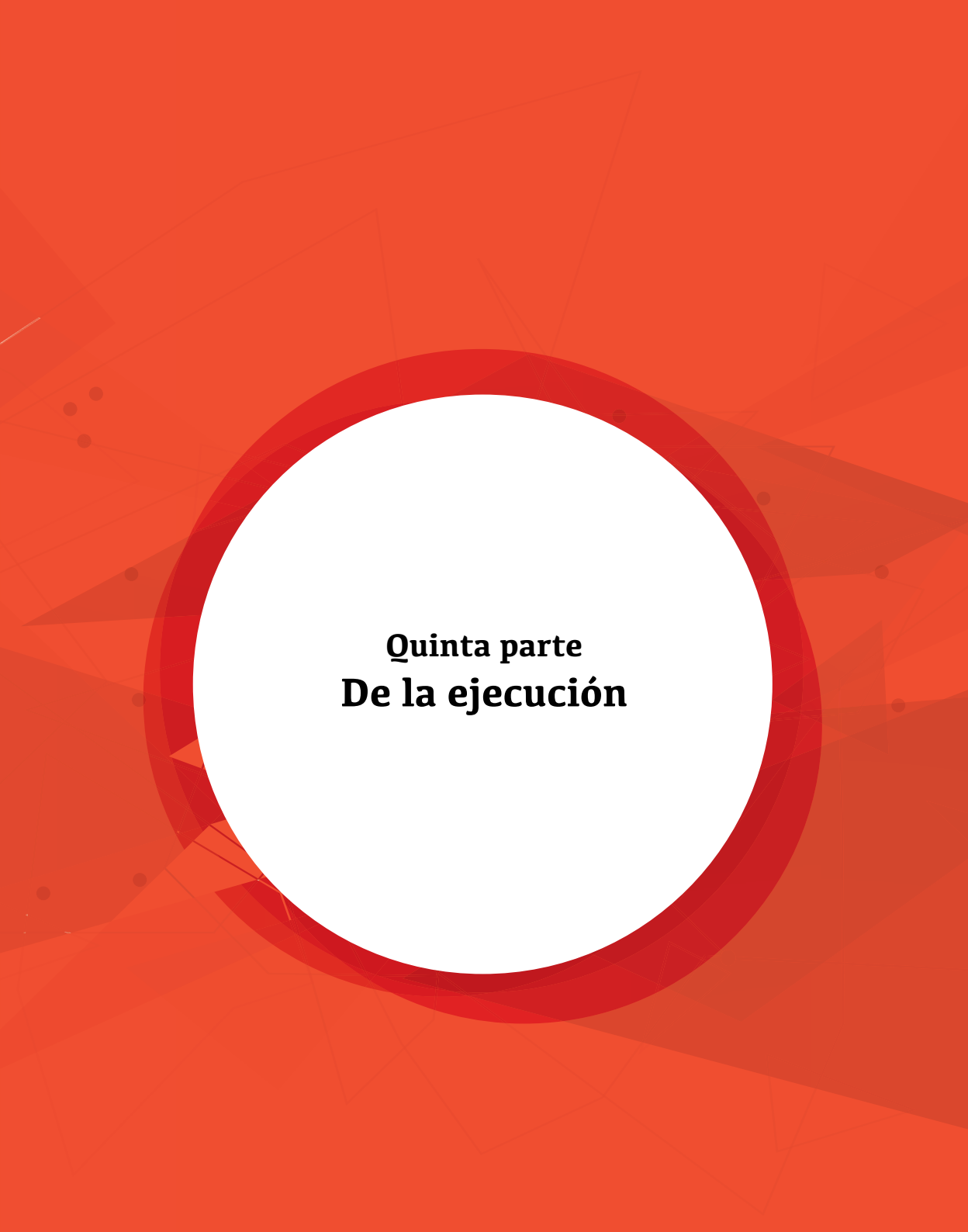
Los juicios de homologación de sentencias extranjeras son de ejecución, por lo tanto, no cabe recurso de casación, ni de hecho.

Conc. Arts. 105, inciso 3, 266 y 279 numeral 1 COGEP, Art. 2 LC

209. ¿Cuál es la finalidad del recurso de hecho?

El artículo 278 del COGEP en armonía con la doctrina procesal más consolidada determina que el recurso de hecho procede contra los autos que niegan el recurso de apelación o casación, para que la o el juzgador competente confirme o revoque esta decisión.

Conc. Art. 278 COGEP



Quinta parte
De la ejecución

Quinta parte

De la ejecución

210. ¿En qué consiste la fase de ejecución?

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 del COGEP, la fase de ejecución consiste en la realización o aplicación concreta de lo decidido por el juzgador, para lo cual deberá adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la sentencia.

Conc. Art. 362 COGEP

211. ¿Qué facultades tiene la o el juzgador en fase de ejecución?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 365 del COGEP, la o el juzgador en la fase de ejecución deberá prestar al acreedor ejecutante todo el apoyo y las facilidades para lograr el pago efectivo de la obligación; incluyendo la facultad de acceder de oficio a los registros públicos de datos de la o el ejecutado, con el propósito de recolectar información relacionada con sus bienes.

Conc. Art. 365 COGEP

212. ¿Cuáles son los documentos o títulos que hacen posible la ejecución?

Según lo establecido en el artículo 363 del COGEP, se podrá iniciar la ejecución y de esta forma hacer cumplir las obligaciones contenidas en el título, cuando el deudor tenga uno de los siguientes documentos (títulos de ejecución):

- a) La sentencia ejecutoriada;
- b) El laudo arbitral;
- c) El acta de mediación;
- d) El contrato prendario y de reserva de dominio;
- e) Las actas transaccionales;
- f) La sentencia, el laudo arbitral, o el acta de mediación extranjero previamente homologados; y,
- g) Los demás que establezca la ley.

Conc. Art. 363 COGEP

213. ¿Cómo se inicia la ejecución?

De acuerdo con lo establecido en los artículos 370 y 371 del COGEP, la fase de ejecución puede comenzar de dos maneras:

1. Si se trata de la ejecución de un título que no sea sentencia ejecutoriada se deberá presentar una solicitud que contenga la identificación del título habilitante que sirve para realizar la ejecución; y,
2. Si se trata de la ejecución de una sentencia ejecutoriada la o el juzgador ordenará automáticamente la liquidación para lo cual designará un perito que liquide el capital los intereses y las costas una vez que el ejecutante presente las cuentas de gastos.

Conc. Art. 371 COGEP

214. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia de ejecución?

De conformidad con el artículo 392 del COGEP, en la fase de ejecución la o el juzgador deberá ordenar la realización de una audiencia. Su

objeto o finalidad será: Resolver la oposición de la parte ejecutada; aprobar acuerdos; conocer las observaciones que hayan hecho las partes al informe pericial; señalar de entre los bienes embargados los que deben ser objeto de remate; y, resolver la admisibilidad de tercerías.

Conc. Art. 392 COGEP

215. ¿Qué sucede en caso de inasistencia de alguna de las partes a la audiencia de ejecución?

De acuerdo con el artículo 393 del COGEP, si una de las partes no asiste a la audiencia de ejecución, la o el juzgador debe señalar por una sola vez nuevo día y hora para dicha audiencia. En la segunda convocatoria la audiencia se realizará con las partes que concurren. Si no concurre ninguna de las partes, el procedimiento continuará únicamente a petición de parte que justifique su inasistencia.

Conc. Art. 393 COGEP

216. ¿Qué debe resolver y ordenar la o el juzgador si a la audiencia de ejecución comparece un tercero con tercería de dominio fundada en título inscrito?

De conformidad con el artículo 394 del COGEP, la o el juzgador debe resolver sobre la admisibilidad de la tercería y de creerla justificada, ordenará que se mantenga el embargo del bien hasta que se resuelva la tercería en el procedimiento ordinario.

Conc. Art. 394 COGEP

217. ¿Qué se necesita para que la o el juzgador dentro de un procedimiento ejecutivo decrete la suspensión de la ejecución de la sentencia?

De conformidad con lo establecido en el artículo 354 inciso 3 del COGEP, cuando el deudor pretenda suspender la ejecución de la sentencia ejecutiva deberá consignar el monto total de la obligación o caucionar el valor de la misma.

Conc. Art. 354 inciso 3 COGEP

218. ¿En qué término debe hacerse la entrega de obligaciones de dar especie o cuerpo cierto?

Según lo dispone el artículo 366 del COGEP, cuando el cumplimiento de la obligación implique dar una cosa o cuerpo cierto y esta se encuentra en poder de la o el deudor en el mandamiento de ejecución la o el juzgador ordenará la entrega de la cosa al deudor en un término máximo de cinco días contados desde la fecha de la notificación del mandamiento de pago.

Conc. Art. 366. COGEP

219. ¿Que debe ordenar la o el juzgador en caso de imposibilidad legal o material de entregar la especie o cuerpo cierto?

De conformidad con el artículo 366 numeral 2 COGEP, si existe la imposibilidad legal o material de entregar la cosa debida al acreedor, la o el juzgador deberá ordenar la consignación del valor o precio de reposición de la cosa a la fecha en que se dicte la orden.

Conc. Arts. 314, 331, 366, 368 COGEP

220. ¿Si se trata de la entrega material de un bien inmueble, qué debe ordenar la o el juzgador?

De conformidad con el artículo 366 inciso final del COGEP, cuando el cumplimiento de la obligación implique la entrega de un bien inmueble la o el juzgador dispondrá que la o el deudor desocupe y ponga a disposición del acreedor el inmueble.

Si no lo hace la fuerza pública por disposición de la o el juzgador desalojará al deudor y entregará el bien al acreedor.

Conc. Art. 366, inciso final COGEP

221. ¿Para el cumplimiento de obligaciones de hacer que debe disponer la o el juzgador?

De conformidad con el artículo 368 del COGEP, si la obligación debida consiste en hacer alguna cosa la o el juzgador ordenará a la o el deudor hacerlo dentro de un plazo razonable.

Si el deudor no lo hace en este plazo o se niega a hacerlo la o el juzgador ordenará a un tercero designado por el acreedor realizar la prestación a costa del ejecutado.

Conc. Art. 368 COGEP

222. ¿Que debe ordenar la o el juzgador si se trata de obligaciones de no hacer y ya se han efectuado?

De conformidad con el artículo 369 COGEP, en el caso de que la obligación sea de no hacer y esta haya sido incumplida la o el juzgador ordenará la reposición de la cosa al estado anterior y que la o el deudor

deshaga lo hecho en un término razonablemente corto establecido por la o el juzgador.

En este caso la o el juzgador ordenará el pago de daños y perjuicios a la o el acreedor. El monto de la indemnización será fijada por la o el juzgador en la audiencia.

Conc. Art. 369 COGEP

223. ¿Cómo se realiza la liquidación en los procesos laborales?

Según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 371 del COGEP, en los procesos laborales la o el juzgador tiene la obligación de determinar el monto de las indemnizaciones que el empleador deberá pagar al trabajador, en la propia sentencia sin que sea necesaria realizar una fase de liquidación.

Conc. Art. 371, inciso 2 COGEP

224. ¿Como se debe oponer la o el deudor, al mandamiento de ejecución?

De acuerdo con el artículo 373 del COGEP, para que una oposición al mandamiento de ejecución pueda prosperar, debe estar fundada en una de las siguientes causales:

- a) pago;
- b) dación de pago;
- c) transacción;
- d) remisión;

- f) confusión
- g) compensación; y,
- h) pérdida de cosa o destrucción del bien debido.

Estos causales deberán estar debidamente probados.

Conc. Art. 373 COGEP

225. ¿Cómo debe procederse para el caso de pérdida o destrucción de la cosa debida?

De conformidad con lo establecido en el artículo 373 inciso 3 del COGEP, en caso de que sea imposible la devolución de la cosa debida por pérdida o destrucción no imputable al ejecutado, éste debe demostrar el caso fortuito o la fuerza mayor; o de lo contrario pagar la indemnización de perjuicios correspondiente por la pérdida de la cosa.

Conc. Art. 373, inciso 3 COGEP

226. ¿Qué trámite debe darse si la fórmula de pago es aceptada parcialmente?

De conformidad con el artículo 374 del COGEP, la o el juzgador ordenará la continuación de la audiencia, únicamente respecto de la parte no acordada.

Conc. Art. 374 COGEP

227. ¿Qué sucede si la el ejecutado no cumple la fórmula de pago?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 374 del COGEP, la o el juzgador ordenará la ejecución inmediata de las garantías o el embargo de los bienes dados en garantía real, para de inmediato realizar el avalúo e iniciar el remate.

Conc. Art. 374 COGEP

228. ¿ En la fase de ejecución, cuál es el efecto de las providencias preventivas que se hayan adoptado previamente?

De conformidad con el artículo 376 del COGEP, las providencias preventivas no impiden el embargo ni el remate de los bienes.

Conc. Art. 376 COGEP

229. ¿En qué orden de preferencia debe practicarse el embargo?

De acuerdo con el artículo 377 del COGEP, el embargo se practicará en el siguiente orden de preferencia:

- a) En primer lugar se embargará el dinero de propiedad de la o el deudor;
- b) En segundo término serán embargados los bienes hipotecados, prendados o gravados con otra garantía real;
- c) Inmediatamente después se embargarán los bienes sobre los cuales se ha dictado providencia preventivas; y,
- d) Finalmente se embargarán los bienes que señale la o el acreedor, acompañando prueba de la propiedad de los mismos.

Conc. Art. 377 COGEP

230. ¿De qué forma se practicará el embargo de una unidad productiva?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 383 del COGEP, cuando se trate de embargar una unidad productiva sus activos o sus utilidades presentes o futuras la o el juzgador designará una o un depositario, quien estará a cargo de la gestión del negocio, teniendo la obligación de rendir cuentas.

Conc. Art. 383 COGEP

231. ¿En qué consiste el embargo de bienes inmuebles?

Según lo establecido en el artículo 384 del COGEP, el embargo de bienes inmuebles consistirá en su aprehensión material y su entrega a o un depositario para su custodia.

Conc. Art. 384 COGEP

232. ¿Quién debe ejecutar los embargos?

De conformidad con el artículo 387 del COGEP, la ejecución material del embargo serán ejecutadas por la Policía Nacional a instancias de la o el juzgador para lo cual podrá ingresar a los bienes inmuebles; desalojar personas y bienes que se encuentren en el inmueble; la ruptura de cerraduras y seguridades; la aprehensión material de objetos; y, cualquier otra medida que la o el juzgador considere necesaria para ejecutar el embargo.

Conc. Art. 387 COGEP

233. ¿Desde cuándo surte efecto el embargo respecto de terceros?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 389 del COGEP, el embargo de bienes raíces surtirá efecto respecto de terceros desde la inscripción en el registro de la propiedad. En caso de que los bienes embargados sean susceptibles de registro.

Si se trata del embargo de bienes muebles no susceptibles de inscripción en el registro, el embargo surtirá efecto con relación a terceros desde la suscripción del acta de embargo.

Conc. Art. 389 COGEP

234. ¿Hasta qué momento puede la parte ejecutada hacer cesar el embargo?

Conforme determina el artículo 390 del COGEP, el ejecutado podrá levantar el embargo pagando el valor de la deuda que conste en el mandamiento de ejecución hasta antes del cierre del remate.

Conc. Art. 390 COGEP

235. ¿Cómo se produce la intervención de terceros en la fase de ejecución?

De conformidad con lo establecido en el artículo 394 del COGEP, si en la audiencia de ejecución comparecen terceros que demuestren su derecho frente a la obligación la o el juzgador ordenará cualquiera de las dos alternativas siguientes:

1. Si el derecho del tercero se fundamenta en un título inscrito la o el juzgador ordenará que se mantenga el embargo hasta que se resuelva

la titularidad del dominio en un proceso ordinario dejando a salvo al acreedor para que pida el embargo de otros bienes del ejecutado; y,

2. Si se trata de una tercería coadyuvante, y esta intervención es aceptada, la o el juzgador dispondrá que sus créditos sean considerados en la prelación.

Conc. Art. 394 COGEP

236. ¿Qué procede una vez que se haya obtenido el producto del remate?

Según lo dispuesto en la parte final del artículo 394 del 2 numeral del COGEP, la o el juzgador debe convocar a una audiencia y de haber acuerdo en la forma de distribución del producto del remate, dispondrá que se cumpla lo convenido, caso contrario, se resolverá sumariamente y en cuaderno separado sobre la prelación de créditos.

Conc. Art. 394 numeral 2 COGEP

237. ¿En qué momento se declarará la conclusión de la ejecución y el archivo del proceso?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 395 del COGEP, la o el juzgador una vez que se acredite la extinción de la obligación, podrá declarar la conclusión de la ejecución y el archivo del proceso en cualquier momento antes del remate.

Conc. Art. 395 COGEP

238. ¿Cuál es el procedimiento para efectuarse el remate de bienes embargados?

Conforme dispone el artículo 399 del COGEP, el remate se realizará siguiendo el siguiente procedimiento:

El aviso del remate y la recepción de las ofertas se realizarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura. El aviso del remate será publicado con el término al menos de veinte días de anticipación a la fecha del remate.

Adicionalmente el aviso de remate podrá ser publicado por otros medios siempre que la o el juzgador lo considere conveniente.

Vencido el término del aviso los postores deberán hacer el pago correspondiente equivalente al 10% del valor de la postura; el cual subirá al 15% si se trata de un pago a plazos. Este pago se podrá hacer a través de depósito bancario o transferencia.

Conc. Art. 399 COGEP

239. ¿De qué forma se realizara el remate de los títulos valores y efectos de comercio?

Según lo dispuesto en el artículo 397 del COGEP, cuando se trate de rematar títulos valores y efectos de comercio éstos se venderán por una casa de valores autorizada para operar en el mercado bursátil por la Superintendencia de Compañías.

Conc. Art. 397 COGEP

240. ¿Cómo se efectuará el remate de los bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones embargados?

De conformidad con el artículo 398 del COGEP, los bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura.

Conc. Art. 398 COGEP

241. ¿De qué otra manera se pueden rematar los bienes embargados?

De acuerdo con lo establecido en el inciso final de artículo 398 del COGEP, las partes podrán ponerse de acuerdo para que la venta de los bienes objeto del remate se hagan a través de un martillador público sin que la o el juzgador pueda oponerse a ello.

Conc. Art. 398 COGEP

242. ¿Cómo se procederá en el remate en caso de haberse admitido tercerías coadyuvantes?

El ejecutante puede participar en el remate con cargo a su crédito estando exento del depósito del 10%, pero si existen tercerías coadyuvantes debe participar en las mismas condiciones que los otros postores, salvo los trabajadores que están exentos aunque haya tercerías coadyuvantes.

Conc. Arts. 399 y 404 COGEP

243. ¿Cuáles son las formas de pago de las posturas?

De acuerdo con el artículo 401 del COGEP, las posturas en remates podrán pagarse de la siguiente manera:

1. En el caso de los bienes muebles estos deberán ser pagados de contado.
2. En el caso de los bienes inmuebles el pago podrá hacerse de contado o a plazo, cuando el pago se realice a plazo, dicho plazo no podrá exceder de cinco años contados desde el día del remate.

Conc. Art. 401 COGEP

244. ¿Cómo se materializa el auto de admisión y calificación de posturas?

De conformidad con el del artículo 402, inciso final del COGEP, la o el juzgador decidirá en la audiencia sobre la admisión y calificación de las posturas. Este auto será reducido a escrito y notificado dentro de las 48 horas de la realización de la audiencia.

Este auto es apelable y en caso de ser negativo lo podrán hacer la o el ejecutante y las o los terceristas coadyuvantes.

Conc. Art. 402 inciso final COGEP

245. ¿Cómo se procede en el caso de que no haya postores en el remate?

Según establece el artículo 405 del COGEP, en caso de que no haya postores la o el acreedor puede pedir el reavalúo de los bienes embargados. Hecho éste se reanudará el proceso de remate con el nuevo

avalúo, o también se puede pedir el embargo de otros bienes, liberando los anteriormente embargados.

Conc. Art. 405 COGEP

246. ¿En qué casos será nulo el remate?

De conformidad con el artículo 406 del COGEP, el remate será nulo en los siguientes casos:

- a. Si se realiza en distinto día al señalado por la o el juzgador; y,
- b. Si no se ha publicado el remate en la forma ordenada por la o el juzgador.

Conc. Art. 406 COGEP

247. ¿En qué momento la o el juzgador debe declarar la nulidad del remate?

De acuerdo a lo establecido en el artículo 406 inciso 2 del COGEP, la declaración de nulidad del remate por parte de la o el juzgador deberá hacerse en la audiencia de calificación de posturas, ya sea de oficio o a petición de parte.

Conc. 406 inciso 2 COGEP

248. ¿En qué término la o el postor consignará el valor ofrecido de contado?

De conformidad con el artículo 407 del COGEP, una vez rematado el bien el postor preferido deberá consignar el valor ofrecido en el término

de diez días de ejecutoriado el auto de calificación de posturas, luego de lo cual se emitirá el auto de adjudicación.

Conc. Art. 407 COGEP

249. ¿Qué se debe pagar con el producto de la cosa rematada?

En virtud de lo establecido en el artículo 412 del COGEP, con el valor consignado por el adjudicatario del remate se le pagará al acreedor:

- a) El valor del crédito;
- b) Los intereses;
- c) Las Indemnizaciones; y,
- d) Las costas procesales.

En caso de sobrar algún remanente se le devolverá al demandado.

Conc. Art. 412 COGEP

250. ¿Qué es el concurso de acreedores y cuál es su diferencia con la quiebra?

De conformidad con el artículo 414 del COGEP, el concurso de acreedores es el procedimiento establecido en el COGEP que se origina cuando una persona física o jurídica no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda y es declarado insolvente.

El concurso de acreedores se denomina quiebra cuando el deudor incumplido es un comerciante matriculado.

Conc. Art. 414 COGEP

251. ¿En qué caso procede el concordato o concurso preventivo?

De conformidad con el artículo 415 del COGEP, los deudores que quieran evitar el concurso de acreedores prevea que no puede efectuar sus pagos en las fechas de sus respectivos vencimientos, y tenga bienes suficientes para cubrir sus deudas o tiene ingresos permanentes podrá acogerse a la figura de concordato o concurso preventivo.

Conc. Art. 415 COGEP

252. ¿Con qué finalidad se inicia un procedimiento de concordato o concurso preventivo?

De conformidad con lo establecido en el artículo 415 inciso 2 del COGEP, el concordato o concurso preventivo tiene como finalidad permitir al deudor solventar las acreencias en un plazo razonable, no mayor de tres años.

Conc. Art. 415 inciso 2 COGEP

253. ¿Cuándo se presume la insolvencia de la o el deudor?

Según lo dispuesto en el artículo 416 del COGEP, se presume la insolvencia del deudor y como consecuencia de ello se puede declarar de oficio el concurso de acreedores o la quiebra:

- a) Cuando requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución, no paga ni dimite bienes;
- b) Cuando los bienes dimitidos sean litigiosos, no están en posesión de la o el deudor, están fuera de la república o consistan en créditos no escritos o contra personas de insolvencia notoria; y,

- c) Los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago según el avalúo practicado, salvo en los casos establecidos por el Código.

Conc. Art. 416 COGEP

254. ¿Cuáles son las clases de insolvencia?

De acuerdo con el artículo 417 del COGEP, la insolvencia de deudor puede ser fortuita, culpable o fraudulenta.

Es fortuita la que proviene de caso fortuito o fuerza mayor;

La insolvencia es culpables cuando es producida por una conducta imprudente o disipada del deudor y,

La insolvencia es fraudulenta cuando es el resultado de actos maliciosos del fallido destinados a perjudicar a sus acreedores.

Conc. Art. 417 COGEP

255. ¿En qué casos la o el juzgador debe declarar concluido el procedimiento de concurso preventivo y dar inicio al concurso de acreedores voluntario?

Según lo establecido en el artículo 420 inciso 3 del COGEP, cuando un auditor certifique que uno o más créditos que vencieron antes de la presentación de la solicitud de concurso preventivo, o que el pasivo del deudor exceda del 120% del activo.

Conc. Art. 420, inciso 3 COGEP

256. ¿En qué término puede oponerse la o el acreedor al concurso voluntario?

De conformidad con el artículo 425 del COGEP, en el término de diez días a partir de la citación a los acreedores.

Conc. Art. 425, inciso 2 COGEP

257. ¿Que debe la o el juzgador procurar o disponer en la audiencia de oposición al concurso voluntario?

Conforme con lo establecido en el artículo 425 inciso 4 del COGEP, se procurará la conciliación, se oirá a las partes, revocará el concurso o dispondrá que continúe el procedimiento. La resolución será apelable en el efecto no suspensivo, y de la resolución de la Corte Provincial no habrá más recurso.

Conc. Art. 425 COGEP

258. ¿Cuál es el término de oposición en el que el deudor puede oponerse al concurso necesario o la declaración de quiebra?

Según el artículo 426 del COGEP, en el término de diez días a partir de la citación; oposición que se puede realizar solamente previo pago de la deuda.

Conc. Art. 426 COGEP

259. ¿Qué sucede si en la junta de acreedores del concurso o la quiebra, los acreedores hipotecarios o privilegiados votan?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 427 del COGEP, si los acreedores hipotecarios o privilegiados acuden a la junta de acreedores y votan perderán automáticamente su preferencia o privilegio.

Conc. Art. 427 COGEP

260. ¿En la junta de acreedores en qué caso la o el juzgador debe dictar sentencia?

Según lo dispuesto en el artículo 427, inciso 5 del COGEP, cuando las o los acreedores y la o el deudor negocien el concordato contemplando nuevos plazos, financiamientos y otros acuerdos válidos que faciliten la solución de los adeudos, en la misma audiencia la o el juzgador lo aprobará mediante sentencia.

Conc. Art. 427, inciso 5 COGEP

261. ¿Quién puede oponerse a lo resuelto en la junta de acreedores y en qué término puede hacerlo?

De conformidad con el artículo 428 del COGEP, el acreedor que habiendo asistido a la junta de acreedores haya votado en contra de los acuerdos aprobados, el que se haya abstenido y el que haya estado ausente de la reunión podrán oponerse a ellos dentro del término de diez días siguientes a la fecha de la junta.

Conc. Art. 428 COGEP

262. ¿Qué se debe disponer y resolver en caso de no haber acuerdo en la junta de acreedores?

De acuerdo con el artículo 429 del COGEP, si lo acreedores no llegan a un acuerdo en la junta la o el juzgador ordenará el avalúo de los bienes embargados; se conocerá el balance de los bienes; se señalará día y hora para el remate de los bienes embargados; y, se resolverá sobre la gradación de créditos.

Conc. Art. 429 COGEP

263. ¿En qué casos procede la rehabilitación de la o el fallido?

De conformidad con lo establecido en el artículo 430 del COGEP, se rehabilitará al deudor fallido cuando:

1. Los bienes alcanzan para pagar la totalidad de los créditos;
2. Si el producto del remate no alcanza pero en la junta de acreedores convocada para el efecto, los acreedores resuelven conceder la certificación de pago que libere totalmente a la o el deudor del saldo no pagado; y,
3. Si el proceso se encuentra en estado de abandono por más de diez años.

Conc. Art. 430 COGEP

264. ¿Qué bienes puede administrar la o el fallido?

Por regla general declarada la insolvencia del deudor fallido, éste queda imposibilitado de administrar los bienes que tenía al momento de la declaratoria de la insolvencia. En cuanto a los bienes que adquiera en el futuro el 50% de estos deberán ser entregados a la masa común repartible entre los acreedores, mientras que el 50% restante servirán

para sufragar los gastos personales del fallido y su familia y serán administrados directamente por éste.

Conc. Art. 432 COGEP

265. ¿Cómo se debe designar al síndico?

De conformidad con el artículo 434 del COGEP, el síndico o administrador de concurso de acreedores o de la quiebra será nombrado de entre las personas registradas por el Consejo de la Judicatura.

Conc. Art. 434 COGEP

266. ¿Qué facultades tiene la o el síndico?

De conformidad con el artículo 434 del COGEP, el síndico actuará como sustituto procesal de la o del deudor, iniciará o continuará todos los procesos a favor y en contra del patrimonio de la o del concursado, recibirá los bienes de la o del deudor mediante inventario y tendrá, a su respecto, las responsabilidades de las o los depositarios y de las y los administradores y tendrá amplias facultades de administración, debiendo dar cuenta a la o el juzgador de su actuación.

Conc. Art. 434 COGEP

267. ¿Qué obligaciones tiene la o el síndico?

Según lo dispuesto en los artículos 435 y 436 del COGEP, el síndico deberá informar a la o al juzgador acerca del estado de los negocios y de los bienes embargados de la o del fallido, señalando el valor referencial de cada uno; formar un estado de créditos y su gradación; depositar la utilidad en la cuenta del órgano jurisdiccional competente en caso de

que la o el fallido tenga negocios en marcha; y, rendir cuentas cuando la o el juzgador lo ordene y obligatoriamente al final de la gestión.

Conc. Arts. 435 y 436 COGEP

268. ¿Qué sucede luego de resolverse la prelación de créditos?

Según lo dispone el artículo 437 del COGEP, resuelta la prelación de créditos por el juzgador y en caso de que se hayan vendido todos los bienes se distribuirá el producto del remate. Si algún bien no se vende por falta de postor, se estará a la normativa del remate de bienes embargados.

Conc. Art. 437 COGEP

269. ¿Cuándo son nulos los actos del deudor relativos a los bienes entregados a los acreedores o incluidos en el concurso?

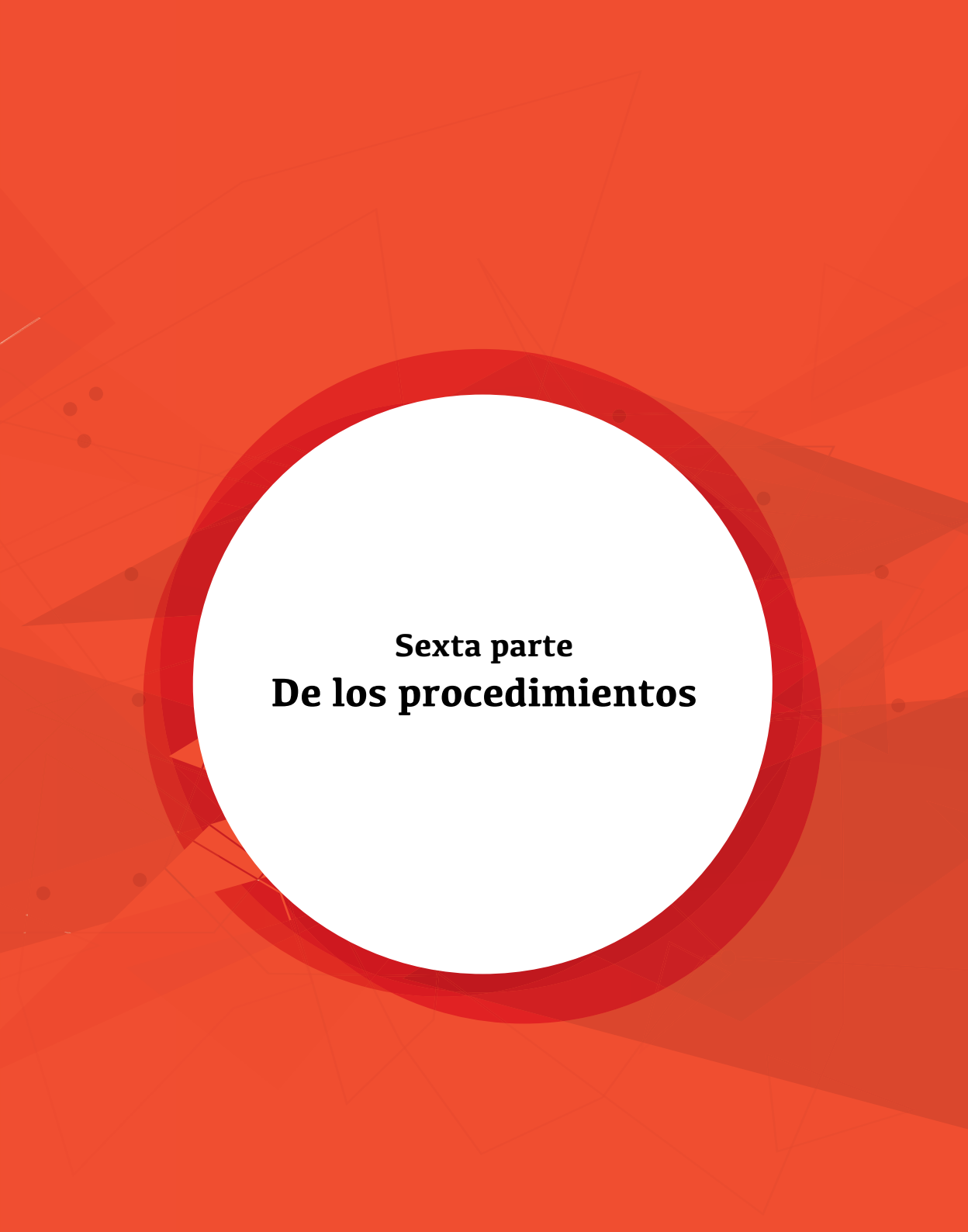
De conformidad con el artículo 439 del COGEP, serán nulos todos los actos del deudor relativos a los bienes incluidos en el concurso o entregados a los acreedores y aquellos realizados en fraude a éstos.

Conc. Art. 439 COGEP

270. ¿A qué juzgador corresponde la ejecución de sentencia, laudos arbitrales y actos de mediación expedidos en el extranjero?

De acuerdo con el artículo 102 inciso 2 del COGEP, la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros corresponde a la o el juzgador de primer nivel del domicilio de la o del demandado competente en razón de la materia.

Conc. Art. 102, inciso 2 COGEP

The image features a vibrant red background with a complex geometric pattern of overlapping triangles and lines. In the center, a large white circle is framed by a thick red border. Inside this circle, the text is centered and presented in a bold, black, sans-serif font.

Sexta parte
De los procedimientos

Sexta parte

De los procedimientos

Capítulo I

Del procedimiento ordinario

271. ¿Qué pretensiones se tramitarán en procedimiento ordinario?

Según el artículo 289 del COGEP, se tramitarán por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que el Código les da ese trámite expresamente y aquellos que no tengan previsto un trámite especial.

Conc. Art. 289 COGEP

272. ¿Cuál es plazo para contestar la demanda en el procedimiento ordinario?

De conformidad con el artículo 291 del COGEP, la o los demandados tienen un término máximo de treinta días hábiles contados a partir de la citación.

Conc. Art. 291 COGEP

273. ¿Cómo se contabiliza el término de contestación de la demanda cuando los demandados sean varios y se les haya citado en distintas fechas?

De acuerdo con el artículo 291 inciso 2 del COGEP, el plazo de treinta días para contestar la demanda se cuenta desde el día siguiente a aquel en que se practicó la última citación.

Conc. Art. 291, inciso 2 COGEP

274. ¿La presentación de un recurso horizontal antes de la fecha de la audiencia, suspende su realización?

Según el artículo 79 inciso final del COGEP, de haberse presentado un recurso de aclaración, ampliación, reforma y/o revocatoria antes de la realización de la audiencia el juzgador resolverá el recurso en la audiencia; en tal virtud la presentación del recurso horizontal no suspende la realización de la audiencia.

Art. 79, inciso final COGEP.

275. ¿Qué procedimiento tienen las acciones colusorias que priven del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o derecho real de usos, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble?

Conforme lo dispone el artículo 290 inciso 1 del COGEP, las acciones colusorias y en particular las que priven del dominio posesión o tenencia o de algún otro derecho real constituidos sobre un inmueble se tramitarán por el procedimiento ordinario establecido en los artículos 289 a 317 del COGEP.

Conc. Art. 290 COGEP

Capítulo II

Del procedimiento sumario

276. ¿Qué demandas se tramitarán en el procedimiento sumario?

De conformidad con los artículos 327 y 332 del COGEP, se tramitarán a través de procedimiento sumario las acciones:

En materia civil:

1. Posesorias ordinarias y especiales;
2. De obra nueva;
3. De constitución modificación o extinción de servidumbres;
4. De demarcación de linderos;
5. De despojo violento y despojo judicial;
6. Las controversias relativas a incapacidad interdicción y guardas; y,
7. El trámite de las oposiciones a los procedimientos voluntarios.

En materia de familia niñez y adolescencia:

1. Las acciones relacionadas con las prestación de alimentos y sus incidentes; y,
2. El divorcio contencioso.

En materia laboral:

1. Las controversias originadas en el despido de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia;
2. Las controversias originadas en la vulneración del fuero sindical; y,
3. Las controversias originadas en el despido sin justa causa y despido ineficaz.

En materia contencioso administrativa:

1. Las controversias generadas en la falta de un acuerdo sobre el precio a pagar con ocasión de una expropiación;

2. Las acciones relativas al silencio administrativo positivo. Conc. Art. 327 COGEP; y,
3. Las acciones derivadas del pago por consignación. Conc. Art. 327 COGEP.

Conc. Art. 332 COGEP

277. ¿Qué actos procesales no se permiten en el procedimiento sumario?

De acuerdo con el artículo 333 del COGEP, en el juicio sumario no proceden la reforma a la demanda ni la reconvencción. Sólo cabe la reconvencción conexa.

Conc. Art. 333 COGEP

278. ¿Cuál es el término para contestar la demanda y presentar reconvencción dentro del procedimiento sumario?

De conformidad con el artículo 333 numeral 3 del COGEP, en el procedimiento sumario, el demandado tiene quince días término para contestar la demanda y ejercer su derecho a la reconvencción. Esta regla no se aplica en materia de niñez y adolescencia en el que el término se reduce a diez días hábiles.

Conc. Art. 333 numeral 3 COGEP

279. ¿Cuántas audiencias se desarrollarán en el procedimiento sumario?

Según lo estipula el artículo 333 numeral 4 del COGEP, a diferencia del juicio ordinario en el que existen dos audiencias en el procedimien-

to sumario solo existe una dividida en dos fases; la fase de saneamiento, fijación de la Litis y conciliación y la fase final de prueba y alegatos.

Conc. Art. 333 numeral 4 COGEP

280. ¿Qué debe disponer la o el juzgador en caso de expropiación urgente?

Según el artículo 146 inciso 4 del COGEP, en el auto que se califique la demanda de expropiación la o el juzgador debe ordenar la ocupación inmediata del inmueble, siempre que a la demanda se acompañe el precio fijado en el avalúo comercial municipal.

Conc. Art. 146, iniso 4 COGEP

281. ¿Hasta qué momento puede reformarse la demanda en el procedimiento sumario?

De acuerdo con el artículo 333 numeral 1 del COGEP, no procede la reforma de la demanda en el procedimiento sumario.

Conc. Art. 148, 333 numeral 1 COGEP

Capítulo III Del procedimiento monitorio

282. ¿En qué consiste el procedimiento monitorio?

De acuerdo con la doctrina recogida por el COGEP, el procedimiento monitorio es un tipo especial de procedimiento que participa de características de los procesos declarativo y ejecutivo. Comparte rasgos con

los procesos declarativos, en tanto en ausencia de título ejecutivo la o el juzgador debe declarar, sumariamente, la existencia de la obligación. Por su parte, comparte ciertas características del juicio ejecutivo puesto que al igual que éste, el proceso monitorio pretende el cumplimiento de una obligación de dar, en este caso una suma de dinero.

Zanjada esta discusión lo cierto es que, el procedimiento monitorio se caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario que sean líquidas, determinadas, vencidas y exigibles; pero donde no existe un título ejecutivo propiamente dicho.

La finalidad del proceso monitorio, es entonces la de la constitución rápida del título ejecutivo y conseguir la ejecución del mismo a través de un mismo procedimiento.

Conc. Art. 356 a 361 COGEP

283. ¿Para qué casos es procedente el procedimiento monitorio?

De acuerdo con el artículo 356 del COGEP, el procedimiento monitorio es el indicado para cobrar deudas dinerarias que a pesar de ser líquidas, exigibles y de plazo vencido y de un monto inferior a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, sin embargo no conste en título ejecutivo.

En estos casos la legislación procesal ecuatoriana permite probar la obligación por una de las siguientes maneras:

1. Mediante documento en que conste la deuda y aparezca firmado por el deudor y o con su sello impronta o marca personal;
2. Mediante facturas o documentos que aparezcan firmados por el

deudor o comprobantes de entrega que comprueben la existencia de créditos o deudas;

3. Mediante certificación expedida por la o el administrador de un condominio, o establecimiento educativo en las que aparezca que el deudor debe una o mas obligaciones de esta clase;
4. Mediante contrato de arrendamiento, o declaración jurada del arrendador en la que aparezca que el deudor se encuentra en mora de pago de los canon de arrendamiento siempre que el inquilino este en uso del bien; y,
5. La o el trabajador a quien no hayan pagado oportunamente sus remuneraciones; podrá cobrarlas mediante procedimiento monitorio siempre que presente detalles de las remuneraciones reclamadas y prueba de la relación laboral.

Conc. Art. 356 COGEP

284. ¿En qué casos no se requiere el patrocinio de un abogado?

De conformidad con el artículo 357 inciso 3 del COGEP, en los procedimientos monitorios cuyo objeto sea el cobro de una deuda no superior o los tres salarios básicos unificados el acreedor podrá iniciar el procedimiento sin el patrocinio de un abogado.

Conc. Art. 357, inciso 3 COGEP

285. ¿Una vez admitida la demanda en el procedimiento monitorio, qué debe disponer la o el juzgador?

Según lo dispone el artículo 358 inciso 1 del COGEP, en el auto de admisión de la demanda en el procedimiento monitorio, la o el juzgador

ordenará la citación del deudor y concederá un término de quince días para hacer el pago.

Conc. Art. 358, inciso 1 COGEP

286. ¿Qué actos interrumpen la prescripción en el procedimiento monitorio?

De acuerdo con el artículo 358 inciso 2 del COGEP, la citación de deudor y el mandamiento de pago ordenado por la o el juzgador en el auto de admisión de la demanda interrumpen la prescripción.

Conc. Art. 358, inciso 2 COGEP

287. ¿Qué sucede en el procedimiento monitorio si la o el deudor no comparecen en el término concedido, o comparecen pero manifiestan oposición?

De acuerdo con el artículo 358 inciso final del COGEP, en caso de inasistencia del deudor o la falta de oposición al mandamiento de pago, éste quedará en firme y tendrá efecto de cosa juzgada, procediendo inmediatamente su ejecución.

Conc. Art. 358, inciso 3 COGEP

288. ¿Qué debe hacer la o el juzgador, cuando no hay acuerdo, o éste es parcial?

De conformidad con el artículo 359 del COGEP, si el deudor se opone o formula excepciones la o el juzgador deberá convocar a una audiencia

en la que dispondrá la práctica de pruebas necesarias para decidir. Practicadas las cuales se oirán los alegatos de las partes y se dictará sentencia.

Conc. Art. 359 COGEP

Capítulo IV

Del procedimiento ejecutivo

289. ¿Qué es el procedimiento ejecutivo?

De acuerdo con la doctrina recogida en el COGEP en el Ecuador existen fundamentalmente dos tipos de procesos los de conocimiento y los ejecutivos.

Los procesos de conocimiento son aquellos que resuelven una controversia sometida a la decisión de la o el juzgador y que se tramita para constituir o declarar la existencia de hechos, cosas o derechos dudosos. En este tipo de procesos la o el juzgador asigna o niega el derecho o la cosa litigiosa a una de las partes.

Por su parte los procesos ejecutivos son aquellos que partiendo de la existencia del derecho o de una obligación clara, líquida y de plazo vencido sirven para garantizar su cumplimiento por parte del deudor.

Conc. Art. 347 a 355 COGEP

290. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos que reconoce el COGEP?

Normalmente para que se pueda iniciar un proceso ejecutivo el acreedor, debe presentar un título ejecutivo, que es aquel donde aparece la obligación de dar o hacer que sea clara, pura, determinada y actualmente exigible.

El artículo 347 del COGEP, determina que los títulos ejecutivos válidos en el Ecuador son los siguientes:

- a) La declaración de parte hecha con juramento ante la o el juzgador competente;
- b) La escritura pública o su copia auténtica;
- c) Los documentos privados legalmente reconocidos;
- d) Letra de cambio;
- e) Pagaré a la orden;
- f) Testamentos;
- g) Transacción extrajudicial; y,
- h) Cualquier otro título que al que la ley otorgue dicho carácter.

Conc. Art. 347, 348 inciso 1 COGEP

291. ¿En qué tiempo se debe calificar la demanda en el procedimiento ejecutivo?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 351 inciso 1 del COGEP, la o el juzgador deberá calificar la demanda ejecutiva en el término máximo de tres días desde la presentación del escrito.

Conc. Art. 351 inciso 1 COGEP

292. ¿Qué actos procesales se desarrollarán en la audiencia del procedimiento ejecutivo?

De acuerdo con las reglas generales contempladas en el COGEP, cuando en el trámite de un procedimiento ejecutivo el deudor se

oponga fundamentadamente a las pretensiones del acreedor el procedimiento ejecutivo se transforma en juicio de conocimiento.

En ese contexto el artículo 354 inciso 2 del COGEP aplicando esta regla dispone que cuando exista una oposición debidamente fundamentada a las pretensiones del acreedor la o el juzgador deberá convocar a una audiencia en la que en dos fases una de saneamiento y conciliación y otra de prueba y alegatos decida de fondo sobre la oposición.

Conc. Art. 354 inciso 2 COGEP

Capítulo V

De los procedimientos voluntarios

293. ¿Cuáles son las pretensiones que se tramitan en los procedimientos voluntarios?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 334 del COGEP, se tramitan a través de los procedimientos voluntarios las controversias y pretensiones relacionadas con:

- a) El pago por consignación;
- b) Rendición de cuentas;
- c) Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes;
- d) Inventarios;
- e) Partición;
- f) Autorización de venta de bienes de niños, niñas y adolescentes y, de personas sometidas a guardas; y,

g) Asuntos de jurisdicción voluntaria.

Conc. Art. 334 COGEP

294. ¿Qué requisitos debe contener la solicitud del interesado en los procedimientos voluntarios?

De conformidad con el artículo 335 del COGEP, la solicitud de inicio de los procedimientos voluntarios deben cumplir los mismos requisitos de la demanda establecidos en el artículo 90 del COGEP.

Conc. Art. 90 y 335 COGEP

295. ¿En qué término se convocará a la audiencia en los procedimientos voluntarios?

De acuerdo con el artículo 335 del COGEP, en el trámite de los procedimientos voluntarios la o el juzgador convocará a una audiencia en un término no menor de diez días y no mayor a veinte después de verificada la última citación.

Conc. Art. 335 COGEP

296. ¿Qué actos se deben desarrollar en la audiencia que tenga lugar en los procedimientos voluntarios?

De conformidad con lo establecido en el artículo 335 inciso final del COGEP, en la audiencia que se desarrolle en los procedimientos voluntarios la o el juzgador, deberá oír a los asistentes y deberá practicar las pruebas necesarias para resolver sobre lo solicitado.

Conc. Art. 335 inciso final COGEP

297. ¿Quiénes pueden oponerse a la solicitud?

Según el artículo 336 del COGEP, cualquier persona que acredite interés jurídico respecto de la solicitud se podrá oponer por escrito hasta antes de que la o el juzgador convoque a la audiencia.

Conc. Art. 336 COGEP

298. ¿Qué ocurre cuando en los procedimientos voluntarios se presenta una oposición?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 336 del COGEP, cuando en los procedimientos voluntarios se presenta una oposición válida, el legislador considera que ha surgido una controversia y en tal virtud el procedimiento voluntario se transforma automáticamente en un procedimiento sumario. Para tal efecto la solicitud inicial se tendrá como demanda y la oposición como contestación.

En este caso debe conceder a las partes el término de quince días para que anuncien las pruebas, luego de lo cual convocará a la audiencia y continuará el trámite del procedimiento sumario normal.

En caso contrario, es decir cuando la oposición no este razonablemente justificado, o cuando se utilice para realizar una maniobra dilatoria, la o el juzgador la rechazará in limine.

Conc. Art. 336 COGEP

299. ¿Cuál es el trámite del pago por consignación?

Conforme con lo establecido en los artículo 334 numeral 1 y 338 del COGEP, el pago por consignación es uno de los procedimientos voluntarios que recoge este Código.

En este caso, admitida la solicitud la o el juzgador convocará a la audiencia ordenando expresamente la presencia del acreedor en la que además del deudor y de la cosa debida, obligatoriamente deberá citarse al acreedor.

Si éste efectivamente comparece, se entenderá que ha aceptado la oferta de pago y en tal virtud, la o el juzgador le entregará la cosa y suscribirá un acta dando por terminado el procedimiento. Si comparece pero se opone al pago, la petición se sustanciará como un procedimiento sumario.

En el evento de que el acreedor se niegue a comparecer o no comparezca sin justificación, la o el juzgador dictará sentencia declarando realizado el pago y extinguida la obligación.

Conc. Art. 334 numera 1 y Art. 338 COGEP

300. ¿Quiénes son los obligados a rendir cuentas en los procedimientos voluntarios de rendición de cuentas?

Según el artículo 339 del COGEP, deberán rendir cuentas las personas que administren bienes ajenos.

Conc. Art. 339 numeral 1 COGEP

301. ¿Cuál es el procedimiento de rendición de cuentas según el COGEP?

De conformidad con el artículo 339 inciso 2 del COGEP, el administrador de la cosa ajena debe presentar a la o el juzgador un informe que se notificará al solicitante, quien a su vez puede objetarlo en la audiencia que se haya convocado para el efecto.

Conc. Art. 339 inciso 2 COGEP

302. ¿Quién puede solicitar inventario de bienes?

Conforme lo establecido en el artículo 341 inciso 1 del COGEP, podrá solicitar la realización de un inventario de bienes cualquier persona que se crea con derecho sobre los bienes que se quieren inventariar.

Conc. Art. 341 inciso 1 COGEP

303. ¿A quiénes se debe citar en el procedimiento de inventario de bienes sucesorios?

De conformidad con el artículo 341 inciso 3 del COGEP, se deberá citar a los herederos conocidos, presuntos y desconocidos y a los terceros poseedores de los bienes sucesorios.

Conc. Art. 341 inciso 3 COGEP

304. ¿Quién es el juez competente para conocer procedimiento de inventario y la partición?

De acuerdo con el artículo 341 inciso final del COGEP, el mismo juzgador que ha conocido el procedimiento voluntario de inventario de bienes sucesorios, deberá conocer de la partición.

Conc. Art. 341 inciso final COGEP

305. ¿Cuándo es necesario realizar un inventario solemne?

Según lo establecido en el artículo 343 del COGEP, es necesario realizar un inventario solemne con la presencia del juez, el secretario y los testigos en tres casos:

1. Cuando se trate de realizar el inventario de bienes de una herencia yacente;

2. Cuando se deba entregar los bienes a un depositario; y,
3. Cuando sea necesario levantar los sellos con que estén asegurados los bienes.

Conc. Art. 343 COGEP

306. ¿Quiénes deben concurrir a la diligencia de inventario de bienes cuando el heredero sea un menor o una persona sometida a tutela o curatela?

De conformidad con el artículo 342 inciso 2 del COGEP, a la diligencia de inventario deberán asistir obligatoriamente los representantes legales, el juez, el secretario, los testigos y el perito designado.

Conc. Art. 343, inciso. 2 COGEP

307. ¿En qué caso se exonera de inventario solemne?

De acuerdo con el artículo 344 del COGEP, no es necesario realizar un inventario solemne cuando los bienes hereditarios del menor sean considerados “exiguos”.

Se consideran bienes exiguos, aquellos que, de acuerdo con el sentido común y a juicio del juzgador, son totalmente escasos e insuficientes y que, por lo tanto, no alcanzan ni siquiera a garantizar el mínimo vital del heredero.

Conc. Art. 344 COGEP

308. ¿Qué debe hacer la o el juzgador cuando no existe oposición al inventario presentado?

De conformidad con el artículo 345 del COGEP, si no existen observaciones ni reclamos sobre la propiedad de los bienes inventariados la o el juzgador debe en la audiencia aprobar el inventario presentado y dictar sentencia la cual en el mismo momento de su notificación causará ejecutoria.

Conc. Art. 345 COGEP

309. ¿Qué tramite debe darse cuando hay oposición al inventario?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 346 del COGEP, cuando existan observaciones u objeciones al inventario presentado o negativa de terceros al examen y tasación de los bienes se entenderá que éstas constituyen una oposición y por tal razón el procedimiento voluntario devendrá ipso jure en sumario debiéndose tramitar la pretensión a través de este procedimiento.

Conc. Art. 346 COGEP

310. ¿Cuál es el procedimiento por el que se tramitan los reclamos relacionados con el dominio de los bienes incluidos en el inventario?

De acuerdo con el artículo 346 inciso final del COGEP, cuando en el procedimiento de inventarios se produzca una oposición relativa a la propiedad de los bienes inventariados, esta oposición se tramitará como un proceso separado, a través del procedimiento ordinario establecido en el COGEP.

Conc. Art. 346 inciso final COGEP

Capítulo VI

Procedimientos contenciosos administrativo y contencioso tributarios

Sección I

De procedimientos contencioso administrativo

311. ¿Cuál es objeto de la jurisdicción contencioso tributaria y contencioso administrativa?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 300 del COGEP, la jurisdicción de lo contencioso administrativa y la jurisdicción contencioso tributaria tienen por objeto garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva de toda persona que litigue frente a la administración; así mismo estas jurisdicciones tienen la obligación de realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público. Y de los actos de particulares a lo que la ley los haya delegado funciones administrativas. Lo cual incluye el control de la desviación del poder.

Conc. Art. 300 COGEP

312. ¿Cuándo se extinguen los reclamos administrativos?

De acuerdo con las disposiciones del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) en concordancia, con las disposiciones del COGEP, los particulares tienen dos mecanismos para hacer sus reclamos frente a la administración: en primer lugar, existe la vía administrativa y en segundo término, la vía contencioso administrativa o contencioso tributaria.

Cualquier reclamación administrativa, se extinguirá por la presentación de la correspondiente acción.

Conc. Art. 300, inciso 2 COGEP

313. ¿En qué procedimiento se tramitarán las acciones contencioso administrativas?

Según lo dispuesto en el artículo 327 del COGEP, todas las acciones contencioso administrativas se tramitarán a través del procedimiento ordinario, salvo las acciones derivadas del silencio administrativo positivo y las de pago por consignación, que se tramitarán por el procedimiento sumario.

Conc. Art. 327 COGEP

314. ¿En qué casos se dará inicio a la acción de repetición?

De conformidad con el artículo 328 del COGEP, la administración deberá iniciar la acción de repetición en el evento en que la sentencia del juez o tribunal contencioso administrativo declara la responsabilidad de las autoridades, servidoras o servidores públicos en el desempeño de sus funciones o cuando se haya declarado en la sentencia la responsabilidad de particulares que ejerzan potestad pública por concesión o delegación.

Conc. Art. 328 COGEP

315. ¿Cuándo la o el juzgador puede ordenar en el auto inicial la suspensión del acto administrativo?

De conformidad con el artículo 330 del COGEP, la o el juzgador podrán ordenar en el auto de admisión, la suspensión provisional del acto impugnado cuando de las pruebas aportadas por el actor, se genere un indicio serio favorable a la pretensión.

La declaratoria de la suspensión provisional no implica una anticipación de criterio por parte de la o el juzgador sobre el fondo del asunto.

Conc. Art. 330 COGEP

316. ¿En qué caso se suspende la ejecución de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo?

De conformidad con el artículo 331 del COGEP, por regla general una vez ejecutoriada la sentencia la o el juzgador ordenará a la entidad pública que cumpla las resoluciones expuestas en la misma.

Excepcionalmente se puede suspender la ejecución de la sentencia por la imposibilidad legal o material de ejecutarla. En este caso la o el juzgador deberá ordenar la indemnización de perjuicios al perjudicado por el incumplimiento estableciendo la forma y el tiempo para hacerlo.

Conc. Art. 331 COGEP

Sección II Del procedimiento contencioso tributario

317. ¿Cómo está integrada la administración tributaria?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 301 del COGEP, la administración tributaria está compuesta por las siguientes instancias: la administración central; la de los gobiernos autónomos descentralizados y las administraciones tributarias especiales o de excepción.

Conc. Art. 301 COGEP

318. ¿Quiénes son legitimados activos en la jurisdicción contencioso tributaria y contencioso administrativa?

De conformidad con lo establecido en el artículo 303 del COGEP, están legitimados para actuar como demandantes en la jurisdicción contencioso tributaria y contencioso administrativa:

- a) La persona natural o jurídica que tenga interés directo;
- b) Las instituciones y corporaciones de derecho público y las empresas públicas;
- c) La o el titular de un derecho subjetivo que se considere lesionado por un acto de administración;
- d) La máxima autoridad de la administración autora de algún acto que, por lo prescrito en la ley, no puede anularlo o revocarlo por sí misma;
- e) La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado cuando se ha lesionado sus derechos por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia de la tutela judicial efectiva por violaciones del debido proceso;
- f) La persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública; y,
- g) Las sociedades.

Conc. Art. 303 COGEP

319. ¿Cómo se conforma la legitimación pasiva?

De acuerdo con el artículo 304 del COGEP, la demanda contencioso administrativa o contencioso tributaria podrá interponerse contra:

- a) La autoridad o las instituciones y entidades del sector público de quien provenga el acto o disposición a que se refiere la demanda;
- b) La o el director, delegado o jefe de la oficina u órgano emisor del título de crédito, cuando se demanda la nulidad o prescripción

de la obligación tributaria o se proponga excepciones al procedimiento coactivo;

- c) La o el funcionario recaudador o el ejecutor cuando se demanda el pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución;
- d) Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad; y,
- e) Las personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos con el Estado.

Conc. Art. 304 COGEP

320. ¿En qué término se debe proponer la acción subjetiva o de plena jurisdicción?

De acuerdo con el artículo 306 numeral 1 del COGEP, la acción de plena jurisdicción debe impetrarse en el término máximo de noventa días, contados desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado.

Conc. Art. 306 numeral 1 COGEP

321. ¿En qué tiempo se debe proponer la acción objetiva o de anulación por exceso de poder?

De conformidad con el artículo 306 numeral 2 del COGEP, la acción objetiva tendrá un plazo máximo de tres años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado.

Conc. Art. 306 numeral 2 COGEP

322. ¿Cuál es el plazo para interponer la demanda en las acciones contractuales y en las demás acciones previstas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo?

De conformidad con lo establecido en el artículo 306 numeral 3 del COGEP, para interponer la demanda sobre acciones contractuales y acciones de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, el recurrente tendrá el plazo de cinco años.

Conc. Art. 306 numeral 3 COGEP

323. ¿En qué término se propone la acción de lesividad?

De conformidad con lo establecido en el artículo 306 numeral 4 del COGEP, la acción de lesividad se interpondrá en el término de noventa días, a partir del día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

Conc. Art. 306 numeral 4 COGEP

324. ¿Qué tiempo tiene el administrado para proponer la acción contencioso tributaria de impugnación o acción directa?

Según establece el artículo 306 numeral 5 del COGEP, los administrados tiene un término de sesenta días para impugnar cualquier acto administrativo tributario; igual termino tendrá el administrado que pretende impugnar un hecho o acto en que se funda la acción.

Conc. Art. 306 numeral 5 COGEP

325. ¿En qué plazo se propondrán las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo indebidamente pagado?

Según el artículo 306 numeral 6 del COGEP, el plazo para demandar la devolución del pago de lo no debido vence en el plazo de tres años siguientes al día en que se efectuó el pago.

Conc. Art. 306 numeral 6 COGEP

326. ¿Qué medios de prueba son admisibles en las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas?

Según lo dispuesto en el artículo 310 del COGEP, en materia contencioso administrativa y contencioso tributaria son admisibles todos los medios de prueba, excepto la declaración de parte de los servidores públicos.

Conc. Art. 310 COGEP

327. ¿A quién corresponde probar los actos tributarios impugnados?

Como excepción al principio general de derecho según el cual, quien afirma prueba, el artículo 311 del COGEP, dispone que corresponde a la administración probar los hechos o actos del contribuyente.

Conc. Art. 311 COGEP

328. ¿Qué debe ordenar la o el juzgador para ejecutar la sentencia en un proceso contencioso administrativo o contencioso tributario?

De conformidad con el artículo 314 del COGEP, una vez ejecutoriada la sentencia, la o el juzgador deberá:

1. Ordenar bajo prevenciones de ley, que se cumpla la sentencia; lo cual significa que la o el servidor público que retarde el cumplimiento o se niegue a cumplirla, puede ser sancionado por el propio juez, incluso hasta con la destitución de su cargo; y,

Conc. Art. 75 CRE

2. De proceder la liquidación, ordenará que ésta sea realizada por la misma institución responsable.

Conc. Art. 314 COGEP

329. ¿La entidad estatal puede realizar la liquidación?

De acuerdo con el artículo 314 inciso 1 del COGEP, la o el juzgador puede disponer que la liquidación sea realizada por la misma entidad estatal.

Conc. Art. 314 inciso 1 COGEP

330. ¿Qué ocurre cuando existe imposibilidad legal o material de ejecutar la sentencia?

De acuerdo con el artículo 314 inciso 2 del COGEP, en los casos excepcionales en que sea imposible ejecutar lo dispuesto en la sentencia la o el juzgador ordenará que se indemnice a la o el perjudicado para lo cual deberá establecer claramente la forma, el monto y el tiempo de la indemnización.

Conc. Art. 314 inciso 2 COGEP

331. ¿Qué responsabilidad tienen los servidores públicos que retarden, se rehúsen o se niegan a cumplir las resoluciones o sentencias?

Según lo dispuesto en el artículo 314 inciso final del COGEP, todo servidor público que retarde o impida el cumplimiento de una sentencia o resolución judicial será objeto de responsabilidad administrativa, civil o penal, según sea el caso.

Conc. Art. 314 inciso final COGEP

332. ¿En los procesos de excepciones a la coactiva qué procedimiento es el aplicable?

De conformidad con el artículo 315 numeral 1 del COGEP, cuando se presenten excepciones dentro de un proceso coactivo éste se transformará en un proceso de conocimiento y deberá aplicarse el procedimiento ordinario establecido.

Conc. Art. 315 COGEP

333. ¿En el procedimiento de excepciones a la coactiva que excepciones se podrá oponer?

Según lo establece el artículo 316 del COGEP, en los procesos coactivos sólo son válidas las siguientes excepciones:

1. Ilegalidad del tributo;
2. Inexistencia de la obligación;
3. Pago, compensación, confusión, remisión;

4. Prescripción (caducidad) de la acción de cobro;
5. Incompetencia del funcionario ejecutor;
6. Ilegitimidad de la personería;
7. Recurso pendiente;
8. Inexistencia del retardo o mora en el pago;
9. Pleito contencioso tributario pendiente para impugnar la resolución que establece la obligación;
10. Duplicación de títulos frente a una misma obligación;
11. Nulidad del auto de pago;
12. Falsificación del título;
13. Violación de las normas que rigen la emisión del título; y,
14. Por falta de cumplimiento de requisitos legales.

Conc. Art. 316 COGEP

334. ¿En qué caso se suspende la ejecución coactiva?

De conformidad con el artículo 317 del COGEP, solo es posible suspender la ejecución de la coactiva cuando se consigne la cantidad de la deuda, intereses y costas, aunque las excepciones versen sobre falsificación de documento o prescripción de la acción.

En este caso la consignación de estos montos no implica el pago de la obligación.

Conc. Art. 317 COGEP

335. ¿Cuáles son las acciones que un contribuyente puede presentar dentro de un procedimiento contencioso tributario?

De conformidad con el artículo 319 a 322 del COGEP, se deberán tramitar a través de procedimiento contencioso tributario las acciones de impugnación, las acciones directas; y, acciones especiales:

- a) Cuando se pretenda el restablecimiento de un derecho subjetivo del contribuyente vulnerado o lesionado por un reglamento, ordenanza, resolución o circular de carácter general dictadas por la autoridad tributaria;
- b) Cuando se persiga la anulación total o parcial de una reglamento ordenanza o resolución de carácter general;
- c) Cuando se pretenda la anulación de actos administrativos de determinación tributaria provenientes de la administración tributaria nacional o local;
- d) Cuando haya operado el silencio administrativo y se pretenda la anulación o modificación de actos administrativos presuntos de carácter tributario;
- e) Cuando se quiera impugnar las decisiones tomadas por la administración tributaria en virtud del recurso administrativo de revisión;
- f) Cuando se impugnen sanciones por el incumplimiento deberes formales; y,
- g) Cuando se quiera impugnar las excepciones a la coactiva de que trata el artículo 316 numeral 10 del COGEP.

Conc. Art. 319 COGEP

336. ¿Es posible la impugnación de dos o más resoluciones de la administración tributaria en una misma demanda?

De conformidad con lo establecido en el artículo 323 del COGEP, el actor puede impugnar una pluralidad de resoluciones tributarias a través de una sola demanda siempre que guarden relación entre sí, se refieran al mismo sujeto pasivo y a una misma administración tributaria, aunque corresponden a ejercicios distintos.

Conc. Art. 323 COGEP

337. ¿El administrado puede solicitar en su demanda de impugnación la suspensión del acto administrativo en materia tributaria, cuando se le imponga una obligación de dar?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 324 del COGEP, el actor puede solicitar la suspensión de la resolución tributaria siempre y cuando rinda caución del 10% de la obligación. De no hacerlo se continuará la ejecución.

La caución correspondiente al pago del 10% de la obligación se puede cambiar por la constitución de una hipoteca, prenda o fianza bancaria o cualquier forma de aval permitido por la ley.

Conc. Art. 324 COGEP

The logo features the word "COGEP" in a bold, black, serif font, centered within a white circle. This circle is surrounded by a thick, dark red ring. The background is a vibrant orange-red color with a subtle, abstract geometric pattern of overlapping triangles and lines.

COGEP

Código Orgánico General de Procesos COGEP¹

CONSIDERANDO

Que, por mandato constitucional, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, a base de derechos de igualdad, no discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva imparcial y expedita, debido proceso y seguridad jurídica, conforme lo prevén los artículos 11, 75, 76 y 82 de la Carta Fundamental;

Que, la Constitución de la República en el artículo 167, consagra que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones previstos en la Constitución;

Que, la Constitución de la República en los artículos 168 y 169 prescribe que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, fases y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral;

Que, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal;

Que, el Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 7 y siguientes prevé que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los principios de legalidad, jurisdicción y competencia, independencia, imparcialidad,

1 NOTA GENERAL:

Por Mandato de la Disposición Final Segunda de esta norma, este Código entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses contados a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Registro Oficial Suplemento 506 de 22 mayo 2015

Estado: Vigente

unidad jurisdiccional y gradualidad, especialidad, publicidad, responsabilidad, servicio a la comunidad, dispositivo, concentración, probidad, buena fe y lealtad procesal, verdad procesal, obligatoriedad de administrar justicia, interpretación de normas procesales, impugnación en sede judicial de los actos administrativos;

Que, las facultades y deberes genéricos, facultades jurisdiccionales, facultades correctivas y facultades coercitivas de las y los juzgadores previstas en los artículos 129, 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial deben desarrollarse a través de normas procesales que coadyuven a la cabal aplicación de los preceptos constitucionales, de las normas de los instrumentos internacionales y de la estricta observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías procesales que orientan el ejercicio de la Función Judicial;

Que, es imperioso armonizar el sistema procesal actual a las normas constitucionales y legales vigentes, a través de un cambio sustancial que propone, bajo el principio de la oralidad, la unificación de todas las materias, excepto la constitucional y penal; y, En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide el siguiente.

Código Orgánico General de Procesos

LIBRO I

NORMAS GENERALES

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1.- Ambito. Este Código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso.

Art. 2.- Principios rectores. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

Art. 3.- Dirección del proceso. La o el juzgador, conforme con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas.

Art. 4.- Proceso oral por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible.

Art. 5.- Impulso procesal. Corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo.

Art. 6.- Principio de inmediación. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso.

Solo podrán delegar las diligencias que deban celebrarse en territorio distinto al de su competencia.

Las audiencias que no sean conducidas por la o el juzgador serán nulas.

Art. 7.- Principio de intimidad. Las y los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente legítima.

Art. 8.- Transparencia y publicidad de los procesos judiciales.- La información de los procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona.

Son reservadas las diligencias y actuaciones procesales previstas como tales en la Constitución de la República y la ley.

TÍTULO II COMPETENCIA

CAPÍTULO I NORMAS COMUNES

Art. 9.- Competencia territorial. Por regla general será competente, en razón del territorio y conforme con la especialización respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada.

La persona que tenga domicilio en dos o más lugares podrá ser demandada en cualquiera de ellos. Si se trata de cosas que dicen relación especial a uno de sus domicilios exclusivamente, solo la o el juzgador de este será competente para tales casos.

La persona que no tenga domicilio fijo, podrá ser demandada donde se la encuentre.

Si la demandada es una persona jurídica con la que se celebró un contrato o convención o que intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia, será competente la o el juzgador de cualquier lugar donde esta tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas.

Art. 10.- Competencia concurrente. Además de la o del juzgador del domicilio de la persona demandada, serán también competentes a elección de la persona actora, la o el juzgador:

1. Del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva.
2. Del lugar donde se celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está presente la persona demandada o su procurador general o especial para el asunto que se trata.
3. Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato.
4. Del lugar donde esté la cosa inmueble materia de la demanda.

Si la demanda se refiere solamente a una parte del inmueble, la o el juzgador del lugar donde esté la parte disputada y si esta pertenece a diversas circunscripciones, la persona demandante podrá elegir la o al juzgador de cualquiera de ellas.

5. Del lugar donde esté ubicada la casa de habitación, si la cosa materia de la demanda está en dos o más cantones o provincias.
6. Del lugar donde estén situados los inmuebles, si una misma demanda tiene por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles.

7. Del lugar donde se causaron los daños, en las demandas sobre indemnización o reparación de estos.
8. Del lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental.
9. Del lugar donde se haya administrado bienes ajenos, cuando la demanda verse sobre las cuentas de la administración.
10. Del domicilio de la persona titular del derecho en las demandas sobre reclamación de alimentos o de filiación.

Cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio de la o del actor y la citación podrá practicarse en la dependencia más cercana, de acuerdo a lo previsto en este Código.

Art. 11.- Competencia excluyente.- Únicamente serán competentes para conocer las siguientes acciones:

1. La o el juzgador del domicilio del trabajador en las demandas que se interpongan contra este. Queda prohibida la renuncia de domicilio por parte de la o del trabajador.
2. La o el juzgador del lugar donde está la cosa a la que se refiere la demanda en los asuntos para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o inspección judicial, como sobre linderos, curso de aguas, reivindicación de inmuebles, acciones posesorias y otros asuntos análogos.
3. La o el juzgador del último domicilio del causante.

Si la apertura de la sucesión se realiza en territorio extranjero y comprende bienes situados en el Ecuador, será competente la o el juzgador del último domicilio nacional del causante o del lugar en que se encuentren los bienes.

4. La o el juzgador del lugar donde se abra la sucesión, en los procesos de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a esta, cobranza de deudas hereditarias y otras provenientes de una testamentaria.

5. La o el juzgador del domicilio del pupilo en las cuestiones relativas a tutela o curaduría, aunque el tutor o curador nombrado tenga el suyo en lugar diferente.

Art. 12.- Competencia del tribunal, designación y atribuciones de la o del juzgador ponente. Cuando se trate de tribunales conformados de las Salas de la Corte Provincial o de los Tribunales de lo Contencioso Tributario y Administrativo se realizará el sorteo para prevenir su competencia y para determinar la o el juzgador ponente. El Tribunal calificará la demanda o el recurso y sustanciará el proceso según corresponda. La o el juzgador ponente emitirá los autos de sustanciación y dirigirá las audiencias conforme con las reglas de este Código, pero los autos interlocutorios serán dictados con la intervención de todos los miembros del Tribunal.

En el caso de los Tribunales conformados de las Salas de la Corte Nacional de Justicia, se aplicará la norma antedicha, con excepción de la calificación del recurso de casación, que la realizará un único conjuer, conforme con la ley.

Art. 13.- Excepción de incompetencia. Planteada la excepción de incompetencia, la o el juzgador conocerá de esta en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única, de ser el caso. Si la acepta, remitirá de inmediato a la o al juzgador competente para que prosiga el procedimiento sin declarar la nulidad, salvo que la incompetencia sea en razón de la materia, en cuyo caso declarará la nulidad y mandará que se remita el proceso a la o al juzgador competente para que se dé inicio al juzgamiento, pero el tiempo transcurrido entre la citación con la demanda y la declaratoria de nulidad no se computarán dentro de los plazos o términos de caducidad o prescripción del derecho o la acción.

Art. 14.- Conflicto de competencia. Si una o un juzgador pretende la inhibición de otra u otro juzgador para conocer de un proceso, le remitirá oficio con las razones por las que se considera competente.

La o el juzgador requerido contestará cediendo o contradiciendo en forma motivada en el término de tres días, contados desde que recibió

el oficio. Con esta contestación, se dará por preparado y suficientemente instruido el conflicto positivo de competencia y sin permitirse otra actuación, se remitirá a la Sala Especializada de la Corte Nacional o Corte Provincial de Justicia a la que pertenece el tribunal o la o el juzgador provocante.

Si al contrario, ninguna o ningún juzgador, avoca conocimiento del proceso aduciendo incompetencia, cualquiera de las partes solicitará a la o el último juzgador en declararse incompetente, que eleve el expediente al superior que corresponda, según lo dispuesto en el inciso anterior, para que resuelva el conflicto negativo de competencia.

El conflicto de competencia se resolverá en mérito de los autos, salvo que por su complejidad se requiera información adicional a las partes o a las o los juzgadores involucrados.

La resolución del conflicto de competencia, en ningún caso deberá superar el término de diez días. Mientras dure el conflicto de competencia el proceso principal estará suspendido.

De la resolución que dirima el conflicto de competencia no cabrá recurso alguno.

Art. 15.- Facultad para resolver el conflicto de competencia. Corresponde a las Salas Especializadas de la Corte Nacional y de las Cortes Provinciales de Justicia dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las o los juzgadores, conforme con las reglas previstas en la ley.

CAPÍTULO II ACUMULACIÓN

Art. 16.- Casos. La o el juzgador, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar la acumulación de procesos, hasta en la audiencia preliminar, en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide, pueda producir en otro excepción de cosa juzgada.
2. Cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después.
3. Cuando haya en los procesos, propuestos separadamente, identidad de personas, cosas y acciones.
4. Cuando los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la continenencia de la causa.

Art. 17.- División de la continencia de la causa.- Se divide la continencia de la causa:

1. Cuando haya identidad de personas y cosas, aun cuando las acciones sean diversas.
2. Cuando haya identidad de personas y acciones, aun cuando las cosas sean diversas.
3. Cuando haya identidad de acciones y cosas, aun cuando las personas sean diversas.
4. Cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas.
5. Cuando la especie sobre la que se litiga esté comprendida en el género que ha sido materia de otro proceso.

Art. 18.- Requisitos. Para que la acumulación sea autorizada deben cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la o el juzgador que pretende acumular los distintos procesos sea competente para conocerlos todos.
2. Que todos los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento o que las partes acepten someterse a la misma vía procesal.
3. Que los procesos que se pretende acumular no estén en diversas instancias.

Art. 19.- Procedimiento. La acumulación de procesos será resuelta en audiencia preliminar, conforme con las reglas previstas en el procedimiento ordinario.

Las partes de los procesos acumulados podrán actuar mediante defensor común.

Art. 20.- Resolución. La resolución de acumulación determinará:

1. El estado procesal en que quedará cada uno de los procesos, según el caso, cuáles se suspenderán en la tramitación, qué actos procesales deberán realizarse nuevamente a fin de incorporar las particularidades de los procesos acumulados o si es necesario, realizar cualquier otra actuación para su sustanciación conjunta.
2. La o el juzgador competente para conocer los procesos acumulados, será aquel que haya prevenido en el conocimiento de la causa.

La resolución que declara la acumulación no será apelable.

Art. 21.- Acumulación en materia laboral. Las causas en esta materia podrán acumularse a los procesos concursales solo con sentencia ejecutoriada.

CAPÍTULO III

EXCUSA Y RECUSACIÓN

Art. 22.- Causas de excusa o recusación. Son causas de excusa o recusación de la o del juzgador:

1. Ser parte en el proceso.
2. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o su defensora o defensor.
3. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, de su representante legal, mandatario,

- procurador, defensor o de la o del juzgador de quien proviene la resolución que conoce por alguno de los medios de impugnación.
4. Haber conocido o fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexas con ella.
 5. Retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia. Si se trata de la resolución, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
 6. Haber sido representante legal, mandatario, procurador, defensor, apoderado de alguna de las partes en el proceso actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador.
 7. Haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable, sobre el proceso que llega a su conocimiento.
 8. Tener o haber tenido ella, él, su cónyuge, conviviente o alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad proceso con alguna de las partes. Cuando el proceso haya sido promovido por alguna de las partes, deberá haberlo sido antes de la instancia en que se intenta la recusación.
 9. Haber recibido de alguna de las partes derechos, contribuciones, bienes, valores o servicios.
 10. Tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente.
 11. Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta.
 12. Tener interés personal en el proceso por tratarse de sus negocios o de su cónyuge o conviviente, o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 23.- Procedencia. La o el juzgador deberá presentar su excusa ante la autoridad competente, cuando se encuentre incurso en alguna de las causas señaladas en el artículo anterior.

A falta de excusa, podrá presentarse demanda de recusación que obligue a la o al juzgador a apartarse del conocimiento de la causa.

Art. 24.- Inadmisión de recusación. No se admitirá demanda de recusación contra la o el juzgador que conoce de esta. Tampoco se admitirá más de dos recusaciones respecto de una misma causa principal, salvo cuando se hubiere sustituido previamente al juez y haya lugar a una nueva causal de recusación, que no se trate de retardo injustificado.

Art. 25.- Subrogación de la o el juzgador. La recusación no suspenderá el progreso de la causa principal.

Una vez citada la recusación se suspenderá la competencia del juez conforme al Código Orgánico General de Procesos, salvo cuando se fundamente en el retardo injustificado, en cuyo caso solo se suspenderá la competencia cuando la recusación haya sido admitida.

Suspendida la competencia provisionalmente o definitivamente, cuando se trate de retardo injustificado, la autoridad competente deberá nombrar a quién subrogue al juzgador recusado para que continúe conociendo la causa principal.

Si la recusación se presenta contra todos los miembros de una sala o tribunal, la autoridad competente determinará a las o los juzgadores que deberán continuar con la causa principal.

Art. 26.- Competencia. La demanda de recusación contra la o el juzgador se presentará ante otro del mismo nivel y materia.

Cuando se trate de una o un juzgador que integre una sala o tribunal, se presentará ante los demás juzgadores que no estén recusados.

Art. 27.- Caución. Presentada la demanda, dentro del término de tres días, la o el juzgador fijará una caución de entre uno y tres salarios básicos unificados del trabajador en general, que será consignada por la o el actor. Sin este requisito, la demanda no será calificada y se dispondrá su archivo.

Exceptuase del pago de la caución antedicha al Estado. En materias de niñez y adolescencia y laboral, no se exigirá esta caución.

Art. 28.- Audiencia. La audiencia se realizará en el término de cinco días y conforme las reglas previstas en este Código.

Negada la recusación, se ordenará la ejecución de la caución.

Si se suspende provisionalmente la competencia, se ordenará la devolución del proceso.

Art. 29.- Incompetencia como excepción. En los procesos laborales y de niñez y adolescencia, la incompetencia de la o del juzgador podrá alegarse únicamente como excepción.

TÍTULO III SUJETOS DEL PROCESO

CAPÍTULO I REGLAS GENERALES

Art. 30.- Las partes. El sujeto procesal que propone la demanda y aquel contra quien se la intenta son partes en el proceso. La primera se denomina actora y la segunda demandada. Las partes pueden ser:

1. Personas naturales.
2. Personas jurídicas,
3. Comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos.
4. La naturaleza.

Art. 31.- Capacidad procesal. Toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley.

Las y los adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías, conforme con la ley.

En los casos en que ciertos incapaces contraigan obligaciones, se admitirá con respecto a estos asuntos su comparecencia de acuerdo con la ley.

Cuando se trate de comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, comparecerán a través de su representante legal o voluntario.

Las niñas, niños y adolescentes serán escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos.

Art. 32.- Representación de menores de edad e incapaces. Las niñas, niños, adolescentes, y quienes estén bajo tutela o curaduría, comparecerán por medio de su representante legal.

Las personas que se hallen bajo patria potestad serán representadas por la madre o el padre que la ejerza. Las que no estén bajo patria potestad, tutela o curaduría, serán representados por la o el curador designado para la controversia.

En caso de producirse conflicto de intereses entre la o el hijo y la madre o el padre, que haga imposible aplicar esta regla, la o el juzgador designará curador adlitem o curador especial para la representación de niñas, niños y adolescentes.

Art. 33.- Representación de personas jurídicas en el proceso.

Cuando la parte sea una persona jurídica, deberá ser representada en el proceso por su representante legal o judicial.

En el caso de las acciones laborales estas podrán dirigirse contra cualquier persona que a nombre de sus principales ejerza funciones de dirección y administración, aun sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común.

Art. 34.- Representación del causante. Las o los herederos no podrán ser demandados ni ejecutados sino luego de aceptar la herencia. Si no han aceptado la herencia, la demanda se dirigirá en contra del curador de la herencia yacente.

Art. 35.- Representación de la o del insolvente. La o el insolvente será representado por la o el síndico en todo lo que concierne a sus bienes, pero tendrá capacidad para comparecer por sí mismo en lo que se refiere exclusivamente a derechos extra patrimoniales o en las diligencias permitidas en la ley.

Art. 36.- Comparecencia al proceso mediante defensor. Las partes que comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el patrocinio de una o un defensor, salvo las excepciones contempladas en este Código.

La persona que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueda contratar los servicios de una defensa legal privada, para la protección de sus derechos, recurrirá a la Defensoría Pública.

Siempre que una o un defensor concurra a una diligencia sin autorización de la parte a la que dice representar, deberá ratificar su intervención en el término que la o el juzgador señale de acuerdo con las circunstancias de cada caso; si incumple la ratificación, sus actuaciones carecerán de validez.

Esta disposición no será aplicable a la comparecencia a audiencia preliminar a la cual deberá concurrir la o el defensor con la parte.

Art. 37.- Procurador común. Si son dos o más las o los actores por un mismo derecho o dos o más las o los demandados, siempre que sus derechos o excepciones no sean diversos o contrapuestos, la o el juzgador dispondrá que constituyan un procurador común dentro del término que se les conceda, si no lo hacen, la o el juzgador designará entre ellos a la persona que servirá de procuradora y con quien se contará en el proceso. La persona designada no podrá excusarse de desempeñar el cargo.

Para el ejercicio de la procuración común no se requiere ser abogada o abogado.

El nombramiento de procurador o procuradora común podrá revocarse por acuerdo de las partes, o por disposición de la o del juzgador a petición de alguna de ellas siempre que haya motivo que lo justifique. La revocatoria no producirá efecto mientras no comparezca la o el nuevo procurador. La parte que quede liberada de la procuración por revocatoria, podrá continuar con el proceso de forma individual.

CAPÍTULO II REPRESENTACIÓN DE LA NATURALEZA

Art. 38.- Representación de la naturaleza. La naturaleza podrá ser representada por cualquier persona natural o jurídica, colectividad o por el Defensor del Pueblo, quien además podrá actuar por iniciativa propia.

La naturaleza no podrá ser demandada en juicio ni reconvenida. El Defensor del Pueblo responderá conforme con la ley y con este Código.

Las acciones por daño ambiental y el producido a las personas o a su patrimonio como consecuencia de este se ejercerán de forma separada e independiente.

Art. 39.- Medidas. Si por aplicación de otras leyes se hubiera conseguido prevenir, evitar, remediar, restaurar y reparar los daños ambientales, no será necesario tramitar las acciones descritas en este capítulo.

Las medidas remediadoras, restauradoras y reparadoras de los daños ambientales, así como su implementación, se someterán a la aprobación de la autoridad ambiental nacional, En el caso de que no existan tales medidas, la o el juzgador las ordenará.

Art. 40.- Prohibición de doble recuperación. Se prohíbe la doble recuperación de indemnizaciones si los terceros afectados han sido reparados a través de la acción de daños ambientales.

Cuando el Estado o las instituciones comprendidas en el sector público asuman la responsabilidad de reparar o cuando hayan sido condenadas a reparar materialmente mediante sentencia, en un proceso que declare la vulneración de los derechos de la naturaleza, el Estado ejercerá el derecho de repetición, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

CAPÍTULO III PROCURACIÓN JUDICIAL

Art. 41.- Procuradoras y procuradores judiciales. Son las o los mandatarios que tienen poder para comparecer al proceso por la o el actor o la o el demandado.

Las personas que pueden comparecer al proceso por sí mismas son hábiles para nombrar procuradoras o procuradores.

Aun cuando haya procuradora o procurador en el proceso, se obligará a la o al mandante a comparecer, siempre que tenga que practicar personalmente alguna diligencia, como absolver posiciones, reconocer documentos u otros actos semejantes. Cuando la naturaleza de la diligencia lo permita, la o el juzgador autorizará que la comparecencia de la o el mandante se realice mediante videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología. Si se halla fuera del lugar del proceso, se librárá deprecatorio o comisión, en su caso, para la práctica de tal diligencia. Si se encuentra fuera del país se librárá exhorto.

Art. 42.- Constitución de la procuración judicial. La procuración judicial se constituirá únicamente a favor de una o un defensor que no se encuentre inserto en alguna de las prohibiciones previstas en la ley.

La procuración judicial podrá conferirse:

1. Por oficio, en el caso de entidades públicas o mediante escrito reconocido conforme con la ley, ante la o el juzgador del proceso.

2. Por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante autoridad competente.
3. De manera verbal en la audiencia respectiva.

Art. 43.- Facultades. La o el procurador judicial debe atenerse a los términos del poder. Requerirá cláusula especial para sustituir la procuración a favor de otro profesional, allanarse a la demanda, transigir, desistir de la acción o del recurso, aprobar convenios, absolver posiciones, deferir al juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella.

Lo mismo se aplica a la o al defensor autorizado que no tenga procuración judicial.

Art. 44.- Renuncia. Las o los defensores podrán renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente.

Presentada la renuncia, deberá ser informada a la o al juzgador con la constancia de que ha sido comunicada a la o al mandante, quien contará con un plazo de quince días para nombrar nuevo procurador o procuradora. Este cambio no suspende los términos del proceso.

La o el procurador judicial que haya aceptado o ejercido el poder está obligado a continuar desempeñándolo en lo sucesivo sin que le sea permitido excusarse de ejercerlo para no contestar demandas nuevas, cuando está facultado para ello, salvo que renuncie al total ejercicio de dicho poder o que comparezca en el proceso el poderdante, personalmente o por medio de nuevo procurador.

Art. 45.- Terminación. La procuración judicial termina en todos los casos expresados en la ley.

Si fallece la o el poderdante después de presentada la demanda, la o el procurador judicial representará a la sucesión en el proceso hasta

que se nombre curador de la herencia yacente o comparezcan el o los herederos.

CAPÍTULO IV TERCERIAS

Art. 46.- Intervención de una o un tercero. Por regla general, en todo proceso, incluida la ejecución, podrá intervenir una o un tercero a quien las providencias judiciales causen perjuicio directo. La solicitud para intervenir será conocida y resuelta por la o el juzgador que conoce el proceso principal. Se entiende que una providencia causa perjuicio directo a la o el tercero cuando este acredite que se encuentra comprometido en ella, uno o más de sus derechos y no meras expectativas.

Art. 47.- Clases. Las tercerías podrán ser excluyentes de dominio o coadyuvantes, entendidas de la siguiente manera:

1. Son excluyentes de dominio aquellas en las que la o el tercero pretende en todo o en parte, ser declarado titular del derecho discutido.
2. Son coadyuvantes aquellas en que un tercero tiene con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no se extiendan los efectos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida.

Art. 48.- Oportunidad. En el caso de los procesos ordinarios, la tercería se propondrá dentro del término de diez días después de la notificación de la convocatoria a audiencia de juicio.

En el caso de los procesos sumarios, la tercería se propondrá dentro del término de cinco días antes de la fecha de realización de la respectiva audiencia.

Si la tercería se presenta en la ejecución, esta se propondrá desde la convocatoria a audiencia de ejecución hasta su realización.

No serán admisibles las tercerías cuando exista resolución de adjudicación en firme.

Art. 49.- Requisitos y resolución de la solicitud. La o el tercero, junto con la solicitud de intervención, deberá anunciar todos los medios de prueba de los que se valdrá para justificar su solicitud de intervención en el proceso.

La o el tercero que concurre a la audiencia de ejecución deberá portar consigo las pruebas que sustentan su pedido.

Art. 50.- Efectos. Si la intervención es aceptada por la o el juzgador, la o el tercero tendrá los mismos derechos y deberes que las partes.

Las resoluciones que se dicten con respecto a las o los terceros producirán los mismos efectos que para las partes.

CAPÍTULO V

LITIS CONSORCIO

Art. 51.- Litis consorcio. Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia que se expida con respecto a una podría afectar a la otra.

Art. 52.- Relación de los litisconsortes con la contraparte. Salvo disposición en contrario, los litisconsortes serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

LIBRO II ACTIVIDAD PROCESAL

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I CITACIÓN

Art. 53.- Citación. La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador.

Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido.

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial.

Art. 54.- Citación personal. Se cumplirá con la entrega personal a la o el demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que no pueden representarse por sí mismas a su representante legal en cualquier lugar, día y hora, el contenido de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos. De la diligencia la o el citador elaborará el acta respectiva.

Art. 55.- Citación por boletas. Si no se encuentra personalmente a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación.

La citación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo.

Art. 56.- Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se la citará mediante:

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso.
2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo menos tres veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario de seis a veintidós horas y que contendrán un extracto de la demanda o solicitud pertinente. La o el propietario o la o el representante legal de la radiodifusora emitirá el certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia del audio.

La citación por la radio se realizará cuando, a criterio de la o del juzgador, este sea el principal medio de comunicación del lugar.

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la o del demandado y que se han efectuado todas

las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso, la hará la o el solicitante bajo juramento que se presentará ante la o el juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o del actor.

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado.

La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta condición. De admitirla, deberá motivar su decisión.

Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda.

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a la verdad con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o del demandado o respecto al hecho de no haber sido posible determinar su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo, para la investigación.

Art. 57.- Citación a las y los ecuatorianos en el exterior. La citación a las y los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares.

Art. 58.- Citación a las y los herederos. A las y los herederos conocidos se citará personalmente o por boleta. A las o los herederos desconocidos cuya residencia sea imposible determinar se citará a través de uno de los medios de comunicación, en la forma prevista en este Código.

Art. 59.- Citación a comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y campesinas no organizadas como persona jurídica. Se realizará con la entrega de una copia de la demanda, de la petición de una diligencia

preparatoria, de las providencias recaídas en ella y de la respectiva resolución, a tres miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados.

Además de las copias en idioma castellano, se entregará copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia.

Art. 60.- Citación a organismos o instituciones estatales.- Las citaciones a las instituciones del Estado y sus funcionarios por asuntos propios de su empleo, se realizarán en la dependencia local más próxima al lugar del proceso.

Para el caso de la citación al Procurador General del Estado se procederá conforme con la ley.

Art. 61.- Citación a agentes diplomáticos. La citación a las o los agentes diplomáticos extranjeros, en los asuntos contenciosos que le corresponde conocer a la Corte Nacional de Justicia, se hará a través del ministerio o la institución encargada de las relaciones exteriores mediante oficio.

Para constancia de haberse practicado la citación, se agregará a los autos la nota en la que el ministerio o la institución comunique haber remitido el oficio con la fecha de recepción del mismo.

Art. 62.- Lugar de la citación. La o el citador estará impedido de realizar el acto de la citación únicamente cuando los datos entregados por la o el actor hagan imposible determinar el lugar de la citación.

La existencia de defectos puramente formales, fácilmente subsanables o que no afecten la determinación del lugar para realizar el acto no serán obstáculo para la citación. Si la o el citador no cumple esta disposición será sancionado conforme con la ley.

Art. 63.- Constancia de la citación y responsabilidad del citador. En el proceso se extenderá acta de la citación con la expresión del nombre

completo de la o del citado, la forma en la que se la haya practicado y la fecha, hora y lugar de la misma.

La o el citador tendrá responsabilidad administrativa, civil y penal por el incumplimiento de sus obligaciones, incluida la certificación de la identidad de la persona citada y de la determinación del lugar de la citación. Se deja a salvo la responsabilidad del Estado por la falta o deficiencia en la prestación del servicio.

La o el citador podrá hacer uso de cualquier medio tecnológico para dejar constancia de lo actuado.

El Consejo de la Judicatura reglamentará el sistema de acreditación de las personas naturales o jurídicas que deban realizar la citación.

Art. 64.- Efectos. Son efectos de la citación:

1. Requerir a la o el citado a comparecer ante la o el juzgador para deducir excepciones.
2. Constituir a la o el demandado como poseedor de mala fe e impedir que haga suyos los frutos de la cosa que se le demanda, según lo dispuesto en la ley.
3. Constituir a la o el deudor en mora, según lo previsto en la ley.
4. Interrumpir la prescripción.

CAPÍTULO II

NOTIFICACIÓN

Art. 65.- Notificación.- Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el juzgador, todas las providencias judiciales.

Las providencias judiciales deberán notificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su pronunciamiento. Su incumplimiento acarreará sanciones conforme con lo determinado en la ley.

Art. 66.- Regla general.- Las partes, al momento de comparecer al proceso, determinarán dónde recibirán las notificaciones. Son idóneos los siguientes lugares: el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal.

Art. 67.- Notificación en audiencias y otras diligencias.- Las notificaciones se harán en persona dentro de la audiencia o por una boleta, cuando conste que la parte se ha ausentado.

Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y otras diligencias, se considerarán notificadas en la fecha y hora en que estas se celebren. Se deja a salvo la notificación hecha a la parte que no concurra, en el domicilio, casillero judicial, domicilio judicial electrónico o correo electrónico.

Art. 68.- Constancia de la notificación. En el sistema de seguimiento de procesos se registrarán las notificaciones realizadas con indicación del lugar, día y hora de la diligencia.

CAPÍTULO III

COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Art. 69.- Comunicaciones a autoridades y a terceros. Cuando la o el juzgador deba comunicar a una autoridad o a un tercero una providencia para el cumplimiento de un acto procesal, lo hará a través de una comunicación debidamente registrada en el proceso, enviada por medio físico o digital.

Art. 70.- Comunicaciones internacionales. Las comunicaciones dirigidas a autoridades en el extranjero se enviarán por medio de exhorto o

carta rogatoria conforme con lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales.

Art. 71.- Colaboración con la Función Judicial. La o el juzgador está facultado para requerir a las personas naturales o jurídicas, la información necesaria. Las requeridas están obligadas a proveerla de manera inmediata y clara haciendo uso de los medios tecnológicos más eficientes.

Art. 72.- Deprecatorio y comisión. La o el juzgador podrá ordenar la práctica de alguna diligencia mediante deprecatorio o comisión a otra u otro juzgador dentro del territorio nacional. Esta facultad no incluye la realización de audiencias ni la práctica de pruebas.

CAPÍTULO IV

TÉRMINO

Art. 73.- Término. Se entiende por término al tiempo que la ley o la o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier diligencia o acto judicial. Los términos correrán en días hábiles.

Toda diligencia iniciará puntualmente en el lugar, día y hora señalados.

Para el ejercicio de las acciones se respetarán los términos o plazos previstos en este Código y en la ley.

Art. 74.- Término para dictar providencias. Si la ley no señala expresamente un término para dictar una determinada providencia, estas se expedirán dentro del término de tres días contados desde la petición que formule una parte, más un día adicional por cada cien folios a discreción de la o del juzgador.

Art. 75.- Término legal. Los términos señalados en la ley son irrenunciables e improrrogables.

Art. 76.- Término judicial. En los casos en que la ley no prevea un término para la realización de una diligencia o actuación procesal, lo determinará la o el juzgador, con el carácter de perentorio y vinculante para las partes.

Las partes podrán reducir, suspender o ampliar los términos judiciales de común acuerdo.

Si el término judicial es común, la abreviación o la renuncia requerirá el consentimiento de todas las partes y la aprobación de la o del juzgador.

Las o los juzgadores concederán además la suspensión de términos, por fuerza mayor, caso fortuito, enfermedad grave o impedimento físico de alguna de las partes o de sí mismos o por calamidad doméstica, siempre que al solicitar la suspensión se acompañen pruebas.

La suspensión no se producirá de hecho, sino desde el momento en que la o el juzgador la conceda.

La suspensión no podrá durar más de ocho días.

Art. 77.- Comienzo y vencimiento del término. El término empieza a correr en forma común, con respecto a todas las partes, desde el día hábil siguiente a la última citación o notificación. Su vencimiento ocurre el último momento hábil de la jornada laboral.

Art. 78.- Días y horas hábiles. No correrán los términos en los días sábados, domingos y feriados.

Regirá también para el cómputo de términos el traslado de días festivos, de descanso obligatorio o recuperación de la jornada laboral que se haga conforme con el decreto ejecutivo que dicte la o el Presidente de la República, en ejercicio de la atribución que le confiere la ley.

Son horas hábiles las que corresponden al horario de trabajo que fije el Consejo de la Judicatura. En estas se realizarán las actuaciones

administrativas y jurisdiccionales. Aquellas diligencias que se hayan iniciado podrán continuar incluso en las horas inhábiles hasta su conclusión o suspensión, de así decidirlo la o el juzgador.

CAPÍTULO V AUDIENCIA

Art. 79.- Audiencia. Las audiencias se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda realizarse la audiencia se dejará constancia procesal.

Al inicio de cada audiencia la o el juzgador que dirija la misma se identificará, disponiendo que la o el secretario constate la presencia de todas las personas notificadas.

La o el juzgador concederá la palabra a las partes, para que argumenten, presenten sus alegaciones y se practiquen las pruebas, cuidando siempre que luego de la exposición de cada una, se permita ejercer el derecho a contradecir de manera clara, pertinente y concreta lo señalado por la contraria. Iniciará la parte actora.

Durante la audiencia, la o el juzgador puede autorizar que las partes intervengan personalmente. En ese caso, la o el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica.

Las partes tendrán derecho a presentar de forma libre sus propuestas, intervenciones y sustentos.

La o el juzgador concederá la palabra a quien lo solicite y abrirá la discusión sobre los temas que sean admisibles,

El idioma oficial es el castellano, de no poder entender o expresarse con facilidad, las personas intervinientes serán asistidas por una o un traductor designado por la o el juzgador.

Las personas intervinientes, en caso de no poder escuchar o entender oralmente, serán asistidas por un intérprete designado por la o el juzgador, quien podrá usar todos los mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión. Lo anterior no obsta para estar acompañados por un intérprete de su confianza.

Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Para la interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación de la sentencia o auto escrito.

Cualquier solicitud o recurso horizontal presentado por alguna de las partes antes de la fecha de audiencia, no suspenderá su realización. La o el juzgador resolverá dichas peticiones en la misma audiencia.

Art. 80.- Dirección de las audiencias. La dirección de las audiencias corresponde exclusivamente a la o al juzgador competente y en la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales y tribunales distritales de lo contencioso tributario y administrativo, a la o al juzgador ponente, como garantes de los derechos y de las normas.

Dentro de sus facultades de dirección podrá indicar a las partes los asuntos a debatir, moderar la discusión, impedir que sus alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes y ordenar la práctica de pruebas cuando sea procedente. Asimismo, podrá limitar el tiempo del uso de la palabra de las personas que intervengan, interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo o ilegal de su tiempo. Ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y garantizar su eficaz realización.

La o el juzgador dirigirá la audiencia de tal manera que las partes y el público comprendan lo que ocurre.

Art. 81.- Presencia ininterrumpida de la o del juzgador en las audiencias. La o el juzgador que inicie una audiencia debe dirigirla y permanecer

en ella. Su ausencia injustificada dará lugar a la nulidad no subsanable de la diligencia. Las audiencias se desarrollarán en forma continua hasta su conclusión.

La audiencia podrá reiniciarse con una o un juzgador distinto al que inició la diligencia, cuando se demuestre la existencia de caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 82.- Suspensión. La o el juzgador podrá suspender la audiencia en los siguientes casos:

1. Cuando en la audiencia ya iniciada concurren razones de absoluta necesidad, la o el juzgador ordenará la suspensión por el tiempo mínimo necesario, que no podrá ser mayor a dos días, luego de lo cual proseguirá con la audiencia. Al ordenar la suspensión la o el juzgador determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia.

Si reinstalada la audiencia una de las partes no comparece, se observará la regla general, prevista en este Código, para el caso de la inasistencia de las partes. Si la o el juzgador no reinstala la audiencia, será sancionado conforme con la ley.

2. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor que afecte al desarrollo de la diligencia la o el juzgador deba suspender una audiencia, determinará el término para su reanudación, que no podrá ser mayor a diez días. Al reanudarla, efectuará un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento.

Transcurrido el término indicado en cada caso, sin que la audiencia se haya reanudado, se dejará sin efecto y deberá realizarse nuevamente. La inobservancia de los términos por la o el juzgador o las partes, será sancionada conforme con la ley.

Art. 83.- Publicidad de las audiencias. Las audiencias serán grabadas solamente por el sistema implementado por la autoridad competente.

Se prohíbe fotografiar, filmar o transmitir la audiencia. Su contenido no podrá ser difundido por ningún medio de comunicación.

Las partes pueden acceder a las grabaciones oficiales. No se conferirá copia cuando la o el juzgador considere que podría vulnerarse los derechos de niñas, niños, adolescentes, familia, secretos industriales o información de carácter tributario.

El contenido de la grabación oficial podrá ser objetado hasta veinticuatro horas después de realizada la audiencia.

En todos los casos en que se entregue copia de la grabación de una audiencia, se prevendrá de la responsabilidad por el manejo abusivo de la información.

Art. 84.- Deberes de las personas asistentes a las audiencias. Quienes asistan a las audiencias deberán guardar respeto y silencio. No podrán llevar ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. Tampoco podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o irrespetuoso. La o el juzgador con el apoyo de la Policía Nacional, si el caso lo amerita, podrá evitar el ingreso u ordenar la salida de quienes no cumplan sus disposiciones.

Art. 85.- Comunicación de las partes con sus defensores. Las partes podrán comunicarse libremente con sus defensores durante las audiencias, siempre que ello no perturbe el orden.

Art. 86.- Comparecencia a las audiencias. Las partes están obligadas a comparecer personalmente a las audiencias, excepto en las siguientes circunstancias:

1. Que concurra procurador judicial con cláusula especial o autorización para transigir.
2. Que concurra procurador común o delegado con la acreditación co-

rrespondiente, en caso de instituciones de la administración pública.

3. Cuando a petición de parte la o el juzgador haya autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología.

Art. 87.- Efectos de la falta de comparecencia a las audiencias. En caso de inasistencia de las partes se procederá de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como abandono.
2. Cuando la o el demandado o la o el requerido no comparece a la audiencia que corresponda, se continuará con la audiencia y se aplicará las sanciones y efectos, entendiéndose siempre que pierde la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos. Sin embargo, en caso de retraso, se admitirá su participación, tomando la audiencia en el estado en que se encuentre.

Si la o el juzgador dispone de oficio la realización de una audiencia la proseguirá debiendo resolver lo que corresponda conforme con el objeto para el cual la convocó.

CAPÍTULO VI

PROVIDENCIAS JUDICIALES

Art. 88.- Clases de providencias. Las o los juzgadores se pronuncian y deciden a través de sentencias y autos.

La sentencia es la decisión de la o del juzgador acerca del asunto o asuntos sustanciales del proceso.

El auto interlocutorio es la providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento.

El auto de sustanciación es la providencia de trámite para la prosecución de la causa.

Art. 89.- Motivación. Toda sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho. La nulidad por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser alegada como fundamento del recurso de apelación o causal del recurso de casación.

Art. 90.- Contenido general de sentencias y autos. Además del contenido especial que la ley señale para determinados autos o sentencias, todo pronunciamiento judicial escrito deberá contener:

1. La mención de la o del juzgador que la pronuncie.
2. La fecha y lugar de su emisión.
3. La identificación de las partes.
4. La enunciación resumida de los antecedentes de hecho.
5. La motivación de su decisión.
6. La decisión adoptada con precisión de lo que se ordena.
7. La firma de la o del juzgador que la ha pronunciado.

En ningún caso será necesario relatar la causa.

Art. 91.- Omisiones sobre puntos de derecho. La o el juzgador debe corregir las omisiones o errores de derecho en que hayan incurrido las personas que intervienen en el proceso. Sin embargo, no podrá otorgar o declarar mayores o diferentes derechos a los pretendidos en la demanda, ni fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes.

Art. 92.- Congruencia de las sentencias. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. Resolverán sobre las peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del proceso.

Art. 93.- Pronunciamiento judicial oral. Al finalizar la audiencia la o el juzgador pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente y cuando la complejidad del caso lo amerite podrá suspender la audiencia por el término de hasta diez días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia. La resolución escrita motivada se notificará en el término de hasta diez días. El incumplimiento del término para dictar sentencia será sancionado conforme con lo dispuesto por la ley.

Art. 94.- Contenido de las resoluciones dictadas en audiencia.

Las resoluciones judiciales de fondo o mérito dictadas en audiencia deberán contener:

1. El pronunciamiento claro y preciso sobre el fondo del asunto.
2. La determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o niega.
3. La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas.

La o el juzgador, en el auto interlocutorio o sentencia escrita, motivará su decisión y cumpliendo con los requisitos, respetará y desarrollará los parámetros enunciados en el procedimiento oral.

Art. 95.- Contenido de la sentencia escrita. La sentencia escrita contendrá:

1. La mención de la o del juzgador que la pronuncie.
2. La fecha y lugar de su emisión.
3. La identificación de las partes.
4. La enunciación breve de los hechos y circunstancias objeto de la demanda y defensa de la o del demandado.

5. La decisión sobre las excepciones presentadas.
6. La relación de los hechos probados, relevantes para la resolución.
7. La motivación.
8. La decisión que se pronuncie sobre el fondo del asunto, determinando la cosa, cantidad o hecho al que se condena, si corresponde.
9. La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas.

Además de la emisión en idioma castellano, a petición de parte y cuando una de estas pertenezca a una comunidad indígena, la sentencia deberá ser traducida al kichwa o al shuar según corresponda.

Art. 96.- Contenido de la sentencia de expropiación. Además de lo previsto en el artículo anterior, la sentencia de expropiación contendrá:

1. La fijación de los linderos de lo expropiado y el precio.
2. La determinación de la parte del precio que debe entregarse al acreedor si existe algún gravamen, mediante la relación del precio total y el volumen de la deuda.

Si se trata de la expropiación total del predio y el precio es inferior al monto de lo adeudado, se ordenará pagar todo el precio al acreedor, dejando a salvo su derecho para el cobro del saldo pendiente.

También se descontarán, el plusvalor que tenga el inmueble en caso de expropiación parcial, los impuestos municipales y, en particular, el impuesto a las utilidades obtenidas por el expropiado al momento del pago de la compensación por parte de la entidad expropiante.

3. La determinación de la indemnización que se debe pagar al arrendatario por concepto de terminación del arrendamiento, conforme con las reglas del Código Civil.
4. La cancelación del embargo una vez que se ordene poner el precio a disposición de la o del juzgador que lo haya ordenado. Asimismo, se

dispondrá la cancelación de las medidas cautelares, prohibiciones de gravar y enajenar y se darán por terminados los contratos y gravámenes que se hayan constituido sobre el inmueble, de manera que se transfiera a la entidad expropiante libre de cargas.

5. La orden de expropiación total, en el caso de que quede para el dueño una parte inferior al 15% de la propiedad, por extensión o precio.

En todos los casos se ordenará la cancelación de gravámenes.

Depositado el precio la sentencia se protocolizará y se inscribirá para que sirva de título de propiedad.

Art. 97.- Efecto vinculante de las sentencias y autos. Las sentencias y autos no aprovechan ni perjudican sino a las partes que litigaron en el proceso sobre el que recayó el fallo, salvo los casos expresados en la ley.

Art. 98.- Resolución que condene a indemnización. El juzgador fijará en la sentencia o auto interlocutorio el importe de daños y perjuicios que deberá pagar la parte condenada a la contraparte, si aquellos han sido objeto de la demanda. De no ser posible esta determinación, establecerá las bases sobre las cuáles deberá practicarse la liquidación.

Art. 99.- Autoridad de cosa juzgada de los autos interlocutorios y de las sentencias. Las sentencias y autos interlocutorios pasarán en autoridad de cosa juzgada en los siguientes casos:

1. Cuando no sean susceptibles de recurso.
2. Si las partes acuerdan darle ese efecto.
3. Si se dejan transcurrir los términos para interponer un recurso sin hacerlo.
4. Cuando los recursos interpuestos han sido desistidos, declarados desiertos, abandonados o resueltos y no existen otros previstos por la ley.

Sin embargo, lo resuelto por auto interlocutorio firme que no sea de aquellos que ponen fin al proceso, podrá ser modificado al dictarse sentencia, siempre que no implique retrotraer el proceso.

Art. 100.- Inmutabilidad de la sentencia. Pronunciada y notificada la sentencia, cesará la competencia de la o del juzgador respecto a la cuestión decidida y no la podrá modificar en parte alguna, aunque se presenten nuevas pruebas. Podrá, sin embargo, aclararla o ampliarla a petición de parte, dentro del término concedido para el efecto.

Los errores de escritura, como de nombres, de citas legales, de cálculo o puramente numéricos podrán ser corregidos, de oficio o a petición de parte, aun durante la ejecución de la sentencia, sin que en caso alguno se modifique el sentido de la resolución.

Art. 101.- Sentencia ejecutoriada. La sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables con respecto a las partes que intervinieron en el proceso o de sus sucesores en el derecho. En consecuencia, no podrá seguirse nuevo proceso cuando en los dos procesos hay tanto identidad subjetiva, constituida por la intervención de las mismas partes; como identidad objetiva, consistente en que se demande la misma cosa, cantidad o hecho, o se funde en la misma causa, razón o derecho.

Para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no solo la parte resolutiva, sino también la motivación de la misma.

CAPÍTULO VII

SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y ACTAS DE MEDIACION EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO

Art. 102.- Competencia. Para el reconocimiento y homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación con efecto de sentencia en su legislación de origen, expedidos en el extranjero, corresponderá a la sala de la Corte Provincial especializada del domicilio de la o del requerido.

La ejecución de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, corresponderá a la o al juzgador de primer nivel del domicilio de la o del demandado competente en razón de la materia.

Si la o el demandado no tiene su domicilio en el Ecuador, será competente la o el juzgador de primer nivel del lugar en el que se encuentren los bienes o donde deba surtir efecto la sentencia, laudo arbitral o acta de mediación.

Art. 103.- Efectos. Las sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero que hayan sido homologados y que hayan sido pronunciados en procesos contenciosos o no contenciosos tendrán en el Ecuador la fuerza que les concedan los tratados y convenios internacionales vigentes, sin que proceda su revisión sobre el asunto de fondo, objeto del proceso en que se dictaron, En materia de niñez y adolescencia, se estará a lo que dispone la ley de la materia y los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.

Art. 104.- Homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero. Para la homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidos en el extranjero, la sala competente de la Corte Provincial deberá verificar:

1. Que tengan las formalidades externas necesarias para ser considerados auténticos en el Estado de origen.
2. Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada conforme con las leyes del país en donde fue dictada y la documentación anexa necesaria está debidamente legalizada.
3. Que de ser el caso, estén traducidos.
4. Que se acredite con las piezas procesales y certificaciones pertinentes que la parte demandada fue legalmente notificada y que se haya asegurado la debida defensa de las partes.
5. Que la solicitud indique el lugar de citación de la persona natural o jurídica contra quien se quiere hacer valer la resolución expedida en el extranjero.

Para efectos del reconocimiento de las sentencias y laudos arbitrales en contra del Estado, por no tratarse de asuntos comerciales, deberá ade-

más demostrarse que no contrarían las disposiciones de la Constitución y la ley, y que estén arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta de tratados y convenios internacionales se cumplirán si constan en el exhorto respectivo o la ley nacional del país de origen reconoce su eficacia y validez.

Art. 105.- Procedimiento para homologación. Para proceder a la homologación, la persona requirente presentará su solicitud ante la sala competente de la Corte Provincial, la que revisado el cumplimiento de este capítulo, dispondrá la citación del requerido en el lugar señalado para el efecto.

Citada la persona contra quien se hará valer la sentencia, tendrá el término de cinco días para presentar y probar su oposición a la homologación.

La o el juzgador resolverá en el término de treinta días contados desde la fecha en que se citó. Si se presenta oposición debidamente fundamentada y acreditada y la complejidad de la causa lo amerite, la Corte convocará a una audiencia, la cual se sustanciará y resolverá conforme con las reglas generales de este Código. La audiencia deberá ser convocada dentro del término máximo de veinte días contados desde que se presentó la oposición.

La sala resolverá en la misma audiencia. De la sentencia de la sala de la Corte Provincial podrán interponerse únicamente los recursos horizontales.

Resuelta la homologación se cumplirán las sentencias, laudos y actas de mediación venidos del extranjero, en la forma prevista en este Código sobre la ejecución.

Art. 106.- Efectos probatorios de una sentencia, laudo arbitral o acta de mediación expedidos en el extranjero. La parte que dentro de un proceso, pretenda hacer valer los efectos probatorios de una sentencia, laudo arbitral o acta de mediación expedidos en el extranjero, previamente deberá homologarlos en la forma prevista en este Código.

CAPÍTULO VIII

NULIDADES

Art. 107.- Solemnidades sustanciales. Son solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos:

1. Jurisdicción.
2. Competencia de la o del juzgador en el proceso que se ventila.
3. Legitimidad de personería.
4. Citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente.
5. Notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias.
6. Notificación a las partes con la sentencia.
7. Conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe.

Solamente se podrá declarar la nulidad de un acto procesal en los casos en los que la ley señale expresamente tal efecto.

Art. 108.- Nulidad por falta de citación. Para que se declare la nulidad por falta de citación con la demanda, es necesario que esta omisión haya impedido que la o el demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos y reclame por tal omisión.

Art. 109.- Efecto de la nulidad. La nulidad de un acto procesal tiene como efecto retrotraer el proceso al momento procesal anterior a aquel en que se dictó el acto nulo.

Art. 110.- Declaración de nulidad y convalidación. La nulidad del proceso deberá ser declarada:

1. De oficio o a petición de parte, en el momento en que se ha producido la omisión de solemnidad sustancial.

2. A petición de parte, en las audiencias respectivas cuando la nulidad haya sido invocada como causa de apelación o casación.

No puede pedir la nulidad de un acto procesal quien la ha provocado.

No se declarará la nulidad por vicio de procedimiento cuando la omisión haya sido discutido en audiencia preliminar o fase de saneamiento.

Art. 111.- Nulidad y apelación. El tribunal que deba pronunciarse sobre el recurso de apelación examinará si en el escrito de interposición se ha reclamado la nulidad procesal.

Solamente en caso de que el tribunal encuentre que el proceso es válido, se pronunciará sobre los argumentos expresados por la o el apelante. Si encuentra que hay nulidad procesal y que la misma ha sido determinante porque la violación ha influido o ha podido influir en la decisión del proceso, la declarará a partir del acto viciado y remitirá el proceso a la o al juzgador de primer nivel.

Los procesos conocidos por la o el juzgador superior, sin que se haya declarado la nulidad, no podrán ser anulados por las o los juzgadores inferiores, aun cuando hayan observado después, que ha faltado alguna solemnidad sustancial.

CAPÍTULO IX

NULIDAD DE SENTENCIA

Art. 112.- Nulidad de sentencia. La sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso es nula en los siguientes casos:

1. Por falta de jurisdicción o competencia de la o del juzgador que la dictó, salvo que estas se hayan planteado y resuelto como excepciones previas.
2. Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo que esta se haya planteado y resuelto como excepción previa.

3. Por no haberse citado con la demanda a la o el demandado si este no compareció al proceso.
4. Por no haberse notificado a las partes la convocatoria a las audiencias o la sentencia, siempre y cuando la parte no haya comparecido a la respectiva audiencia o no se haya interpuesto recurso alguno a la sentencia.

Las nulidades comprendidas en este artículo podrán demandarse ante la o el juzgador de primera instancia de la misma materia de aquel que dictó sentencia, mientras esta no haya sido ejecutada. No podrán ser conocidas por la o el juzgador que las dictó. La presentación de la demanda de nulidad no impide que se continúe con la ejecución.

La nulidad de la sentencia no podrá demandarse cuando haya sido expedida por las salas de la Corte Nacional de Justicia y se dejará a salvo las acciones que franquee la Constitución de la República.

CAPÍTULO X

EXPEDIENTES Y REGISTRO

Art. 113.- Expediente. En caso de pérdida, deterioro o mutilación de los documentos incorporados al expediente físico, la reposición se hará sobre la base de las impresiones del expediente electrónico debidamente certificadas por el funcionario competente.

Art. 114.- Expediente físico. Es el que contiene todos los documentos que deben reducirse a escrito y los registros de la realización de las actuaciones orales pero no el contenido de las mismas.

Art. 115.- Expediente electrónico. Es el medio informático en el cual se registran las actuaciones judiciales. En el expediente electrónico se deben almacenar las peticiones y documentos que las partes pretendan utilizar en el proceso.

Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original.

Los expedientes electrónicos deben estar protegidos por medio de sistemas de seguridad de acceso y almacenados en un medio que garantice la preservación e integridad de los datos.

Art. 116.- Actuaciones procesales. Podrán realizarse a través de medios electrónicos, informáticos, magnéticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología.

Art. 117.- Documentos digitalizados. A las peticiones y demás actos de impulso procesal que se realicen por medio electrónico se acompañarán digitalizados o escaneados documentos de diversa procedencia, estructura y formatos, textos, sonido e imágenes.

Los documentos cuya digitalización sea inviable por su gran volumen o por su ilegibilidad deberán ser presentados físicamente en la unidad judicial a más tardar el día siguiente del envío de la petición electrónica.

Art. 118.- Registro. Las actuaciones realizadas por o ante la o el juzgador se registrarán por cualquier medio telemático instalado en las dependencias judiciales, a fin de garantizar la conservación, reproducción de su contenido y su seguridad. Se incorporarán a la base de datos del sistema de actuaciones judiciales dentro del correspondiente expediente electrónico.

Cualquier persona tendrá derecho a solicitar copias de los registros de las actuaciones, diligencias procesales y en general del expediente, excepto las que tengan el carácter de reservado.

Las copias se conferirán siempre en medio electrónico, salvo que se acredite la necesidad de que sean entregadas en documento físico. En este último caso, la o el coordinador de la unidad judicial las otorgará a costa del requirente, y certificadas, de así habérselo solicitado.

Pero las copias de las grabaciones de las audiencias solo se conferirán a las partes.

Art. 119.- Registro electrónico de actos procesales. El registro electrónico se realizará conforme con las siguientes reglas:

1. Se sentará razón electrónica de todas las diligencias, actuaciones y audiencias.
2. Se empleará los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado con el fin de que estén al alcance de las partes procesales, de preferencia grabaciones digitales y comunicaciones electrónicas.
3. Al finalizar una audiencia se sentará una razón en la que conste el número de expediente, fecha, lugar, nombre de los sujetos procesales asistentes, la duración de la misma y la decisión adoptada, todo lo cual, se ingresará junto con el registro de las audiencias al expediente físico y digital.

TÍTULO II DILIGENCIAS PREPARATORIAS

Art. 120.- Aplicación. Todo proceso podrá ser precedido de una diligencia preparatoria, a petición de parte y con la finalidad de:

1. Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso.
2. Anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse.

La o el juzgador que conozca la diligencia preparatoria será también competente para conocer la demanda principal.

Art. 121.- Presentación y calificación de la diligencia. La parte que solicite diligencia preparatoria señalará los nombres, apellidos y domicilio de la persona contra quien promoverá el proceso, el objeto del mismo y la finalidad concreta del acto solicitado.

La o el juzgador calificará la petición y dispondrá o rechazará su práctica. En el primer caso citará a la persona contra quien se la pide y señalará día y hora en que se efectúe la diligencia.

La persona contra quien se promueve la diligencia podrá, en el momento de la citación, oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación. La o el juzgador resolverá lo que corresponda. Si existe agravio, la o el solicitante o la parte contra quien se dicta el acto solicitado, podrá apelar con efecto diferido.

Si la o el juzgador niega la diligencia solicitada, la parte afectada podrá interponer recurso de apelación con efecto suspensivo.

Art. 122.- Diligencias preparatorias. Además de otras de la misma naturaleza, podrá solicitarse como diligencias preparatorias:

1. La exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar o sobre la que se practicará secuestro o embargo; la del testamento, cuando la o el peticionario se considere la o el heredero, legataria o legatario o albacea; la de los libros de comercio cuando corresponda y demás documentos pertenecientes al comerciante individual, la sociedad, comunidad o asociación; exhibición de los documentos necesarios para la rendición de cuentas por quien se halle legalmente obligado a rendirlas; y en general, la exhibición de documentos en los casos previstos en este Código.
2. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida, por parte de su enajenante en caso de evicción o pretensiones similares.
3. El reconocimiento de un documento privado.
4. El nombramiento de tutora o tutor o curadora o curador para las o los incapaces que carezcan de guardadora o guardador o en los casos de herencia yacente, bienes de la persona ausente y de la o del deudor que se oculta.
5. La apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del sistema financiero.

6. La inspección preparatoria si la cosa puede alterarse o perderse.
7. La recepción de las declaraciones urgentes de las personas que, por su avanzada edad o grave enfermedad se tema fundadamente puedan fallecer o de quienes estén próximos a ausentarse del país en forma permanente o por un largo período.

Art. 123.- Procedimiento. La competencia para conocer y ordenar la práctica de las diligencias preparatorias, se radica por sorteo de acuerdo con la materia del proceso en que se pretendan hacer valer y determina la competencia de la o del juzgador para conocer el proceso principal.

Si la o el peticionario no concurre a la diligencia, tendrá los mismos efectos de la falta de comparecencia a las audiencias.

TÍTULO III PROVIDENCIAS PREVENTIVAS

Art. 124.- Procedencia. Cualquier persona puede, antes de presentar su demanda y dentro del proceso, solicitar el secuestro o la retención de la cosa sobre la que se litiga o se va a litigar o de los bienes que aseguren el crédito.

El secuestro o la retención se solicitará a la o al juzgador de primera instancia, aun cuando la causa se halle ante la corte provincial.

Art. 125.- Requisitos. Para que se ordene el secuestro o la retención, es necesario:

1. Que se pruebe la existencia del crédito.
2. Que se pruebe que los bienes de la o del deudor se encuentren en tal estado, que no alcancen a cubrir la deuda o que pueden desaparecer u ocultarse o que el deudor trate de enajenarlos.

Art. 126.- Prohibición de enajenar bienes inmuebles. La o el juzgador, en los casos permitidos por la ley y a solicitud de la o del acreedor, podrá

prohibir la enajenación de bienes inmuebles de la o del deudor, para lo cual se notificará al respectivo registrador de la propiedad quien inscribirá la prohibición de enajenar sin cobrar derechos.

Mientras subsista la inscripción no podrán enajenarse ni hipotecarse los inmuebles cuya enajenación se ha prohibido, ni imponerse sobre ellos gravamen alguno.

Para la prohibición de enajenar bienes inmuebles, bastará que se acompañe prueba del crédito y de que la o el deudor, al realizar la enajenación, no tendría otros bienes saneados, suficientes para el pago.

Art. 127.- Procedimiento. Presentada la solicitud de providencias preventivas, conforme con los requisitos de la demanda, la o el juzgador en el término de cuarenta y ocho horas convocará audiencia en la que resolverá dicha solicitud.

Art. 128.- Interrupción de providencias preventivas. La o el deudor podrá interrumpir las providencias preventivas previstas en los artículos precedentes, asegurando con caución suficiente.

Art. 129.- Secuestro. Podrá ordenarse el secuestro de bienes y sus frutos, en los casos en que se tema su deterioro.

La parte contra quien se pida el secuestro, podrá oponerse prestando, en el acto, caución suficiente.

El secuestro de bienes inmuebles se inscribirá en el registro de la propiedad. Mientras subsista el gravamen no podrá inscribirse otro, excepto la venta en remate forzoso.

Art. 130.- Retención. La retención se verificará en las rentas, créditos o bienes que tenga la o el deudor en poder de una o un tercero.

Ordenada la retención, bastará que se notifique a la persona en cuyo poder estén las rentas, créditos o bienes que se retengan, para que no se

los entregue sin orden judicial. Esta orden podrá impugnarse en el término de tres días.

Art. 131.- Arraigo. La o el acreedor que tema que la o el deudor se ausente para eludir el cumplimiento de una obligación, puede solicitar el arraigo, siempre y cuando demuestre la existencia del crédito, que la o el deudor es extranjero y que no tiene bienes raíces suficientes en el país.

Art. 132.- Recursos. Las providencias preventivas no serán apelables sino en efecto no suspensivo.

Art. 133.- Caducidad. Las providencias preventivas, si no se propone la demanda en lo principal, caducarán en el término de quince días de ordenadas o de que se hizo exigible la obligación. En este caso, la o el solicitante pagará los daños y perjuicios ocasionados.

TÍTULO IV APREMIOS

Art. 134.- Apremios. Son aquellas medidas coercitivas que aplican las o los juzgadores para que sus decisiones sean cumplidas por las personas que no las observen voluntariamente dentro de los términos previstos.

Las medidas de apremio deben ser idóneas, necesarias y proporcionales.

El apremio es personal cuando la medida coercitiva recae sobre la persona y es real cuando recae sobre su patrimonio.

Art. 135.- Facultades de la o del juzgador. La o el juzgador podrá aplicar como apremio cualquier medida que estime conducente al cumplimiento de una resolución judicial, siempre que a ello haya antecedido la correspondiente prevención legal.

La o el juzgador, puede ordenar la aplicación de un apremio personal cuando la ley expresamente lo autorice. En los demás casos impondrá

sanciones pecuniarias de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Art. 136.- Procedimiento. Los apremios únicamente podrán ejecutarse cuando a la o al juzgador le conste que se ha incumplido la orden dentro del término en el cual debió realizarse lo ordenado.

El apremio personal se ejecutará con la intervención de la Policía Nacional. La o el juzgador dictará una providencia que deberá contener la indicación del número del proceso, los nombres, apellidos y número de cédula de la persona apremiada y los fundamentos de derecho para adoptar la medida.

La providencia firmada por la o el juzgador debe notificarse a la Policía Nacional y será responsabilidad de la o del juzgador su cumplimiento.

Art. 137.- Apremio personal en materia de alimentos. En caso de que el padre o la madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, la o el juzgador a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por treinta días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por sesenta días más y hasta por un máximo de ciento ochenta días.

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, la o el juzgador ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el deudor.

Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador que conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptorá el pago en efectivo o cheque certificado.

Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador dispondrá su libertad inmediata.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá ejecutar el pago en contra de las o los demás obligados.

Similar procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios.

No cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios.

Art. 138.- Cesación de los apremios. La prohibición de salida del país y el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si la o el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por la o el juzgador. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que la o el deudor principal.

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque certificado.

Art. 139.- Cesación del apremio personal. La orden de apremio personal cesará cuando:

1. Se conduzca a la persona apremiada ante la o el juzgador competente para dar cumplimiento a la orden judicial.
2. Se cumpla con la obligación impuesta.
3. Transcurra el término de treinta días desde la fecha en que se emitió la providencia y no se haya hecho efectiva, dejando a salvo que la o el juzgador emita nuevamente la orden.

Art. 140.- Disposiciones ejecutadas mediante apremio personal. Se ejecutarán también por apremio personal, previa orden de la o del juzgador, las disposiciones que se den para devolución de procesos, de documentos o para ejecutar providencias urgentes como depósito, posesión provisional y aseguramiento de bienes.

LIBRO III**DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS PROCESOS****TÍTULO I****ACTOS DE PROPOSICIÓN****CAPÍTULO I****DEMANDA**

Art. 141.- Inicio del proceso. Todo proceso comienza con la presentación de la demanda a la que podrán precederle las diligencias preparatorias reguladas en este Código.

Art. 142.- Contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito y contendrá:

1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone.
2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal se hará constar también los datos de la o del representado.
3. El número del Registro Unico de Contribuyentes en los casos que así se requiera.
4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, además de dirección electrónica, si se conoce.
5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados.
6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad y precisión.
7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los

hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica.

8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso.
9. La pretensión clara y precisa que se exige.
10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento.
11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa.
12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que la o el actor no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente, quien sentará la respectiva razón.
13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso.

Art. 143.- Documentos que se deben acompañar a la demanda. A la demanda deben acompañarse, cuando corresponda, los siguientes documentos;

1. El poder para intervenir en el proceso, cuando se actúe por medio de apoderada o apoderado o de procuradora o procurador judicial.
2. Los habilitantes que acrediten la representación de la o del actor, si se trata de persona incapaz.
3. Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o Registro Unico de Contribuyentes de la o del actor.
4. La prueba de la calidad de heredera o heredero, cónyuge, curadora o curador de bienes, administradora o administrador de bienes comunes, albacea o de la condición con que actúe la parte actora, salvo que tal calidad sea materia de la controversia.

5. Los medios probatorios de que se disponga, destinados a sustentar la pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su actuación.
6. En los casos de expropiación, la declaratoria de utilidad pública, el certificado de propiedad y gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad, el certificado del catastro en el que conste el avalúo del predio.
7. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso.

La o el juzgador no ordenará la práctica de ninguna prueba en contravención a esta norma y si de hecho se practica, carecerá de todo valor probatorio.

Art. 144.- Determinación de la cuantía. Para la determinación de la cuantía se seguirán las siguientes reglas:

1. Para fijar la cuantía de la demanda, se tomarán en cuenta los intereses líquidos del capital, los que estén pactados en el documento con que se proponga la demanda y los frutos que se han liquidado antes de proponerla.
2. Cuando la demanda verse sobre derechos de valor indeterminado que se refieran a cosas susceptibles de apreciación, se fijará la cuantía atendiendo el precio de las cosas.
3. En los procesos provenientes de arrendamiento, la cuantía se determinará por el importe de la pensión de un año o por lo que valga en el tiempo estipulado, si este es menor.
4. En los procesos de alimentos se fijará la cuantía atendiendo al máximo de la pensión reclamada por la o el actor durante un año.
5. En materia laboral se cuantificará cada una de las pretensiones de la o del actor para establecer la cuantía.
6. La cuantía será indeterminada únicamente cuando trate de asuntos no apreciables en dinero o que no se encuentren previstos en los incisos anteriores.

Art. 145.- Pluralidad de pretensiones. Se puede proponer, en una misma demanda, pretensiones diversas, siempre que:

1. La o el juzgador sea competente para conocer de todas.
2. Las pretensiones no sean contrarias ni incompatibles entre sí.
3. Todas las pretensiones se puedan sustanciar por un mismo procedimiento.

Art. 146.- Calificación de la demanda. Presentada la demanda, la o el juzgador, en el término máximo de cinco días, examinará si cumple los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas.

Si la demanda no cumple con los requisitos previstos en este Código, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o aclare en el término de tres días, si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias.

En materia de niñez y adolescencia, la o el juzgador fijará provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas.

En caso de expropiación urgente la o el juzgador al momento de calificar la demanda ordenará la ocupación inmediata del inmueble, siempre que a la demanda se acompañe el precio fijado en el avalúo comercial municipal.

El juez dispondrá la inscripción en el registro correspondiente, de las demandas que versen sobre dominio o posesión de inmuebles o de muebles sujetos a registro, así como también de las demandas que versen sobre demarcación y linderos, servidumbres, expropiación, división de bienes comunes y acciones reales inmobiliarias.

Antes de que se cite con la demanda se realizará la inscripción, que se comprobará con el certificado respectivo. La omisión de este requisito será

subsana ble en cualquier estado del juicio, pero constituye falta susceptible de ser sancionada; al efecto, la jueza o el juez deberán comunicar del particular al respectivo director provincial del Consejo de la Judicatura para que proceda a sustanciar el correspondiente sumario administrativo.

La inscripción de la demanda no impide que los bienes se enajenen válidamente en remate forzoso y aún de modo privado, pero el fallo que en el litigio recayere tendrá fuerza de cosa juzgada contra el adquirente, aunque este no haya comparecido en el juicio. Hecha la inscripción del traspaso de dominio, el registrador la pondrá en conocimiento del juez de la causa, dentro de tres días, mediante oficio que se incorporará al proceso.

Si la sentencia fuere favorable al actor, el juez ordenará que se cancelen los registros de transferencia, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda.

Art. 147.- Inadmisión de la demanda. La o el juzgador inadmitirá la demanda cuando:

1. Sea incompetente.
2. Contenga una indebida acumulación de pretensiones.

Si la o el juzgador estima que la demanda es manifiestamente inadmisibile, la declarará así en la primera providencia, con expresión de los fundamentos de su decisión y ordenará devolver los anexos y el archivo del expediente. Esta providencia será apelable.

Art. 148.- Reforma de la demanda. La demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o del demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar.

La o el juzgador cuidará que la o el demandado pueda ejercer su derecho de contradicción y prueba.

Art. 149.- Efectos de la calificación de la demanda. Calificada la demanda se generarán los siguientes efectos:

1. La competencia inicial no se alterará, aunque posteriormente se modifiquen las circunstancias que la determinaron.
2. Las partes conservarán su legitimación, aunque cambien los hechos en que esta se funde.

Art. 150.- Reglas especiales en materia laboral. La o el trabajador podrá demandar a la o el empleador, en el mismo libelo, por obligaciones de diverso origen.

Si se trata de reclamaciones propuestas por varias o varios trabajadores contra una o un mismo empleador, podrán formular una sola demanda siempre que designen dentro del proceso un procurador común.

Para efectos de la fijación de la cuantía se considerará solo el monto de la mayor reclamación individual. En los procesos laborales solo procederá la reconvencción conexas.

CAPÍTULO II

CONTESTACIÓN Y RECONVENCIÓN

Art. 151.- Forma y contenido de la contestación. La contestación a la demanda se presentará por escrito y cumplirá, en lo aplicable, los requisitos formales previstos para la demanda.

La parte demandada deberá pronunciarse en forma expresa sobre cada una de las pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado, con la indicación categórica de lo que admite y de lo que niega.

Deberá además deducir todas las excepciones de las que se crea asistida contra las pretensiones de la parte actora, con expresión de su funda-

mento fáctico. Las excepciones podrán reformarse hasta antes de la audiencia preliminar.

En el término de tres días de calificada la contestación se notificará con su contenido a la parte actora, quien en el término de diez días, podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación.

En materia de niñez y adolescencia, en el término de un día de calificada la contestación, se notificará con su contenido a la parte actora, quien en el término de tres días podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación.

Art. 152.- Anuncio de la prueba en la contestación. La parte demandada al contestar la demanda deberá anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar su contradicción, precisando toda la información que sea necesaria para su actuación.

A este efecto, se acompañará la nómina de testigos indicando los hechos sobre los cuales deberán declarar y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otros similares.

Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, indicando con precisión el lugar en que se encuentran y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.

Art. 153.- Excepciones previas. Solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes:

1. Incompetencia de la o del juzgador.
2. Incapacidad de la parte actora o de su representante.
3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda.

4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones.
5. Litispendencia.
6. Prescripción.
7. Caducidad.
8. Cosa juzgada.
9. Transacción.
10. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación.

Art. 154.- Procedencia de la reconvencción. La reconvencción procede en todos los casos, salvo los previstos en la ley.

Serán aplicables a la reconvencción, en lo pertinente, las reglas previstas para la demanda.

La reconvencción se tramitará y resolverá conjuntamente con la demanda y las excepciones.

La reconvencción no procede en materia de alimentos.

Art. 155.- Contestación a la reconvencción. La o el actor reconvenido, deberá contestar a la reconvencción en el tiempo y la forma requerida para la contestación a la demanda.

Art. 156.- Calificación de la contestación y de la reconvencción. Recibida la contestación a la demanda y la reconvencción si la hay, la o el juzgador, en el mismo término previsto para la calificación de la demanda, examinará si cumplen con los requisitos legales, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si considera que no se han cumplido, ordenará que la contestación o la reconvencción se aclaren o completen en el término de tres días, con la advertencia de tenerlas por no presentadas. La prueba anunciada en la contestación a la demanda o en la reconvencción se practicará en la audiencia de juicio.

Art. 157.- Falta de contestación a la demanda. La falta de pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones de la demanda, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, podrá ser apreciada por la o el juzgador como negativa de los hechos alegados contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto.

TÍTULO II PRUEBA

CAPÍTULO I REGLAS GENERALES

Art. 158.- Finalidad de la prueba. La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos.

Art. 159.- Oportunidad. La prueba documental con que cuenten las partes o cuya obtención fue posible se adjuntará a la demanda, contestación a la demanda, reconvencción y contestación a la reconvencción, salvo disposición en contrario.

La prueba a la que sea imposible tener acceso deberá ser anunciada y aquella que no se anuncie no podrá introducirse en la audiencia, con las excepciones previstas en este Código.

Todo documento o información que no esté en poder de las partes y que para ser obtenida requiera del auxilio del órgano jurisdiccional, facultará para solicitar a la o al juzgador que ordene a la otra parte o a terceros que la entreguen o faciliten de acuerdo con las normas de este Código.

La práctica de la prueba será de manera oral en la audiencia de juicio. Para demostrar los hechos en controversia las partes podrán utilizar cualquier tipo de prueba que no viole el debido proceso ni la ley.

Art. 160.- Admisibilidad de la prueba. Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal.

En la audiencia preliminar la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil e inconducente.

La o el juzgador declarará la improcedencia de la prueba cuando se haya obtenido con violación de la Constitución o de la ley.

Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Igualmente será ineficaz la prueba actuada sin oportunidad de contradecir.

La resolución por la cual la o el juzgador decida no admitir alguna prueba podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el juzgador superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella el resultado pueda variar fundamentalmente.

Art. 161.- Conducencia y pertinencia de la prueba. La conducencia de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso.

La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidos.

Art. 162.- Necesidad de la prueba. Deben probarse todos los hechos alegados por las partes, salvo los que no lo requieran.

La parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o disienta de ella presentará la certificación del agente diplomático sobre la autenticidad y vigencia de la ley.

A falta de agente diplomático, la parte podrá solicitar a la o al juzgador que requiera al Estado de cuya legislación se trate que certifique por la vía diplomática la autenticidad y vigencia de la ley.

La o el juzgador no podrá aplicar como prueba su conocimiento propio sobre los hechos o circunstancias controvertidos.

Art. 163.- Hechos que no requieren ser probados. No requieren ser probados:

1. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención o los que se determinen en la audiencia preliminar.
2. Los hechos imposibles.
3. Los hechos notorios o públicamente evidentes.
4. Los hechos que la ley presume de derecho.

Art. 164.- Valoración de la prueba. Para que las pruebas sean apreciadas por la o el juzgador deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en este Código.

La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos.

La o el juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución, la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión.

Art. 165.- Derecho de contradicción de la prueba. Las partes tienen derecho a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar, oponerse de manera fundamentada y contradecirla.

Art. 166.- Prueba nueva. Se podrá solicitar prueba no anunciada en la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a

la reconvenición, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia o que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma. La o el juzgador podrá aceptar o no la solicitud de acuerdo con su sana crítica.

Art. 167.- Prueba en el extranjero. Para la práctica de las declaraciones de parte o declaraciones de testigos en el extranjero, se notificará a los funcionarios consulares del Ecuador del lugar, para que las reciban a través de medios telemáticos. Tratándose de otros medios probatorios o de no existir funcionario consular del Ecuador, se podrá librar exhorto o carta rogatoria a una de las autoridades judiciales del país con la que han de practicarse las diligencias.

Art. 168.- Prueba para mejor resolver. La o el juzgador podrá, excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince días.

Art. 169.- Carga de la prueba. Es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación.

La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada.

La o el juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación suficiente a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar en su poder, así como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. Cuando se trate de derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de derecho de familia y laboral, la o el juzgador lo hará de oficio en la audiencia preliminar.

En materia de familia, la prueba de los ingresos de la o del obligado por alimentos recaerá en la o el demandado, conforme con lo dispuesto en la ley sobre el cálculo de la pensión alimenticia mínima.

En materia ambiental, la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o la o el demandado.

También serán admisibles otros casos de inversión de la carga de la prueba, de conformidad con la ley.

Art. 170.- Objeciones. Las partes podrán objetar las actuaciones contrarias al debido proceso o lealtad procesal, así como cualquier prueba impertinente, inútil o inconducente.

Serán objetables los actos intimidatorios o irrespetuosos contra las partes, testigos, peritos o cualquiera de los presentes.

Art. 171.- Utilización de la prueba. La prueba practicada válidamente en un proceso podrá incorporarse a otro en copia certificada. Para su apreciación es indispensable que en el proceso original se haya practicado a pedido de la parte contra quien se la quiere hacer valer o que esta haya ejercido su derecho de contradicción.

Se exceptúan los casos en los que la ley expresamente prohíbe este uso procesal.

Art. 172.- Presunción judicial. Los actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a través de la prueba y que además sean graves, precisos y concordantes, adquieren significación en su conjunto cuando conducen unívocamente a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias expuestos por las partes con respecto a los puntos controvertidos. Por lo tanto, la o el juzgador puede resolver la controversia sobre la base de estas conclusiones que constituyen la presunción judicial.

Art. 173.- Sanciones. Cuando las alegaciones de falsedad se decida en contra de quien la propuso, la o el juzgador sancionará la mala fe y deslealtad procesal conforme con la ley. Igual sanción se aplicará a la parte que presentó la prueba, cuando en el proceso se ha justificado la falsedad.

CAPÍTULO II

PRUEBA TESTIMONIAL

SECCIÓN I

REGLAS GENERALES

Art. 174.- Prueba testimonial. Es la declaración que rinde una de las partes o un tercero. Se practica en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología, con excepción de las declaraciones anticipadas. Se lleva a cabo mediante interrogatorio de quien la propone y contrainterrogatorio de contraparte.

La o el juzgador puede pedir aclaración sobre un tema puntual de considerarlo indispensable.

Si la o el declarante ignora el idioma castellano se hará conocer este hecho al momento de la solicitud y su declaración será recibida con la intervención de un intérprete, quien prestará previamente el juramento de decir la verdad. La o el intérprete será nombrado por la o el juzgador de acuerdo con las reglas generales para designación de peritos.

Art. 175.- Obligación de la o del declarante. La o el declarante deberá contestar a las preguntas que se le formulen. La o el juzgador podrá ordenar a la o el declarante que responda lo preguntado.

La o el declarante podrá negarse a responder cualquier pregunta que:

1. Pueda acarrearle responsabilidad penal personal, a su cónyuge o conviviente en unión de hecho o a sus familiares comprendidos dentro del

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto las que se refieran a cuestiones de estado civil o de familia.

2. Viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de su estado u oficio, empleo, profesión, arte o por disposición expresa de la ley.

Art. 176.- Objeciones a los testimonios. Las partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, en particular las que acarreen responsabilidad penal a la o el declarante, sean capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones.

Se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de los peritos dentro de su área de experticia.

Podrán objetarse las respuestas de las o los declarantes que van más allá, no tienen relación con las preguntas formuladas o son parcializadas.

Una vez realizada la objeción, la o el juzgador se pronunciará aceptándola o negándola.

Art. 177.- Forma de la prueba testimonial. Toda prueba testimonial mediante declaración será precedida del juramento rendido ante la o el juzgador. La o el declarante deberá estar asistido por su defensora o defensor, bajo sanción de nulidad. Se seguirán las siguientes reglas:

1. La declaración deberá ser rendida personalmente y dentro de la audiencia.
2. Si la o el declarante no asiste a la audiencia, la parte interesada podrá solicitar de manera fundamentada, que se suspenda la audiencia por tratarse de una prueba trascendental. En caso de aceptar la petición, la o el juzgador señalará día y hora para continuar la audiencia y dispondrá la comparecencia de la o del declarante mediante apremio ejecutado por la Policía Nacional.
3. Se podrá interrogar a las o los procuradores o a las o los apoderados únicamente por los hechos realizados a nombre de sus mandantes.

4. Cuando una persona jurídica sea parte procesal y sea requerida a rendir declaración de parte, lo hará por ella su representante legal, pero si este no intervino en los hechos controvertidos en el proceso, deberá alegar tal circunstancia en la audiencia preliminar.
5. Cuando un incapaz rinda declaración, en los casos que la ley lo faculte, lo hará acompañado de su representante legal o de su curadora o curador, se exceptúan las niñas, niños y adolescentes que solo podrán declarar sin juramento ante la presencia de sus representantes.
6. Las respuestas evasivas o incongruentes así como la negativa a declarar y toda la prueba debidamente actuada será valorada íntegramente por la o el juzgador conforme con las reglas de la sana crítica, siempre que la ley no requiera que se prueben de otra forma.
7. Podrán formularse preguntas sugestivas sobre temas introductorios que no afecten a los hechos controvertidos, recapitulen información ya aportada por la o el declarante o la o el juzgador haya calificado al testigo como hostil. También están permitidas en el contrainterrogatorio cuando se practique la declaración de una parte a pedido de la otra.
8. La o el juzgador negará las preguntas inconstitucionales, impertinentes, capciosas, oscuras, compuestas y aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al declarante.
9. La o el Presidente de la República, la o el Vicepresidente de la República, las o los asambleístas, las o los ministros de Estado, la o el Secretario General de la Administración Pública y los demás Secretarios con rango de ministro, la o el Fiscal General del Estado, la o el Defensor del Pueblo, la o el Defensor Público, las o los jueces de la Corte Constitucional, las o los jueces de la Corte Nacional de Justicia, las o los vocales del Consejo de la Judicatura, las o los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las o los consejeros del Consejo Nacional Electoral, las o los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, la o el Procurador General del Estado, la o el Contralor General del Estado, las o los Superintendentes, las o los alcaldes, las o los prefectos, las o los gobernadores regionales, las máximas autoridades de las

instituciones del Estado y las o los agentes diplomáticos que deban rendir declaración de parte, emitirán informe con juramento sobre los hechos con respecto a los cuales se les haya solicitado.

Art. 178.- Práctica de la prueba testimonial. Se desarrollará a través de la declaración de acuerdo con las siguientes reglas:

1. La o el juzgador tomará juramento y advertirá al declarante su obligación de decir la verdad y de las penas del perjurio.
2. La o el juzgador preguntará al declarante sus nombres y apellidos, edad, estado civil, dirección domiciliaria, nacionalidad, profesión u ocupación.
3. La parte que haya pedido la presencia de la o del declarante procederá a interrogarlo. Una vez terminado, la contraparte podrá contrainterrogar al declarante.
4. La o el declarante no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su declaración a menos que se trate de valores o cifras.

Art. 179.- Prohibición de comunicación. Mientras esperan ser llamados a rendir su testimonio, las o los declarantes no podrán comunicarse entre sí. En el transcurso de la audiencia no podrán ver, oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia.

Art. 180.- Declaración de personas con discapacidad auditiva. Si la o el declarante tiene discapacidad auditiva, se hará conocer este hecho con anterioridad a la audiencia. El interrogatorio, contrainterrogatorio así como las respuestas constarán por escrito. Lo mismo sucederá con el juramento.

Si no es posible proceder de esa manera, la declaración se recibirá por medio de intérprete o en su defecto por una persona con la que pueda entenderse por signos que comprendan las personas con discapacidad auditiva. Tales personas prestarán previamente el juramento de decir la verdad.

Art. 181.- Declaración anticipada. La o el juzgador podrá recibir como prueba anticipada, en audiencia especial, los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio, siempre que se garantice el ejercicio del derecho de contradicción de la contraparte.

Art. 182.- Declaración falsa. Cuando la declaración sea evidentemente falsa, la o el juzgador suspenderá la práctica del testimonio y ordenará que se remitan los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.

Art. 183.- Terminación del proceso por declaración. La declaración legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda termina el proceso.

Art. 184.- Juramento decisorio. Cualquiera de las partes puede deferir a la declaración de la otra y pedir expresamente que la o el juzgador decida la causa sobre la base de ella, cuando la declaración recaiga sobre un hecho personal y referido a la o al declarante. La parte requerida podrá declarar o solicitar que lo haga la contraparte, quien estará obligada a rendirla, siempre que el hecho sea común a las dos partes. El juramento decisorio termina el proceso sobre un derecho disponible.

Cuando se ordene este juramento decisorio en la ejecución, se lo receptorá en audiencia, dentro de la cual, la contraparte podrá ejercer su derecho de contradicción y defensa conforme con las normas del debido proceso.

Las y los incapaces no podrán presentar juramento decisorio.

Art. 185.- Juramento deferido. En las controversias sobre devolución del préstamo, cuando se alegue usura a falta de otras pruebas para justificar la tasa de interés y el monto efectivo del capital prestado se estará al juramento de la o del prestatario.

El juramento deferido se practicará como prueba exclusivamente en los casos señalados en este artículo. La o el juzgador no podrá fundamentar la sentencia en el juramento deferido como única prueba.

En materia laboral, a falta de otra prueba se estará al juramento deferido de la o del trabajador para probar el tiempo de servicio y la remuneración percibida. En el caso de las o los adolescentes, además la existencia de la relación laboral.

Art. 186.- Valoración de la prueba testimonial. Para valorar la prueba testimonial, la o el juzgador considerará el contexto de toda la declaración y su relación con las otras pruebas.

SECCIÓN II

DECLARACIÓN DE PARTE Y DECLARACIÓN DE TESTIGOS

Art. 187.- Declaración de parte. Declaración de parte es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes.

La declaración de parte es indivisible en todo su contenido, excepto cuando exista otra prueba contra la parte favorable del declarante.

Art. 188.- Oportunidad de la declaración de parte. La declaración de parte se practicará en la audiencia de juicio, salvo que se trate de una declaración urgente conforme con lo dispuesto en este Código.

Art. 189.- Testigo. Es toda persona que ha percibido a través de sus sentidos directa y personalmente hechos relacionados con la controversia.

Puede declarar como testigo cualquier persona, salvo las siguientes:

1. Las absolutamente incapaces.
2. Las que padecen enfermedad mental, que les prive la capacidad de percibir o comunicar objetivamente la realidad.

3. Las que al momento de ocurridos los hechos sobre los cuales deben declararse se encontraban en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Art. 190.- Petición de la declaración del testigo. Al momento de anunciar la prueba y cuando la solicite, la parte deberá indicar el nombre y domicilio de las y los testigos llamados a declarar y expresar sucintamente el o los hechos sobre los cuales serán interrogados.

Art. 191.- Notificación de la o del testigo. La o el testigo será notificado, mediante boleta, con tres días de anticipación a la diligencia. En dicha notificación se le advertirá la obligación de comparecer y se le prevendrá que, de no hacerlo y no justificar su ausencia, será conminado a comparecer con el apoyo de la Policía Nacional.

Art. 192.- Comparecencia de testigos ausentes. La o el juzgador puede ordenar, cuando lo crea conveniente, que las o los testigos que residan en otro lugar se presenten a la audiencia o declaren por medio de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología. Los costos del traslado y permanencia correrán a cargo de la parte que solicitó el traslado.

CAPÍTULO III

PRUEBA DOCUMENTAL

SECCIÓN I

REGLAS GENERALES

Art. 193.- Prueba documental. Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho.

Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando sea requerido.

Art. 194.- Presentación de documentos. Los documentos públicos o privados se presentarán en originales o en copias.

Se considerarán copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se realicen por cualquier sistema.

Art. 195.- Eficacia de la prueba documental. Para que los documentos auténticos y sus copias o compulsas, hagan prueba es necesario:

1. Que no estén defectuosos ni diminutos, con excepción de lo dispuesto en este Código sobre los documentos defectuosos.
2. Que no estén alterados en una parte esencial, de modo que pueda argüirse falsedad.
3. Que en los autos no haya instancia ni recurso pendiente sobre el punto que, con tales documentos, se intente probar.

Art. 196.- Producción de la prueba documental en audiencia. Para la producción de la prueba documental en audiencia de juicio se procederá de la siguiente manera:

1. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente.
2. Los objetos se exhibirán públicamente.
3. Las fotografías, grabaciones, los elementos de pruebas audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán también en su parte pertinente en la audiencia y por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes.
4. La prueba documental actuada quedará en poder de la o del juzgador para tenerla a la vista al momento de tomar su decisión sobre el fondo del asunto, dejando a salvo la facultad de las partes de volver actuarla o usarla durante la audiencia de juicio.

Cuando la sentencia haya quedado firme, se ordenará su devolución a las partes, dejando a salvo su derecho a solicitar que los documentos

agregados al proceso le sean desglosados dejando en el expediente copias certificadas, sean estas digitales o no.

Una vez que la sentencia haya sido ejecutada, se comunicará a las partes de su obligación de retirar los documentos agregados al proceso, advirtiéndoles que en caso de no hacerlo en el término de treinta días, estos serán destruidos.

Art. 197.- Documentos defectuosos. Se podrá presentar como prueba, documentos que se encuentren parcialmente destruidos, siempre y cuando contengan, de manera clara, una representación o declaración del hecho o del derecho alegado por quien los presente. La contraparte podrá impugnar y contradecir la idoneidad probatoria del documento defectuoso.

Art. 198.- Falsedad y nulidad de documentos. La parte que alegue la falsedad material o ideológica o la nulidad de un documento público o privado, presentado por la contraparte, deberá hacerlo en las oportunidades señaladas en este Código. El incidente deberá resolverse en la audiencia de juicio.

Art. 199.- Indivisibilidad de la prueba documental. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible, en consecuencia no se podrá aceptar en una parte y rechazar en otra y comprende aun lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato.

Art. 200.- Documentos en idioma distinto al castellano. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requerirá que hayan sido traducidos por un intérprete y cuenten con la validación conforme lo dispuesto en la ley.

Art. 201.- Autenticación de los documentos otorgados en territorio extranjero. Se autenticarán los documentos otorgados en territorio extranjero, con la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador residente en el Estado en el que se otorgó el documento o de acuerdo con lo previsto en la Convención de La Haya sobre la Apostilla.

Si no hay agente diplomático ni consular del Ecuador, certificará un agente diplomático o consular de cualquier Estado y autenticará la certificación el Ministro de Relaciones Exteriores de aquel en que se haya otorgado. En tal caso, la autenticación del Ministro de Relaciones Exteriores se reducirá también a informar que el agente diplomático o consular tiene realmente ese carácter y que la firma y rúbrica que ha usado en el documento son las mismas que usa en sus comunicaciones oficiales.

Si en el lugar donde se otorgue el documento no hay ninguno de los funcionarios de que habla el segundo inciso, certificará o autenticará una de las autoridades judiciales del territorio, con expresión de esta circunstancia.

La autenticación de los documentos otorgados en país extranjero, podrá también arreglarse de acuerdo con los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador, las leyes o prácticas del Estado en que se otorgue.

Las diligencias judiciales ejecutadas fuera de la República, conforme con las leyes o prácticas del país respectivo, serán válidas en el Ecuador.

Art. 202.- Documentos digitales. Los documentos producidos electrónicamente con sus respectivos anexos, serán considerados originales para todos los efectos legales.

Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original. Los documentos originales escaneados, serán conservados por la o el titular y presentados en la audiencia de juicio o cuando la o el juzgador lo solicite.

Podrá admitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme con las normas de este Código.

Art. 203.- Impugnación de la firma o de la autoría de un documento. Los documentos que se presenten con la demanda, con la contestación,

con la reconvencción o su contestación, podrán ser impugnados por la parte contraria al contestarlas, para lo cual, se acompañará prueba de la impugnación.

Si los documentos se presentan como medios probatorios supervenientes, la impugnación deberá plantearse en audiencia.

Si la parte alega que un documento incorporado al proceso ha sido firmado en blanco o con espacios sin llenar, se presumirá cierto el contenido del mismo, una vez que se haya reconocido la firma o declarado su autenticidad salvo que la ley la presuma. La prueba en contrario no perjudicará a terceros de buena fe.

Art. 204.- Prueba documental de gran volumen o formato. El contenido de documentos pertinentes de gran volumen, grabaciones de larga duración o fotografías que tengan gran formato, serán agregados de manera completa, adicionando esquemas, resúmenes, cómputos o cualquier otro medio similar que los reproduzca fielmente.

La prueba documental de gran volumen, duración o gran formato y los resúmenes o medio similar deberán ponerse a disposición de las otras partes para ser examinados o copiados, quince días antes de la audiencia de juicio. Excepcionalmente y a su criterio, la o el juzgador podrá ordenar que en dicha audiencia se produzca la prueba documental de manera completa.

SECCIÓN II DOCUMENTOS PÚBLICOS

Art. 205.- Documento público. Es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente.

Art. 206.- Partes esenciales de un documento público. Son partes esenciales:

1. Los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario, según el caso.
2. La cosa, cantidad o materia de la obligación.
3. Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos.
4. El lugar y fecha del otorgamiento.
5. La suscripción de los que intervienen en él.

Art. 207.- Efectos de los documentos públicos. El documento público agregado al proceso con orden judicial y notificación a la parte contraria, constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las haya obtenido fuera de dicho proceso.

Art. 208.- Alcance probatorio. El instrumento público hace fe, aun contra terceros, de su otorgamiento, fecha y declaraciones que en ellos haga la o el servidor público que los autoriza, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho las o los interesados. En esta parte no hace fe sino contra las o los declarantes.

Las obligaciones y descargos contenidos en el instrumento hacen prueba con respecto a las o los otorgantes y de las personas a quienes se transfieren dichas obligaciones y descargos, a título universal o singular.

Art. 209.- Reposición de documentos públicos que no forman parte de un proceso. Si se pierde o destruye un documento público, la parte que tenga una copia auténtica, siempre que la copia no esté raída ni borrada, ni en tal estado que no se pueda leer claramente, solicitará a la o el juzgador con los mismos requisitos previstos para las diligencias preparatorias, que ordene su incorporación al registro, archivo o protocolo donde debía encontrarse el original.

Art. 210.- Renovación de la copia del documento público. Si el libro de registro o del protocolo se pierde o destruye y se solicita por alguna de

las partes que la copia existente se renueve o que se ponga en el registro para servir de original, la o el juzgador lo ordenará así, con citación de los interesados, siempre que la copia esté clara.

Art. 211.- Requisitos para que hagan fe las copias y las compulsas. Las compulsas de las copias de una actuación judicial o administrativa y en general toda copia con valor de instrumento público, no harán fe si no han sido ordenadas judicialmente y con citación o notificación en persona o por una boleta a la parte contraria, o sea a aquella contra quien se quiere hacer valer la compulsas. Los poderes no están sujetos a esta disposición.

Tampoco será prueba la escritura referente sin la referida, ni la accesorias sin la principal, pero si esta o la referida se ha perdido, la referente o la accesorias probará en los capítulos independientes de aquella, en los demás solo se considerará como un principio de prueba por escrito.

Art. 212.- Copias y compulsas. La o el interesado puede pedir copia de los documentos originales o compulsas conforme con lo previsto en este Código.

Las copias y compulsas que hayan sido ordenadas judicialmente se insertarán en las actuaciones que la o el juzgador señale, a solicitud de parte.

Art. 213.- Prevalencia de la escritura matriz y la copia. Si hay alguna variación entre la copia y la escritura matriz prevalecerá lo que esta contenga.

Igual regla se aplica a las compulsas con relación a la copia respectiva.

Art. 214.- Documento público falso. Es documento falso aquel que contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de tercero, por haberse contrahecho la escritura o la suscripción de alguno de los que se supone que la otorgaron o de los testigos o del notario por haberse suprimido, alterado o añadido algunas cláusulas o palabras en el cuerpo del

instrumento, después de otorgado y en caso de que haya anticipado o postergado la fecha del otorgamiento.

La falta de declaración de la falsedad de un instrumento público no impedirá el ejercicio de la acción penal. Pero iniciado el enjuiciamiento civil para tal efecto, no se podrá promover proceso penal hasta la obtención de dicha declaración.

Art. 215.- Nulidad de los documentos públicos. Los documentos públicos serán declarados nulos cuando no se han observado las solemnidades prescritas por la ley, las ordenanzas o reglamentos respectivos.

SECCIÓN III DOCUMENTOS PRIVADOS

Art. 216.- Documento privado. Es el que ha sido realizado por personas particulares, sin la intervención de funcionario público alguno, o con éstos, en asuntos que no son de su empleo.

Art. 217.- Reconocimiento de documentos privados. La parte que presente un instrumento privado en original, podrá pedir el reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o al autor o a la o al representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye la autoría.

En el día y hora fijados para la audiencia, se recibirá la declaración de la o del autor, previo juramento. Si el documento está firmado por pedido de una persona que no sabía o no podía firmar, esta deberá declarar si se extendió por su orden, si la o el signatario obró por pedido suyo y si es cierto su contenido. En los demás casos bastará que la o el compareciente declare si es o no suya la firma que se le atribuye.

Art. 218.- Inmutabilidad del instrumento privado. El reconocimiento de firma, certificación o protocolización de un instrumento privado no lo convierte en instrumento público.

Art. 219.- Documentos en poder de terceros. La parte que pretenda utilizar documentos privados originales o en copia, que se hallen en poder de un tercero y relacionado con la materia del proceso al presentar la demanda o la contestación, la reconvencción o la contestación a la reconvencción, pedirá que se le notifique para su exhibición en el día y hora señalados para la audiencia.

En caso de incumplimiento injustificado de la orden judicial se aplicarán las sanciones previstas en la ley.

Art. 220.- Documentos en poder de la contraparte. La parte que requiera un documento privado que se encuentre en poder de la contraparte, podrá pedir a la o al juzgador que ordene su presentación hasta la audiencia. Si el que se presume tenedor del documento confiesa que se halla en su poder, estará obligado a presentarlo.

De no cumplirse la orden judicial o demostrar que el documento no existe o no está en su poder, la o el juzgador sancionará la mala fe y deslealtad procesal de quien incurra en ella, conforme con la ley.

CAPÍTULO IV

PRUEBA PERICIAL

SECCIÓN I

PERITO

Art. 221.- Perito. Es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia.

Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura estarán autorizadas para emitir informes periciales, intervenir y declarar en el proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración en el proceso será realizada por el perito acreditado que realice la pericia.

En caso de que no existan expertos acreditados en una materia específica, la o el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera a la institución pública, universidad o colegio profesional, de acuerdo con la naturaleza de los conocimientos necesarios para la causa, el envío de una terna de profesionales que puedan acreditarse como peritos para ese proceso en particular.

Art. 222.- Declaración de peritos. La o el perito será notificado en su dirección electrónica con el señalamiento de día y hora para la audiencia de juicio, dentro de la cual sustentará su informe. Su comparecencia es obligatoria.

En caso de no comparecer por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado y por una sola vez, se suspenderá la audiencia, después de haber practicado las demás pruebas y se determinará el término para su reanudación.

En caso de inasistencia injustificada, su informe no tendrá eficacia probatoria y perderá su acreditación en el registro del Consejo de la Judicatura.

En la audiencia las partes podrán interrogarlo bajo juramento, acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del informe, siguiendo las normas previstas para los testigos.

Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden determinado para el testimonio.

En ningún caso habrá lugar a procedimiento especial de objeción del informe por error esencial, que únicamente podrá alegarse y probarse en la audiencia.

Concluido el conainterrogatorio y si existe divergencia con otro peritaje, la o el juzgador podrá abrir el debate entre peritos de acuerdo con lo previsto en este Código. Finalizado el debate entre las o los peritos, la o el juzgador, abrirá un interrogatorio y conainterrogatorio de las partes,

exclusivamente relacionado con las conclusiones divergentes de los informes. La o el juzgador conducirá el debate.

Art. 223.- Imparcialidad del perito. La o el perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad.

Durante la audiencia de juicio podrán dirigirse a la o al perito, preguntas y presentar pruebas no anunciadas oportunamente orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico o científico de sus conclusiones así como cualquier otra destinada a solventar o impugnar su credibilidad.

SECCIÓN II

INFORME PERICIAL

Art. 224.- Contenido del informe pericial. Todo informe pericial deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

1. Nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía o identidad, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo electrónico y los demás datos que faciliten la localización del perito.
2. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el informe.
3. El número de acreditación otorgado por el Consejo de la Judicatura y la declaración de la o del perito de que la misma se encuentra vigente.
4. La explicación de los hechos u objetos sometidos a análisis.
5. El detalle de los exámenes, métodos, prácticas e investigaciones a las cuales ha sometido dichos hechos u objetos.
6. Los razonamientos y deducciones efectuadas para llegar a las conclusiones que presenta ante la o el juzgador.

Las conclusiones deben ser claras, únicas y precisas.

Art. 225.- Solicitud de pericia. Cuando alguna de las partes justifique no tener acceso al objeto de la pericia, solicitará en la demanda o contestación, reconvencción o contestación a la reconvencción, que la o el juzgador ordene su práctica y designe el perito correspondiente. El informe pericial será notificado a las partes con el término de por lo menos diez días antes de la audiencia, término que podrá ser ampliado a criterio de la o del juzgador y de acuerdo con la complejidad del informe.

Art. 226.- Informe pericial para mejor resolver. En caso de que los informes periciales presentados por las partes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes sobre un mismo hecho, la o el juzgador podrá ordenar el debate entre sí de acuerdo con lo dispuesto en el presente Código.

Si luego del debate entre las o los peritos, la o el juzgador mantiene dudas sobre las conclusiones de los peritajes presentados, ordenará en la misma audiencia un nuevo peritaje, para cuya realización sorteará a una o un perito de entre los acreditados por el Consejo de la Judicatura, precisando el objeto de la pericia y el término para la presentación de su informe, el mismo que inmediatamente será puesto a conocimiento de las partes.

En aquellos casos en que una de las partes sea representada por una o un defensor público o demuestre tener escasos recursos económicos, los honorarios y gastos del peritaje, podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura, a petición de esta.

Art. 227.- Finalidad y contenido de la prueba pericial. La prueba pericial tiene como propósito que expertos debidamente acreditados puedan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso.

Las partes procesales, podrán sobre un mismo hecho o materia, presentar un informe elaborado por una o un perito acreditado.

CAPÍTULO V INSPECCIÓN JUDICIAL

Art. 228.- Inspección judicial. La o el juzgador cuando lo considere conveniente o necesario para la verificación o esclarecimiento del hecho o materia del proceso, podrá de oficio o a petición de parte, examinar directamente lugares, cosas o documentos.

Art. 229.- Objetivo de la inspección. La inspección judicial se podrá solicitar con la demanda, contestación a la demanda, reconvencción o contestación a la reconvencción, precisando claramente los motivos por los cuales es necesario que la o el juzgador examine directamente lugares, cosas o documentos, objeto de la inspección o el reconocimiento y adicionalmente se expresará la pretensión que se requiere probar con la inspección o reconocimiento.

La o el juzgador determinará el lugar, la fecha y la hora en que se realizará la inspección o el reconocimiento y señalará con claridad el objetivo de la diligencia. Solo en casos excepcionales, cuando la percepción sensorial de la o del juzgador sobre lugares, cosas o documentos examinados no sea suficiente para obtener una conclusión precisa de la diligencia, la o el juzgador podrá designar a una o a un perito acreditado para lo cual ordenará de oficio o a petición de parte la prueba pericial correspondiente conforme con las disposiciones del presente Código.

Art. 230.- Desarrollo de la inspección judicial. En el día y hora señalados, la o el juzgador y las partes concurrirán al lugar de la inspección o del reconocimiento. Inmediatamente después de instalada la diligencia, la o el juzgador concederá la palabra a la parte que solicitó la prueba a fin de que exponga el objetivo de la inspección. A continuación, la o el juzgador procederá a examinar directamente a las personas, lugares, cosas o documentos, materia de la inspección. Una vez hecho esto, concederá la palabra a la contraparte para que exponga sobre lo inspeccionado.

La secretaria o secretario, sentará razón de la diligencia a la cual se adjuntará la grabación en vídeo.

Art. 231.- Colaboración necesaria. Quienes deban intervenir en una inspección judicial o reconocimiento dispuesto por la o el juzgador, están obligados a colaborar efectivamente a la realización de la diligencia. En caso de no hacerlo, la o el juzgador podrá hacer cumplir su decisión con ayuda de la fuerza pública.

Art. 232.- Honorario de la o del perito en la inspección judicial. Cuando las pericias sean solicitadas de oficio por la o el juzgador, los honorarios de la o del perito acreditado serán cancelados por el Consejo de la Judicatura caso contrario, si las partes solicitan la pericia, los honorarios serán cubiertos por la parte solicitante.

TÍTULO III

FORMAS EXTRAORDINARIAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO

CAPÍTULO I

CONCILIACIÓN Y TRANSACCIÓN

Art. 233.- Oportunidad. Las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso. Si con ocasión del cumplimiento de la sentencia surgen diferencias entre las partes, también podrán conciliar.

La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.

Art. 234.- Procedimiento. La conciliación se realizará en audiencia ante la o el juzgador conforme a las siguientes reglas:

1. Si la conciliación se realiza en audiencia preliminar o de juicio, el juez la aprobará en sentencia y declarará terminado el juicio.
2. Si la conciliación se presenta con ocasión del cumplimiento de la sentencia, la o el juzgador de la ejecución señalará día y hora para la realización de la audiencia en la que resolverá la aprobación del acuerdo.

3. Si la conciliación recae sobre parte del proceso, este continuará con respecto a los puntos no comprendidos o de las personas no afectadas por el acuerdo.

Art. 235.- De la transacción. La transacción válidamente celebrada termina el proceso y el juez autorizará la conclusión del proceso cuando le sea presentada por cualquiera de las partes. Tratándose de transacción parcial, se estará a las reglas que sobre la conciliación parcial prevé el artículo anterior.

En caso de incumplimiento del acta transaccional podrá ejecutarse forzosamente, según lo dispuesto en el Artículo 363.

CAPÍTULO II

RETIRO DE LA DEMANDA

Art. 236.- Retiro de la demanda. La parte actora podrá retirar su demanda antes que esta haya sido citada, en este caso la o el juzgador ordenará su archivo. El retiro de la demanda vuelve las cosas al estado en que tenían antes de haberla propuesto, pudiendo la parte actora ejercer una nueva acción.

CAPÍTULO III

DESISTIMIENTO

Art. 237.- Desistimiento de la pretensión. En cualquier estado del proceso antes de la sentencia de primera instancia, la parte actora podrá desistir de su pretensión y no podrá presentar nuevamente su demanda.

La o el juzgador se limitará a examinar si el desistimiento procede por la naturaleza del derecho en litigio y por no afectar a intereses de la contraparte o de terceros.

La parte demandada que haya planteado reconvencción, igualmente podrá desistir de su pretensión o renunciar al derecho, para lo cual se procederá en la forma señalada en el inciso anterior.

Art. 238.- Desistimiento del recurso o de la instancia. Se podrá desistir de un recurso o de la instancia, desde que se interpuso aquel y mientras no se haya pronunciado sentencia definitiva, lo que producirá la firmeza de la providencia impugnada, salvo que la contraparte también haya recurrido, en cuyo caso requerirá que ella también desista.

Art. 239.- Validez del desistimiento. Para que el desistimiento sea válido, se requiere:

1. Que sea voluntario y hecho por persona capaz.
2. Que conste en los autos y se halle reconocida la firma de quien lo realiza ante la o el juzgador.
3. Que sea aprobado por la o el juzgador.
4. Que si es condicional, conste el consentimiento de la parte contraria para admitirlo.

Art. 240.- Inhabilidad para desistir. No pueden desistir del proceso:

1. Quienes no pueden comprometer la causa en arbitraje.
2. Quienes intenten eludir, por medio del desistimiento, el provecho que de la prosecución de la instancia pudiera resultar a la otra parte o a un tercero.
3. Quienes representen al Estado y no cuenten con la autorización del Procurador General del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.
4. Quienes sean actores en los procesos de alimentos.

CAPÍTULO IV **ALLANAMIENTO**

Art. 241.- Allanamiento a la demanda. La parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia. La o el juzgador no aceptará el allanamiento cuando se trate de derechos indisponibles.

El allanamiento de una o uno o de varias o varios demandados, sobre una obligación común divisible, no afectará a las otras u otros y el proceso continuará con quienes no se allanaron. Si la obligación es indivisible, el allanamiento deberá provenir de todos.

Si el allanamiento es parcial o condicional deberá seguirse el proceso con respecto a lo que no ha sido aceptado.

Art. 242.- Ineficacia del allanamiento. El allanamiento será ineficaz:

1. Cuando la o el demandado sea incapaz, excepto cuando se trate del allanamiento de personas jurídicas.
2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes.
3. Cuando los hechos admitidos no puedan probarse por medio de la declaración de parte.
4. Cuando la sentencia deba producir efecto de cosa juzgada con respecto a terceros.

Art. 243.- Allanamiento de las instituciones del Estado. Para que el Estado y sus instituciones puedan allanarse será requisito que la o el Procurador General del Estado lo autorice expresamente.

De no constar esta autorización, el allanamiento carecerá de valor.

Art. 244.- Aprobación del allanamiento. La o el juzgador aprobará el allanamiento mediante sentencia, la que causará ejecutoria.

CAPÍTULO V ABANDONO

Art. 245.- Procedencia. La o el juzgador declarará el abandono del proceso en primera instancia, segunda instancia o casación cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución durante el término de ochenta días, contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.

Art. 246.- Cómputo del término para el abandono. El término para el abandono contará desde el día siguiente de la última notificación de la última providencia dictada o si es el caso, desde el día siguiente al de la última actuación procesal.

Art. 247.- Improcedencia del abandono. No cabe el abandono en los siguientes casos:

1. En las causas en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños, adolescentes o incapaces.
2. Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado.
3. En la etapa de ejecución.

Art. 248.- Procedimiento para el abandono. Sentada la razón que ha transcurrido el término señalado, la o el juzgador mediante auto, se limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha operado el abandono. Declarado el abandono, se dispondrá que se cancelen las providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso.

El auto interlocutorio que declare el abandono podrá ser impugnado siempre que se justifique exclusivamente, en un error de cómputo.

Art. 249.- Efectos del abandono. Declarado el abandono, se cancelarán las providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso.

Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse nueva demanda.

Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario de casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme la resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la judicatura de donde procedieron.

TÍTULO IV IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO I REGLAS GENERALES

Art. 250.- Impugnación de las providencias. En todos los procesos que tengan relación con los intereses patrimoniales del Estado, además de las partes intervinientes, estará legitimado para impugnar las providencias judiciales la o el Procurador General del Estado o su delegado.

Se concederán únicamente los recursos previstos en la ley. Serán recurribles en apelación, casación o de hecho las providencias con respecto a las cuales la ley haya previsto esta posibilidad. La aclaración, ampliación, revocatoria y reforma serán admisibles en todos los casos, con las limitaciones que sobre la impugnación de las sentencias y autos prevé esta Ley.

Los términos para la impugnación de las sentencias y autos definitivos no dictados en audiencia correrán a partir de la notificación por escrito.

Art. 251.- Clases de recursos. Se prevén los siguientes recursos: aclaración, reforma, ampliación, revocatoria, apelación, casación y de hecho.

Concedido o negado cualquier recurso no se lo podrá interponer por segunda vez.

Art. 252.- Improcedencia de recursos sucesivos o subsidiarios. Es improcedente interponer en el mismo acto procesal, recursos horizontales y verticales sucesivos, excepto en el caso de aclaración o ampliación.

CAPÍTULO II ACLARACIÓN, AMPLIACIÓN, REVOCATORIA Y REFORMA

Art. 253.- Aclaración y ampliación.- La aclaración tendrá lugar en caso de sentencia oscura. La ampliación procederá cuando no se haya resuelto

alguno de los puntos controvertidos o se haya omitido decidir sobre frutos, intereses o costas.

Art. 254.- Revocatoria y reforma.- Por la revocatoria la parte pretende que el mismo órgano jurisdiccional que pronunció un auto de sustanciación lo deje sin efecto y dicte otro en sustitución.

También será admisible la reforma, en cuyo caso se enmendará la providencia en la parte que corresponda.

Art. 255.- Procedimiento y resolución.- La petición se podrá formular en la audiencia o en la diligencia en que se dicte la resolución. Si se trata de resolución dictada fuera de audiencia o de diligencia se formulará por escrito dentro del término de tres días siguientes a su notificación.

La solicitud de aclaración o ampliación deberá expresar con claridad y precisión las razones que la sustenten, de no hacerlo, se la rechazará de plano.

Si la solicitud se ha formulado de manera oral, la o el juzgador confirmará o modificará la providencia impugnada en el mismo acto. Previamente escuchará los argumentos de la contraparte. Si la petición se ha formulado por escrito, se notificará a la contraparte por el término de cuarenta y ocho horas, vencido este término y dentro de las veinticuatro horas siguientes, resolverá lo que corresponda.

Si se ha solicitado la aclaración o ampliación de la sentencia o auto definitivo, los términos para interponer los recursos que procedan, correrán a partir del día siguiente al de su notificación.

CAPÍTULO III

RECURSO DE APELACIÓN

Art. 256.- Procedencia. El recurso de apelación procede contra las sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de primera instancia

así como contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda expresamente este recurso. Se interpondrá de manera oral en la respectiva audiencia.

Las sentencias adversas al sector público se elevarán en consulta a la respectiva Corte Provincial, aunque las partes no recurran, salvo las sentencias emitidas por los Jueces de lo Contencioso Administrativo y Tributario. En la consulta se procederá como en la apelación.

Art. 257.- Fundamentación. Se fundamentará por escrito dentro del término de diez días de notificado. Exceptúase el recurso de apelación con efecto diferido, que se fundamentará junto con la apelación sobre lo principal o cuando se conteste a la apelación.

En materia de niñez y adolescencia se fundamentará en el término de cinco días.

Art. 258.- Procedimiento. Con la fundamentación se notificará a la contraparte para que la conteste en el término de diez días. En materia de niñez y adolescencia el término para contestar será de cinco días.

Tanto en la fundamentación como en la contestación, las partes anunciarán la prueba que se practicará en la audiencia de segunda instancia, exclusivamente si se trata de acreditar hechos nuevos.

También podrá solicitarse en las correspondientes fundamentación o contestación la práctica de prueba que, versando sobre los mismos hechos, sólo haya sido posible obtenerla con posterioridad a la sentencia.

La apelación y la adhesión no fundamentada serán rechazadas de plano, teniéndose por no deducido el recurso.

Art. 259.- Resolución de la o del juzgador de primer nivel. Interpuesta la apelación, la o el juzgador la admitirá si es procedente y expresará el efecto con que la concede. A falta de expresión se entenderá que el efecto es suspensivo.

Si el recurso no es admitido, la parte apelante podrá interponer el recurso de hecho.

Art. 260.- Audiencia y resolución. Recibido el expediente, el tribunal convocará a audiencia en el término de quince días, conforme con las reglas generales de las audiencias previstas en este Código. En materia de niñez y adolescencia la audiencia se convocará en el término de diez días.

Una vez finalizado el debate, el tribunal pronunciará su resolución.

Art. 261.- Efectos. La apelación se concede:

1. Sin efecto suspensivo, es decir se cumple lo ordenado en la resolución impugnada y se remiten al tribunal de apelación las copias necesarias para el conocimiento y resolución del recurso.
2. Con efecto suspensivo, es decir no se continúa con la sustanciación del proceso hasta que la o el juzgador resuelva sobre la impugnación propuesta por el apelante.
3. Con efecto diferido, es decir, que se continúa con la tramitación de la causa, hasta que de existir una apelación a la resolución final, este deba ser resuelto de manera prioritaria por el tribunal.

Por regla general, la apelación se concederá con efecto suspensivo. El efecto diferido se concederá en los casos en que la ley así lo disponga.

Art. 262.- Procedencia según los efectos. La apelación procederá:

1. Sin efecto suspensivo, únicamente en los casos previstos en la Ley.
2. Con efecto suspensivo, cuando se trate de sentencias y de autos interlocutorios que pongan fin al proceso haciendo imposible su continuación.
3. Con efecto diferido, en los casos expresamente previstos en la Ley, especialmente cuando se la interponga contra una resolución dictada dentro de la audiencia preliminar, en la que se deniegue la procedencia de una excepción de resolución previa o la práctica de determinada prueba.

Art. 263.- Adhesión al recurso de apelación. Si una de las partes apela, la otra podrá adherirse a la apelación en forma motivada y si aquella desiste del recurso, el proceso continuará para la parte que se adhirió. La falta de adhesión al recurso no impide la intervención y la sustanciación de la instancia.

Art. 264.- Apelación parcial. La parte legitimada para presentar el recurso podrá apelar parcialmente la resolución, en cuyo caso se ejecutará la parte no impugnada.

Se podrá interponer apelación de la resolución que condene en costas.

Art. 265.- Recursos contra la sentencia de segunda instancia. Contra lo resuelto en apelación, únicamente procederá la aclaración, la ampliación y el recurso de casación, en los casos y por los motivos previstos en este Código.

CAPÍTULO IV

RECURSO DE CASACIÓN

Art. 266.- Procedencia. El recurso de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo.

Igualmente procederá respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el proceso ni decididos en el fallo o contradicen lo ejecutoriado.

Se interpondrá de manera escrita dentro del término de diez días, posteriores a la ejecutoria del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o aclaración.

Art. 267.- Fundamentación. El escrito de interposición del recurso de casación, deberá determinar fundamentada y obligatoriamente lo siguiente:

1. Indicación de la sentencia o auto recurrido con individualización de la o del juzgador que dictó la resolución impugnada, del proceso en que se expidió, de las partes procesales y de la fecha en que se perfeccionó la notificación con la sentencia o auto impugnado o con el auto que evacue la solicitud de aclaración o ampliación.
2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido.
3. La determinación de las causales en que se funda.
4. La exposición de los motivos concretos en que se fundamenta el recurso señalado de manera clara y precisa y la forma en la que se produjo el vicio que sustenta la causa invocada.

Art. 268.- Casos. El recurso de casación procederá en los siguientes casos:

1. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, que hayan viciado al proceso de nulidad insubsanable o causado indefensión y hayan influido por la gravedad de la transgresión en la decisión de la causa, y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal.
2. Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles así como, cuando no cumplan el requisito de motivación.
3. Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia del litigio o se haya concedido más allá de lo demandado, o se omita resolver algún punto de la controversia
4. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en la sentencia o auto.

5. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto.

Art. 269.- Procedimiento. El recurso de casación será de competencia de la Corte Nacional de Justicia, conforme con la ley.

La Sala de la Corte Provincial de Justicia de la que provenga la sentencia o auto recurrido, se limitará a calificar si el recurso de casación ha sido presentado dentro del término previsto para el efecto y remitirlo, de inmediato, a la Corte Nacional de Justicia.

El recurso deberá interponerse ante el mismo órgano jurisdiccional que dispondrá se obtengan las copias necesarias para la ejecución de la sentencia o auto y ordenará que la o el juzgador ejecutor adopte cualquier medida conducente a alcanzar la reparación integral e inmediata de los derechos lesionados. En la misma providencia ordenará que se eleve el expediente a la Corte Nacional de Justicia.

El auto que inadmita el recurso de casación será susceptible de aclaración o ampliación.

Art. 270.- Admisibilidad del recurso. Recibido el proceso en virtud del recurso de casación, se designará por sorteo a una o a un Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, quien en el término de quince días examinará si el recurso cumple los requisitos formales previstos en este Código y si lo admite o no.

No procede el recurso de casación, cuando de manera evidente, lo que se pretende es la revisión de la prueba.

Si el proceso se eleva en virtud de recurso de hecho, dentro del mismo término, examinará si el recurso de casación fue debidamente interpuesto, en cuyo caso concederá el recurso de casación.

Si se inadmite el recurso de casación o el de hecho, se devolverá el proceso al órgano judicial respectivo.

Si se admite el recurso de casación se notificará a las partes y se remitirá el expediente a la Sala Especializada correspondiente de la Corte Nacional de Justicia.

Art. 271.- Caución y suspensión de la ejecución. El recurrente podrá solicitar, al interponer el recurso, que se suspenda la ejecución de la sentencia o auto recurrido, rindiendo caución suficiente sobre los perjuicios estimados que la demora en la ejecución de la sentencia o auto pueda ocasionar a la contraparte.

El Tribunal correspondiente establecerá el monto de la caución al momento de expedir el auto que califica la oportunidad del recurso, en el término máximo de tres días desde su presentación.

Si la caución es consignada dentro del término de diez días posteriores a la notificación del auto de calificación del recurso, se dispondrá la suspensión de la ejecución de la sentencia o auto. En caso contrario, se ordenará su ejecución.

Art. 272.- Audiencia. Recibido el expediente, la o el juzgador de casación convocará a audiencia en el término de treinta días, conforme con las reglas generales de las audiencias previstas en este Código.

Art. 273.- Sentencia. Una vez finalizado el debate, la o el juzgador de casación pronunciará su resolución en los términos previstos en este Código, la que contendrá:

1. Cuando se trate de casación por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, la Corte Nacional de Justicia declarará la nulidad y dispondrá remitir el proceso, dentro del término máximo de treinta días, al órgano judicial al cual corresponda conocerlo en caso de recusación de quien pronunció la

providencia casada, a fin de que conozca el proceso desde el punto en que se produjo la nulidad, sustanciándola con arreglo a derecho.

2. Cuando la casación se fundamente en errónea decisión en cuanto a las normas de valoración de la prueba, el tribunal de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia casara la sentencia o el auto recurrido y pronunciara lo que corresponda.
3. Si la casación se fundamenta en las demás causales, el Tribunal de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia casará la sentencia en mérito de los autos y expedirá la resolución que en su lugar corresponda, remplazando los fundamentos jurídicos erróneos por los que estime correctos.
4. El Tribunal de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia deberá casar la sentencia o auto, aunque no modifique la parte resolutive, si aparece que en la motivación expresada en la resolución impugnada se ha incurrido en el vicio acusado, corrigiendo dicha motivación.
5. Si se casa la sentencia totalmente dejará sin efecto el procedimiento de ejecución que se encuentre en trámite.

Art. 274.- Efectos. La admisión del recurso no impedirá que la sentencia o auto se cumpla, salvo que el proceso verse sobre el estado civil de las personas o que haya sido propuesto por los organismos o entidades del sector público.

Art. 275.- Devolución y liquidación de la caución. La caución será devuelta por la o el juzgador de instancia si el recurso es aceptado totalmente por la o el juzgador de casación. En caso de aceptación parcial, el fallo de la Corte determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto al recurrente y la cantidad que será entregada a la parte perjudicada por la demora. Si el fallo rechaza el recurso totalmente, la o el juzgador entregará el valor total de la caución a la parte perjudicada por la demora.

Art. 276.- Efectos de la casación del fallo ejecutado. Si se ha ejecutado el fallo que es casado, la o el juzgador que lo dispuso dejará sin efecto aquello que pueda deshacerse y dispondrá se liquiden los daños y perjuicios,

tanto de la parte que no pueda deshacerse, como de la ejecución en general. En todo caso quedarán a salvo los derechos de terceros de buena fe.

Art. 277.- Legitimación para interponer el recurso. El recurso solo podrá interponerse por la parte que haya recibido agravio en la sentencia o auto. No podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia o auto expedido en primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución de la o del superior haya sido totalmente confirmatoria de aquella.

En ningún caso cabe la adhesión al recurso de casación deducido por otro.

CAPÍTULO V

RECURSO DE HECHO

Art. 278.- Procedencia. El recurso de hecho procede contra las providencias que niegan un recurso de apelación o de casación, a fin de que la o el juzgador competente las confirme o las revoque.

Art. 279.- Improcedencia. El recurso de hecho no procede:

1. Cuando la ley niegue expresamente este recurso o los de apelación o casación.
2. Cuando el recurso de apelación o el mismo de hecho no se interpongan dentro del término legal.
3. Cuando, concedido el recurso de apelación en el efecto no suspensivo, se interponga el de hecho con respecto al suspensivo.

A la o el juzgador a quo que, sin aplicar este artículo, eleve indebidamente el proceso, se le impondrá la sanción correspondiente.

Art. 280.- Forma de interposición. Dentro del término de tres días siguientes al de la notificación de la providencia denegatoria, el recurrente podrá interponer el recurso de hecho ante el mismo órgano judicial que la dictó.

Art. 281.- Concesión. Recibido el recurso, en el término de cinco días, lo remitirá al tribunal competente para la tramitación del mismo, excepto cuando la apelación se conceda con efecto diferido.

Art. 282.- Suspensión de la ejecución. Si se solicita la ejecución de la sentencia o la suspensión de la misma, se estará a lo que dispone este Código.

Art. 283.- Admisión o inadmisión del recurso. El tribunal de apelación admitirá el recurso o lo inadmitirá. Si lo admite, tramitará el recurso denegado en la forma prevista en este Código. Si lo inadmite devolverá el proceso al inferior para que continúe el procedimiento.

TÍTULO V COSTAS

Art. 284.- Costas. La persona que litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad será condenada a pagar al Estado y su contraparte, cuando haya lugar, los gastos en que haya incurrido. La o el juzgador deberá calificar esta forma de litigar y determinar su pago en todas las sentencias y autos interlocutorios que pongan fin al proceso.

El Estado no será condenado en costas, pero en su lugar podrá ser condenado a pagarlas quien ejerza su defensa.

Art. 285.- Monto. El monto de las costas procesales relativos a los gastos del Estado será fijado y actualizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con la ley.

Las costas incluirán todos los gastos judiciales originados durante la tramitación del proceso, entre otros, los honorarios de la defensora o del defensor de la contraparte y de las o los peritos, el valor de las publicaciones que debieron o deban hacerse, el pago de copias, certificaciones u otros documentos, excepto aquellos que se obtengan en forma gratuita.

Art. 286.- Condena en costas. La o el juzgador condenará en costas en los siguientes casos:

1. Cuando una parte solicite a la o al juzgador la realización de una audiencia y no comparezca a ella. Si la audiencia ha sido ordenada de oficio por la o el juzgador, la condena se impondrá a la parte ausente.
2. Cuando una parte desista, salvo acuerdo de las partes.
3. Cuando se declare desierto el recurso o haya sido rechazado y declarado que fue interpuesto con mala fe, en ejercicio abusivo del derecho o con deslealtad procesal, dejando a salvo las sanciones previstas en la ley.
4. Cuando la o el deudor no comparezca a la audiencia y no haya efectuado la entrega de la cosa en el procedimiento de pago por consignación. Se le condenará además a pagar los gastos de comparecencia de la o el acreedor.
5. Las demás determinadas en la ley.

Art. 287.- Condena en costas a las o los juzgadores. Cuando la o el juzgador, debiendo declarar la nulidad no la declare pagará las costas ocasionadas desde que pronunció el auto o sentencia en que debió ordenar la reposición del proceso.

Art. 288.- Apelación. En el caso de que se apele solo por la condena en costas, la sentencia o el auto interlocutorio se ejecutarán en lo principal y accesorio.

Para la sustanciación del recurso de apelación de las costas, bastará la copia certificada que subirá en instancia, dejando el original del proceso para la ejecución de la sentencia o auto interlocutorio.

Las o los juzgadores que hayan sido condenados en costas o multas, podrán apelar, aun cuando las partes no recurran, por no quererlo o por prohibición de la ley. Este recurso no impedirá el progreso de la causa principal y solo suspenderá la ejecución de la condena a la o al juzgador recurrente.

LIBRO IV PROCESOS

TÍTULO I PROCESOS DE CONOCIMIENTO

CAPÍTULO I PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SECCIÓN I REGLAS GENERALES

Art. 289.- Procedencia. Se tramitarán por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación.

Art. 290.- Acciones colusorias: Las acciones colusorias, se tramitarán en procedimiento ordinario.

Entre otras, las que priven del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente pertenecen a un tercero.

Quedará sin efecto la conducta colusoria, anulando el o los actos, convenciones o contratos que estén afectados por ella y se repararán los daños y perjuicios ocasionados, restituyendo al perjudicado la posesión o tenencia de los bienes de que se trate o el goce del derecho respectivo y reponiendo las cosas al estado anterior de la conducta colusoria.

Art. 291.- Calificación de la demanda y contestación. Presentada y admitida la demanda, la o el juzgador ordenará se cite al o a los demandados en la forma prevista en este Código.

La o el demandado tendrá treinta días para presentar su contestación

a la demanda. Este término se contará desde que se practicó la última citación, cuando las o los demandados son varios. Si al contestarla, se reconviene al actor, la o el juzgador en los tres días siguientes notificará y concederá a la o al actor el término de treinta días para contestarla.

Previamente a sustanciar el proceso, la o el juzgador calificará la demanda, la contestación a la demanda, la reconvencción, la contestación a la reconvencción y procederá conforme lo previsto en las disposiciones generales para los procesos.

SECCIÓN II

AUDIENCIA PRELIMINAR

Art. 292.- Convocatoria. Con la contestación o sin ella, en el término de tres días posteriores al vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior, la o el juzgador convocará a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un término no menor a diez ni mayor a veinte días.

Art. 293.- Comparecencia. Las partes están obligadas a comparecer personalmente a la audiencia preliminar, con excepción que se haya designado una o un procurador judicial o procurador común con cláusula especial o autorización para transigir, una o un delegado en caso de instituciones de la administración pública o se haya autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología.

Las partes, por una sola vez y de mutuo acuerdo, podrán diferir la audiencia y se fijará nuevo día y hora para su celebración.

Art. 294.- Desarrollo. La audiencia preliminar se desarrollará conforme con las siguientes reglas:

1. Instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a las partes se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas. De ser pertinente, serán resueltas en la misma audiencia.

2. La o el juzgador resolverá sobre la validez del proceso, la determinación del objeto de la controversia, los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, con el fin de convalidarlo o sanearlo. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provocar indefensión. Toda omisión hace responsables a las o los juzgadores que en ella han incurrido, quienes serán condenados en costas.
3. La o el juzgador ofrecerá la palabra a la parte actora que expondrá los fundamentos de su demanda. Luego intervendrá la parte demandada, fundamentando su contestación y reconviendo de considerarlo pertinente. Si la parte actora es reconvenida, la o el juzgador concederá la palabra para que fundamente su contestación. Si se alegan hechos nuevos, se procederá conforme a este Código.
4. La o el juzgador, de manera obligatoria, promoverá la conciliación conforme a la ley. De darse la conciliación total, será aprobada en el mismo acto, mediante sentencia que causará ejecutoria.
5. En caso de producirse una conciliación parcial, la o el juzgador la aprobará mediante auto que causará ejecutoria y continuará el proceso sobre la materia en que subsista la controversia.
6. La o el juzgador, de oficio, o a petición de parte, podrá disponer que la controversia pase a un centro de mediación legalmente constituido, para que se busque un acuerdo entre las partes. En caso de que las partes suscriban un acta de mediación en la que conste un acuerdo total, la o el juzgador la incorporará al proceso para darlo por concluido.
7. Concluida la primera intervención de las partes, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán:
 - a) Anunciar la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio. Formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba de la contraparte.
 - b) La o el juzgador podrá ordenar la práctica de prueba de oficio, en los casos previstos en este Código.

- c) Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba.
 - d) La o el juzgador resolverá sobre la admisibilidad de la prueba conducente, pertinente y útil, excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y garantías previstas en la Constitución, los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y este Código, y que fueron anunciadas por los sujetos procesales.
 - e) Para el caso de las pruebas que deban practicarse antes de la audiencia de juicio, la o el juzgador, conjuntamente con las partes, harán los señalamientos correspondientes con el objeto de planificar la marcha del proceso.
 - f) Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados. La o el juzgador fijará la fecha de la audiencia de juicio.
8. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador comunicará motivadamente, de manera verbal, a los presentes sus resoluciones, inclusive señalará la fecha de la audiencia de juicio, que se considerarán notificadas en el mismo acto. Se conservará la grabación de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia.

Las manifestaciones de dirección de la audiencia, incluso la proposición de fórmulas de arreglo entre las partes y las ordenadas para el cumplimiento de las actividades previstas en la misma, en ningún caso significarán prejuzgamiento. Por esta causa, la o el juzgador no podrá ser acusado de prevaricato, recusado, ni sujeto a queja.

La o el secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes,

los procedimientos especiales alternativos del procedimiento ordinario que se ha aplicado, las alegaciones, los incidentes y las resoluciones de la o el juzgador.

Art. 295.- Resolución de excepciones. Se resolverán conforme con las siguientes reglas:

1. Si se acepta una excepción previa que no es subsanable, se declarará sin lugar la demanda y se ordenará su archivo.
2. Si se acepta la excepción de defecto en la forma de proponer la demanda, la parte actora subsanará los defectos dentro del término de seis días, otorgando a la parte demandada el término de diez días para completar o reemplazar su contestación y anunciar prueba, atendiendo las aclaraciones o precisiones formuladas. De no hacerlo se tendrá la demanda o la reconvención por no presentada.
3. Si se aceptan las excepciones de falta de capacidad, de falta de personería o de incompleta conformación del litis consorcio se concederá un término de diez días para subsanar el defecto, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda y de aplicarse las sanciones pertinentes.
4. Si el asunto es de puro derecho se escuchará las alegaciones de las partes. La o el juzgador emitirá su resolución y notificará posteriormente la sentencia por escrito.

Terminados los alegatos, la o el juzgador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción, debiendo reanudarla para emitir su resolución mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este Código.

Art. 296.- Resolución de recursos. En la audiencia preliminar, se resolverán los recursos propuestos que se regirán por las siguientes reglas:

1. El auto interlocutorio que rechaza las excepciones previas, únicamente será apelable con efecto diferido. Si la resolución acoge las excepciones previas o resuelve cualquier cuestión que ponga fin al proceso será apelable con efecto suspensivo.

2. La ampliación y la aclaración de las resoluciones dictadas se propondrán en audiencia y se decidirán inmediatamente por la o el juzgador.

SECCIÓN III

AUDIENCIA DE JUICIO

Art. 297.- Audiencia de juicio. La audiencia de juicio se realizará en el término máximo de treinta días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar, conforme con las siguientes reglas:

1. La o el juzgador declarará instalada la audiencia y ordenará que por secretaría se de lectura de la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar.
2. Terminada la lectura la o el juzgador concederá la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial el que concluirá determinando, de acuerdo con su estrategia de defensa, el orden en que se practicarán las pruebas solicitadas. De igual manera, se concederá la palabra a la parte demandada y a terceros, en el caso de haberlos.
3. La o el juzgador ordenará la práctica de las pruebas admitidas, en el orden solicitado.
4. Las o los peritos y las o los testigos ingresarán al lugar donde se realiza la audiencia, cuando la o el juzgador así lo disponga y permanecerán mientras presten su declaración. Concluida su declaración se retirarán de la sala de audiencias pero permanecerán en la unidad judicial, en caso de que se ordene nuevamente su presencia para aclarar sus testimonios.
5. Las o los testigos y las o los peritos firmarán su comparecencia en el libro de asistencias que llevará la o el secretario, sin que sea necesaria la suscripción del acta.
6. Actuada la prueba, la parte actora, la parte demandada y las o los terceros de existir, en ese orden, alegarán por el tiempo que determine equitativamente la o el juzgador, con derecho a una sola réplica. La o el juzgador, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar el tiempo del alegato según la complejidad del caso y solicitará a las partes las

acларaciones o precisiones pertinentes, durante el curso de su exposición o a su finalización.

7. Terminada la intervención de las partes, la o el juzgador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción debiendo reanudarla dentro del mismo día para emitir su resolución mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este Código.

Art. 298.- Recurso de Apelación. La admisión por la o el juzgador del recurso de apelación oportunamente interpuesto da inicio a la segunda instancia.

El procedimiento en segunda instancia, cuando se ha apelado de la sentencia, será el previsto en este Código.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES COMUNES

Art. 299.- Competencia. En las controversias en las que el Estado o las instituciones que comprenden el sector público determinadas por la Constitución, sea el demandado, la competencia se radicará en el órgano jurisdiccional del lugar del domicilio de la o del actor. Si es actor, la competencia se fijará en el lugar del domicilio del demandado.

Art. 300.- Objeto. Las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativa previstas en la Constitución y en la ley, tienen por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo; así como, conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico tributaria o jurídico administrativa, incluso la desviación de poder.

Cualquier reclamo administrativo se extinguirá, en sede administrativa, con la presentación de la acción contencioso tributaria o contencioso administrativa. No serán admisibles los reclamos administrativos una vez ejercidas las acciones contencioso tributarias o contencioso administrativas.

Art. 301.- Delimitación de la administración pública. Para los fines del presente Título, se entenderá que forman parte de la administración pública todos aquellos organismos señalados en la Constitución.

La administración tributaria está integrada por la administración central, la de los gobiernos autónomos descentralizados y las especiales o de excepción.

Están sujetos a la jurisdicción contencioso administrativa también las personas de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud de concesión o delegación a la iniciativa privada, por las acciones u omisiones que ocasionen daños en virtud del servicio concesionado o delegado.

Art. 302.- Sustanciación y prevalencia de las normas de este capítulo. Las controversias sometidas a conocimiento y resolución de las o los juzgadores de lo contencioso tributario y contencioso administrativo se sujetarán a las normas especiales de este capítulo. Las normas generales de este Código serán aplicables a las materias contencioso tributaria y administrativa, en lo que no se oponga a las de este capítulo, aunque considerando la supletoriedad de las leyes de cada materia.

Art. 303.- Legitimación activa. Se encuentran habilitados para demandar en procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo:

1. La persona natural o jurídica que tenga interés directo en demandar la nulidad o ilegalidad de los actos administrativos o los actos normativos de la administración pública, ya sea en materia tributaria o administrativa.

2. Las instituciones y corporaciones de derecho público y las empresas públicas que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que la acción tenga como objeto la impugnación directa de las disposiciones tributarias o administrativas, por afectar a sus intereses.
3. La o el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico, que se considere lesionado por el acto o disposición impugnados y pretenda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o su restablecimiento.
4. La máxima autoridad de la administración autora de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pueda anularlo o revocarlo por sí misma.
5. La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado cuando considere lesionados sus derechos ante la existencia de detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia o violación del derecho a la tutela judicial efectiva por violaciones al principio y reglas del debido proceso.
6. La persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública.
7. Las sociedades en los términos previstos en la ley de la materia.

Art. 304.- Legitimación pasiva. La demanda se podrá proponer contra:

1. La autoridad o las instituciones y entidades del sector público de quien provenga el acto o disposición a que se refiere la demanda.
2. La o el director, delegado o jefe de la oficina u órgano emisor del título de crédito, cuando se demande su nulidad o la prescripción de la obligación tributaria o se proponga excepciones al procedimiento coactivo.
3. La o el funcionario recaudador o el ejecutor, cuando se demande el pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución.
4. Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad.
5. Las personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos con el Estado.

Art. 305.- Comparecencia a través de patrocinador. La autoridad competente de la institución de la administración pública que interviene como parte o el funcionario a quien se delegue por acto administrativo, podrán designar, mediante oficio, al defensor que intervenga como patrocinador de la defensa de los intereses de la autoridad demandada. Tal designación surtirá efecto hasta la terminación de la causa, a no ser que se lo sustituya.

No obstante, en aquellas acciones o procedimientos en los que deba intervenir directamente la o el Procurador General del Estado se procederá conforme con la ley.

Art. 306.- Oportunidad para presentar la demanda. Para el ejercicio de las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas se observará lo siguiente:

1. En los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda será de noventa días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado.
2. En los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de tres años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado.
3. En casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de cinco años.
4. La acción de lesividad podrá interponerse en el término de noventa días a partir del día siguiente a la fecha de la declaratoria de lesividad.
5. En las acciones contencioso tributarias de impugnación o directas, el término para demandar será de sesenta días desde que se notificó con el acto administrativo tributario o se produjo el hecho o acto en que se funde la acción.
6. Las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo debidamente pagado se propondrán en el plazo de tres años desde que se produjo el pago o desde la determinación, según el caso.

7. Las demás acciones que sean de competencia de las o los juzgadores, el término o plazo será el determinado en la ley de acuerdo con la naturaleza de la pretensión.

Art. 307.- Prescripción. En el caso de las demandas presentadas ante las o los juzgadores de lo contencioso tributario y de lo contencioso administrativo o en aquellas materias especiales que según su legislación contemplen la prescripción del derecho de ejercer la acción, la o el juzgador deberá verificar que la demanda haya sido presentada dentro del término que la ley prevé de manera especial. En caso de que no sea presentada dentro de término, inadmitirá la demanda.

Art. 308.- Requisitos de la demanda. Cuando se trate de procesos contencioso tributarios y contencioso administrativos, además de cumplir los requisitos previstos para la demanda en las normas generales de este Código, se adjuntará la copia de la resolución, del acto administrativo, del contrato o disposición impugnados, con la razón de la fecha de su notificación a la o al interesado y la relación circunstanciada del acto o hecho impugnado.

Art. 309.- Término para la contestación a la demanda. La contestación a la demanda de las acciones previstas en este capítulo, se hará en el término previsto en este Código.

La o el demandado estará obligado a acompañar a la contestación de la demanda: copias certificadas de la resolución o acto impugnado de que se trate y el expediente original que sirvió de antecedente y que se halle en el archivo de la dependencia a su cargo.

Art. 310.- Medios de prueba aplicables. Para las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas son admisibles todos los medios de prueba, excepto la declaración de parte de los servidores públicos.

Los informes que emitan las autoridades demandadas por disposición de la o del juzgador, sobre los hechos materia de la controversia, no se considerarán declaración de parte.

Art. 311.- Validez y eficacia de las actuaciones de la administración pública. Son válidos y eficaces los actos del sector público expedidos por autoridad pública competente, salvo que se declare lo contrario.

Con respecto a los actos tributarios impugnados, corresponderá a la administración la prueba de los hechos o actos del contribuyente, de los que concluya la existencia de la obligación tributaria y su cuantía.

Art. 312.- Sustanciación. En el caso de los procesos sustanciados por las acciones previstas en este título, la o el juzgador ponente tendrá a su cargo la sustanciación del proceso.

Art. 313.- Contenido de la sentencia. Además de los requisitos generales previstos para la sentencia, esta decidirá con claridad los puntos sobre los que se produjo la controversia y aquellos que en relación directa a los mismos comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, supliendo incluso las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o se aparte del criterio que aquellas atribuyan a los hechos.

En caso de que se admita la pretensión del administrado y se deje sin efecto el acto impugnado, se ordenará además que se restituya el valor pagado indebidamente o en exceso y lo debidamente pagado.

Art. 314.- Ejecución de la sentencia. Una vez ejecutoriada la sentencia la o al (sic) juzgador ordenará bajo prevenciones legales que la institución del Estado cumpla lo dispuesto en la misma, pudiendo incluso disponer, cuando corresponda, que la liquidación sea realizada por la misma entidad estatal.

Por imposibilidad legal o material para el cumplimiento de la sentencia, no podrá suspenderse ni dejar de ejecutarse el fallo, a no ser que se indemnice a la o al perjudicado por el incumplimiento, en la forma que determine la o el juzgador.

Las o los servidores públicos que retarden, se rehusen o se nieguen a cumplir las resoluciones o sentencias estarán incurso en la responsabilidad administrativa, civil o penal a que haya lugar.

Art. 315.- Procedimiento de excepciones a la coactiva. El procedimiento ordinario será aplicable a todos los procesos de conocimiento en los que se propongan excepciones a la coactiva.

Para el caso de excepciones a la coactiva, la o el juzgador calificará la demanda en el término previsto para el procedimiento ordinario, citará al funcionario ejecutor a fin de que suspenda el procedimiento de ejecución y convocará en dicha calificación a audiencia conforme con las reglas generales de este Código.

Art. 316.- Excepciones a la coactiva. Al procedimiento coactivo solo se podrán oponer las siguientes excepciones:

1. Inexistencia de la obligación, falta de ley que establezca el tributo o exención legal.
2. Extinción total o parcial de la obligación sea por solución o pago, compensación, confusión, remisión o prescripción de la acción de cobro.
3. Incompetencia del funcionario ejecutor.
4. Ilegitimidad de personería de la o del coactivado o de quien haya sido citado como su representante.
5. El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida.
6. Encontrarse pendiente de resolución, un reclamo o recurso administrativo u observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión.
7. Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los dividendos correspondientes.
8. Haberse presentado demanda contencioso tributaria por impugnación de resolución administrativa, antecedente del título o títulos que se ejecutan.

9. Duplicación de títulos con respecto a una misma obligación y de una misma persona.
10. Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación del título de crédito, por quebrantamiento de las normas que rigen su emisión o falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento.

No podrán oponerse las excepciones primera, segunda, cuarta, quinta y novena, cuando los hechos que las fundamenten hayan sido discutidos y resueltos ante la jurisdicción contenciosa.

De las resoluciones sobre las excepciones señaladas en este artículo se podrá interponer recurso de casación conforme con las normas de este Código.

Art. 317.- Suspensión de la ejecución coactiva. Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria la consignación de la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas, aun en el caso de que dichas excepciones propuestas versaren sobre falsificación de documentos o sobre prescripción de la acción.

Si el deudor no acompaña a su escrito de excepciones la prueba de consignación, no se suspenderá el procedimiento coactivo y el procedimiento de excepciones seguirá de esa forma.

La consignación no significa pago.

Si el procedimiento que se discuten las excepciones, se suspendieren por treinta días o el actor no presenta ningún escrito o petición durante ese término, antes de la sentencia, de primera o segunda instancia, de los tribunales contencioso administrativo o de casación, el procedimiento terminará a favor de la institución acreedora.

SECCIÓN II

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Art. 318.- Domicilio de la o del actor. Las controversias que se tramiten en procesos contenciosos tributarios tendrán las siguientes reglas de domicilio:

1. El domicilio de personas naturales será el del lugar de su residencia habitual o donde ejerzan sus actividades económicas, aquel donde se encuentren sus bienes o se produzca el hecho generador.
2. El domicilio de personas jurídicas será el del lugar señalado en el contrato social o en su estatuto, en el lugar en donde se ejerza cualquiera de sus actividades económicas o donde ocurra el hecho generador.
3. El domicilio de los extranjeros que perciban cualquier clase de remuneración, principal o adicional en el Ecuador a cualquier título con o sin relación de dependencia o contrato de trabajo en empresas nacionales o extranjeras que operen en el país, será el lugar donde aparezcan ejerciendo esas funciones o percibiendo esas remuneraciones y si no es posible precisar de este modo el domicilio, se tendrá como tal a la capital de la República.

Art. 319.- Acciones en procedimiento contencioso tributario. Se tramitarán en el procedimiento contencioso tributario las acciones de impugnación, acciones directas y acciones especiales.

Art. 320.- Impugnación. Las o los contribuyentes o interesados directos pueden impugnar:

1. Contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general, dictadas en materia tributaria, cuando se alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes.
2. Contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general, dictadas en materia tributaria, cuando se persiga la anulación total o parcial de dichos actos.

3. Contra actos administrativos de determinación tributaria provenientes de la administración tributaria nacional, de gobiernos autónomos descentralizados o de excepción.
4. Contra actos administrativos por silencio administrativo con respecto a reclamos o peticiones planteados, en los casos previstos en la ley.
5. Contra decisiones administrativas dictadas en recurso de revisión.
6. Contra resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales.
7. Contra resoluciones definitivas de la administración tributaria que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado.
8. De las excepciones a la coactiva que se propongan justificadas en el número 10 del artículo 316.
9. Las que se propongan contra las resoluciones de las administraciones tributarias que nieguen en todo o en parte reclamaciones de contribuyentes, responsables o terceros o las peticiones de compensación o de facilidades de pago.

Estas acciones se ejercerán en procedimiento ordinario.

Art. 321.- Acciones directas. Se pueden presentar acciones directas por pago indebido, pago en exceso o de lo debidamente pagado cuando se ha realizado después de ejecutoriada una resolución administrativa que niegue el reclamo de un acto de liquidación o determinación de obligación tributaria.

La acción de impugnación de resolución administrativa, se convertirá en la de pago indebido cuando, estando en trámite aquella, se pague la obligación.

Estas acciones se tramitarán en procedimiento ordinario.

Art. 322.- Acciones especiales. Se pueden proponer como acciones especiales:

1. Las excepciones a la coactiva, con excepción de la prevista en el número 10 del Artículo 316.
2. Para obtener la declaración de prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas.
3. Las tercerías excluyentes de dominio que se deduzcan en coactivas por créditos tributarios.
4. La impugnación a las providencias dictadas en el procedimiento de ejecución, en los casos de decisiones de preferencia, posturas y de la entrega material de los bienes embargados o subastados previstos en la Ley de la materia.
5. La nulidad en los casos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 207 del Código Orgánico Tributario que solo podrá reclamarse junto con el recurso de apelación del auto de calificación definitivo, conforme con el artículo 191 del mismo Código.
6. Los conflictos de competencia suscitados entre autoridades de distintas administraciones tributarias, conforme con la ley.
7. El recurso de queja.
8. Las de pago por consignación de créditos tributarios, en los casos previstos en la ley.
9. Las de nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad, según la ley cuya violación se denuncie. No habrá lugar a esta acción, después de pagado el tributo exigido o de efectuada la consignación total por el postor declarado preferente en el remate o subasta, o de satisfecho el precio en el caso de venta directa, dejando a salvo las acciones civiles que correspondan al tercero perjudicado ante la justicia ordinaria.
10. La nulidad del remate o subasta cuando el rematista es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate, conforme con la ley de la materia.

11. Las acciones que se propongan contra las registradoras y los registradores de la propiedad y mercantiles de su jurisdicción, por haberse negado, por razones tributarias, a inscribir cualquier acto o contrato, y las acciones subsiguientes contra tales funcionarias y funcionarios para liquidar daños y perjuicios causados por la ilegal negativa.
12. Las previstas en las leyes correspondientes.

Estas acciones se tramitarán en procedimiento sumario.

Art. 323.- Pluralidad de pretensiones. Podrá impugnarse en una sola demanda dos o más resoluciones administrativas, siempre que guarden relación entre sí, se refieran al mismo sujeto pasivo y a una misma administración tributaria, aunque correspondan a ejercicios distintos.

En una misma demanda se podrá solicitar la prescripción de varias obligaciones tributarias de un sujeto pasivo, aun de distinto origen, siempre que correspondan a la misma administración tributaria.

Art. 324.- Suspensión del acto impugnado. Cuando el acto administrativo en materia tributaria impugnado imponga al administrado una obligación de dar, este puede solicitar en su demanda la suspensión de los efectos de dicho acto. Para que se haga efectiva la suspensión, el tribunal ordenará al actor rendir caución del 10% de la obligación; en caso de no hacerlo, se continuará con la ejecución del acto impugnado.

La caución a que se refiere el inciso anterior podrá consistir en consignación del valor en la cuenta de la institución pública demandada o en una hipoteca, prenda o fianza bancaria, o cualquier otra forma de aval permitida por la ley. El acto constitutivo de hipoteca, prenda o fianza, así como su cancelación, solo causarán los derechos o impuestos fijados para los actos de cuantía indeterminada.

Los actos de constitución de la hipoteca o prenda o de la fianza personal serán admitidos por la o el juzgador.

La caución se cancelará si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, en caso de ser en dinero generará intereses a favor de la o del actor. En caso de aceptación parcial, el fallo determinará el monto de la caución que corresponda ser devuelto a la o al demandante y la cantidad que servirá como abono a la obligación. Si la demanda o la pretensión es rechazada en su totalidad, la administración aplicará el valor total de la caución como abono a la obligación.

La o el juzgador calificará la demanda y dispondrá que se rinda la caución en el término de veinticinco días, en caso de no hacerlo se tendrá como no presentada y por consiguiente, ejecutoriado el acto impugnado, ordenará el archivo del proceso.

Art. 325.- Efectos del abandono. La declaración de abandono termina el proceso en favor del sujeto activo del tributo y queda firme el acto o resolución impugnados o deja ejecutoriadas las providencias o sentencias que hayan sido recurridas. La o el juzgador ordenará, la continuación de la coactiva que se ha suspendido o su iniciación si no se ha propuesto o que se hagan efectivas las garantías rendidas sin lugar a ninguna excepción.

SECCIÓN III

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Art. 326.- Acciones en el procedimiento contencioso administrativo. Se tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes acciones;

1. La de plena jurisdicción o subjetiva que ampara un derecho subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también esta acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos.
2. La de anulación objetiva o por exceso de poder que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo y

puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.

3. La de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público.
4. Las especiales de:
 - a) El silencio administrativo.
 - b) El pago por consignación cuando la o el consignador o consignatario sea el sector público comprendido en la Constitución de la República.
 - c) La responsabilidad objetiva del Estado.
 - d) La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado conforme con la ley.
 - e) Las controversias en materia de contratación pública.
 - f) Las demás que señale la ley.

Art. 327.- Procedimiento. Todas las acciones contencioso administrativas se tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las acciones relativas al silencio administrativo positivo y las de pago por consignación que se tramitarán en procedimiento sumario.

Art. 328.- Repetición. En los casos en que la sentencia declare la responsabilidad de las autoridades, servidoras o servidores públicos en el desempeño de sus cargos o las personas de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud de concesión o delegación a la iniciativa privada, se ordenará que se inicie el proceso de repetición contra todos aquellos, quienes tendrán responsabilidad solidaria hasta la solución total de la obligación.

La repetición se sustanciará ante las o los juzgadores de lo contencioso administrativo mediante procedimiento ordinario.

Art. 329.- Presunciones del acto administrativo. Los actos administrativos gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad. Serán ejecutables, desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados.

Los actos administrativos pueden ser suspendidos conforme con las disposiciones de este Código.

Art. 330.- Suspensión del acto impugnado. A petición de parte, el juzgador podrá ordenar en el auto inicial la suspensión del acto administrativo, cuando de los hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas, aparezca como justificado un juicio provisional e indiciario favorable a la pretensión exhibida, sin que esto implique una decisión anticipada sobre el fondo, siempre que el retardo en la decisión de la causa pueda afectar irremediablemente el derecho opuesto y se evidencie la razonabilidad de la medida.

Podrá motivadamente revocarse la medida en cualquier estado del proceso, en tanto se advierta una modificación en las circunstancias que lo motivaron.

Art. 331.- Ejecución de la sentencia. Una vez ejecutoriada la sentencia la o al (sic) juzgador ordenará bajo prevenciones legales que la institución del Estado cumpla lo dispuesto en la misma.

Por imposibilidad legal o material para el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo no podrá suspenderse ni dejar de ejecutarse el fallo, a no ser que se indemnice al perjudicado por el incumplimiento, en la forma que determine la o el juzgador.

CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO SUMARIO

Art. 332.- Procedencia.- Se tramitarán por el procedimiento sumario:

1. Las ordenadas por la ley.

2. Las acciones posesorias y acciones posesorias especiales, acción de obra nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbres o cualquier incidente relacionado con una servidumbre ya establecida, demarcación de linderos en caso de oposición y demanda de despojo violento y de despojo judicial.
3. La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura.
4. El divorcio contencioso. Si previamente no se ha resuelto la determinación de alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y los hijos menores de edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de la unión de hecho.

La o el juzgador, en todos los casos, deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de las hijas e hijos menores de veintiún años o con discapacidad conforme con la ley.

5. Las controversias relativas a incapacidades y declaratoria de interdicción y guardas.
6. Las controversias relativas a honorarios profesionales, cuando la pretensión no sea exigible en procedimiento monitorio o en vía ejecutiva.
7. Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios.
8. Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, con la reducción de plazos previstos en el Código del Trabajo sobre el despido ineficaz.
9. Las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación.

Art. 333.- Procedimiento. El procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas:

1. No procede la reforma de la demanda.
2. Solo se admitirá la reconvencción conexa.
3. Para contestar la demanda y la reconvencción se tendrá un término de quince días a excepción de la materia de niñez y adolescencia que será de diez días.
4. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Esta audiencia se realizará en el término máximo de treinta días a partir de la contestación a la demanda.

En materia de niñez y adolescencia, la audiencia única se realizará en el término mínimo de diez días y máximo de veinte días contados a partir de la citación.

En las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la citación.

En materia tributaria, en acción especial por clausura de establecimientos, la audiencia única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho horas.

5. En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de niñas, niños y adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no podrá suspender la audiencia para emitir la decisión oral, conforme este Código.
6. Serán apelables las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario. Las resoluciones de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, despojo violento, despojo judicial serán apelables solamente en efecto no suspensivo. Las sentencias que se pronuncien dentro de los juicios en que se ventilen las controversias entre el abogado y su cliente por el pago de honorarios, no serán susceptibles de los recursos de apelación ni de hecho.

CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS

SECCIÓN I REGLAS GENERALES

Art. 334.- Procedencia. Se considerarán procedimientos voluntarios, con competencia exclusiva de las o los juzgadores, los siguientes:

1. Pago por consignación.
2. Rendición de cuentas,
3. Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes.
4. Inventario, en los casos previstos en este capítulo.
5. Partición.
6. Autorización de venta de bienes de niñas, niños y adolescentes y, de personas sometidas a guarda.

También se sustanciarán por el procedimiento previsto en esta Sección los asuntos de jurisdicción voluntaria, como el otorgamiento de autorizaciones o licencias y aquellas en que por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelvan sin contradicción.

Art. 335.- Procedimiento. Se iniciarán por solicitud que contendrá los mismos requisitos de la demanda.

La o el juzgador calificará la solicitud. Si se admite la solicitud, la o el juzgador dispondrá la citación de todas las personas interesadas o de quienes puedan tener interés en el asunto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá requerir la información a la o el interesado, con respecto al domicilio o residencia y otros datos necesarios de quienes deban ser citados.

La o el juzgador convocará a audiencia en un término no menor a diez días ni mayor a veinte días siguientes a la citación. En dicha audiencia,

escuchará a los concurrentes y se practicarán las pruebas que sean pertinentes. A continuación, aprobará o negará lo solicitado.

Art. 336.- Oposición. Las personas citadas o cualquier otra que acredite interés jurídico en el asunto, podrán oponerse por escrito hasta antes de que se convoque a la audiencia.

La oposición deberá cumplir los mismos requisitos de la contestación a la demanda.

La o el juzgador inadmitirá la oposición cuando sea propuesta sin fundamento o con el propósito de retardar el procedimiento. En los demás casos, se entenderá que ha surgido una controversia que deberá sustanciarse por la vía sumaria, teniéndose la solicitud inicial como demanda y la oposición como contestación a la demanda. En tal caso, la o el juzgador concederá a las partes el término de quince días para que anuncien las pruebas, hecho lo cual se convocará a la audiencia.

Art. 337.- Recursos. Será apelable la providencia que inadmita la solicitud inicial y la resolución que la niegue.

Las demás providencias que se pronuncien solo serán susceptibles de aclaración, ampliación, reforma y revocatoria.

SECCIÓN II

PAGO POR CONSIGNACIÓN

Art. 338.- Pago por consignación. La solicitud del pago por consignación se presentará y tramitará conforme con la ley.

La o el juzgador convocará a audiencia en la que además ordenará la presencia del acreedor para recibir la cosa ofrecida, para lo cual, el solicitante deberá haber puesto a órdenes de la o del juzgador la cosa ofrecida.

Si la o el acreedor comparece y acepta la oferta, se le entregará la cosa,

se sentará el acta y quedará concluido el procedimiento; si no comparece se dictará sentencia declarando hecho el pago y extinguida la obligación.

Si el acreedor se opone, se sustanciará la petición en procedimiento sumario.

SECCIÓN III

RENDICIÓN DE CUENTAS

Art. 339.- Rendición de cuentas. La persona que administra bienes ajenos, corporales o incorporales está obligada a rendir cuentas en los períodos estipulados y a falta de estipulación, cuando el titular del derecho de dominio o la persona que ha encomendado la administración, la solicite.

Citada la persona que deba rendir cuentas presentará a la o al juzgador, el informe que se notificará a la o al solicitante, quien podrá objetarlo dentro de la respectiva audiencia.

La objeción a las cuentas o la oposición a rendirlas se sustanciarán conforme el procedimiento sumario.

SECCIÓN IV

DIVORCIO O TERMINACIÓN DE UNIÓN DE HECHO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

Art. 340.- Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento. El divorcio o la terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes, se sustanciará ante la o el juzgador competente.

La o el juzgador convocará a los cónyuges o a los convivientes a audiencia a la cual comparecerán personalmente o a través de la o del procurador judicial y ratificarán su decisión de dar por terminado el vínculo matrimonial o la unión de hecho.

Si en la audiencia, los cónyuges o los convivientes han acordado sobre la situación de las o los hijos menores de dieciocho años y de los bienes, la o el juzgador en el acto pronunciará sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho.

En caso de divorcio o terminación de la unión de hecho se dispondrá la inscripción de la sentencia conforme con la ley.

De no haber acuerdo sobre la situación de las o los hijos menores de dieciocho años, el asunto se sustanciará ante la o el mismo juzgador en procedimiento sumario y resuelta esta controversia se declarará disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho.

SECCIÓN V INVENTARIO

Art. 341.- Inventario. Cualquier persona que tenga o presuma tener derecho sobre los bienes que se trate de inventariar, solicitará a la o al juzgador se forme inventario. Para el efecto, la o el juzgador designará a la o el perito para que proceda a su formación y avalúo en presencia de los interesados.

Cuando se trate de bienes sucesorios, se citará a las personas referidas en la ley.

Si en el inventario existen bienes que se encuentren en poder de terceros, la o el juzgador dispondrá que estos sean citados. Por el hecho de la citación, los terceros se encuentran obligados a prestar todas las facilidades a la o el perito.

La o el juzgador del inventario será también de la partición.

Art. 342.- Contenido del inventario. En el inventario se hará constar lo siguiente:

1. El nombre y domicilio de la persona solicitante, de las o los interesados que hayan comparecido, de quienes habiendo sido citados, no hayan concurrido, de las o los ausentes si son conocidas o conocidos y el de la o del perito.
2. La designación del lugar donde se haga el inventario.
3. La descripción de los objetos inventariados con designación del avalúo que fije la o el perito.
4. La descripción de los papeles, libros y demás documentos que se encuentren.
5. La enumeración y descripción de los títulos de crédito, activo o pasivo y los recibos.
6. La afirmación que presten quienes hayan estado en posesión o tenencia de los objetos, con respecto a no haber visto ni oído que otras personas hayan tomado alguna de las cosas correspondientes a la herencia o que se hallaban en alguna propiedad de la persona fallecida.

Se expresará la entrega de los bienes y papeles a la o al depositario heredero o albacea en su caso.

Art. 343.- Inventario solemne. Si la herencia está yacente o se trata de entregar los bienes a un depositario, cuando se levanten los sellos con que estén asegurados, el inventario se formará con asistencia de la o del juzgador, la o del secretario y los testigos.

Se citará a las personas cuya presencia sea necesaria conforme con la ley.

Cuando alguno de los herederos esté o deba estar bajo tutela o curaduría o siendo menores no puedan estar representados por el padre o la madre, por haber contraposición de intereses, se formará el inventario con asistencia de las personas que los representen, de la o del secretario del juzgado, de dos testigos y del perito.

Art. 344.- Exoneración de inventario solemne. Sí se prueba que los bienes hereditarios de un menor son exiguos, la o el juzgador podrá eximir

de la obligación de inventariarlos solemnemente, en tal caso, exigirá un apunte privado con las firmas del representante legal y de tres de los parientes más cercanos que sean mayores de edad.

Art. 345.- Aprobación del inventario. Presentado el inventario, la o el juzgador trasladará a todos los interesados y simultáneamente convocará a la audiencia.

En caso de que no existan observaciones ni reclamos sobre la propiedad de los bienes incluidos en el inventario, este se aprobará en la misma audiencia. La sentencia causará ejecutoria.

Art. 346.- Oposición al inventario. Cualquier observación u objeción al inventario, negativa de terceros a permitir el examen y tasación será considerada como oposición.

La oposición se sustanciará por la misma o el mismo juzgador que dispuso la formación del inventario en proceso sumario. La o el juzgador podrá aprobar el inventario en la parte no objetada.

La o el juzgador podrá compeler a las o a los tenedores de bienes para que permitan el examen y tasación de los mismos por cualquier medio, incluido el auxilio de la fuerza pública.

Los reclamos sobre propiedad o dominio de los bienes incluidos en el inventario se sustanciarán ante la misma o el mismo juzgador, en procedimiento ordinario separado.

TÍTULO II PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS

CAPÍTULO I PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

Art. 347.- Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer:

1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente.
2. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas.
3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial.
4. Letras de cambio.
5. Pagarés a la orden.
6. Testamentos.
7. Transacción extrajudicial.
8. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos.

Art. 348.- Procedencia. Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Cuando la obligación es de dar una suma de dinero debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación aritmética. Si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de este.

Se considerarán de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de pagos. Cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá ejecutarse la obligación condicional y si es en parte líquida y en parte no, se ejecutará en la parte líquida.

Si la obligación es en parte líquida, la o el actor acompañará una liquidación pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título.

Art. 349.- Requisito de procedibilidad. La demanda deberá reunir los requisitos previstos en las reglas generales de este Código y se propondrá acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo. La omisión de este requisito no será subsanable y producirá la inadmisión de la demanda.

Art. 350.- Denegación del procedimiento. Si la o el juzgador considera que el título aparejado a la demanda no presta mérito ejecutivo, denegará de plano la acción ejecutiva.

Art. 351.- Inicio del proceso y contestación a la demanda. La o el juzgador calificará la demanda en el término de tres días.

Si el ejecutante acompaña a su demanda los correspondientes certificados que acrediten la propiedad de los bienes del demandado, con el auto de calificación podrán ordenarse providencias preventivas sobre tales bienes, hasta por el valor que cubra el monto de lo reclamado en la demanda. Sin perjuicio de los certificados a que se refiere este inciso, no se exigirá el cumplimiento de los demás presupuestos previstos en este Código para las providencias preventivas.

También podrá pedirse embargo de los bienes raíces, siempre que se trate de crédito hipotecario.

En todo caso, las providencias preventivas a que se refiere este artículo podrán solicitarse en cualquier estado del juicio en primera instancia.

La o el demandado al contestar a la demanda podrá:

1. Pagar o cumplir con la obligación.
2. Formular oposición acompañando la prueba conforme con lo previsto en este Código.
3. Rendir caución con el objeto de suspender la providencia preventiva dictada, lo cual podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia.
4. Reconvenir al actor con otro título ejecutivo.

Art. 352.- Falta de contestación a la demanda. Si la o el deudor dentro del respectivo término no cumple la obligación, ni propone excepciones o

si las excepciones propuestas son distintas a las permitidas en este Código para este tipo de procesos, la o el juzgador en forma inmediata pronunciará sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la obligación. Esta resolución no será susceptible de recurso alguno.

Art. 353.- Excepciones. En el procedimiento ejecutivo la oposición solamente podrá fundarse en estas excepciones:

1. Título no ejecutivo.
2. Nulidad formal o falsedad del título.
3. Extinción total o parcial de la obligación exigida.
4. Existencia de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado, en el que la parte demandada del procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o denunciante del proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado.

En caso de que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la contestación a la demanda, la o el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su suspensión.

5. Excepciones previas previstas en este Código.

Art. 354.- Audiencia. Si se formula oposición debidamente fundamentada, dentro del término de tres días se notificará a la contraparte con copia de la misma y se señalará día y hora para la audiencia única, la que deberá realizarse en el término máximo de veinte días contados a partir de la fecha en que concluyó el término para presentar la oposición o para contestar la reconvenición, de ser el caso.

La audiencia única se realizará en dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Culminada la audiencia la o al juzgador deberá pro-

nunciar su resolución y posteriormente notificar la sentencia conforme con este Código.

De la sentencia cabrá apelación únicamente con efecto no suspensivo conforme con las reglas generales previstas en este Código. Para la suspensión de la ejecución de la sentencia el deudor deberá consignar o caucionar el valor de la obligación. Para la caución se estará a lo dispuesto en este Código.

No será admisible el recurso de casación para este tipo de procesos.

Art. 355.- Normas supletorias. En todo lo no previsto en este Título serán aplicables las normas del procedimiento sumario.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO MONITORIO

Art. 356.- Procedencia. La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio, cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas:

1. Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de dicha deudora o dicho deudor.
2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de los que comprueban la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.

Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para acudir al proceso deberá acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.

3. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos.
4. Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien.
5. La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente, acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la reclamación y la prueba de la relación laboral.

Art. 357.- Demanda. El procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda que contendrá además de los requisitos generales, la especificación del origen y cantidad de la deuda; o con la presentación del formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. En cualquiera de los casos, se acompañará el documento que prueba la deuda.

Si la cantidad demandada no excede de los tres salarios básicos unificados del trabajador en general no se requerirá el patrocinio de un abogado.

Art. 358.- Admisión de la demanda de pago. La o el juzgador, una vez que declare admisible la demanda, concederá el término de quince días para el pago y mandará que se cite a la o al deudor.

La citación con el petitorio y el mandamiento de pago de la o del juzgador interrumpe la prescripción.

Si la o el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, el auto interlocutorio al que se refiere el inciso primero quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución, comenzando por el embargo de los bienes de la o del deudor que la acreedora o el acreedor señale en la forma prevista por este Código.

Art. 359.- Oposición a la demanda. Si la parte demandada comparece y formula excepciones, la o el juzgador convocará a audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Si no hay acuerdo o este es parcial, en la misma audiencia dispondrá se practiquen las pruebas anunciadas, luego de lo cual, oirá los alegatos de las partes y en la misma diligencia dictará sentencia, contra la cual solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación.

En este proceso no procede la reforma a la demanda, ni la reconvención.

Art. 360.- Intereses. Desde que se cite el reclamo, la deuda devengará el máximo interés convencional y de mora legalmente permitido.

Art. 361.- Pago de la deuda. Si la o el deudor paga la deuda, la o el juzgador dispondrá que se deje constancia en autos y ordenará el archivo.

En cualquier estado del procedimiento las partes podrán acordar una fórmula de pago que será aprobada por la o el juzgador.

LIBRO V EJECUCIÓN

TÍTULO I EJECUCIÓN

CAPÍTULO I REGLAS GENERALES

Art. 362.- Ejecución. Es el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución.

Art. 363.- Títulos de ejecución.- Son títulos de ejecución los siguientes:

1. La sentencia ejecutoriada.
2. El laudo arbitral.
3. El acta de mediación.
4. El contrato prendario y de reserva de dominio.
5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero, homologados conforme con las reglas de este Código.
6. Las actas transaccionales.
7. Los demás que establezca la ley.

Las y los juzgadores intervendrán directamente en la ejecución de los laudos arbitrales y de las actas de mediación. Además ejecutarán las providencias preventivas ordenadas por los tribunales de arbitraje nacionales o internacionales.

Art. 364.- Facultades de la o del juzgador y de las partes. La ejecución se circunscribirá a la realización o aplicación concreta de lo establecido en el título de ejecución.

Las partes actuarán en plano de igualdad, pero se limitarán exclusivamente al control del cumplimiento del título de ejecución, conforme con la ley.

Art. 365.- Acceso a información de datos del ejecutado. La o el juzgador tendrá la facultad de acceder de oficio o a petición de parte, a los registros públicos de datos de la o del ejecutado, para recabar información relacionada con sus bienes. Además, brindará a la o el ejecutante todo el apoyo y facilidades para la realización de los actos necesarios dentro de la ejecución.

CAPÍTULO II

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER O NO HACER

Art. 366.- Obligaciones de dar especie o cuerpo cierto. Cuando se trate de una obligación de dar especie o cuerpo cierto y el objeto se encuentre en poder de la o del deudor o terceros, la o el juzgador dictará mandamiento de ejecución ordenando que la o el deudor lo entregue en el término de cinco días. Salvo oposición fundamentada del tercero, la o el juzgador ordenará que la entrega se haga con la intervención de un agente de la Policía Nacional, pudiendo inclusive descerrajar el local donde se encuentre.

Si la especie o cuerpo cierto no puede ser entregado a la o el acreedor por imposibilidad legal o material, la o el juzgador, a pedido de la o del acreedor, ordenará que la o el deudor consigne el valor del mismo a precio de reposición, a la fecha en que se dicte esta orden.

Si la cosa se encuentra en depósito judicial, la o el juzgador ordenará que la o el depositario la entregue a la parte acreedora, disposición que será cumplida de inmediato bajo responsabilidad personal de la o del depositario.

Si la demanda ha versado acerca de la entrega material de un bien inmueble, la o el juzgador ordenará que la o el deudor desocupe y ponga a

disposición de la o del acreedor el inmueble, bajo prevención que de no hacerlo, la fuerza pública entregará el bien a la o al acreedor, coercitivamente de ser necesario, pudiendo inclusive descerrajar el inmueble. Si en el mismo hay cosas que no sean objeto de la ejecución, se procederá al lanzamiento, bajo riesgo de la o del deudor.

Art. 367.- Obligaciones de dar dinero o bienes de género. Cuando se trate de una obligación de dar dinero, se procederá conforme con lo previsto en este capítulo.

Cuando se trate de deuda de género determinado, la o el juzgador dictará mandamiento de ejecución ordenando que la o el demandado, consigne la cantidad de bienes genéricos o deposite el importe de dichos bienes a su precio corriente de mercado a la fecha que se lo dictó, bajo prevenciones de proceder al embargo de bienes suficientes en la forma prevista por este Código.

La ejecución propuesta por el pago de pensiones periódicas, por el cumplimiento de obligaciones que debían satisfacerse en dos o más plazos, podrá comprender las pensiones y obligaciones que se hubiesen vencido en los períodos o plazos subsiguientes, aún cuando el juicio se hubiese contraído al pago de una sola pensión, o a la que debió darse o hacerse en uno de los plazos.

Art. 368.- Obligaciones de hacer. En la obligación de hacer si la o el acreedor pide que se cumpla y ello es posible, la o el juzgador señalará el término dentro del cual la o el deudor deberá hacerlo, bajo prevención que de no acatar tal orden, la obligación se cumplirá a través de una o un tercero designado por la o el acreedor, a costa de la o del ejecutado, si así lo ha pedido.

Si por cualquier motivo no se obtiene la realización del hecho, la o el juzgador de la ejecución determinará en una audiencia convocada para tal efecto y sobre la base de las pruebas aportadas por las partes, el monto de indemnización que la o el deudor debe pagar por el incumplimiento y

dispondrá el respectivo cobro siguiendo el procedimiento previsto para la ejecución de una obligación de dar dinero.

El mandamiento de ejecución contendrá la orden para que la o el deudor pague los valores correspondientes a la indemnización de daños y perjuicios a que haya sido condenado.

El mandamiento de ejecución señalará la suma de dinero que deberá satisfacer el deudor, cuando ha rehusado el cumplimiento de la obligación que se manda cumplir por un tercero, para compensar a este último por lo hecho.

Si transcurrido el término concedido por la o el juzgador para que cumpla con la obligación, la o el deudor no lo hace, la o el juzgador dictará embargo de sus bienes en la forma prevista en este Código, en un valor suficiente para cubrir el costo del cumplimiento de la obligación por la o el tercero designado por la o el acreedor.

Si el hecho consiste en el otorgamiento y suscripción de un instrumento, lo hará la o el juzgador en representación del que deba realizarlo, de este acto se dejará constancia en el proceso.

Art. 369.- Obligaciones de no hacer. Si la ejecución se refiere a no hacer algo y si ya se ha efectuado, la o el juzgador ordenará la reposición al estado anterior y que la o el deudor deshaga lo hecho, concediéndole un término para el efecto, bajo prevención que, de no hacerlo, se autorizará a la o al acreedor para que deshaga lo hecho a expensas de la o del deudor y señalará la suma de dinero que la o el deudor deberá pagar por tal concepto.

Además la o el juzgador ordenará a la o al deudor que pague los valores correspondientes a la indemnización de daños y perjuicios a que haya sido condenado.

Si no es posible deshacer lo hecho, se ordenará que la o el demandado consigne la cantidad correspondiente al monto de la indemnización, la

que se fijará en una audiencia, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo anterior.

Art. 370.- Solicitud de ejecución. Si se trata de la ejecución de un título que no sea la sentencia o auto ejecutoriado, se deberá presentar una solicitud que, además de los requisitos de la demanda, contenga la identificación del título de ejecución que sirve de habilitante para presentar la solicitud.

Art. 371.- Inicio de la ejecución por sentencia ejecutoriada. Admitida la solicitud prevista en el artículo anterior o directamente si se trata de ejecución de sentencia ejecutoriada, la o el juzgador designará una o un perito para la liquidación de capital, intereses y costas en el término concedido para el efecto. Previamente la o el actor tendrá el término de cinco días para presentar los comprobantes de respaldo de gastos conforme con las normas de costas previstas en este Código.

Sin embargo, en los procesos laborales, las y los juzgadores y tribunales de instancia, cuando condenen a una de las partes al pago de indemnizaciones u obligaciones no satisfechas, están obligados a determinar en el fallo la cantidad que se debe pagar.

Art. 372.- Mandamiento de ejecución. Recibida la liquidación, la o el juzgador expedirá el mandamiento de ejecución que contendrá:

1. La identificación precisa de la o del ejecutado que debe cumplir la obligación.
2. La determinación de la obligación cuyo cumplimiento se pretende, adjuntando copia de la liquidación, de ser el caso.
3. La orden a la o al ejecutado de pagar o cumplir con la obligación en el término de cinco días, bajo prevención que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa.

Cuando se trate de ejecución de títulos que no sean la sentencia ejecutoriada, la notificación del mandamiento de ejecución a la o al ejecutado se efectuará en persona o mediante tres boletas.

De cumplirse con la obligación se la declarará extinguida y se ordenará el archivo del expediente.

Art. 373.- Oposición de la o del deudor. La o el deudor únicamente podrá oponerse al mandamiento de ejecución dentro del término de cinco días señalados en el artículo anterior, por las siguientes causas:

1. Pago o dación en pago.
2. Transacción.
3. Remisión.
4. Novación.
5. Confusión.
6. Compensación.
7. Pérdida o destrucción de la cosa debida.

La causa que se invoque deberá estar debidamente justificada, así como el hecho de haberse producido luego de la ejecutoria de la sentencia o de la exigibilidad del título de ejecución respectivo. No será admisible la oferta de presentación de esta prueba. De igual forma se procederá en caso de que se aleguen pagos parciales.

Para el caso de pérdida o destrucción de la cosa debida, el ejecutado deberá demostrar el caso fortuito o fuerza mayor, de lo contrario la o el juzgador en la audiencia de ejecución ordenará el pago del valor de la cosa o indemnización que correspondan según la ley.

La oposición no suspende la ejecución y será resuelta en la audiencia de ejecución.

De aceptarse alguna causa de oposición, que demuestre el cumplimiento total de la obligación contenida en el título, la o el juzgador deberá declarar terminada la ejecución disponiendo su archivo definitivo.

Art. 374.- Fórmula de pago. La fórmula de pago propuesta por parte de la o del ejecutado no suspende la ejecución y deberá incluir una garantía que asegure el cumplimiento de la obligación cuando sea a plazo, salvo que la o el ejecutante no lo requiera.

Podrá también proponerse como fórmula de pago la dación de cualquier bien aceptado por la o el ejecutante.

Aceptada la fórmula de pago y siempre que la o el ejecutante o los terceristas no se opongan, la o el juzgador levantará el embargo que pese sobre los bienes de la o del ejecutado o en su defecto, dispondrá medidas sobre otros bienes que aseguren el cumplimiento de dicha fórmula de pago.

Si la fórmula propuesta, es aceptada parcialmente la o el juzgador continuará la audiencia única de ejecución con respecto a la parte no acordada.

La o el ejecutante estará obligado a entregar a la o al ejecutado las constancias escritas de los pagos efectuados.

En caso de que la o el ejecutado incumpla con la fórmula de pago, se procederá a la ejecución de las garantías o al embargo de los bienes que se hayan entregado en garantía real y de manera inmediata se realizará su avalúo para iniciar el remate.

Art. 375.- Falta de cumplimiento del mandamiento de ejecución. De no cumplirse con la obligación, la o el juzgador ordenará que se publique en la página web de la Función Judicial el mandamiento de ejecución para conocimiento de terceros, a fin de que, todos aquellos que tengan interés en la ejecución concurren a la audiencia con todas las pruebas necesarias para hacer efectivos sus derechos.

Adicionalmente se ordenará el embargo de los bienes de propiedad de la o del ejecutado conforme con la documentación certificada proporcionada por la o el ejecutante o la obtenida por la o el juzgador, los que se entregarán a la o al depositario de acuerdo con la ley.

Practicado el embargo, la o el juzgador ordenará el avalúo de los bienes con la intervención de una o un perito. El informe se presentará con los sustentos técnicos que respalden el avalúo y la firma de la o del depositario judicial a cargo de los bienes en señal de su conformidad.

La o el juzgador notificará a las partes el informe pericial, que será discutido en la audiencia de ejecución, que deberá llevarse a cabo en el término máximo de quince días. A esta audiencia comparecerá la o el perito a fin de sustentarlo.

Art. 376.- Embargo. La prohibición de enajenar, la retención o el secuestro anteriores no impiden el embargo y dispuesto éste, la o el juzgador que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva, para que notifique a la o al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer valer sus derechos como tercerista, si lo quiere. Las providencias preventivas subsistirán, no obstante el embargo, dejando a salvo el procedimiento de ejecución para el remate.

La o el depositario de las cosas secuestradas las entregará a la o al depositario designado por la o el juzgador que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, a órdenes de esta o este juzgador si también es designado depositaria o depositario de las cosas embargadas.

Si el embargo es cancelado sin llegar al remate, en la providencia de cancelación se oficiará a la o al juzgador que ordenó la providencia preventiva, la cual seguirá vigente hasta que sea cancelada por la o el juzgador que la dictó.

Hecho el remate, la o el juzgador declarará canceladas las providencias preventivas y oficiará a la o al juzgador que las ordenó para que se tome nota de tal cancelación en el proceso respectivo.

Art. 377.- Prelación del embargo. El embargo se practicará en el siguiente orden:

1. Del dinero de propiedad de la o del deudor.
2. De los bienes hipotecados, prendados o gravados con otra garantía real.
3. De los bienes sobre los cuales se dictó providencia preventiva.
4. De los demás bienes que señale la o el acreedor, que los determinará acompañando prueba de la propiedad de los mismos.

Art. 378.- Embargo de dinero. Si se aprehende dinero de propiedad de la o del deudor, la o el juzgador ordenará que sean transferidos o depositados en la cuenta de la judicatura respectiva e inmediatamente dispondrá el pago a la o al acreedor.

Art. 379.- Embargo de créditos. El embargo de un crédito se practicará mediante notificación de la orden a la o al deudor de la o del ejecutado, para que se abstenga de pagarle a su acreedor y lo efectúe a la o al ejecutante. En el término de tres días o en la audiencia de ejecución, la o el notificado podrá oponerse fundadamente. En la misma audiencia se fijará el tiempo y la forma de pago.

Art. 380.- Embargo de cuota o de derechos y acciones. El embargo de la cuota o de derechos y acciones de una cosa universal o singular o de derechos en común, se hará notificando la orden de embargo a cualquiera de las o los copartícipes, que por el mismo hecho quedará como la o el depositario de la cuota embargada. Si el copartícipe rehusa del depósito dentro del tercer día de notificado, se notificará a otro de los copartícipes. Si se niegan todos, se hará cargo la o el depositario.

Cuando se trate del embargo de la cuota de uno de los cónyuges en los bienes de la sociedad conyugal, el otro cónyuge, si es mayor de edad, se considerará depositario de dicha cuota y tendrá su administración. De rehusar el depósito o de ser menor de edad, se hará cargo el respectivo depositario, en el segundo caso, hasta que la o el cónyuge llegue a la mayoría de edad y acepte el depósito.

Las o los copartícipes podrán concurrir a la audiencia de ejecución para los fines previstos en este Código.

Art. 381.- Embargo de bienes muebles. El embargo de bienes muebles se practicará aprehendiéndolos y entregándolos a la o el depositario respectivo, para que queden en custodia de esta o este, pero los bienes gravados con anticresis judicial, continuarán en poder de la o del acreedor ejecutante.

El depósito de bienes muebles se hará formando un inventario de todos los objetos, con expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando sea el caso y el de los semovientes, determinando el número, clase, peso, género, raza, marcas, señales y edad aproximada.

El embargo de bienes muebles registrables se inscribirá en el registro correspondiente.

Art. 382.- Embargo de vehículos. El embargo de vehículos se practicará con la intervención de la fuerza pública, que tendrá la facultad de inmovilizarlos por medio de cualquier elemento o dispositivo que impida su uso o traslado, cuidando siempre que este no produzca menoscabo al bien.

La orden de embargo se comunicará de inmediato a la autoridad de tránsito correspondiente, a fin de que se realicen las inscripciones y anotaciones pertinentes y apoye a la ubicación y captura del vehículo objeto del embargo.

En caso de que un vehículo cuente con servicio de rastreo satelital, la parte interesada o la Policía Nacional, podrán solicitar a la o al juzgador que ordene a las empresas de rastreo satelital de vehículos, que proporcione la ubicación en tiempo real del mismo.

Art. 383.- Embargo de la unidad productiva. Cuando se ordene el embargo de los activos de cualquier unidad productiva o sobre las utilidades que estas han producido o produzcan en el futuro, la o el juzgador desig-

nará una o un depositario, quien estará a cargo de la gestión del negocio y tendrá las atribuciones y deberes de depositario previstas en la ley.

La o el depositario judicial que administre del negocio embargado rendirá cuentas con la periodicidad que determine la o el juzgador y obligatoriamente al concluir su gestión. En caso de existir utilidad con la misma periodicidad realizará los pagos correspondientes a la o al acreedor.

Las cuentas podrán ser impugnadas por las o los interesados dentro del término de diez días desde la fecha en que hayan sido notificadas a las partes. Con las impugnaciones, la o el juzgador convocará a una audiencia que se efectuará conforme con las normas generales previstas en este Código.

En la audiencia, la o el (sic) juzgador resolverá si acepta las impugnaciones y en este caso removerá de su cargo a la o al depositario y designará a otra u otro que lo sustituya, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar. Si se deniega la impugnación, se mantendrá la administración.

La administración se mantendrá hasta que las partes convengan en una fórmula de pago, se cancelen los valores adeudados o la o el acreedor solicite el remate.

El embargo a una unidad productiva se notificará al organismo de control que corresponda.

Art. 384.- Embargo de inmuebles. El embargo de inmuebles se practicará aprehendiéndolos y entregándolos a la o al depositario respectivo, para que queden en custodia de esta o este. Los inmuebles sobre los que se haya constituido anticresis judicial, continuarán en poder de la o del acreedor ejecutante.

El depósito de inmuebles se hará expresando la extensión aproximada, los edificios y las plantaciones, enumerando todas sus existencias y for-

mando un inventario con expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando corresponda.

El embargo se inscribirá en el registro correspondiente al lugar en donde se ubique el bien. Si el inmueble se encuentra situado en dos o más cantones, la inscripción se realizará en todos los registros.

Para proceder al embargo de bienes raíces, la o el juzgador se cerciorará mediante el certificado del registro de la propiedad, que los bienes pertenezcan a la o al ejecutado y que no estén embargados.

Si los bienes están en poder de arrendatario, acreedor anticrético u otros, el embargo se practicará respetando sus derechos y se notificará a estos.

Exceptúase el caso en el que la constitución de los contratos descritos sean posteriores a la inscripción de la correspondiente escritura de hipoteca, o al embargo, secuestro o prohibición de enajenar, pues entonces, el embargo pedido por el acreedor ejecutante, se verificará, no obstante tales contratos, en la forma común.

Rematados los bienes, se respetará el arriendo o anticresis según lo dispone la ley. La o el depositario recibirá la renta y en caso de remate o pago de la obligación, liquidará y entregará el dinero percibido para que se impute a la deuda.

Art. 385.- Embargo preferente de una o un acreedor hipotecario. No obstante lo dispuesto para el embargo de inmuebles, si un bien raíz es embargado por una o un acreedor no hipotecario, y luego ocurre que una o un acreedor hipotecario obtiene, en otro proceso, la orden de embargo de tal inmueble, se cancelará el primer embargo y se efectuará el segundo. La o el acreedor no hipotecario conservará el derecho de presentarse como tercerista en la ejecución seguida por la o el acreedor hipotecario.

Lo mismo ocurrirá si el primer embargo se ha obtenido por una o un acreedor hipotecario y el segundo se pide por otro con hipoteca anterior.

Art. 386.- Obligaciones laborales. Si para la ejecución de lo convenido en el acta de audiencia de conciliación o lo resuelto en el fallo dictado en un conflicto colectivo de trabajo, se ordena el embargo de bienes que ya estén embargados por providencia dictada en un proceso no laboral, excepto el de alimentos legales, se cancelará el embargo anterior y se efectuará el ordenado en el acta o en el fallo laboral y la o el acreedor cuyo embargo se canceló conservará el derecho de presentarse como tercerista.

En ningún caso se suspenderá la ejecución de una sentencia o de un acta transaccional que ponga fin a un conflicto colectivo y por lo tanto, el embargo y remate de los bienes seguirá su procedimiento ante la autoridad de trabajo que haya efectuado, salvo el caso en que la o el deudor efectúe el pago en dinero en efectivo o cheque certificado.

Art. 387.- Funciones de la Policía Nacional en el embargo. La Policía Nacional ejecutará el embargo dentro del término señalado por la o el juzgador.

La o el juzgador podrá disponer:

1. El ingreso a bienes inmuebles.
2. El desalojo de personas y bienes que se encuentren en el inmueble.
3. El descerrajamiento de seguridades.
4. La aprehensión de bienes objeto del embargo.
5. Cualquier otra medida necesaria para ejecutar el embargo de acuerdo con la naturaleza del bien.

Art. 388.- Acta de ejecución de embargo. La o el miembro de la Policía Nacional que ejecute el embargo deberá levantar un acta de la diligencia, que será suscrita además por la o el depositario judicial, la que contendrá lo siguiente:

1. Señalamiento del lugar, día y hora en que se produjo el embargo.
2. Expresión individual y detallada de los bienes embargados.

3. Respaldo documental y digital de las imágenes de los bienes embargados.
4. Identificación de los funcionarios que intervinieron en la diligencia.

Si se trata del embargo de bienes muebles, el acta deberá indicar su especie, calidad y estado de conservación y todo antecedente o especificación necesarios para su debida singularización tales como: marca, número de serie, color y dimensión aproximada, según sea posible.

En el embargo de bienes inmuebles, estos se individualizarán por su ubicación, linderos y demás datos que permitan su identificación, verificando si se encuentran desocupados o señalando la persona que ocupaba el bien.

La Policía Nacional, tan pronto haya extendido el acta de embargo, la entregará a la o al juzgador para que se inscriba en los registros correspondientes.

Art. 389.- Inscripción del embargo. El embargo de bienes raíces surtirá efecto con respecto a terceros, desde su inscripción en el registro respectivo.

Cuando el embargo recaiga sobre bienes muebles que deban inscribirse, se presumirá el conocimiento del mismo con respecto a terceros desde el momento de su inscripción.

Cuando el embargo verse sobre cosas muebles no susceptibles de inscripción, producirá efecto con respecto a terceros desde la elaboración del acta de embargo.

La o el ejecutado que fraudulentamente dispone del bien, una vez ordenado el embargo, será responsable penalmente.

Art. 390.- Cesación del embargo.- Hasta antes del cierre del remate, puede la o el ejecutado liberar los bienes, consignando el valor que corresponda a la deuda y que conste en el mandamiento de ejecución.

Art. 391.- Depósito judicial. Realizado el embargo, la o el depositario judicial será custodio de los bienes embargados, los mismos que serán trasladados al lugar que determine la o el depositario, dichos bienes quedarán bajo su responsabilidad.

La o el depositario judicial tendrá derecho a cobrar los gastos ocasionados por transporte, conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes bajo su custodia, conforme con el reglamento que se dicte para el efecto. La o el depositario deberá justificar los gastos, debiendo la o el juzgador resolver cualquier cuestión que se plantee al respecto.

Art. 392.- Audiencia de ejecución. La audiencia seguirá, en lo que sea pertinente, los lineamientos generales para el desarrollo de audiencias previstas en este Código, debiendo además cumplirse con lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre la oposición de la o del ejecutado por extinción de la obligación o pagos parciales posteriores al título de ejecución, debidamente justificados.
2. De ser procedente aprobar fórmulas de pago, incluso cuando impliquen la suspensión del procedimiento de ejecución.
3. Conocer sobre las observaciones de las partes al informe pericial de avalúo de los bienes y de ser el caso designar otra u otro perito.
4. Señalar de entre los bienes embargados, los que deben ser objeto de remate, con base a su avalúo y al monto de la obligación,
5. Resolver sobre la admisibilidad de las tercerías y sobre reclamaciones de terceros perjudicados.

A la audiencia podrán concurrir otras personas por invitación del ejecutante o el ejecutado, los asistentes podrán proponer cualquier forma de realización de los bienes de la o del deudor y presentar a terceros que, previa caución de seriedad de oferta, se ofrezcan a adquirir dichos bienes por un precio previsiblemente superior al que pueda lograrse mediante venta en pública subasta, en este caso, la o el acreedor que ha vencido en el proceso podrá solicitar a la o al juzgador una prórroga para hacer acudir a la

o al tercero adquirente, para lo cual se deberá contar con el acuerdo de la o del deudor y de la o del acreedor.

En todo caso la o el acreedor que ha vencido no podrá oponerse si el precio ofrecido es mayor al monto de la obligación.

La audiencia terminará con el auto que resuelve los asuntos planteados y que ordene lo que corresponda para la continuación del procedimiento.

Si continúa la ejecución, la o el juzgador señalará la fecha y la hora en que se realizará el remate electrónico, ordenando la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura de un extracto que contendrá el detalle e imágenes de los bienes a ser rematados y su valor.

Art. 393.- Efectos de la inasistencia a la audiencia de ejecución. Cuando alguna de las partes no asista a la audiencia de ejecución, la o el juzgador señalará por una sola vez un nuevo día y hora para llevarla a cabo en un término máximo de diez días.

En la segunda convocatoria la audiencia de ejecución se realizará con las partes que concurren.

Si no concurre ninguna de las partes el procedimiento únicamente continuará a petición de parte, que justifique su inasistencia y solicite la realización de la audiencia de ejecución.

Art. 394.- Terceros en la ejecución. Si a la audiencia de ejecución comparecen terceros que demuestran documentadamente su derecho, la o el juzgador deberá ordenar lo siguiente:

1. Si se trata de una tercería de dominio fundamentada exclusivamente en un título inscrito, la o el juzgador deberá resolver sobre su admisibilidad y de creerla justificada dispondrá que se mantenga el embargo del bien hasta que se resuelva sobre la tercería en el procedimiento ordinario, dejado a salvo el derecho de la o del acreedor de solicitar el embargo de otros bienes de la o del ejecutado.

2. Si se trata de la tercería coadyuvante, la o el juzgador resolverá sobre su admisibilidad y en caso de aceptarla, ordenará que sus créditos sean considerados en la prelación. Obtenido el producto del remate el juez convocará a audiencia y de existir acuerdo de los interesados ordenará que se cumpla lo convenido. A falta de acuerdo, se resolverá sumariamente y en cuaderno separado sobre la prelación.

CAPÍTULO III

REMATE DE LOS BIENES EMBARGADOS Y LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Art. 395.- Conclusión de la ejecución y archivo del proceso. En cualquier momento antes del remate, una vez acreditada la extinción de la obligación liquidada en mandamiento de ejecución, se declarará la conclusión de la ejecución y el archivo del proceso.

Art. 396.- Entrega directa al ejecutante.- La o el juzgador mandará que se entregue directamente a la o al acreedor ejecutante los bienes embargados que sean:

1. Dinero en efectivo.
2. Especie o cuerpo cierto que fue objeto de la demanda.
3. Bienes genéricos que fueron objeto de la demanda y que se embargaron en poder de la o del ejecutado.

Art. 397.- Remate de títulos valores y efectos de comercio. Los títulos valores y efectos de comercio, transables en bolsa de valores, se venderán en condiciones de mercado por una casa de valores que resulte sorteada de entre las que se hallen legalmente autorizadas para operar en el mercado bursátil.

Art. 398.- Remate de los bienes de la o del ejecutado. Los bienes de la o del ejecutado, que no se encuentren descritos en los artículos anteriores, sean muebles o inmuebles, derechos o acciones, se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura.

Por acuerdo de las partes y a su costa, los bienes embargados también se podrán rematar en entidades públicas o privadas autorizadas por el Consejo de la Judicatura.

La o el ejecutante y la o el ejecutado podrán convenir que la venta, tanto de muebles como de inmuebles, se haga al martillo, con la intervención de martillador público, acuerdo que deberá ser respetado por la o el juzgador.

Art. 399.- Posturas del remate. El aviso del remate deberá ser publicado en la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura, con el término de al menos veinte días de anticipación a la fecha del remate. La plataforma recibirá las ofertas desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del día señalado para el remate.

Adicionalmente y con fines de publicidad, a criterio de la o del juzgador debidamente motivado, el aviso del remate podrá ser publicado en otros medios electrónicos, impresos o escritos.

La o el ejecutado podrá pagar la obligación con depósito bancario o transferencia bancaria electrónica dentro del mismo término.

En el remate en línea, las o los postores deberán entregar, mediante depósito bancario o transferencia bancaria electrónica el 10% de la postura realizada. Si la postura contempla el pago a plazo, se deberá entregar el 15% de la postura realizada.

La o el ejecutante podrá participar en el remate con cargo a su crédito estando exento del depósito del 10%, salvo que en la audiencia única se hayan admitido tercerías coadyuvantes, en cuyo caso participará en las mismas condiciones que las o los otros postores.

Art. 400.- Requisitos de la postura. Las posturas presentadas para primer y segundo señalamiento, no podrán ser inferiores al 100% del avalúo pericial efectuado.

Art. 401.- Formas de pago. Las formas de pago de las posturas son las siguientes:

1. Al contado.
2. A plazo.

En el remate de bienes inmuebles no se admitirán posturas en que se fije plazos que excedan de cinco años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas.

La cosa rematada, si es bien inmueble, quedará en todo caso, hipotecada por lo que se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de la propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder de la o del acreedor prendario, mientras se cancele el precio del remate.

En el remate de bienes muebles, todo pago se hará al contado, sin que puedan admitirse ofertas a plazo, a menos que la o el ejecutante y la o el ejecutado convengan lo contrario.

De existir posturas iguales se preferirá la que se haya ingresado en primer lugar, salvo que se trate de postura de la o del ejecutante.

Art. 402.- Calificación de las posturas. Una vez acreditados los valores de las posturas la o el juzgador señalará día y hora para la audiencia pública, en la que podrán intervenir los postores. La o el juzgador procederá a calificar las posturas teniendo en cuenta la cantidad ofrecida, el plazo y demás condiciones. Preferirá las que cubran al contado el crédito, intereses y costas de la o del ejecutante.

El auto de admisión y calificación de las posturas se reducirá a escrito, se notificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la realización de la audiencia y debe comprender el examen de todas las que se

hayan presentado, enumerando su orden de preferencia y describiendo con claridad, exactitud y precisión todas sus condiciones.

El auto de calificación de posturas podrá ser apelado por la o el ejecutante y las o los terceristas coadyuvantes. La o el ejecutado podrá apelar cuando la postura sea inferior a la base del remate determinada en los requisitos de la postura, previstos en este Código. Concedida la apelación, la Corte Provincial fallará en el término de quince días sin ninguna tramitación por el mérito del proceso y de su fallo no se admitirá recurso alguno.

Art. 403.- Posturas iguales. Si hay dos o más posturas que se conceptúan iguales, la o el juzgador, de considerar que son las mejores, dispondrá en la misma audiencia de calificación, la adjudicación de la cosa al mejor postor. En este remate no se admitirán otras u otros postores que los señalados en este artículo, y todo lo que ocurra se hará constar sucintamente en acta firmada por la o el juzgador, las o los postores que quieran hacerlo, las partes si concurren y la o el secretario.

Art. 404.- Postura de la o del acreedor y de las o los trabajadores. La o el acreedor puede hacer postura con la misma libertad que cualquier otra persona y si no hay tercerías coadyuvantes, podrá imputarla al valor de su crédito sin acompañar la consignación del 10%.

Las o los trabajadores pueden hacer postura con la misma libertad que cualquier otra persona, e imputarla al valor de su crédito sin consignar el 10% aunque haya tercería coadyuvante.

Si el avalúo de los bienes embargados es superior al valor del crédito materia de la ejecución, consignará el 10% de lo que la oferta exceda al crédito.

Art. 405.- Retasa y embargo de otros bienes. En el caso en que no haya postores, la o el acreedor podrá solicitar la retasa de los bienes embargados y se reanudará el proceso de remate con el nuevo avalúo o pedir que

se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes anteriormente embargados.

Si el valor ofrecido al contado no alcanza a cubrir el crédito de la o del ejecutante o el de la o del tercerista, podrán pedir, a su arbitrio, que se rematen como créditos los dividendos a plazo.

Art. 406.- Nulidad del remate.- El remate será nulo en los siguientes casos;

1. Si se verifica en día distinto del que sea señalado por la o el juzgador.
2. Si no se ha publicitado el remate en la forma ordenada por la o el juzgador.

La nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte en la audiencia de calificación de posturas. De lo que se resuelva no habrá recurso alguno.

Si se declara la nulidad del remate se señalará nuevo día para el remate conforme con este Código.

Art. 407.- Auto de adjudicación. Dentro del término de diez días de ejecutoriado el auto de calificación de posturas, a la o al postor preferente consignará el valor ofrecido de contado, hecho lo cual, la o el juzgador emitirá el auto de adjudicación que contendrá:

1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o pasaporte, estado civil, de la o del deudor y de la o del postor al que se adjudicó el bien.
2. La individualización del bien rematado con sus antecedentes de dominio y registrales, si es del caso.
3. El precio por el que se haya rematado.
4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con anterioridad a su adjudicación.

5. Los demás datos que la o el juzgador considere necesarios.

Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con el producto del remate.

La o el juzgador dispondrá que una vez ejecutoriado el auto de adjudicación se proceda a la devolución de los valores correspondientes a las posturas no aceptadas.

Si la cosa rematada es inmueble quedará hipotecada, por lo que se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder del acreedor prendario mientras se cancela el precio del remate.

Art. 408.- No consignación del valor ofrecido. Si la o el postor no consigna la cantidad que ofreció de contado, se mandará a notificar a la o al postor que siga en el orden de preferencia, para que consigne, en el término de diez días, la cantidad ofrecida y así sucesivamente.

En este caso, el anterior postor pagará las costas y la quiebra del remate ocasionadas por la falta de pago, con la cantidad que haya consignado al tiempo de hacer la postura y si falta con otros bienes.

Art. 409.- Quiebra del remate. Se llama quiebra del remate, la diferencia entre el precio aceptado por la o el postor cuya oferta se declaró preferente y el ofrecido por la o el postor a quien se adjudique lo rematado.

Art. 410.- Protocolización e inscripción del auto de adjudicación. El auto de adjudicación se protocolizará para que sirva de título y se inscribirá en el registro que corresponda.

Art. 411.- Tradición material. La tradición material se efectuará con la intervención de la Policía Nacional, la entrega se hará con intervención de la o del depositario y conforme con el inventario formulado al tiempo del

embargo. Las divergencias que ocurran se resolverán por la o el mismo juzgador de la causa.

Art. 412.- Pago a la o al acreedor. De la cantidad que se consigne por el precio de la cosa rematada, se pagará a la o al acreedor inmediatamente los valores que se le adeuden en concepto del principal de su crédito, intereses, indemnizaciones y costas. El sobrante se entregará a la o al deudor, salvo que la o el juzgador haya ordenado su retención, a solicitud de otro juez.

Art. 413.- Régimen de recursos. Serán apelables exclusivamente el auto de calificación de postura y el auto de adjudicación.

TÍTULO II PROCEDIMIENTO CONCURSAL

CAPÍTULO I REGLAS GENERALES

Art. 414.- Concurso de acreedores. Tiene lugar el concurso de acreedores, en los casos de cesión de bienes o de insolvencia.

Si se trata de comerciantes matriculados, el proceso se denominará indistintamente concurso de acreedores o quiebra.

Art. 415.- Concurso preventivo. Las o los deudores, sean comerciantes o no comerciantes, podrán acogerse a concurso preventivo a fin de evitar el concurso de acreedores. La o el deudor que posea bienes suficientes para cubrir todas sus deudas o ingresos permanentes provenientes de sueldos, rentas, remesas del extranjero, pensiones locativas u otras fuentes de ingresos periódicos y prevea la imposibilidad de efectuar los pagos de las mismas en las fechas de sus respectivos vencimientos, podrá acudir a la o al juzgador de su domicilio solicitándole que inicie el procedimiento de concurso preventivo, a efectos de procurar un concordato con sus acreedores, que le permita solventar sus acreencias en un plazo razonable, no mayor a tres años.

Las compañías se sujetarán a la ley.

Art. 416.- Presunción de insolvencia. Se presume la insolvencia y como consecuencia de ella se declarará haber lugar al concurso de acreedores o a la quiebra cuando:

1. Requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni dimita bienes.
2. Los bienes dimitidos sean litigiosos. No estén en posesión por la o el deudor. Estén situados fuera de la República, o consistan en créditos no escritos o contra personas de insolvencia notoria.
3. Los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el avalúo practicado en el mismo proceso o según las posturas hechas al tiempo de la subasta. Para apreciar la insuficiencia de los bienes, se deducirá el importe de los gravámenes a que estén sujetos, a menos que se haya constituido, para caucionar el mismo crédito.

Si los bienes dimitidos están embargados en otro proceso, se tendrá por no hecha la dimisión, a menos que, en el término que conceda la o al (sic) juzgador, compruebe el ejecutado, con el avalúo hecho en el referido proceso o en el catastro, la suficiencia del valor para el pago del crédito reclamado en la nueva ejecución. En este término se actuarán todas las pruebas que pidan la o el deudor y la o el acreedor o acreedores o la o el síndico.

Art. 417.- Clases de insolvencia. La insolvencia puede ser fortuita, culpable o fraudulenta.

Es fortuita la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor; es culpable, la ocasionada por conducta imprudente o dispada de la o del deudor; y es fraudulenta aquella en que ocurren actos maliciosos del fallido, para perjudicar a los acreedores.

Art. 418.- Competencia en el régimen concursal. La o el juzgador del domicilio de la o del deudor será competente para conocer el procedi-

miento concursal, ordenará se deje constancia de las ejecuciones y se las acumule.

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO

Art. 419.- Solicitud de concurso preventivo. En su solicitud de inicio del concurso preventivo, la o el deudor además de cumplir los requisitos formales de una demanda, expresará:

1. Los sucesos o motivos que le han colocado en imposibilidad de cumplir sus obligaciones en las fechas de sus vencimientos.
2. La lista detallada de sus acreedores, individualizados, con el señalamiento del número de su cédula de ciudadanía, registro único de contribuyentes o equivalente, la dirección exacta de su domicilio, que incluirá país, provincia, cantón, localidad, calle, número, intersección, números telefónicos, correo electrónico; así como, el monto de lo adeudado, las fechas de vencimiento y la clase de instrumentación de los créditos.
3. El estado detallado y valorado de su activo y pasivo.
4. El tiempo de espera que solicita, que no podrá exceder de tres años.

El plan de pagos que propone con el señalamiento preciso de las fuentes de financiamiento, los plazos y condiciones, incluido el refinanciamiento al que aspira.

Art. 420.- Procedimiento del concurso preventivo. Presentada la solicitud de concurso preventivo prevista en este Código, si la o el juzgador, encuentra que reúne los requisitos de ley y fundados los motivos aducidos, dispondrá que provisionalmente se suspendan los pagos, mandará a citar a las o los acreedores y designará una o un auditor, de la nómina de las y los calificados por el Consejo de la Judicatura, a fin de que verifique la exactitud y veracidad del estado detallado y valorado del activo y pasivo, debiendo informar dentro del término máximo de diez días desde la fecha de nombramiento y posesión.

Si se trata de una o un deudor comerciante, asumirá la administración conjunta del negocio hasta que se reúna la junta de acreedores.

Si del informe de la o del auditor aparece que había uno o más créditos cuyo vencimiento se produjo antes de la presentación de la solicitud de concurso preventivo, o que el pasivo excede del 120% del activo, la o el juzgador declarará concluido el procedimiento de concurso preventivo y dará inicio al concurso de acreedores voluntario.

Si el informe de la o del auditor no revela ninguna de las situaciones detalladas en el inciso que antecede, una vez que hayan sido citados las o los acreedores, se les convocará a junta que se realizará no antes de diez días ni después de veinte de la fecha de la convocatoria. La junta de acreedores tendrá lugar en audiencia que se efectuará conforme con las reglas de este título y las generales previstas en este Código.

Las o los acreedores serán citados en persona o mediante tres boletas en sus domicilios o lugares de trabajo, no estando permitido citarles por ningún medio de comunicación.

Art. 421.- Procedimiento del concurso voluntario. La o el deudor que solicite el concurso deberá presentarse ante la o el juzgador de su domicilio y cumpliendo los requisitos formales de la demanda, acompañará:

1. Una relación detallada de todos sus bienes y derechos.
2. Un estado de deudas con expresión de procedencia, vencimiento, nombre y domicilio de cada acreedor y los libros de cuenta, si los tiene.
3. Los títulos de créditos activos.
4. Una memoria sobre las causas de su presentación.

Sin estos requisitos no se dará curso a la solicitud, hasta que se los complete.

Art. 422.- Solicitud de concurso necesario. La o el acreedor que cumpla los presupuestos del concurso necesario podrá pedir con los requisitos

formales de la demanda, a la o al juzgador del domicilio de la o del deudor, que dicte el auto de apertura del mismo.

Art. 423.- Auto inicial en el concurso voluntario. En el auto de apertura del concurso voluntario, la o el juzgador dispondrá:

1. Citar en su domicilio a las y los acreedores y convocarlos a la junta de acreedores que tendrá lugar en audiencia que se efectuará conforme con las reglas de este título y las generales previstas en este Código.
2. Prevenir a las o los acreedores, en la providencia correspondiente, que los que comparezcan después de celebrada la junta tomarán el concurso en el estado en que se halle.
3. Designar síndica o síndico, quien será depositaria o depositario de los bienes.
4. Disponer el embargo de todos los bienes muebles o inmuebles, propiedad de la o del fallido conforme con las reglas generales del presente Código.
5. Ordenar la anotación de la insolvencia o quiebra, en el registro virtual del Consejo de la Judicatura.
6. Ordenar la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura del auto que declara la insolvencia o quiebra de la o del fallido.
7. Ordenar la acumulación de aquellos procesos que contienen obligaciones pendientes de los que forme parte la o el fallido. En ningún caso se iniciará otro procedimiento concursal.
8. Disponer la inscripción en el registro de la propiedad del auto que ordena la formación del concurso y si se trata de quiebra disponer también la inscripción en el registro mercantil.
9. Notificar a la Fiscalía General del Estado, para que realice las respectivas investigaciones.
10. Prohibir que la o el deudor se ausente del territorio nacional.

Art. 424.- Auto inicial en el concurso necesario. En el auto de apertura del concurso necesario, la o el juzgador dispondrá:

1. Citar en su domicilio a la o al deudor y convocarlo a la junta de acreedores que tendrá lugar en audiencia que se efectuará conforme con las reglas de este título y las generales previstas en este Código.
2. Requerir a la o al deudor la presentación de los documentos previstos para la solicitud del concurso voluntario.

En lo demás la o el juzgador declarará la interdicción del deudor y observará las normas previstas para el auto inicial en el concurso voluntario, con excepción de la prevención a las o los acreedores.

El auto que declara haber lugar al concurso de acreedores o a la quiebra es susceptible de recurso de apelación que se concederá en el efecto no suspensivo.

Art. 425.- Oposición al concurso voluntario. Si la o el deudor ha pedido el concurso estarán legitimados las o los acreedores para oponerse a su declaración.

El término para deducir oposición será de diez días a partir de la citación.

Para resolver la oposición se convocará a una audiencia que se efectuará de acuerdo con las normas generales. Será convocada a la audiencia la o el síndico, quien actuará como parte.

En la audiencia se procurará la conciliación, se oirá a las partes y la o el juzgador resolverá revocando el concurso o disponiendo que continúe el procedimiento. La resolución será apelable con efecto no suspensivo. De la resolución de la Corte Provincial no habrá recurso alguno.

La resolución que revoque el concurso repondrá las cosas al estado anterior a la declaración.

Art. 426.- Oposición al concurso necesario. No obstante la declaración de haber lugar al concurso o a la quiebra, la o el deudor, en el término de diez días a partir de la citación, podrá oponerse pagando la deuda.

Art. 427.- Junta de acreedores. La junta de acreedores tendrá lugar el día señalado para la audiencia, pudiendo continuar en otro, si así lo decide la mayoría de las o los concurrentes.

A la junta asistirá obligatoriamente la o el síndico y se reunirá con los acreedores que concurran y acrediten su calidad de tales antes del día de la celebración o con los documentos que se presenten en el propio acto sean aceptados por la o el juzgador.

Las o los acreedores podrán actuar por sí o por apoderado. Se votará por porcentajes de las acreencias frente a la masa total del pasivo. Si las o los acreedores hipotecarios o privilegiados votan, perderán su preferencia o privilegio.

La junta de acreedores iniciará con la lectura del informe de la o del auditor y el balance formado por éste, hecho lo cual, la o el juzgador, abrirá la discusión.

Si una mayoría de acreedores que representen más de la mitad de los créditos autoriza la espera solicitada, las y los acreedores y la o el deudor negociarán el concordato, en el cual se podrá contemplar nuevos plazos y financiamientos y otros acuerdos válidos que faciliten la solución de los adeudos, concordato que la o el juzgador aprobará en sentencia en la misma audiencia, quedando la o el deudor obligado a cumplirlo estrictamente. Si una o un solo acreedor representa más de la mitad de los créditos, será necesario el voto de al menos otra u otro acreedor.

Si se trata de una o un deudor comerciante, las y los acreedores podrán resolver que prosiga la administración conjunta con la o el auditor designado u otra persona que se nombre en la audiencia, quien velará porque se dé cumplimiento al concordato.

La o el fallido deberá concurrir personalmente y solo por causas que la o el juzgador apruebe, podrá ser representado por una o un apoderado.

Si la o el fallido no concurre a la junta, esta podrá acordar su aplazamiento para otro día o declarar que no se ha producido el convenio.

Si la mayoría vota negativamente, deberá fundamentar su oposición al plan de pagos propuesto y a su viabilidad. La o el juzgador analizará los motivos alegados y de encontrarlos infundados, dispondrá que se apruebe el concordato en los términos de la solicitud del deudor. Si encuentra fundada la negativa, mandará archivar la solicitud, previo al pago de los honorarios a la o al auditor, que serán sufragados por la o el solicitante.

De la resolución que se pronunciará en la misma audiencia se podrá apelar con efecto no suspensivo. De lo que resuelva la Corte Provincial no cabrá recurso alguno.

Las compañías sometidas al control de la Superintendencia de Compañías o a la Superintendencia de Bancos se sujetarán a las normas especiales que las rigen.

Art. 428.- Oposiciones. La o el acreedor ausente de la junta o que haya votado en contra o se haya abstenido, podrá deducir oposición a los arreglos realizados e impugnar la validez de los créditos aprobados, dentro del término de diez días contados a partir de la notificación a las o los acreedores con lo resuelto en la junta.

Las o los acreedores acompañarán una de estas propuestas:

1. Una espera, con capitalización de intereses ordinarios, con una duración máxima igual a la menor que asuman las o los acreedores que hayan suscrito el convenio.
2. Una remisión del saldo principal e intereses devengados no pagados, igual a la menor que asuman las o los acreedores que hayan suscrito el convenio.
3. Una combinación de espera y remisión, siempre que los términos sean idénticos a los aceptados por las o los acreedores que suscribieron el convenio.

Presentada la oposición se notificará a la o al síndico y en el término de diez días, se efectuará la audiencia en la que la o el juzgador resolverá el incidente.

La resolución será apelable en el efecto no suspensivo.

Art. 429.- Falta de acuerdo en la junta de acreedores. Si las o los acreedores no llegan a un acuerdo en la junta, se procederá de la siguiente manera;

1. Se ordenará el avalúo de los bienes embargados de propiedad de la o del fallido.
2. Se conocerá el balance de los bienes de la o del fallido.
3. Se señalará día y hora para el remate de los bienes embargados, conforme con las reglas del presente libro.
4. Se resolverá sobre la gradación de créditos.

Art. 430.- Rehabilitación. Si los bienes alcanzan para pagar la totalidad de los créditos, la o el juzgador declarará extinguida la obligación y rehabilitará a la o al deudor.

Establecido que el producto del remate no ha alcanzado para pagar la totalidad de los créditos, la o el juzgador convocará a junta de acreedores, para que en la audiencia resuelvan si conceden o no una certificación de pago que liberará totalmente a la o al deudor por el saldo no pagado y se levantarán todas las medidas ejecutadas en contra de la o del deudor.

También se rehabilitará a la o al fallido, persona natural contra quien haya seguido el proceso, si este se encuentra en estado de abandono por más de diez años, siempre que no se haya dado antes la declaración de fraudulencia. En este caso se procederá previo aviso al público y las o los acreedores podrán oponerse únicamente con la prueba de que ha continuado el proceso dentro de los últimos diez años o de que exista declaración ejecutoriada de fraudulencia de parte de la o del fallido.

Art. 431.- Bienes embargados a la o al fallido. Los bienes y documentos embargados a la o al fallido, se entregarán en depósito con el correspondiente inventario a la o al síndico designado en el día y hora de realización de la audiencia de régimen concursal.

Art. 432.- Embargo de nuevos bienes. La o el fallido queda de hecho en interdicción de administrar bienes y en cuanto a los que adquiriera en lo posterior, el 50% pasará a la masa común repartible entre acreedores, y quedará el otro 50% para los gastos personales de la o del fallido y de su familia, administrados directamente por la o el fallido.

Esta inhabilidad no contemplará la administración del patrimonio familiar.

Art. 433.- Síndico. Dentro del régimen concursal, la o el síndico representará a la masa concursal, quien estará facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para precautelar los derechos de las o los acreedores y recaudar los haberes.

Art. 434.- Nombramiento de la o del síndico. La o el síndico será nombrado de entre las personas registradas por el Consejo de la Judicatura. Una vez notificado su nombramiento tendrá veinticuatro horas para aceptarlo o excusarse. Aceptado el cargo, podrá renunciar por causa justa, pero no podrá retirarse del ejercicio de sus funciones mientras no sea subrogada o subrogado.

La lista de las y los síndicos se elaborará conforme con lo que dispone la ley.

La o el síndico actuará como sustituto procesal de la o del deudor. Iniciará o continuará todos los procesos a favor o en contra del patrimonio de la o del concursado, recibirá los bienes de la o del deudor mediante inventario y tendrá, a su respecto, las responsabilidades de las o los depositarios y de las o los administradores y tendrá amplias facultades de administración, debiendo dar cuenta a la o al juzgador de su actuación.

Art. 435.- Informe y actos de la o del síndico. Quince días después de su posesión, la o el síndico informará acerca del estado de los negocios de la o del fallido y de los bienes embargados, señalando el valor referencial de cada uno de ellos. En el mismo término formará un estado de los créditos y su gradación respectiva de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y otras leyes.

Con este informe se notificará a las partes para que, de creerlo necesario, formulen observaciones en la audiencia en la que se realizará la junta de acreedores.

Si la o el fallido tiene negocios en marcha, la o el síndico depositará la utilidad con la periodicidad que disponga la o al (sic) juzgador, en la cuenta del órgano jurisdiccional competente.

Art. 436.- Obligación de rendir cuentas. La o el síndico designados deberá rendir cuentas con la periodicidad que la o el juzgador le ordene y de manera obligatoria al final de su gestión.

Art. 437.- Distribución. Resuelta la prelación por la o el juzgador, si se han vendido todos los bienes, se distribuirá el producto en el orden establecido.

Si algún bien no ha podido venderse por falta de postor, se estará a las normas previstas para el remate de los bienes embargados.

La decisión de la o del juzgador será apelable en efecto no suspensivo.

Art. 438.- Gastos de subsistencia. Los gastos necesarios para la subsistencia de la o del deudor y para las personas a su cargo así como las obligaciones que por este concepto se deban continuar sufragando durante el procedimiento de insolvencia, serán pagados con preferencia y no estarán sujetos a la prelación de las demás acreencias.

Art. 439.- Nulidad. Serán nulos todos los actos de la o del deudor relativos a los bienes entregados a las o los acreedores o incluidos en el concurso, realizados en fraude de los mismos.

La o el deudor podrá instruirse, por sí o por apoderado, del estado del concurso y hacer cuantas observaciones estime convenientes para el arreglo y mejora de la administración así como para la liquidación de los créditos activos y pasivos.

Estos derechos los perderá si no ha dado cumplimiento al requerimiento de presentar los documentos a que se refieren las normas de la solicitud de concurso voluntario.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Ministerio de Finanzas, o la institución que haga sus veces, a pedido del Consejo de la Judicatura, efectuará las asignaciones y transferencias presupuestarias conducentes al funcionamiento y gestión del nuevo sistema procesal unificado, que entre otros incluirá el financiamiento de la infraestructura, logística, implementación tecnológica y provisión de talento humano para el efecto.

SEGUNDA.- El Consejo de la Judicatura elaborará y aprobará el plan para la implementación del Código Orgánico General de Procesos a fin de ejecutarlo integralmente en todo el territorio nacional. Incluirá, además de las normas y medidas de todo orden y cronogramas que considere necesarios, la reglamentación del uso de formatos comunes para la presentación y trámite de los procedimientos monitorios y las pretensiones sobre prestación de alimentos y para los remates en línea realizados por entidades públicas o privadas.

Para el efecto, el Consejo de la Judicatura adoptará las medidas administrativas, logísticas y financieras necesarias para la aplicación de las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos, en especial el equipamiento tecnológico, la capacitación y la instalación de salas de

audiencias en las unidades judiciales, que brinden las facilidades para la implementación del sistema procesal.

TERCERA.- El Consejo de Educación Superior tomará las medidas necesarias de su competencia, a fin de que las instituciones de educación superior incluyan en las carreras de derecho y ciencias jurídicas, asignaturas que promuevan la litigación oral y brinden a las y los estudiantes las destrezas suficientes para la estricta aplicación de los principios que con este Código se implementan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procesos que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las demandas interpuestas hasta antes de la implementación del Código Orgánico General de Procesos en la respectiva jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación.

SEGUNDA.- Los procedimientos coactivos y de expropiación seguirán sustanciándose de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Tributario, según el caso, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso previstas en la Constitución de la República.

Las normas antes aludidas se seguirán aplicando en lo que no contravenga las previstas en este Código, una vez que éste entre en vigencia y hasta que se expida la ley que regule la materia administrativa.

DISPOSICIONES REFORMATARIAS

PRIMERA.- En todas las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, sustitúyase en lo que diga:

1. “Código de Procedimiento Civil”; “Ley de la Jurisdicción Contencio-

so Administrativa” y “Ley de Casación”, por “Código Orgánico General de Procesos”.

2. “Juicio verbal sumario” por “procedimiento sumario”].

SEGUNDA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Función Judicial, las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el segundo inciso del artículo 13 por el siguiente:

“Solo podrán realizarse grabaciones oficiales de diligencias y audiencias que permitan la constancia procesal de las mismas. En ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por medios de comunicación social”.

2. Sustitúyase el segundo inciso del artículo 68 por el siguiente:

“El Consejo de la Judicatura determinará los rubros que comprende la beca, entre los cuales se incluirá, además de los montos de subsistencia, el costo de la colegiatura, la adquisición de libros, y en caso que corresponda, gastos de viaje e instalación”.

3. Sustitúyase el artículo 131 por el siguiente:

Art. 131.- Facultades correctivas de las juezas y jueces.- A fin de observar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial, las juezas y jueces deben:

1. Devolver los escritos ofensivos o injuriosos, sea que las injurias vayan dirigidas contra la jueza o juez, servidora o servidor del tribunal o juzgado, la contraparte o su defensora o defensor, sin perjuicio de la sanción que pudiere imponer y lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal.

Para devolver el escrito e imponer la sanción, el tribunal, jueza o juez ordenará que la secretaria o el secretario deje copia de la fe de presenta-

ción en el expediente y archive la copia del escrito. Si éste contuviere la interposición de un recurso, una petición de aclaración, ampliación, reforma o revocatoria u otra semejante, dispondrá que la actuaría o el actuario deje copia de la parte que contiene la petición, y proveerá a ella.

El procedimiento reiterado de injuria por parte de la defensora o defensor obliga a la jueza o juez a aplicar la sanción correspondiente;

2. Expulsar de las actuaciones judiciales a quienes alteren su desarrollo o atenten contra su legal evolución. Si se trata de una de las partes, se le impondrá además los apercibimientos que hubieren sido aplicables de no haber asistido a la actuación. Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar si el hecho constituyera contravención o delito;

3. Declarar en las sentencias y providencias respectivas, la incorrección en la tramitación o el error inexcusable de servidoras y servidores judiciales, y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones;

4. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor; y,

5. Aplicar las demás sanciones que este Código y otras normas establezcan”.

De la providencia que imponga la sanción se podrá recurrir en la forma prevista en la ley. La interposición del recurso de apelación solo suspenderá la ejecución de la sanción y no impedirá el trámite y resolución de la causa principal.”

4. Sustitúyase el numeral 2 del artículo 201 por el siguiente:

“2. Calificar, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibili-

dad de los recursos que corresponda conocer a la sala a la cual se le asigne e integrar por sorteo el tribunal de tres miembros para conocer y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de despacho”.

5. Sustitúyase en el último inciso del artículo 250 la frase “La ley de la materia” por “El Consejo de la Judicatura”.

6. Añádase al final del numeral 9 del artículo 264 como literal d) el siguiente:

“d) el monto de costas procesales relativos a los gastos del Estado en cada causa”.

7. Añádase luego del numeral 15) del artículo 264 el siguiente:

“16. Dictar el instructivo para la fijación del monto de la caución a aplicarse en el recurso de casación.”

8. Sustitúyase el numeral 6 del artículo 280 por el siguiente:

“6. Fijar las remuneraciones para las servidoras y servidores de las carreras judicial, fiscal y defensoría pública, así como para los servidores de los órganos auxiliares, en las diferentes categorías, y de manera equivalente;”.

9. Agréguese a continuación del primer inciso del artículo 296 el siguiente texto:

“Así como intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se encuentran investidos, en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley, para autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y solemnizar situaciones jurídicas respecto de las que se encuentren expresamente facultados en el Código Orgánico General de Procesos, la Ley Notarial y otros cuerpos legales.”

10. Agréguese a continuación del artículo 301 un artículo con el siguiente texto:

“Art. 301 A.- Notarias y notarios suplentes.- Cada notaria o notario titular contará con una o un notario suplente, quien debe reunir los mismos requisitos que el titular y lo reemplazará en casos de ausencia temporal. Para el efecto, la notaría o notario titular remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura el nombre de su notaria o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. La falsedad de los documentos o información remitida ocasionará la destitución de la notaria o notario titular.

La notaria o notario titular será solidariamente responsable civil y administrativamente por las actuaciones de la notaria o notario suplente en el ejercicio de sus funciones.

En ningún caso, la notaria o notario suplente reemplazará al titular cuando la ausencia se deba por suspensión o destitución de la notaria o notario titular como consecuencia de una acción disciplinaria”.

11. Sustitúyase el artículo 318 por el siguiente:

“Art. 318.- Solicitud de remate.- El depositario o los interesados podrán solicitar a la o el juzgador de la causa el remate de los bienes muebles y papeles fiduciarios que se encuentren bajo su custodia, siempre que su conservación sea onerosa o esté sujeta a deterioros o manifiesta y grave desvalorización.

Se considera conservación onerosa el costo del bodegaje determinado por el paso del tiempo, o el espacio ocupado en la bodega, en relación con el avalúo comercial del bien. Asimismo, es desvalorización manifiesta y grave el avance tecnológico que determine la pérdida acelerada del valor comercial del bien depositado.

La o el juzgador escuchará a las partes y al cerciorarse de la realidad, podrá ordenar, previo el correspondiente avalúo, el remate en línea correspondiente; de esta resolución habrá únicamente recurso de apelación en efecto no suspensivo que se tramitará en proceso separado”.

12. Sustitúyase el artículo 339 por el siguiente:

“Art. 339.- Obligación de realizar asistencia legal gratuita para la ciudadanía.- Los y las egresados de las carreras de derecho o ciencias jurídicas deberán realizar en forma obligatoria un año lectivo de asistencia legal gratuita para la ciudadanía en los organismos y dependencias que conforman el sector público; o, en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que ejerzan funciones jurisdiccionales; la misma que siempre deberá guardar relación con la asistencia legal.

Este servicio para la ciudadanía será requisito para obtener el título profesional, según el reglamento que para el efecto dictará el Consejo de la Judicatura”.

13. Sustitúyase el artículo 340 por el siguiente:

“Art. 340.- Naturaleza.- Por constituir la abogacía una función social al servicio de la justicia y del derecho, la asistencia legal gratuita para la ciudadanía constituye un modo de restituir a la sociedad ecuatoriana el beneficio de la educación superior recibida de ella.

Las y los egresados que cumplan la asistencia legal gratuita para la ciudadanía no adquieren la calidad de servidoras o servidores públicos ni relación de dependencia laboral; sin embargo, tendrán derecho a percibir una compensación económica, conforme con la tabla establecida en el reglamento respectivo, y que será financiada con presupuesto del Consejo de la Judicatura.

Se sujetarán a las prohibiciones y régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público o el Código Orgánico de la Función

Judicial, según fuere el caso y en lo que les fuere aplicable, siendo la máxima sanción prevista, la suspensión por un año del servicio que están brindando. Transcurrido este tiempo podrá volver a prestar este servicio a la ciudadanía. En caso de reincidencia la suspensión será de dos años”.

14. Sustitúyase el artículo 341 por el siguiente:

“Art. 341.- Certificado de aptitud profesional.- Al finalizar la asistencia legal gratuita para la ciudadanía, el jefe inmediato que haya supervisado el servicio prestado por la o el egresado, remitirá al Consejo de la Judicatura la respectiva evaluación, conforme con el formato creado para el efecto. De registrarse una evaluación satisfactoria, el Consejo de la Judicatura expedirá el Certificado de Aptitud Profesional, requisito indispensable para obtener el título profesional”.

15. Sustitúyase el artículo 342 por el siguiente:

“Art. 342.- Exoneración.- La o el egresado de derecho podrá exonerarse de cumplir el año de asistencia legal gratuita para la ciudadanía, si acreditare haber prestado sus servicios durante por lo menos dos años en un consultorio jurídico gratuito de una universidad, o haber realizado pasantía por igual tiempo en una unidad judicial.

TERCERA.- Refórmense en el Código Orgánico Tributario, las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el artículo 26 por el siguiente:

“Art. 26.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este.

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de este de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y según el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos”.

2. Sustitúyase el numeral cuarto del artículo 143 por el siguiente:

“4. Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o privados, por contener error evidente, o por cualquiera de los defectos señalados en el Código Orgánico General de Procesos, o por pruebas posteriores, permitan presumir, grave y concordantemente, su falsedad;”.

3. Sustitúyase el primer inciso del artículo 158 por el siguiente:

“Art. 158.- Competencia.- La acción coactiva se ejercerá privativamente por los respectivos funcionarios recaudadores de las administraciones tributarias, con sujeción a las disposiciones de esta sección, a las reglas generales de este Código y supletoriamente en lo que fuere pertinente, a las del Código Orgánico General de Procesos”.

4. Agréguese a continuación del artículo 222 un artículo con el siguiente texto:

“Art. 222 A.- Las acciones cuya competencia corresponde al Tribunal o a quien hiciere sus veces, se sustanciarán conforme las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos”.

5. Añádase en el artículo 290 como segundo inciso el siguiente:

“Realizado el depósito, el consignante acudirá con su demanda al Tribunal Contencioso Tributario o quien hiciere sus veces, acompañando el comprobante respectivo. La consignación se sustanciará de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos”.

6. Sustitúyase el artículo 298 por el siguiente:

“Art. 298.- Recurso de Apelación.- En los casos de los artículos 176, 191 y 209 de este Código, o en cualquier otro en que se permita el recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Tributario, o quien hiciere sus veces, se seguirá el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos.

CUARTA.- Refórmense en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el artículo 257 por el siguiente:

“Art. 257.- Garantías del debido proceso.- En todo procedimiento judicial que se sustancie con arreglo al Código Orgánico General de Procesos, las personas tendrán asegurada la inviolabilidad de la defensa, la contradicción, la impugnación, la inmediatez, el derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso”.

2. Sustitúyase en el artículo 267 la frase “procedimiento sumarísimo” por “procedimiento sumario”.

3. Añádase en el segundo inciso del artículo 284 a continuación de la frase “A la demanda”, la frase “, que deberá cumplir los requisitos previstos en el Código Orgánico General de Procesos,”.

4. Sustitúyase en el artículo 287 la frase “artículo 277” por “Código Orgánico General de Procesos”.

QUINTA.- Refórmense en el Código Civil, las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el numeral 2 del artículo 67 por el siguiente:

“2. Entre estas pruebas será de rigor la citación al desaparecido que se practicará conforme con lo establecido para el efecto en el Código Orgánico General de Procesos”.

2. Sustitúyase el artículo 107 por el siguiente:

“Art. 107.- Por mutuo consentimiento los cónyuges pueden divorciarse en procedimiento voluntario que se sustanciará según las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos”.

3. Sustitúyase el artículo 108 por el siguiente:

“Art. 108.- Para el cuidado o crianza de las hijas o los hijos menores o incapaces de cualquier edad o sexo, se estará a lo que dispone el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”.

4. Sustitúyase el artículo 117 por el siguiente:

“Art. 117.- La demanda de divorcio se propondrá ante la jueza o el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia del domicilio del cónyuge demandado; si se hallare en territorio extranjero, la demanda se propondrá en el lugar de su último domicilio en el Ecuador”.

5. Sustitúyase el artículo 118 por el siguiente:

“Art. 118.- Toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en procedimiento sumario”.

6. Sustitúyase el artículo 119 por el siguiente:

“Art. 119.- La citación con la demanda de divorcio al cónyuge demandado se realizará en la forma determinada en el Código Orgánico General de Procesos”.

7. En el artículo 145 añádase como tercer inciso el siguiente:

“Esta autorización se solicitará en procedimiento voluntario”.

8. Sustitúyase el artículo 146 por el siguiente:

“Art. 146.- Si el cónyuge que debe prestar su consentimiento para un contrato relativo a los bienes de la sociedad conyugal, estuviere en interdicción, o en el caso del Art. 494, la jueza o el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia suplirá el consentimiento, previa comprobación de utilidad, en procedimiento voluntario”.

9. Sustitúyanse los incisos segundo y tercero del artículo 181 por el siguiente:

“En caso de que el cónyuge cuyo consentimiento fuere necesario para celebrar estos contratos se encontrare imposibilitado de expresarlo, quien administre los bienes sociales deberá contar con la autorización de una jueza o un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia del domicilio del cónyuge imposibilitado, autorización que se sustanciará en procedimiento voluntario, conforme con lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos”.

10. Sustitúyanse los literales a) y b) del artículo 226 por lo siguiente:

“a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante una jueza o un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia.

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante la jueza o el juez competente, en procedimiento voluntario previsto en el Código Orgánico General de Procesos”.

11. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 309 por el siguiente:

“La emancipación será autorizada por la o el notario mediante procedimiento voluntario, conforme las disposiciones previstas en el Código Orgánico General de Procesos”.

12. Añádase en el artículo 835 como segundo inciso el siguiente:

“El patrimonio familiar se constituirá mediante escritura pública otorgada ante notaria o notario público, debiendo cumplirse el procedimiento previsto en la presente Ley”.

13. Sustitúyase el tercer inciso del artículo 842 por el siguiente:

“Puede la jueza o el juez nombrar administrador cuando la mayoría de los que deben aprovechar de la cosa común, así lo determinare. Para hacerlo, seguirá el procedimiento voluntario previsto en el Código Orgánico General de Procesos”.

14. Sustitúyase en el artículo 845 la frase “Para obtener la licencia judicial” por “Para obtener la autorización judicial para constituir el patrimonio familiar”.

15. Sustitúyase en el segundo inciso del artículo 847 la palabra “licencia” por “autorización”.

16. Agréguese en el numeral 4 del artículo 851 luego de la frase “el juez” la frase “o el notario o notaria”.

17. Sustitúyase el artículo 853 por el siguiente:

“Art. 853.- Los casos de nulidad y rescisión, y cualquier litigio que se suscitare, se resolverán en el modo y forma determinados en el Art. 847”.

18. Sustitúyase en el inciso tercero del artículo 1245, la frase “por el ministerio del juez, con las formalidades legales”, por “en procedimiento voluntario, según las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos”.

19. Sustitúyase en el artículo 1263 el primer inciso por el siguiente:

Art. 1263.- Si dentro de quince días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, en procedimiento voluntario, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio, declarará yacente la herencia; se insertará esta declaración en un periódico del cantón, si lo hubiere, y en carteles que se fijarán en tres de los parajes más frecuentados

del mismo; y se procederá al nombramiento del curador de la herencia yacente.”

20. En el artículo 1267, sustitúyase la frase “el juez,” por “la jueza o el juez en procedimiento voluntario”.

21. Agréguese en el artículo 1631 como segundo inciso el siguiente:

“Los requisitos, forma y efectos de la cesión de bienes, se sujetarán a las disposiciones que, al respecto, establece el Código Orgánico General de Procesos”.

22. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 1715 por el siguiente:

“Para la determinación de los medios de prueba se estará a lo que dispone el Código Orgánico General de Procesos”.

23. Sustitúyase el artículo 1844 por el siguiente:

“Art. 1844.- En toda notificación de traspaso de un crédito, que practique una o un notario público, se entregará al deudor la nota de traspaso con la determinación del origen, la cantidad y la fecha del crédito. Si el título fuere una escritura pública, se indicará, además, el protocolo en que se haya otorgado y se anotará el traspaso al margen de la matriz, para que este sea válido.

La cesión de un crédito hipotecario no surtirá efecto alguno, si no se tomare razón de ella, en la oficina de registro e inscripciones, al margen de la inscripción hipotecaria.

Se cumplirá la exhibición prescrita en el artículo anterior, dejando, por veinticuatro horas, el documento cedido, en la notaría que hiciere la notificación, para que pueda examinarlo el deudor, si lo quisiere; lo cual será certificado por el notario.

Cuando se deba ceder y traspasar derechos o créditos para efecto de desarrollar procesos de titularización realizados al amparo del Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo correspondiente al mercado de valores, cualquiera sea la naturaleza de aquellos, sea para transferirlos al fideicomiso mercantil o patrimonio de propósito exclusivo o para que este transfiera al originador o a terceros, no se requerirá notificación alguna al deudor u obligado de tales derechos o créditos. Por el traspaso de derechos o créditos en procesos de titularización, se transfiere de pleno derecho y sin requisito o formalidad adicional, tanto el derecho o crédito como las garantías constituidas sobre tales créditos. En caso de ser necesaria la ejecución de la garantía, el traspaso del crédito y de la garantía, esta deberá ser previamente inscrita en el registro correspondiente.

En este caso, para la anotación marginal de la cesión de las hipotecas o de cualquier otra garantía real que asegure el crédito y que requiera la solemnidad de inscripción en un registro público, no se requerirá de la formalidad de la notificación o aceptación del deudor.

SEXTA.- Refórmense en el Código del Trabajo, las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el artículo 6 por el siguiente:

“Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente previsto en este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos”.

2. Agréguese en el artículo 153 como último inciso el siguiente texto:

“La o el juzgador dispondrá el reintegro inmediato al trabajo de la mujer despedida en estado de embarazo o en periodo de lactancia.”

3. Sustitúyase el artículo 491 por el siguiente:

“Art. 491.- Atribuciones del Ministerio de Trabajo.- Corresponde al Ministerio de Trabajo, por intermedio de los funcionarios que presidan los

tribunales de primera instancia, hacer cumplir los fallos o actas con los cuales se da término a los conflictos colectivos. El Código Orgánico General de Procesos regirá en esta materia, en lo que fuere aplicable”.

4. Añádase en el artículo 571 a continuación de la palabra “excepción” la palabra “previa”.

5. Sustitúyase el artículo 572 por el siguiente:

“Art. 572.- Trámite de excusa.- En los juicios de trabajo, se aplicarán las disposiciones que, sobre excusa y recusación, establece el Código Orgánico General de Procesos”.

6. Sustitúyase el artículo 575 por el siguiente:

“Art. 575.- Trámite de las controversias laborales.- Las controversias individuales de trabajo, se sustanciarán en procedimiento sumario conforme lo prevé el Código Orgánico General de Procesos”.

7. Sustitúyase el artículo 577 por el siguiente:

“Art. 577.- Solicitud y práctica de pruebas.- Los medios probatorios de que dispongan las partes serán presentados o anunciados conforme con lo dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos.

Los informes y certificaciones de las entidades públicas y privadas constituirán medios de prueba; pero cualquiera de las partes podrá solicitar, a su costa, la exhibición o inspección de los documentos respectivos”.

8. Sustitúyase el segundo inciso del artículo 606 por el siguiente:

“En tal caso, una vez consignado el monto de las prestaciones o indemnizaciones, el juez resolverá, si fuere preciso, sobre la distribución correspondiente en procedimiento sumario”

9. Sustitúyase el artículo 634 por el siguiente:

“Art. 634.- Término para la declaratoria de abandono.- El término para declarar el abandono de una instancia o recurso, será el previsto en el Código Orgánico General de Procesos.

SÉPTIMA.- Sustitúyase el artículo 198 del Código Aeronáutico, por el siguiente;

“Art. 198.- En el caso de ejecución por falta de pago, el juez de la causa, a solicitud del acreedor ordenará el remate de la prenda, conforme las disposiciones contenidas en el Código Orgánico General de Procesos.

OCTAVA.- Refórmense en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el Artículo 71, por el siguiente:

Art. 71.- Trámite.- La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial conocerá de la acción de repetición en procedimiento ordinario, en la cual se citará al Procurador General del Estado cuando no haya comparecido previamente a juicio.

En el caso del inciso cuarto del artículo 68, la entidad que asuma el patrocinio de la causa podrá reformar la demanda conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos.

2. Sustitúyase el Artículo 72, por el siguiente:

Art. 72.- Sentencia.- En la sentencia se declarará, de encontrar fundamentos, la responsabilidad de la persona o personas demandadas por la violación de derechos que generaron la obligación del Estado de reparar materialmente y, además ordenará a la persona o personas responsables, pagar al Estado lo erogado por concepto de reparación material, estableciendo la forma y el tiempo en que deberá realizarse.

Cuando existiere más de una persona responsable, se establecerá, en función de los hechos y el grado de responsabilidad, el monto que deberá pagar cada responsable. En ningún caso la sentencia podrá dejar en estado de necesidad a la persona responsable.

Cuando el Estado hubiere sido condenado al cumplimiento de la obligación de dos o más plazos, la sentencia en el juicio de repetición condenará a las personas responsables, al pago de las obligaciones vencidas reclamadas, pero la ejecución deberá comprender las que se hubiesen vencido posteriormente, hasta la total cancelación de lo pagado por el Estado, de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos, sobre la ejecución de pensiones periódicas o el cumplimiento de obligaciones a plazo.

NOVENA.- Agréguese a continuación del artículo 17 de la Ley de Compañías, los siguientes artículos:

“Art. 17 A.- El desvelamiento societario o inoponibilidad de la personalidad jurídica contra una o más compañías y contra los presuntos responsables, se tramitará en procedimiento ordinario. Si la demanda se propusiere contra varias compañías y varias personas naturales, el actor deberá presentar la demanda en el domicilio principal de la compañía o persona jurídica sobre la cual se pretenda oponerse a su personalidad jurídica.

En la demanda se podrán solicitar, como providencias preventivas, las prohibiciones de enajenar o gravar los bienes y derechos que estuvieren relacionados con la pretensión procesal y, de manera particular, de las acciones o participaciones o partes sociales de la o las compañías respectivas, así como la suspensión de cualquier proceso de liquidación o de cualquier orden de cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil de cualquiera de las compañías demandadas; las que, en su caso, serán ordenadas antes de cualquier citación con la demanda. La o el juzgador, a solicitud de parte, podrá disponer que la Superintendencia de Compañías y Valores ordene las inspecciones que fueren del caso para determinar

que las prohibiciones de enajenar o gravar acciones fueron debidamente anotadas o registradas en el o los libros de acciones y accionistas.

Art. 17 B.- La acción de desvelamiento societario o inoponibilidad de la personalidad jurídica prescribirá en seis años, contados a partir del hecho correspondiente, si hubiere sido uno solo, o del último de ellos, si hubieren sido varios, sin perjuicio del derecho a presentar impugnaciones o acciones de nulidad de la constitución o de los actos o contratos de las compañías demandadas, según lo previsto en la ley.

DÉCIMA.- Refórmense en la Ley de Inquilinato las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el inciso tercero del artículo 19 por el siguiente:

“Esta acción se tramitará en procedimiento sumario, por cuerda separada”.

2. Sustitúyase el artículo 29 por el siguiente:

“Art. 29.- Forma del contrato de más de un salario básico unificado del trabajador en general mensual.- Los contratos cuyo canon de arrendamiento exceda de un salario básico unificado del trabajador en general mensual, se celebrarán por escrito, debiendo el arrendador registrarlos, dentro de los treinta días siguientes a su celebración, ante un notario o notaria, los mismos que llevarán un archivo numerado y cronológico de los contratos registrados, bajo la responsabilidad personal de los mismos”,

3. Sustitúyase el artículo 42 por el siguiente:

Art. 42.- Trámite de las controversias.- Las acciones sobre inquilinato se tramitarán en procedimiento sumario, ante la jueza o juez de inquilinato y relaciones vecinales o quien hiciere sus veces en el respectivo cantón.

Demandado el inquilino por la causal de terminación del contrato de arrendamiento contemplada en la letra a) del Art. 30, no podrá apelar del

fallo que le condene, sin que previamente consigne el valor de las pensiones de arrendamiento que se hallare adeudando a la fecha de expedición de la sentencia; si no lo hiciere, se entenderá como no interpuesto el recurso. Tal requisito no será aplicable en contratos de arrendamiento cuyas pensiones mensuales no excedan del veinte por ciento de la remuneración básica unificada.

4. Sustitúyase el artículo 43 por el siguiente:

“Art. 43.- El Consejo de la Judicatura designará las juezas y los jueces que sean necesarios para despachar las controversias de inquilinato y relaciones vecinales, conforme lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Para la subrogación de estos juzgadores, se estará a lo dispuesto en dicho cuerpo legal”.

5. Sustitúyase el artículo 45 por el siguiente:

“Art. 45.- La competencia de las juezas y los jueces de inquilinato y relaciones vecinales se fijará conforme con las reglas generales previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial”.

6. Sustitúyase el artículo 46 por el siguiente:

“Art. 46.- Trámite especial de las reclamaciones.- Las reclamaciones relativas a los preceptos contenidos en los artículos 3, 4, 5 y, en general, todas las relacionadas con la privación de servicios y con las condiciones de idoneidad del local arrendado, así como las controversias derivadas de la relación de vecindad exclusivamente en inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal, se tramitarán en procedimiento sumario.

7. Sustitúyase el segundo inciso del artículo 47 por el siguiente:

“La demanda deberá cumplir los requisitos previstos en el Código Orgánico General de Procesos y adjuntar el contrato de arrendamiento registrado o la respectiva declaración juramentada”.

8. Sustitúyase el artículo 48 por el siguiente:

“Art. 48.- Oposición de la persona inquilina al desahucio.- En el caso previsto en la letra h) del artículo 30, la oposición de la persona inquilina sólo podrá fundarse en el hecho de que el local arrendado no esté comprendido en la parte del edificio cuya demolición ha sido autorizada por el gobierno autónomo descentralizado municipal competente.

En el caso previsto en el artículo 31, el desahuciante deberá presentar copia certificada del título de transferencia de dominio; la oposición que deduzca la persona desahuciada sólo podrá sustentarse en el hecho de haber transcurrido más de un mes desde el traspaso de dominio o en haber celebrado el contrato de arrendamiento conforme con el artículo 29; en este supuesto, se deberá presentar la copia certificada del contrato de arrendamiento.

En los casos de los incisos anteriores, también se podrán deducir excepciones previas.

En caso de deducirse excepciones o medios de defensa distintos a los enunciados en esta norma, se procederá al lanzamiento, sin perjuicio de cumplir con lo dispuesto en el artículo 52.

La oposición se sustanciará conforme con las reglas generales establecidas en el Código Orgánico General de Procesos.

La resolución causará ejecutoria”.

9. Sustitúyase el artículo 51 por el siguiente:

“Art. 51.- El arrendamiento de toda clase de inmuebles comprendidos en los perímetros urbanos y de locales para la vivienda, vivienda y taller y vivienda y comercio en los perímetros rurales; el anticresis de locales para vivienda, vivienda y comercio y vivienda y taller; y las controversias derivadas de la relación de vecindad exclusivamente en inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal, estarán sujetos a lo que dispone esta Ley, solo en lo referente a competencia y procedimiento.

Regirá también para estos contratos las disposiciones de los artículos 4, 5 y 13.

DÉCIMO PRIMERA.- Refórmense en la Ley de Propiedad Intelectual, las siguientes disposiciones;

1. Sustitúyase en el artículo 296 la frase “los artículos 26, 27, 28 y 29 del Código de Procedimiento Civil” por “el Código Orgánico General de Procesos”.

2. Sustitúyase el artículo 297 por el siguiente:

“Art. 297.- Las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán mediante procedimiento ordinario, conforme lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos.

DÉCIMO SEGUNDA.- Sustitúyase el artículo 57 de la Ley de Caminos por el siguiente:

“Art. 57.- En todo aquello que no se halle previsto en la presente Ley o en caso de falta u oscuridad de la misma, se aplicarán las normas del Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos.

DÉCIMO TERCERA.- Sustitúyase en la disposición general décimo primera de la Ley de Mercado de Valores, incorporada en el Código Orgánico Monetario y Financiero, como Libro II, la frase “artículo 413 del Código de Procedimiento Civil” por “Código Orgánico General de Procesos.

DÉCIMO CUARTA.- Sustitúyase en el tercer inciso del artículo 35 de la Ley de Aviación Civil, la frase “los artículos 413 y 419 del Código de Procedimiento Civil” por “las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos.

DÉCIMO QUINTA.- Refórmese en el artículo 18 de la Ley Notarial, lo siguiente;

1. Luego del término “atribuciones” agréguese el término “exclusivas”.
2. Sustitúyase en el numeral 13, la frase “de la sociedad de gananciales de consuno de los cónyuges” por la frase “y liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes por mutuo acuerdo”.
3. Sustitúyase en el numeral 14 la frase “de la Sección Décima Octava del Título Segundo del Código de Procedimiento Civil” por “del Código Orgánico General de Procesos. Igual procedimiento se seguirá para los remates voluntarios de quienes tienen la libre administración de sus bienes”.
4. Suprímase el párrafo a continuación del numeral 18.
5. Sustitúyase en el segundo inciso del numeral 19 la frase “de Procedimiento Civil” por “Orgánico General de Procesos”.
6. Sustitúyase en el numeral 20 la frase “el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil” por “las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos”.
7. Suprímase del numeral 28 la frase “en la forma prevista en el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil”.
8. Agréguese luego del numeral 28, los siguientes numerales:
“29. Aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles y demás actos atinentes con la vida de estas, y oficiar al Registrador

Mercantil para su inscripción, cuando no corresponda a la Superintendencia de Compañías y Valores.

30.- Autorizar la inscripción de matrículas de comercio en el registro pertinente.

31.- Requerir a la persona deudora para constituirla en mora, de conformidad con el artículo 1567 del Código Civil.

32.- Receptar la declaración juramentada sobre estado civil de las personas cuando estas lo requieran, con el objetivo de tramitar la posesión notoria del estado civil.

33.- Tramitar la caución e inventario en el usufructo, para determinar que esta sea suficiente para la conservación y restitución del bien que se trate y para el inventario solemne. Para el efecto, se acompañará a la solicitud, el documento que acredite el avalúo pericial o el inventario, dependiendo el caso, realizado por uno de los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura.

34.- Solemnizar la designación de administrador común, mediante la declaración de las partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición y reconocimiento de la firma de los solicitantes.

35.- Solemnizar el desahucio, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Inquilinato y el Código Civil. La o el interesado en el desahucio dirigirá una solicitud a la o al notario, acompañando prueba de su pretensión. Recibida la solicitud y los documentos que se acompañan a ella, la o el notario dispondrá que se notifique a la o al desahuciado.

36.- Inscribir contratos de arrendamiento, cuyo canon exceda de un salario básico unificado del trabajador en general, para lo cual cada notaría llevará un archivo numerado y cronológico.

37.- Solemnizar la partición de bienes hereditarios mediante la declaración de las partes, lo que se legalizará con la correspondiente petición,

reconocimiento de la firma de los solicitantes y los documentos que acrediten la propiedad del causante sobre los bienes.

De existir controversia en los casos previstos con competencia exclusiva para notarios, la o el notario deberá enviar copia auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio dentro del término de tres días contados a partir de recibida la oposición, con el objetivo de que luego del respectivo sorteo se radique la competencia en uno de los jueces de lo civil del cantón quien procederá mediante proceso sumario.

DÉCIMO SEXTA.- Sustitúyase en el artículo 39 de la Ley de Arbitraje y Mediación la frase “la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador” por “el Consejo de la Judicatura.

DÉCIMO SÉPTIMA.- Refórmense en la Ley de Gestión Ambiental, las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyase el primer inciso del artículo 28 por el siguiente:

“Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Las personas podrán denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.”

2. Sustitúyase el artículo 41 por el siguiente:

“Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, las personas naturales, jurídicas o grupo humano, podrán denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución de la República.

DÉCIMO OCTAVA.- Añádase en el inciso final del artículo 6 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en materia de alimentos, incorporada como Título V del Libro II del referido Código, a continuación de la frase “Consejo de la Judicatura” la frase “y que podrá ser presentado en el domicilio del demandado o del actor, a elección de este último.

DÉCIMO NOVENA.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales por el siguiente:

Art. 1.- Las instituciones del Estado que por ley tienen jurisdicción coactiva, con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias, podrán ejercer subsidiariamente su acción no solo en contra del obligado principal, sino en contra de todos los obligados por Ley, incluyendo a sus herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario. En el caso de personas jurídicas usadas para defraudar (abuso de la personalidad jurídica), se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean o no residentes o domiciliados en el Ecuador.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Deróguese el Código de Procedimiento Civil, codificación publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 58 de 12 de julio de 2005 y todas sus posteriores reformas.

SEGUNDA.- Deróguese la Ley de Casación, codificación publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 299 de 24 de marzo de 2004 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=R-S&spx=1&nmx=299&fcx=24-03-2004&pgx=1y todas sus posteriores reformas.

TERCERA,- Deróguese la Ley de la Jurisdicción Contencioso Adminis-

trativa, publicada en el Registro Oficial No. 338 de 18 de marzo de 1968 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=338&fcx=18-03-1968&pgx=1y todas sus posteriores reformas.

CUARTA.- Deróguense el numeral 1 del artículo 164 y el primer inciso del artículo 333 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 544 de 9 de marzo de 2009 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RS&spx=1&nmx=544&fcx=09-03-2009&pgx=1.

QUINTA.- Deróguense el Capítulo II del Trámite de las Acciones, del Título II de la Sustanciación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, del Libro III del Procedimiento Contencioso y los artículos 291, 292, 293, 294, 296 y 299 del Código Orgánico Tributario, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 38 de 14 de junio de 2005 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RS&spx=1&nmx=38&fcx=14-06-2005&pgx=1.

SEXTA,- Deróguense la sección segunda del Capítulo IV Procedimientos Judiciales y los artículos 292 y 293 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero de 2003 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=737&fcx=03-01-2003&pgx=1.

Deróguense, así mismo, los artículos 22, 23, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45 de la Ley Reformativa al Código de la Niñez y Adolescencia, en materia de alimentos, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 643 de 29 de julio de 2009, incorporada como Título V del Libro II del mismo código.

SÉPTIMA.- Deróguense los artículos 121, 1050, 1617, 1618 y 1716 del Código Civil, codificación publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 46 de 24 de junio de 2005 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=46&fcx=24-06-2005&pgx=1.

OCTAVA.- Deróguense los artículos 568, 570, 574, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 592, 593, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 618, 619 y 620 del Código del Trabajo, codificación publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 167 de 16 de diciembre de 2005 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=167&fcx=16-12-2005&pgx=1.

NOVENA.- Deróguese la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, publicada en el Registro Oficial No. 269 de 3 de febrero de 1977 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=269&fcx=03-02-1977&pgx=1.

DÉCIMA.- Deróguese el artículo 42 de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 418 de 10 de septiembre de 2004 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=418&fcx=10-09-2004&pgx=1.

DÉCIMO PRIMERA.- Deróguese el artículo 16 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 de 10 de septiembre de 2004 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RS&spx=1&nmx=418&fcx=10-09-2004&pgx=1.

DÉCIMO SEGUNDA.- Deróguese la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre de 2006 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=426&fcx=28-12-2006&pgx=1.

DÉCIMO TERCERA.- Deróguese el último inciso del artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 417 de 14 de diciembre de 2006 C:\Users\luis.mullo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook_ImageVisualizer\imageSearchRes.aspx?tpx=RO&spx=0&nmx=417&fcx=14-12-2006&pgx=1.

DÉCIMO CUARTA.- Quedan asimismo derogadas, a la entrada en vigencia de la presente Ley, otras disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a lo dispuesto en la misma.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- En todo lo no previsto en el Código Orgánico General de Procesos, se observarán, de forma supletoria, las disposiciones vigentes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Código Orgánico Tributario; Código Civil, Código del Trabajo y Código de Comercio.

SEGUNDA.- El Código Orgánico General de Procesos entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, con excepción de las normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Notarial y la Ley de Arbitraje y Mediación y aquellas que regulan períodos de abandono, copias certificadas, registro de contratos de inquilinato y citación, que entrarán en vigencia a partir de la fecha de publicación de esta Ley.

Las disposiciones que regulan el remate entrarán en vigencia en ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente Ley.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los doce días del mes de mayo de dos mil quince.

GABRIELA RIBADENEIRA BURBANO
Presidenta

DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ
Secretaria General.



CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA

*Verdad, Seguridad y Paz
Illumanta, Kamaymanta, Kankimanta*

www.cortenacional.gob.ec

Av. Amazonas N37 -101 y Union Nacional de Periodistas
PBX (02) 395- 3500



ISBN 978-9942-22-023-3



9 789942 220233